REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión de los recursos de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

PROCESO ORDINARIO LABORAL No. 2017 00169 01 Juz 03 (virtual).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

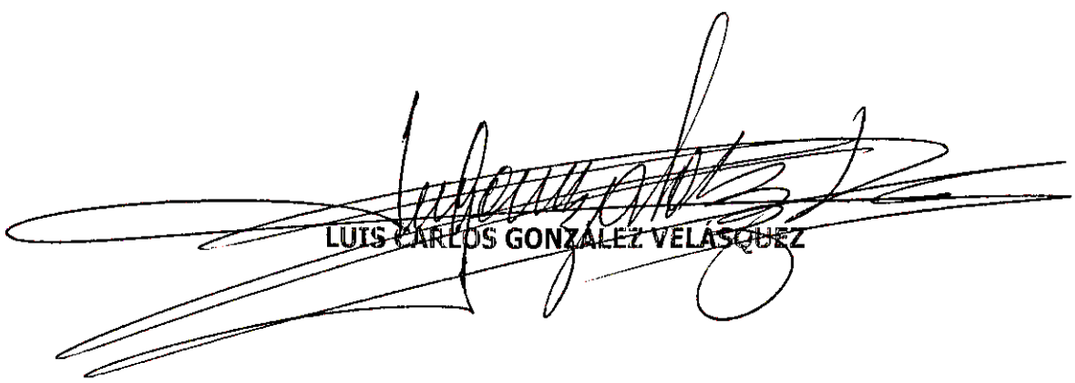
Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Admítase la consulta de la sentencia del proceso de la referencia.

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado común** a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE



[1] **ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la **consulta**, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Admítase la consulta de la sentencia del proceso de la referencia.

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado común** a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la **consulta**, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Admítase la consulta de la sentencia del proceso de la referencia.

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado común** a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la **consulta**, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

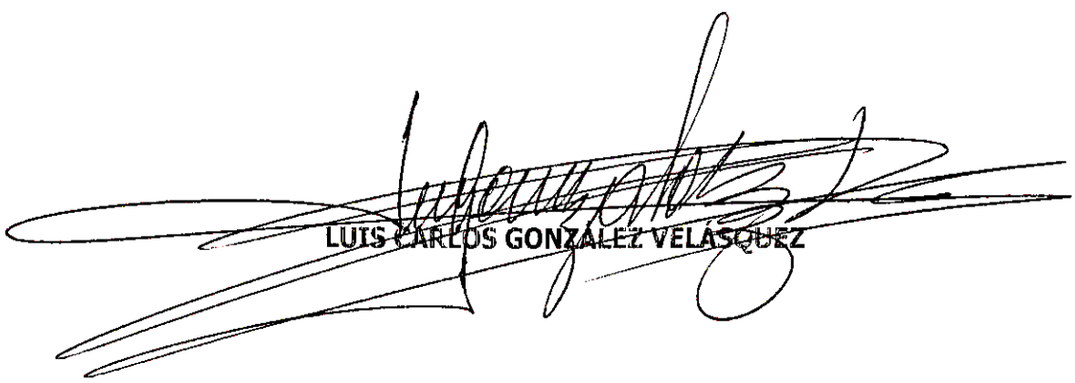
Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Admítase la consulta de la sentencia del proceso de la referencia.

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado común** a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE



[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la **consulta**, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión de los recursos de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

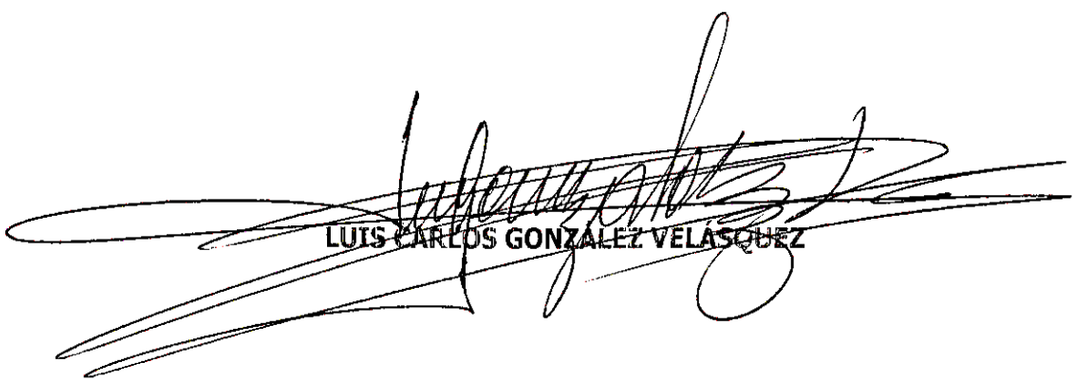
Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Admítase la consulta de la sentencia del proceso de la referencia.

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado común** a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE



[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la **consulta**, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión de los recursos de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

PROCESO ORDINARIO LABORAL No. 2018 00099 01 Juz 02 (virtual).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

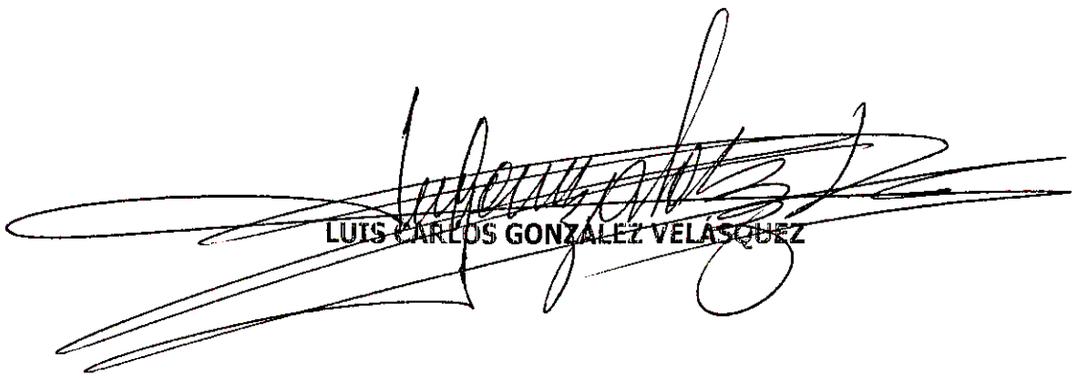
Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE



[1] **ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión de los recursos de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión del recurso de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión de los recursos de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión de los recursos de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión de los recursos de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a que se cumplen los requisitos legales para la concesión de los recursos de alzada contra la sentencia impugnada, se dispone su **admisión.**

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 13[1] de la Ley 2213 de 2022, se ordena **correr traslado** a las partes para alegar, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte impugnante. Si no hubiere apelantes o varios sujetos procesales apelaron, el término será común para ellos.

Los alegatos se remitirán con individualización de la parte que los interpone y el respectivo radicado al correo electrónico de la Secretaría de esta Sala: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia al correo electrónico de este Despacho: des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Radicados los respectivos escritos, manténgase el proceso en Secretaría a disposición de las partes.

NOTIFÍQUESE

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

[1]**ARTÍCULO 13. APELACIÓN EN MATERIA LABORAL**. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitará así:

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **18 2020 00382 01**
Demandante:	CLAUDIA ISABEL RODRÍGUEZ HERRERA
Demandado:	CLAUDIA FERNANDA PARDO VARGAS
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

A U T O:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto proferido el 19 de septiembre de 2022 proferido por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá.

I.- ANTECEDENTES:

La señora CLAUDIA ISABEL RODRÍGUEZ HERRERA, representada por la abogada adscrita a la Defensora del Pueblo, promovió demanda ordinaria en contra de la señora CLAUDIA FERNANDA PARDO VARGAS, a fin de declararse que con la encartada existió un primer contrato de trabajo a término indefinido por el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 2007 y el 30 de junio de 2010, así como un segundo contrato comprendido entre el 2 de mayo de 2012 y el 31 de octubre de 2019, sufriendo un accidente de trabajo el 1º de julio de 2016 cuando se encontraba cobijada por estabilidad laboral reforzada y estuvo padeciendo conductas de acoso laboral.

Por consiguiente, se condene a la demandada al pago de una multa consagrada en el artículo 1010 de 2006, indemnización de que trata el artículo 65 del C.S.T.,

indemnización contenida en la Ley 361 de 1997, indemnización por incapacidad permanente parcial según lo reglado en la Ley 776 de 2002, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión e indexación.

Como pretensiones subsidiarias, persigue condena respecto de la demandada al reconocimiento y pago de pensión de invalidez, junto con el retroactivo pensional.

A razón de lo anterior, el proceso correspondió por reparto al Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, quien en proveído calendado el 30 de noviembre de 2021, notificado en el estado del 1º de diciembre de 2021, inadmitió la demanda bajo las siguientes causales (PDF 03 – AUTO INADMITE DEMANDA):

> *"**PRIMERO: INADMITIR** la demanda, concediéndose un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto a fin de que se subsane, en los siguientes términos:*
>
> *1.1. Acreditar en el plenario que la demandante confirió el poder mediante mensaje de datos, cuyo mandato además deberá expresar la dirección de correo electrónico de la apoderada; de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 del Decreto 806 de 2020.*
>
> *1.2. Sírvase indicar con coherencia los fundamentos y razones de derecho que plantea en la presente demanda, como quiera que dicho acápite debe guardar relación con las pretensiones de la demanda; así como también deberá exponer las razones por la cuales pretende sea tenida la normatividad allí invocada, debiendo explicar los fundamentos de sus pedimentos*
>
> *1.3. Aclare el procedimiento a seguir en el presente asunto, toda vez que, en el poder, en el libelo introductorio y en el acápite de procedimiento indica que se trata de un proceso ORDINARIO DE PRIMERA INSTANCIA, mientras que, al realizar un estudio de las pretensiones, hechos de la demanda y fundamentos, el Despacho entiende que algunas pueden llegar a corresponder a un Acoso Laboral, el cual es un proceso especial; de ser el caso, deberá adecuar el poder, indicando el procedimiento del proceso y reformular las pretensiones precisando cuales corresponden a las*

principales y cuales a las subsidiarias a efectos de evitar acumulación indebida de pretensiones.

1.4. Éste Despacho advierte que NO se allegó de forma completa al plenario el medio de prueba documental denominado "PDF HISTORIA LABORAL AFP PORVENIR". Sobre el cual se hizo referencia en el acápite de pruebas, destacándose que, este medio de prueba documental, deberá allegarse de conformidad con lo estipulado en el numeral 3 del artículo 26 del C.P.T. Y S.S.

1.5. Aportar al plenario la documental denominada ficha socioeconómica, a efectos de verificar la viabilidad de la solicitud de amparo de pobreza, toda vez que la misma brilla por su ausencia.

1.6. Sírvase indicar con coherencia los fundamentos y razones de derecho que plantea en la presente demanda, como quiera que dicho acápite debe guardar relación con los hechos y pretensiones de la demanda, así como también deberá exponer los argumentos por los cuales pretende acoger la normativa abordada en la demanda y explicar los fundamentos de sus pedimentos.

1.7. Sírvase acreditar el envío electrónico de la demanda a la convocada a juicio junto con los anexos. (Inciso 4° del artículo 6° del Decreto 806 de 2020).

1.8. En cumplimiento del art. 6 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, la parte actora deberá enviar por medio electrónico copia del escrito de subsanación a la(s) convocada(s) a juicio."

El 11 de marzo de 2022 vía correo electrónico, la profesional del derecho remitió con destino al Juzgado renuncia al poder, adjuntando la correspondiente notificación a la demandante señora CLAUDIA ISABEL RODRÍGUEZ HERRERA el 7 de marzo de 2022 (PDF 04 – RENUNCIA PODER).

El 29 de junio de 2022 se acreditó nuevo poder allegado por la demandante, facultando a otro profesional para actuar en su representación (PDF 05 – PODER).

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá en proveído fechado el 19 de septiembre de 2022, notificado en el estado del 20 de septiembre de la misma anualidad, rechazó la demanda bajo el argumento de que la demandante no allegó escrito de subsanación dentro del término legal de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del C.P.T. y de la S.S.

Asimismo, aceptó la renuncia al poder conferido, reconociendo a su vez personería para actuar en representación de la demandante al nuevo profesional del derecho (PDF. 06 – AUTO RECHAZA DEMANDA).

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

El 23 de septiembre de 2022 fue allegado recurso de apelación con el argumento con el argumento de que se había aportado escrito de subsanación en tiempo.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, la Sala habrá de determinar si la parte demandante allegó escrito de subsanación de demanda en tiempo, de allí que se ausculte si en esta instancia se deba admitir la demanda o, en su defecto, se confirme el rechazo de la misma, determinado por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá.

c. Del caso en concreto:

Para lo pertinente, sea lo primero indicar la procedencia del recurso de apelación frente al auto que tuvo por no contestada la demanda, ello de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S.

Así las cosas, en tratándose de la devolución y reforma de la demanda, el artículo 28 del Estatuto Procesal del Trabajo establece:

> *"**ARTÍCULO 28. DEVOLUCIÓN Y REFORMA DE LA DEMANDA.** Antes de admitir la demanda y si el juez observare que no reúne los requisitos exigidos por el artículo 25 de este código, la devolverá al demandante para que subsane dentro del término de cinco (5) días las deficiencias que le señale.*
>
> *La demanda podrá ser reformada por una sola vez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial o de la de reconvención, si fuere el caso.*
>
> *El auto que admita la reforma de la demanda, se notificará por estado y se correrá traslado por cinco (5) días para su contestación. Si se incluyen nuevos demandados, la notificación se hará a estos como se dispone para el auto admisorio de la demanda."*

En tal sentido, palmario resulta que el término para subsanar la demanda se circunscribe a 5 días, por lo que, para el asunto de marras, el auto inadmisorio fue proferido el 30 de noviembre de 2021, notificado en el estado del 1º de diciembre de la misma anualidad, de allí que el término con que contaba la parte accionante para subsanar las deficiencias vencían el 9 de diciembre de 2021.

Ahora bien, confrontado el expediente digital, como lo concluyó el operador de instancia, no obra escrito alguno de subsanación que fuese aportado por la parte demandante con destino al correo institucional del Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, puesto que lo único que se aprecia es que, el 8

de diciembre de 2021 se allegó un escrito dirigido a la dirección electrónica cpardov@davivienda.com cuyo contenido refiere *"Atendiendo a lo dispuesto en auto de fecha 30 de noviembre de 2021, se anexa con en el presente correo, subsanación de la demanda"*, sin que tal aspecto pueda atenderse como valedero respecto de la parte accionante, por lo que resulta evidente la carencia de subsanación y, en tal sentido, habrá de confirmarse el auto de primer grado.

SIN COSTAS en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el auto proferido el 19 de septiembre de 2022 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA

Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **27 2021 00252 01**
Demandante:	EDNA ROCÍO DEL PILAR PINZÓN BARRAGÁN
Demandado:	COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

AUTO:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por SKANDIA S.A., en contra del auto calendado el 7 de diciembre de 2022 proferido por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, a través del cual se negó el llamamiento en garantía pretendido por dicha encartada respecto de la aseguradora MAPFRE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.

I.- ANTECEDENTES:

La señora EDNA ROCÍO DEL PILAR PINZÓN BARRAGÁN promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A., a fin que se declarare ineficacia de la afiliación que efectuó a HORIZONTE S.A. hoy PORVENIR S.A. por falta al deber de información, misma omisión en las que incurrieron los demás fondos privados a los que se trasladó y que debe estar afiliada al régimen de prima media con prestación definida.

Por consiguiente, pretende se condene a PROTECCIÓN S.A., a trasladar a COLPENSIONES los aportes que cotizó en el régimen de ahorro individual con

solidaridad, junto con los rendimientos, bonos pensionales si hay lugar a ello y cuotas de administración, además, se condene a COLPENSIONES a aceptar dichos conceptos y registrarla como su afiliada sin solución de continuidad desde el 18 de marzo de 2004, más lo que resulte probado en uso de las facultades *ultra* y *extra petita.*

De manera subsidiaria, solicita se declare la nulidad de la afiliación que efectuó a HORIZONTE S.A., hoy PORVENIR S.A. por falta al deber de información, misma omisión en las que incurrieron los demás fondos privados a los que se trasladó y se ordene la devolución de los conceptos ya referidos y su afiliación al régimen de prima media.

Trabado el contradictorio en su integridad, SKANDIA S.A. junto con la contestación de demanda, presentó llamamiento en garantía con relación a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., bajo el entendido de que la demandante se afilió dentro del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad ante sus dependencia en dos ocasiones, esto es, en 2007 y 2011, por lo que, en calidad de administradora de contingencias pensionales y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, suscribió con la mencionada aseguradora diferentes contratos de seguros previsionales del 01/01/2007 al 31/12/2007, 01/01/2008 al 31/12/2008, 01/01/2009 al 31/12/2009, 01/01/2010 al 31/12/2010, 01/01/2011 al 31/12/2011, 01/01/2012 al 31/12/2012, 01/01/2013 al 31/12/2013, 01/01/2014 al 31/12/2014, 01/01/2015 al 31/12/2015, 01/01/2016 al 31/12/2016, 01/01/2017 al 31/12/2017, para cubrir principalmente los riesgos de invalidez y muerte de los afiliados a su fondo obligatorio de pensiones, entre los que se encontraba la actora, contratos de seguro previsional que tuvieron vigencia por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017.

De esa forma, y en cumplimiento de dicho acuerdo contractual realizó los pagos correspondientes a las primas del seguro previsional de invalidez y sobrevivientes a favor de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. desde enero de 2007 hasta

diciembre de 2017, por tanto, esa administradora ya no cuenta con dichos recursos, haciéndose necesaria la vinculación al presente trámite judicial de la pluricitada aseguradora, ya que en caso de que se condene a devolver los aportes de la demandante a COLPENSIONES, junto con los gastos de administración de los que trata el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, corresponde a la aseguradora el cumplimiento de esa obligación en lo que se refiere particularmente a la prima pagada por el seguro previsional. (Archivo 11).

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

Mediante auto del 7 de diciembre de 2022 el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá negó el llamamiento en garantía pretendido.

Para arribar a dicha conclusión, indicó la *a-quo* que, si bien se allegaron las pólizas suscritas entre SKANDIA S.A. y la llamada en garantía, que dan cuenta de la existencia de los contratos de seguro previsional a los que se refiere esa demandada, advirtió que el objeto del presente proceso es que se declare la nulidad o ineficacia del traslado que realizó la demandante del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad y de las afiliaciones que se efectuaron a sus diferentes administradoras, no podía perderse de vista que escapa del conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral la situación relacionada con los contratos de seguro celebrados entre las personas jurídicas en cita, dado que no son controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras según el numeral 4º del artículo 2º del C.P.T. y S.S., sino que se trata de un asunto netamente comercial entre dos contratantes que corresponde conocer a una jurisdicción distinta y, por ende, no puede en este proceso resolverse sobre tal relación. (Archivo 16).

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

SKANDIA S.A. inconforme con la decisión la apeló. Argumentó en términos generales que esa administradora en cumplimiento a su obligación legal consagrada en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, celebró con MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A un contrato de seguro previsional, destinado a amparar los riesgos de invalidez y muerte de los afiliados a ese fondo de pensiones, entre los que se encuentra la demandante, por tanto, es evidente que en caso de que en la sentencia que ponga fin al proceso se condene a devolver la prima pagada como contraprestación legal por ese seguro, la entidad llamada a realizar esa devolución es la referida aseguradora, que fue la que recibió la prima que pagó, lo que justifica el llamado en garantía.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes en la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente caso resulta procedente ordenar el llamamiento en garantía de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

c. Llamamiento en garantía:

En aras de desatar el objeto del debate resulta oportuno recordar que el llamamiento en garantía es una figura que permite a la parte accionada convocar al juicio a un tercero, cuando se estime que este tiene la obligación legal de responder por la obligación que pudiere existir en cabeza suya. En tal sentir, el artículo 64 del C.G.P, aplicable a los juicios laborales por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T y la S.S, reza:

> *"Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación".*

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL 5031-2019, Radicación No. 71196 del 9 de octubre de 2019, explicó que esta figura aplica cuando quiera que se corrobore que el llamado en garantía debe responder por el derecho que esta peticionando el libelista, donde precisó:

> *"Así, el aludido llamamiento se caracteriza porque una de las partes tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar en el juicio, por existir entre él y ese tercero una relación de garantía, es decir, aquella en virtud de la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona. Pero esa no es la única posibilidad, porque suele suceder, que el derecho a citar al tercero proviene de una relación diferente entre los dos, como cuando se discute en materia laboral, si el empleador se subrogó en la ARL en las prestaciones de ese sistema.*
>
> *"Aquí, lo importante es que exista un afianzamiento que asegure y proteja al llamante contra algún riesgo, pues eso es la esencial del término "garantía", esto es, protección o defensa contra el ataque de otro sujeto, que por Ley o por convención, el llamado debe salir a cubrir en nombre del llamante".*

Ahora bien, en el *sub-examine* alega la parte recurrente que MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A debe ser llamada en garantía en virtud del seguro previsional que fue suscrito con la misma a través de las diferentes pólizas que contrató entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017.

No obstante, no debe soslayarse que el juicio que hoy nos convoca gira en torno a establecer si es ineficaz o no el traslado de régimen pensional suscrito por la demandante con la AFP hoy demandada, para que, en razón de ello, se ordene su

traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin que la eventual condena que se llegue a imponer, se encuentre en manera alguna afianzada o asegurada por la póliza aducida por la AFP.

De forma adicional no es dable establecer en el estudio del llamamiento en garantía el debate planteado por la AFP, esto es, lo atinente a la devolución de los gastos de seguros previsionales, en tanto tal situación se debe desatar en la sentencia que ponga fin al proceso, por lo que se reitera, no se advierte que se deba convocar en virtud del llamamiento en garantía a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

En otro giro, advierte la Sala que no se ha efectuado la notificación a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO de conformidad con lo previsto en el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, y que fuera ordenada en el auto admisorio; en consecuencia, se insta al Juzgado de instancia para que realice lo de su cargo previo a continuar con el trámite que corresponda.

Dimana de lo que se explica en líneas precedentes la indiscutible confirmación de la providencia recurrida. **COSTAS** en esta instancia correrán a cargo de SKANDIA S.A. como quiera que el recurso de alzada no gozó de prosperidad.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 7 de diciembre de 2022 proferido por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: INSTAR al Juzgado de origen a que verifique lo referente a la notificación a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada SKANDIA S.A. y a favor de la parte demandante. Fíjense como valor de agencias en derecho la suma de $500.000, las cuales deberán ser incluidas en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado
Salvamento de voto

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**
Ordinario Laboral	1100131050 **01 2004 00352 04**
Demandante:	DIVA ESTHER POLO PERTUZ
Demandado:	LA NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

I. A U T O:

Procede la Sala a resolver el recurso de queja interpuesto por la parte ejecutada en contra del auto proferido el 19 de agosto de 2022 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, a través del cual se negó el recurso de apelación interpuesto contra del auto que libró mandamiento de pago y lo adicionó, por improcedentes.

II. TRÁMITE PROCESAL

La señora DIVA ESTHER POLO PERTUZ promovió demanda ejecutiva laboral en contra de LA NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, a efectos que se libre orden de pago cuyo título ejecutivo lo basa en una sentencia judicial debidamente ejecutoriada.

En virtud de ello, el Juzgado de origen mediante proveído de 18 de agosto de 2010 libró mandamiento de pago, ante el cual la parte actora interpuso recurso de apelación, y además el 11 de marzo de 2011 se surtió notificación del

mandamiento mediante aviso a la entidad ejecutada. (Fls. 134 a 146 archivo 03 – carpeta C01Principal).

Seguidamente, contra el auto que libró mandamiento de pago la ejecutada también presentó recurso de apelación y allegó escritos de excepciones y objeción a los perjuicios compensatorios, siendo concedido el recurso de alzada. (Fls. 154 a 204 archivo 03 – carpeta C01Principal).

De esa forma, esta Corporación mediante providencia de 15 de diciembre de 2011, al desatar los recursos interpuestos por las partes, revocó el numeral tercero del mandamiento de pago y ordenó librar mandamiento por concepto de perjuicios compensatorios, confirmando en lo demás. (Fls. 41 a 59 – archivo 01- carpeta C01Principal).

En cumplimiento a lo dispuesto por esta Corporación, el Juzgado de primer grado a través de auto adiado el 21 de febrero de 2012, libró mandamiento de pago por concepto de perjuicios compensatorios y a razón de la contestación a la demanda que se allegó, decretó pruebas y señaló fecha resolver excepciones, diligencia en la que se declaró probada la excepción de pago y dio por terminado el proceso por pago total de la obligación, ordenando el archivo de las diligencias. (Fls. 206 a 212 – archivo 01- carpeta C01Principal).

En auto de 19 de diciembre de 2012, el juzgado de instancia dejó sin valor y efecto el auto de 21 de febrero de 2012, en lo atinente a tener por oportunamente presentadas las excepciones de mérito, dejando incólume la orden de pago por perjuicios compensatorios, corrió traslado de la nulidad presentada por la activa y fijó nuevamente fecha para audiencia, en la que se dispuso seguir adelante con la ejecución y se ordenó la práctica de la liquidación del crédito; en cuanto al recurso de apelación y el incidente de nulidad, se abstuvo de pronunciarse dado que había dejado sin efecto las decisiones objeto de disenso. (Fl. 242 a 248 – archivo 01- carpeta C01Principal).

A través de providencia de 27 de junio de 2016, el juzgado de origen reasumió el conocimiento del proceso, y requirió a la actora para que acreditara el soporte de los valores que reseñó en la liquidación de crédito que presentó, ante lo cual la parte interesa se pronunció. Más adelante, la activa aportó actualización a la liquidación del crédito y la accionada allegó objeción a los perjuicios compensatorios, poder e incidente de nulidad por indebida notificación, del cual se corre traslado. (Fls. 276 a 347 248 – archivo 01- carpeta C01Principal).

Acorde con lo anterior, el Juzgado de instancia declaró la nulidad de todo lo actuado mediante auto de 4 de diciembre de 2020, a partir de la providencia de 18 de enero de 2013, por medio del cual se ordenó seguir adelante la ejecución y practicar la liquidación crédito; de la misma forma, tuvo por notificada por conducta concluyente a la ejecutada de los autos de 18 de agosto de 2010 y 21 de febrero de 2012, mediante los cuales se libró mandamiento de pago y se complementó el mismo. A su vez, indicó que, surtido el término del traslado para excepcionar, ingresaran las diligencias al Despacho para resolver lo que en derecho corresponda. (Fls. 360 a 365 – archivo 01- carpeta C01Principal).

Contra dicha decisión la parte actora interpuso recurso de apelación, la cual fue confirmada por esta Colegiatura, mediante providencia de 29 de abril de 2022. (Fls. 416 y 448 a 459 – archivo 01- carpeta C01Principal).

Acorde con lo anterior, en auto de obedézcase y cúmplase a lo dispuesto por este Juez Colegiado de 7 de junio de 2022, se declaró igualmente, legalmente ejecutoriado el auto de 4 de diciembre de 2020 que declaró la nulidad y el de 31 de mayo de 2021 que aclaró el numeral tercero de dicha providencia, e indicó que surtido el término para excepcionar ingresaran las diligencias al despacho para resolver lo que corresponda. (Fls. 414 y 462 – archivo 01- carpeta C01Principal).

De esa forma, la encartada allegó escrito de excepciones y recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de los autos de 18 de agosto de 2010 y 21 de febrero de 2012, mediante los cuales se libro mandamiento de pago y se adicionó

el mismo y objeción a los perjuicios compensatorios. (Fls. 466 a 474 y 482 a 500 – archivo 01- carpeta C01Principal).

III. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, auto de 19 de agosto de 2022, dispuso:

> *"**1.- NEGAR** los recursos de reposición y apelación propuestos contra el mandamiento de pago y el auto que lo adiciono por improcedentes, de conformidad con lo expuesto.*
>
> ***2. CORRER TRASLADO** a la parte ejecutante de las excepciones propuestas, de conformidad con lo previsto en el artículo 443 CGP aplicable por integración normativa del artículo 145 CPTSS.*
>
> ***3- CONCEDER** a la parte ejecutante el término de 5 días, para que aporte o solicite las pruebas que estime pertinentes, respecto a la objeción de perjuicios presentada por la parte ejecutada.*
>
> *Vencidos los términos anteriores ingresen las diligencias al Despacho para resolver lo que en derecho corresponda."*

Como sustento de tal decisión, trajo a colación el artículo 430 del C.G.P., para precisar que el recurso de reposición contra el mandamiento de pago procede cuando las discusiones se centren en dilucidar la existencia de requisitos formales que puedan poner en duda que se trate de un título claro, expreso y exigible, además del beneficio de exclusión y de excepciones previas previstas en el artículo 100 del C.G.P., por lo que teniendo en cuenta que el título base de la presente ejecución lo constituye la sentencia proferida en el proceso ordinario 1998-053, título claro expreso y exigible con base en que se libró mandamiento ejecutivo, conforme lo ordenado por la sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá mediante proveído de fecha 30 de junio de 2010 y 15 de diciembre de 2011 del cuaderno de Tribunal.

Dicho esto, concluyó que contra el mandamiento de pago procede el recurso de reposición, únicamente para controvertir requisitos formales del título ejecutivo, solicitar el beneficio de excusión y proponer excepciones previas, y el de apelación cuando se niegue total o parcialmente la orden de ejecución y en el evento que se revoque el mandamiento en virtud de la reposición, lo que no ocurre en el presente caso, por lo que se evidencia que los recursos de reposición y apelación impetrados por el apoderado de la entidad ejecutada contra el auto que libró mandamiento de pago en el presente proceso resultan improcedentes.

De otra parte, adujo que al haber presentado la entidad ejecutada objeción a los perjuicios compensatorios reconocidos en el auto de fecha 21 de febrero de 2012 en obedecimiento a lo dispuesto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, conforme los dispuesto en el artículo 206 C.G.P. aplicable por integración normativa del artículo 145 C.P.T. y de la S.S., procede conceder el término 5 días a la parte actora para que aporte o solicite las pruebas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la objeción propuesta. (Fls. 502 a 505 – archivo 01- carpeta C01Principal).

Inconforme con tal decisión, la pasiva presentó recurso de reposición y en subsidio de queja en contra del 19 de agosto de 2022, que negó el recurso de apelación que presentó en contra del mandamiento de pago y el auto que lo adicionó. (Fls. 464 y 482 a 490 – archivo 01- carpeta C01Principal).

IV. DEL PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a esta Corporación establecer si procede el recurso de apelación interpuesto por la NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, el 10 de junio de 2022 en contra del auto que libro mandamiento de pago y el que lo adicionó.

V. CONSIDERACIONES:

El recurso de queja está regulado en los artículos 352 y 353 del C.G.P., los cuales disponen:

> "*Art. 352. Procedencia. Cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. […]*
>
> *"Art. 353. Interposición y trámite. El recurso de queja deberá interponerse en subsidio del de reposición* ***contra el auto que denegó la apelación o la casación****, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria".*

Bajo ese escenario, reitera la Sala que dentro del presente asunto el apoderado de la parte ejecutada interpuso el recurso de queja frente a la negativa de concederse el recurso de apelación en contra del auto que libro mandamiento de pago y el que lo adicionó.

En tal sentido, sea lo primero indicar que el numeral 8º del artículo 66 del C.P.T. y de la S.S., modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001, establece que es apelable *"El que decida sobre el mandamiento de pago".*

Por su parte, la doctrina al abordar el estudio de los artículos 430 y 442 del C.G.P., expuso en lo referente a los recursos que proceden en contra del mandamiento de pago en materia laboral, y en especial frente al de apelación lo siguiente:

> *"en el proceso ejecutivo laboral de primera instancia, el auto que ordena librar mandamiento de pago si es apelable por expreso mandato del artículo 29 de la Ley 712 de 2001 de modificó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual ha de ser aplicable por ser norma especial sobre la materia, a diferencia de lo que ocurre en el proceso ejecutivo civil".*[1]

[1] *Botero, Zuluaga Gerardo. Guía Teórica y Práctica de Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.6ª Edición, Página 556. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá, 2016*.

Así las cosas, diáfano es que la norma procesal laboral no limita el estudio del recurso de apelación respecto al auto que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago o lo revoque, como lo entendió el Juez de instancia, ya que a diferencia de lo establecido en el numeral 4º del artículo 321 del C.G.P., existe norma especial que regula el asunto en materia laboral como viene de verse; luego, no se hace necesario acudir al citado precepto legal, de modo que, al impugnarse el auto que esta decidiendo sobre el mandamiento de pago y su adicción, es procedente el recurso de alzada a afectos de verificar la prosperidad o no de los argumentos esgrimidos por la apelante. De esa forma, considera la Sala mal denegado el recurso de apelación interpuesto por la pasiva, por lo que hay lugar a que la decisión de primer grado se revoque.

SIN COSTAS en esta instancia por considerar que no se causaron, toda vez que se accedió a la queja interpuesta.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA CUARTA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR MAL DENEGADO el recurso de apelación interpuesto por LA NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, contra en contra del auto que libro mandamiento de pago y el que lo adicionó, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y, teniendo en cuenta que el recurso de apelación fue interpuesto y sustentado debidamente en primer grado por parte de LA NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, con este proveído se dispone, **ADMITIR** el recurso en esta instancia.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 *"Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones*", se concede el término común de cinco (5) días a las partes para que presenten sus alegatos. Vencidos estos, se proferirá la decisión que en derecho corresponda.

TERCERO: DISPONER que por Secretaría se COMPENSE el presente proceso al trámite de apelación de auto, a cargo de este Despacho, y una vez surtidos los tramites, REGRESEN las diligencias, a efectos de resolver el recurso de apelación.

SIN COSTAS en esta instancia al considerar que no se causaron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZALEZ VELASQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **05 2021 00457 01**
Demandante:	BÁRBARA VALERIANO PARRA
Demandado:	PROTECCIÓN S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

A U T O:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por PROTECCIÓN S.A., en contra del auto proferido el 17 de noviembre de 2022 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, a través del cual se tuvo por no contestada la demanda.

I.- ANTECEDENTES:

La señora BÁRBARA VALERIANO PARRA promovió demanda ordinaria en contra de PROTECCIÓN S.A., a fin de declararse que le asiste derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge, con ocasión del fallecimiento del señor JOSÉ ALCIDES ARÉVALO FORERO (q.e.p.d.), a partir del 5 de octubre de 2020 y hasta la fecha de inclusión en nómina, junto con el pago de intereses moratorios.

Por consiguiente, se condene a PROTECCIÓN S.A. reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes junto con el correspondiente retroactivo desde el 5 de octubre de 2020 y el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo

141 de la Ley 100 de 1993, lo que resulte probado de manera *ultra y extra petita* y costas procesales.

En forma subsidiaria pretende el pago de la indexación sobre las mesadas pensionales que le sean reconocidas.

A razón de lo anterior, el proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, quien a través de proveído calendado el 24 de enero de 2022 admitió la demanda en contra de PROTECCIÓN S.A.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

Seguidamente, el Juzgado emitió proveído el 17 de noviembre de 2022, donde tuvo por no contestada la demanda de PROTECCIÓN S.A. bajo el entendido que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 806 de 2020, vigente para la fecha de notificación a la encartada que lo fue el 8 de abril de 2022, la parte demandante procedió a notificar de manera personal la demanda al correo electrónico accioneslegales@proteccion.com.co, con el correspondiente comprobante de entrega, advirtiéndosele además a la encartada que la notificación se entendería realizada transcurridos dos días hábiles siguientes al envío y, a partir del día siguiente empezaría a correr el término de diez días para que por intermedio de apoderado judicial, procediera a contestar la demanda y solicitara pruebas, sin que se hubiese allegado escrito de contestación alguno dentro del término legal.

Igualmente, dispuso señalar fecha de audiencia en los términos de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., a fin de continuar con el trámite procesal correspondiente (PDF 08 – AUTO PROGRAMA).

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

El anterior proveído se notificó en el estado del 18 de noviembre de 2022, a lo cual, dentro del término legal correspondiente, más exactamente el 22 noviembre de 2022, PROTECCIÓN S.A. interpuso recurso de reposición y subsidiariamente de apelación, argumentando que el Decreto 806 de 2020 dispone que las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Igualmente, regula esta norma que los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

Que en tal sentido, la parte demandante remitió un correo electrónico al correo accioneslegales@protección.gov.co el día 8 de abril de 2022, donde no fue aportada la demanda y sus anexos, sino que se entrega un link para descargar los archivos mediante la aplicación *wetransfer*, es decir, la aplicación en comento no anexaba dichos anexos, tan solo el *link* redirecciona a otra aplicación para descargar los archivos.

Seguidamente, refirió que el *email* mediante el cual la parte demandante pretende notificar la demanda fue remitido a las 5:46 p.m. y, conforme se aprecia del mismo mensaje, el *link* caducaba el 15 de abril de 2022; circunstancia por la cual, la notificación conforme al Decreto 806 de 2020 se surtió el 20 de abril de 2022, dado que, atendiendo la semana santa, esos días no pueden ser atendidos como hábiles.

Por tal razón fue por lo que debió solicitarse el 19 de agosto de 2022 al Juzgado que fuese remitido el texto de la demanda, sus pruebas y anexos, la cual se remitió el mismo día, por lo que debe ser esta fecha la tenida en cuenta para efectos de contabilizarse el término con que contaba para contestar la demanda y no el 8 de abril de 2022 (PDF 09 – PROTECCIÓN REPOSICIÓN).

El Juzgado en proveído del 6 de diciembre de 2022 confirmó la negativa de tener por no contestada la demanda por parte de PROTECCIÓN S.A., argumentando que teniendo en cuenta que la notificación personal se surtió el día 8 de abril de 2022, los días para entender surtida la notificación fueron los días 19 y 20 de abril de 2022, y los días 10 días para contestar la demanda se comprendían entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2022, tiempo para el cual no se recibió contestación, siendo tan solo hasta el 19 de agosto de 2022 en que la encartada link del proceso digital, sin que esta última calenda pueda tenerse en cuenta para lo respectivo (PDF 11 – AUTO RESUELVE RECURSO).

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, la Sala habrá de determinar si la contestación de demanda impetrada por PROTECCIÓN S.A. fue interpuesta dentro del término procesal oportuno, o si, por el contrario, la misma fue extemporánea.

c. Del caso en concreto:

Para lo pertinente, sea lo primero indicar la procedencia del recurso de apelación frente al auto que tuvo por no contestada la demanda, ello de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S.

Así las cosas, en tratándose de notificaciones personales, precisa la Sala que el artículo 74 del C.P.T. y de la S.S. establece:

> ***"ARTICULO 74. TRASLADO DE LA DEMANDA.*** *Admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de diez (10) días, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados."*

De otra parte, el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022, en tratándose de las notificaciones personal, refiere:

> ***ARTÍCULO 8°. NOTIFICACIONES PERSONALES.*** *Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación,* ***sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.***
>
> *El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.*
>
> ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje****.*
>
> *Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.*
>
> *Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.*
>
> ***PARÁGRAFO 1°.*** *Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación incluidas las pruebas extraprocesales o del*

proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquier otro.

PARÁGRAFO 2°. *La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales.*

PARÁGRAFO 3. *Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se podrá hacer uso del servicio de correo electrónico postal certificado y los servicios postales electrónicos definidos por la Unión Postal Universal - UPU- con cargo a la franquicia postal."*

Bajo este escenario, advierte la Sala que atendiendo a que la notificación personal se surtió en los términos de que trata el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022, esto es, a través de mensaje de datos, palmaria es la norma en indicar en su parágrafo 2º ser necesario en tratándose de una persona jurídica como lo es PROTECCIÓN S.A., remitir la notificación con destino a la dirección electrónica suministrada en la Cámara de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o aquellas que se encuentren informadas en la página *web* o redes sociales, por lo que, para el presente asunto teniendo en cuenta el certificado de existencia y representación legal de la pasiva, la dirección de notificaciones es accioneslegales@proteccion.com.co.

En tal sentido, del conjunto de reportes de las notificaciones que obran dentro del plenario, a contrario de lo argumentado tanto por el Juzgado *a-quo* y lo planteado por PROTECCIÓN S.A. en su recurso de alzada, luego de admitida la demanda a través de proveído fechado el 24 de enero de 2022, yace una primera notificación que surtiera la parte demandante a la encartada el 7 de abril de 2022 con destino a la dirección de notificaciones accioneslegales@proteccion.com.co, la cual por demás contiene de manera adjunta copia del auto admisorio, así como la demanda y sus correspondientes anexos, sumado al hecho que fue remitida a la misma dirección de notificaciones expuesta en el certificado de existencia y representación legal

de la pasiva, sin tener nota de devolución alguna (Fls. 1 a 133 - PDF 04 – TRÁMITE NOTIFICACIÓN).

Por tal razón, la mentada notificación del 7 de abril de 2022, contrario a lo argumentado por el Juzgado, debe ser la tenida en cuenta para efectos de notificación, en la medida en que fue la tramitada primero en el tiempo cumpliendo a satisfacción los preceptos de que trata el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022.

Por tal razón, teniendo en cuenta los 2 días que regula la norma y los 10 días con los que contaba PROTECCIÓN S.A. para contestar la demanda (sin tener en cuenta semana santa), el término fenecía el 2 de mayo de 2017, presentándose la contestación de demanda el 6 de septiembre de 2022, lo que denota ampliamente al extemporaneidad de su interposición para haberse tenido por no contestada.

Ahora bien, no puede pretender PROTECCIÓN S.A. que por el hecho de que en el mes de agosto solicitó el *link* del expediente, deba ser esta momento para revivir términos, pues como ya se hizo hincapié, el trámite de notificación que realizara la parte demandante el 7 de abril de 2022 fue surtido en legal orden según disposición de la Ley 2213 de 2022; circunstancia por la cual, el auto de primer grado habrá de confirmarse, pero por las razones anotadas en la parte motiva de la presente decisión.

COSTAS en esta instancia a cargo de la recurrente PROTECCIÓN S.A.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 17 de noviembre de 2022 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. Se fija como agencias en derecho la suma de $300.000.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZALEZ VELASQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA CUARTA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **08 2021 00227 01**
Demandante:	DANIELA D' LOS ANGELES MEJIA PEÑA
Demandado:	YESID ANDRES MORENO ACOSTA Y DIEGO ALFREDO LESMES RAMIREZ
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

A U T O:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto proferido el 9 de marzo de 2022, a través del cual se negó la medida cautelar que solicitó.

I.- ANTECEDENTES:

La señora DANIELA D' LOS ANGELES MEJIA PEÑA promovió demanda ordinaria laboral en contra de YESID ANDRES MORENO ACOSTA y DIEGO ALFREDO LESMES RAMIREZ, con el fin que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, vigente entre el 8 de marzo de 2018 hasta el 5 de noviembre de 2019.

Como consecuencia de tal declaración, pretende se condene a los convocados a juicio a pagar la cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, vacaciones y el auxilio de transporte causados en desarrollo del contrato de trabajo, junto con las dotaciones. Además, se condene al pago de las sanciones por no consignación de las cesantías y por no pago oportuno de los interés

sobre las cesantías, la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T., el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones por todo el tiempo laborado, más lo que resulte probado en uso de las facultades *ultra y extra petita* y las costas y agencias en derecho (archivos 02 y 04).

Mediante proveído de 17 de noviembre de 2021, el Juzgado de origen inadmitió la demanda y concedió el término de ley para corregir las falencias reseñadas, subsanada la misma, por auto de 9 de marzo de 2022 procedió a admitirla y además negó la medida cautelar que se elevó en el escrito inaugural, consistente en el embargo del establecimiento de comercio denominado Auténtica Pizza A La Piedra, identificado con matrícula mercantil 2218940, propiedad del demandado Diego Alfredo Lesmes Ramírez y lugar de trabajo de la actora (archivos 03, 04 y 05).

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, en proveído fechado el 9 de marzo de 2022, negó la medida cautelar que solicitó la parte actora en el escrito de demanda.

Para arribar a dicha conclusión, la *a-quo* indicó que conforme al artículo 85 A del C.P.T. y de la S.S., se entiende que previo a ordenar la imposición de una medida cautelar debe estar trabada la litis, ello con la finalidad de que la parte demandada pueda ejercer su derecho a la defensa, máxime que la misma se dirige contra la persona demandada que aún no ha sido integrada al contradictorio. Aunado a lo anterior, la petición se encuentra erróneamente elevada, pues en ella no se solicitó la imposición a los demandados de la caución de que trata la citada norma, sino al embargo de un bien inmueble, situación que no se predica para los procesos Ordinarios Laborales, conforme lo expuso recientemente la H. Corte Constitucional en sentencia C 043 de 2021. Decisión que mantuvo al resolver el recurso de reposición que interpuso la activa. (archivos 05 y 07).

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconformes con tal decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, el cual sustentó en síntesis indicando que los demandados con el simple conocimiento de la demanda pueden llevar a cabo actos tendientes a insolventarse antes de notificarse.

Refirió que la sentencia C–043 de 2021 consideró que no podía enmarcarse el decreto de medidas cautelares en un reglamento cerrado por el artículo 85A cuando de procesos laborales se trata, en el entendido que el trabajador es la parte débil en la relación laboral, lo que lo hace sujeto de protección especial en el marzo de las relaciones laborales.

Enfatizó que de acuerdo con el artículo 590 del C.G.P., la medida que solicitó esta exigida correctamente, además, tal solicitud obedece a la interpretación articulada entre las medidas innominadas del Código General del Proceso y el restringido marco del artículo 85A del C.P.T. y de la S.S., por lo que para garantizar las resultas del proceso la medida solicitada no afectará a las partes, la que aún no han sido notificadas, lo cual impedirá comercializar el establecimiento de comercio tan pronto se enteren del proceso y que de paso se insolventen procediendo a venderlo a quien pueda pasar por un tercero de buena fe.

En esa medida, solicita se revoque parcialmente el auto objeto de disenso, y en su lugar se decrete la medida solicitada o una menos gravosa conforme al inciso tercero del literal C del artículo 590 del C.G.P. (archivo 06).

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente caso resulta procedente decretar la medida cautelar que solicita la activa en la demanda.

a. Medidas Cautelares:

En aras de desatar el objeto del debate, resulta oportuno recordar que de antaño se ha precisado que las medidas cautelares aluden a los instrumentos con los cuales el ordenamiento protege de manera provisional, esto es, mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en el curso de este. De esa forma, se protege preventivamente a quienes acuden a las autoridades judiciales a reclamar un derecho con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada, así se expuso en sentencia C-379 de 2004.

En punto de lo anterior, imperioso resulta traer a colación el artículo 85-A del C.P.T. y de la S.S., modificado por el artículo 37-A de la Ley 712 de 2001, que regula las medidas cautelares en el proceso ordinario laboral, el cual en su tenor literal señala:

> *"Cuando el demandado, en proceso ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente proceso entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar.*

"En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será apelable en el efecto devolutivo.

"Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden.".

De lo anterior, se puede extraer que la única medida que instituye dicho precepto legal es la caución. Sin embargo, no puede obviarse que en tratándose de medidas cautelares innominadas en procesos declarativos deben observarse dos presupuestos inherentes a su procedencia, como lo son la apariencia del buen derecho y el peligro en la mora. Esto, acorde con lo señalado por la doctrina y el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia C-043 de 2021 que declaró la exequibilidad condicionada del citado artículo 37 A de la Ley 712 de 2001, donde expuso:

"La jurisprudencia constitucional ha considerado que deben darse dos presupuestos esenciales para decretar una medida cautelar, a efectos de asegurar su proporcionalidad y congruencia. El periculum in mora (o peligro en la demora), "tiene que ver con el riesgo de que al no adoptarse la medida cautelar sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso". Y el fumus boni iuris (o apariencia de buen derecho), que "aduce a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal".

"[…]

"La Corte declarará exequible de forma condicionada el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, en el entendido según el cual en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse medidas cautelares innominadas, previstas en el literal "c" del numeral 1º del artículo 590 del CGP.

"Dicho literal establece, principalmente, que se puede aplicar cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias

derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Para decretar la medida cautelar el juez apreciará, entre otras situaciones, la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho."

Acorde con lo anterior, es diáfano que la medida regulada en el literal c) del artículo 590 del C.G.P., aplicable a los juicios de trabajo, hace alusión a las innominadas, por ende, tal solicitud resulta procedente resolverla fuera de audiencia. De otro lado, huelga mencionar que al ser innominada no puede tratarse de las demás que se enlistan en el citado artículo.

Así las cosas, al examinar la petición que en tal sentido elevó la parte actora en el escrito introductorio, se observa que la actora solicita:

"Con base en las disposiciones del Artículo 85A del C.P.T.S.S. el artículo 590 del C.G.P. y la sentencia C–043 de 2021 de la Corte Constitucional, solicito al despacho decretar como medida cautelar innominada, el embargo del establecimiento de comercio denominado Auténtica Pizza A La Piedra, identificado con matrícula mercantil 2218940, propiedad del demandado Diego Alfredo Lesmes Ramírez y lugar de trabajo de la demandante". (folio 12 a 13 archivo 04).

Bajo ese escenario, se advierte de la redacción de tal pedimento que se trata de las medidas establecidas en el artículo 590 del C.G.P., ya que guardan evidente consonancia con las que se encuentran contenidas en los literales los literales a) y b) de dicho precepto legal, los cuales aluden a bienes sujetos a registro conforme lo reglado en los artículos 588 del C.G.P. y siguientes; luego, palmario es que la cautela peticionada no refiere a la medida cautelar innominada contemplada en el literal c) del artículo 590 de C.G.P., la que procede previa petición de parte, según se ha dicho en STC15244-2019 de 8 de noviembre de 2019; o a la contenida en el artículo 85 A del C.P.T. y de la S.S., como lo expone la activa en su alzada.

Dimana de lo que se explica en líneas precedentes, la confirmación de la providencia recurrida por los motivos aquí expuestos.

SIN COSTAS en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 9 de marzo de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones referidas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **28 2021 00312 01**
Demandante:	EDILBERTO JAVIER BELLO MESA
Demandado:	COLPENSIONES, PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A., SKANDIA S.A. y FONCEP
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

AUTO:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por SKANDIA S.A., en contra del auto calendado el 8 de junio de 2022 proferido por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, a través del cual se negó el llamamiento en garantía pretendido por dicha encartada respecto de la aseguradora MAPFRE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.

Igualmente, se reconoce personería para actuar en representación del FONCEP, a la abogada LAURA ESMERALDA ROMERO BALLESTAS, identificada con cédula de ciudadanía 52.706.243 y T.P. 141.315 del C. S. de la Judicatura, en los términos y fines del poder conferido.

I.- ANTECEDENTES:

El señor EDILBERTO JAVIER BELLO MESA promovió demanda ordinaria en contra de COLPENSIONES, PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A., SKANDIA S.A. y FONCEP, a fin de declararse la nulidad y/o ineficacia del traslado que efectuara del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en su momento administrado por la CAJA DE

PREVISIÓN SOCIAL DE BOGOTÁ hoy FONCEP, al de Ahorro Individual con Solidaridad que efectuara a través de las distintas AFP llamadas a juicio, por lo que también debe declararse que en todo momento ha permanecido afiliado sin solución de continuidad al régimen público.

Por consiguiente, se condene a PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A. y SKANDIA S.A., devolver con destino a COLPENSIONES como administradora de sus contingencias en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, todas las contingencias que reposen en su cuenta de ahorro individual, tales como sumas de dinero, bonos, cotizaciones, sumas adicionales recibidas por concepto de aportes obligatorios y rendimientos devengados durante todo el tiempo en que tales dineros estuvieron en poder de la administradora.

Asimismo, se le condene a COLPENSIONES reactivar su afiliación en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, así como a recibir los aportes y rendimientos devueltos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, junto con la actualización y corrección de su historia laboral, lo que resulte probado de manera *ultra y extra petita* y costas procesales.

Luego de vinculado el contradictorio en su integridad, SKANDIA S.A. junto con la contestación de demanda, presentó llamamiento en garantía con relación a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. (Fls. 121 a 130 – PDF 11 CONTESTACIÓN SKANDIA S.A.), bajo el entendido de que la demandante se afilió dentro de sus dependencia desde el año 2005, por lo que, en calidad de administradora de contingencias pensionales y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, suscribió con la mencionada aseguradora un contrato de seguro previsional para cubrir, principalmente, los riesgos de invalidez y muerte de los afiliados a su fondo obligatorio de pensiones, entre los que se encontraba el actor, contrato de seguro previsional que tuvo vigencia por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2018.

De esa forma, y en cumplimiento de dicho acuerdo contractual realizó los pagos correspondientes a las primas del seguro previsional de invalidez y sobrevivientes a favor de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. desde enero de 2007 hasta diciembre de 2018, como administradora ya no cuenta con dichos recursos, haciéndose necesaria la vinculación al presente trámite judicial de la pluricitada aseguradora, ya que en caso de que se condene a devolver los aportes de la demandante a COLPENSIONES, junto con los gastos de administración de los que trata el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, corresponde a la aseguradora el cumplimiento de esa obligación en lo que se refiere particularmente a la prima pagada por el seguro previsional.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

Mediante auto proferido el 8 de junio de 2022, el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá negó el llamamiento en garantía. Para arribar a dicha conclusión, el Juzgado *a-quo* expuso que, de conformidad con los postulados emanados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, resulta improcedente el llamado en garantía con relación a la aseguradora, como quiera que el seguro previsional que hace mención SKANDIA S.A. fue adquirido para el eventual reconocimiento de una pensión de invalidez o sobrevivencia, rubro no contemplado dentro de los gastos de administración, de allí que el mismo deba ser asumido por la AFP (PDF 15 – NIEGA LLAMAMIENTO FIJA FECHA).

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

SKANDIA S.A. inconforme con la decisión la apeló. Argumentó su alzada que el llamamiento en garantía cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 64 del C.G.P., por cuanto con la aseguradora objeto de reproche se suscribieron sendos contratos de seguros previsionales dirigidos a la garantía de los riesgos de vejez, invalidez o muerte, sumado a que la jurisprudencia emanada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que en tratándose de procesos de ineficacia de la afiliación, es pertinente que la AFP traslade con destino al

Régimen de Prima Media con Prestación Definida entre otros rubros, los correspondientes a cuotas de seguros previsionales, las cuales por disposición legal deben ser deducidas del monto del aporte y trasladadas a una aseguradora previsional como lo es MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. en los términos de que tarta el artículo 20 de la Ley 100 de 1993.

Por otra parte, expuso que teniendo en cuenta la decisión del Juzgado, este no solo se pronunció en relación con la procedencia o no del llamamiento en garantía, sino que resolvió de fondo en relación a si la llamada en garantía debía o no responder una eventual condena en el proceso, situación que debió ser resulta en el marco de la sentencia que ponga fin a la instancia y no en el auto que admite o no el llamamiento en garantía, de allí que el *a-quo* esté pretermitiendo la oportunidad procesal pertinente y, con esta decisión se vulneraría derechos, más cuando entre SKANDIA S.A. y la llamada en garantía existe un vínculo jurídico sustancial que implicaría una consecuencia determinada ante la prosperidad de las pretensiones de la demanda (PDF 16 – APELACIÓN AUTO).

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes en la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente caso resulta procedente ordenar el llamamiento en garantía de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

a. Llamamiento en garantía:

En aras de desatar el objeto del debate resulta oportuno recordar que el llamamiento en garantía es una figura que permite a la parte accionada convocar al juicio a un tercero, cuando se estime que este tiene la obligación legal de responder por la obligación que pudiere existir en cabeza suya. En tal sentir, el artículo 64 del C.G.P, aplicable a los juicios laborales por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T y la S.S, reza:

> *"Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación".*

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL 5031-2019, Radicación No. 71196 del 9 de octubre de 2019, explicó que esta figura aplica cuando quiera que se corrobore que el llamado en garantía debe responder por el derecho que esta peticionando el libelista, donde precisó:

> *"Así, el aludido llamamiento se caracteriza porque una de las partes tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar en el juicio,* ***por existir entre él y ese tercero una relación de garantía****, es decir, aquella en virtud de la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona. Pero esa no es la única posibilidad, porque suele suceder, que el derecho a citar al tercero proviene de una relación diferente entre los dos, como cuando se discute en materia laboral, si el empleador se subrogó en la ARL en las prestaciones de ese sistema.*
>
> *"****Aquí, lo importante es que exista un afianzamiento que asegure y proteja al llamante contra algún riesgo****, pues eso es la esencial del término "garantía", esto es, protección o defensa contra el ataque de otro sujeto, que por Ley o por convención, el llamado debe salir a cubrir en nombre del llamante".*

Ahora bien, en el *sub-examine* alega la parte recurrente que MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A debe ser llamada en garantía en virtud del seguro previsional que fue suscrito con la misma a través de la póliza No. 9201407000002.

No obstante, no debe soslayarse que el juicio que hoy nos convoca gira en torno a establecer si es ineficaz o no el traslado de régimen pensional suscrito por la demandante con la AFP hoy demandada, para que en razón de ello, se ordene su traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin que la eventual condena que se llegue a imponer, se encuentre en manera alguna afianzada o asegurada por la póliza aducida por la AFP.

De forma adicional no es dable establecer en el estudio del llamamiento en garantía el debate planteado por la AFP, esto es, lo atinente a la devolución de los gastos de seguros previsionales, en tanto tal situación se debe desatar en la sentencia que ponga fin al proceso, por lo que se reitera, no se advierte que se deba convocar en virtud del llamamiento en garantía a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

Dimana de lo que se explica en líneas precedentes la indiscutible confirmación de la providencia recurrida.

COSTAS en esta instancia correrán a cargo de SKANDIA S.A. como quiera que el recurso de alzada no gozó de prosperidad.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 8 de junio de 2022 proferido por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada SKANDIA S.A. y a favor de la parte demandante. Fíjense como valor de agencias en derecho la suma de $500.000, las cuales deberán ser incluidas en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado
Salvamento de voto

JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **35 2021 00361 01**
Demandante:	JUAN PABLO DÍAZ PINZÓN
Demandado:	TRADESERVICE GROUP INC SUCRUSAL COLOMBIA
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

A U T O:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra del auto proferido el 30 de septiembre de 2022 dentro de la atapa de excepciones previas llevada a cabo en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., a través del cual se resolvió el medio exceptivo de cosa juzgada.

I.- ANTECEDENTES:

El señor JUAN PABLO DÍAZ PINZÓN, promovió demanda ordinaria laboral en contra de TRADESERVICE GROUP INC SUCRUSAL COLOMBIA, a fin de que se ordene la nulidad del despido por no reunir los requisitos legales y jurisprudenciales.

Por consiguiente, se ordene su reintegro a las actividades que venía desempeñando o, en su defecto, se siga con las recomendaciones médicas que ordenó su médico tratante, así como que se ordene el pago de seguridad social

desde el momento del despido a fin de que se pueda continuar con el correspondiente tratamiento.

Asimismo, se paguen los salarios desde el momento del despido y hasta el reintegro, el pago de la indemnización dispuesta en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo que resulte probado de manera *ultra y extra petita* y costas procesales.

Como fundamento de sus súplicas sostuvo que empezó a laborar al servicio de la encartada desde el 16 de septiembre de 2015 de manera personal e ininterrumpida a través de un contrato de trabajo a término indefinido, el cual tuvo fin el 25 de septiembre de 2019, donde desempeñó las funciones de Especialista Junior en Soluciones Logísticas tanto en las instalaciones de la pasiva, como fuera de ella.

Indicó que al poco tiempo de habérsele contratado le fue habilitada la huella para el acceso a las instalaciones de la empresa, así como que su jefe inmediato fue el señor NELSON RAMÍREZ.

Que con ocasión del despido del señor NELSON RAMÍREZ, la señora DIANA DAVID y el señor JOSÉ ÁLVARO ALEMÁN LÓPEZ, Gerente General y Representante Legal de la demandante respectivamente, lo citaron a una reunión el 20 de julio de 2018, en la que se decidió la continuidad de su cargo y, que, en forma adicional, cumpliera con las obligaciones que estaban a cargo del despedido señor NELSON RAMÍREZ, donde también hicieron presencia los compañeros del área, a quienes se les informó del cambio de supervisor y, por ende, fueron testigos de tal situación.

Refirió que, debido al incremento laboral en el cargo de Especialista Junior en Soluciones Logísticas, debía laborar de domingo a domingo en horario de apertura de bodega desde las 6:00 a.m. hasta el cierre que lo era a las 11:00 p.m.; así como que derivado del exceso laboral, el 5 de septiembre de 2018 al

terminar su jornada laboral, sufrió un accidente en motocicleta estrellándose con un bus de Transmilenio.

Que el 22 de marzo de 2019 se le diagnosticó Trastorno Depresivo Recurrente, Episodio Moderado Presente (F331), con medición de Clonazepam y Trazodona, manifestando igualmente que fue acosado laboralmente a razón de las recomendaciones médicas dadas el 22 de marzo de 2019 por psiquiatría, donde el empleador le sugirió presentar la carta de renuncia.

Seguidamente, relató que el 18 de septiembre de 2019 y en virtud de una nueva valoración médica, le fue prescrita la enfermedad de Trastorno de Ansiedad y Depresión, junto con Episodio Depresivo Grave, sin Síntomas Psicóticos.

Señaló que su contrato de trabajo fue terminado sin justa causa y de manera unilateral por el empleador, sin tenerse en cuenta su estado de salud, y sin que mediara concepto por parte del Ministerio del Trabajo, encontrándose para ese momento en estado de debilidad manifiesta a razón del tratamiento que venía presentando respecto de cuestiones psiquiátricas y controles por las secuelas del accidente para el mismo periodo en que se le despidió.

Por último, adujo que, para los meses siguientes al finiquito laboral, no pudo dar continuidad a los tratamientos prescritos por los profesionales de la salud (PDF 05 – DEMANDA).

Con ocasión de ello, la demanda correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, quien a través de proveído calendado el 6 de octubre de 2021 admitió la demanda en contra de la encartada TRADESERVICE GROUP INC SUCRUSAL COLOMBIA (PDF 15 – AUTO ADMITE DEMANDA).

Por tal razón y luego de notificada la demanda en legal forma, la demandada TRADESERVICE GROUP INC la contestó, impetrando la excepción previa denominada cosa juzgada en virtud de una transacción celebrada con el demandante (PDF 17 – CONTESTRACIÓN DEMANDA).

Argumentó el medio exceptivo bajo el entendido que, conforme a las pruebas documentales, fundamentos y razones de derecho allegadas en la demanda, inequívocamente se pudo acreditar la existencia de una terminación unilateral del contrato de trabajo que se celebró con el demandante, lo que conlleva a que en el asunto de marras nunca se hubiese configurado un finiquito laboral a razón de un despido, sino una terminación amparada en el numeral 1º, literal b) del artículo 61 del C.S.T., así como que se acreditó que el contrato de transacción laboral y finalización por mutuo acuerdo no adoleció de ningún vicio en el consentimiento, y que por demás se celebró de manera informada, libre y espontánea por parte del señor JUAN PABLO DÍAZ PINZÓN, situación que se acompasa con lo estatuido en el artículo 1502 del Código Civil.

Al unísono, expuso que teniendo en cuenta los preceptos del mentado artículo 1502 del Código Civil, para el momento de suscripción de la transacción el actor se encontraba en plena capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, ejercerlos y exigirlos, y modificar y extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma; circunstancia por la cual, la capacidad del señor JUAN PABLO DÍAZ PINZÓN se desplegó y materializó a través de la firma de la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo y transacción laboral, entendiéndose esta como una facultad psíquica que tiene el individuo para elegir entre realizar o no un determinado acto, y depende directamente del deseo e intención de realizar un acto jurídico en concreto, de conformidad además con la presunción de capacidad jurídica bajo los preceptos de los artículos 1503 y 1504 del mentado Código Civil.

Que si en gracia de discusión se llegase a considerar que para el momento de la suscripción de la transacción existió fuerza, constreñimiento y abuso de la

posición dominante, el artículo 1503 del Código Civil indica que la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, teniendo en cuenta su edad, sexo y condición.

En últimas, arguyó que, para la fecha de la suscripción de la transacción, allí abiertamente se hizo referencia a las condiciones particulares de salud del demandante para la época, la cual inequívocamente da fe de que la decisión se tomó en el ejercicio de la autonomía de la voluntad y con pleno conocimiento de su condición, de ahí que la suscripción haga tránsito a cosa juzgada para la prosperidad de este medio exceptivo.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

El Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. llevada a cabo el 30 de septiembre de 2022, declaró probada la excepción previa de cosa juzgada, lo que conllevó a su vez declarar la terminación del proceso.

Para arribar a dicha conclusión, el *a-quo* expuso que, como se desprende del *petitum*, lo perseguido por el extremo demandante gravita en torno a la nulidad del despido y la orden de reintegro, sin que, dentro del acápite de los hechos, nada se advierta sobre la transacción celebrada entre las partes, sino únicamente que el contrato de trabajo culminó de manera unilateral sin tenerse en cuenta el estado de salud del actor, encontrándose entonces en situación de debilidad manifiesta.

Al unísono, indicó que los documentos que reposan dentro del plenario se encuentran revestidos de la presunción de autenticidad de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del C.G.P., adicional a que no se acudió a la reforma de la demanda en el momento procesal correspondiente, de ahí que se deba partir sobre la existencia del contrato de transacción suscrito entre las partes.

En lo que atañe a la excepción previa de cosa juzgada, el operador de instancia adujo que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 32 del C.P.T. y de la S.S., este medio exceptivo puede analizarse como previo, adicional a que, según los postulados emanados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la transacción es un acuerdo que se celebra con la finalidad de acabar un litigio o precaver uno futuro cuyas características se sustentan en que las partes renuncian a los derechos en disputa y en su lugar seden sus aspiraciones recíprocas, siendo entonces un mecanismo alternativo de solución de conflictos.

Que revisados los requisitos mínimos de la transacción a la luz del derecho del trabajo y de la seguridad social, adujo que como lo ha expuesto el órgano de cierre, la misma es posible siempre y cuando verse sobre derechos inciertos y discutibles conforme lo regula el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 15 del C.S.T., y como quiera que en el asunto *sub-examine* no se advierten derechos ciertos, es por ello que se puede emitir el correspondiente análisis de la excepción de cosa juzgada, y si en gracia de discusión estuviese inmersa la figura de estabilidad laboral reforzada del actor al momento de la suspensión del acta de transacción, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia también ha considerado que la garantía del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 solo opera en los casos de despido por razones de discapacidad, por lo que no se puede entender que ante una terminación de mutuo acuerdo, exista un supuesto de la norma en cita.

Por tal sentido, conforme ha sido aceptado por el órgano de cierre, es posible acordar por mutuo acuerdo la rescisión del vínculo contractual de una persona en circunstancias de estabilidad laboral reforzada, y dicho acto está desprovisto de formalidades especiales como la aprobación del Ministerio del Trabajo.

Expuso entonces que dentro del presente asunto no se analizó si el trabajador cumplía con los requisitos dispuestos en la Ley 361 de 1997, pues simplemente

se determinó que inclusive si se estuviese en tal situación, no se alegaron vicios del consentimiento en la suscripción de la transacción, iterando que el demandante no realizó ninguna argumentación en la demanda relacionada con la suscripción de la misma, máxime si se tiene en cuenta que cualquier alteración psicológica afecta la facultad de negociar de una persona, puesto que debe ser demostrada la afectación grave que no le permitiera conocer las consecuencias de sus actos, situación que no está probada en este asunto.

Expuso que al tenor de los preceptos de la cosa juzgada en los términos del artículo 303 del C.G.P., se vislumbra del acuerdo de transacción una identidad de partes como quiera que el mismo fue suscrito entre el Representante Legal de TRADESERVICE GROUP INC y el demandante, una identidad de causa en la medida que la transacción tuvo como fundamento la relación laboral que ató a las partes por el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2015 y el 25 de septiembre de 2019, máxime si en su clausulado se consignó que existían novedades de salud del actor, señalándose que la EPS se debía encargar del tratamiento médico de éste, así como que la cláusula tercera que el acuerdo transaccional se llevó a cabo por las partes en forma libre de apremio entre ellas guardando los principios de buena fe y transparencia contractual, transigiéndose cualquier clase de discusiones derivadas del derecho de origen incierto e indiscutible que pudiera surgir con ocasión del contrato de trabajo, especialmente cualquier clase de diferencia relacionada con las causas o motivos que dieron principio al finiquito laboral, incluso reclamaciones de indemnizaciones o bonificaciones por retiro y eventuales acciones de reintegro, inclusive de eventuales litigios.

Frente a la identidad de objeto, refirió que en la transacción quedó plasmado por las partes que se tranzaba cualquier acción judicial generada con ocasión de la terminación del contrato de trabajo, incluidas las acciones de reintegro, y en razón a que las pretensiones de este asunto tienen por objeto ordenar la nulidad del despido y el reintegro del trabajador, junto con el pago de salarios y seguridad social, así como la indemnización de que trata el artículo 26 de la

Ley 361 de 1997, todas las pretensiones son consecuenciales de la acción de reintegro, la cual de manera expresa fue contemplada por las partes en el acuerdo transaccional, de allí que se constituya este elemento; circunstancia por la cual, declaró probado el medio exceptivo y finalización del proceso.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión la parte demandante la apeló. Argumentó en su alzada que debe tenerse en cuenta la enfermedad que presentaba al momento de la suscripción del acuerdo transaccional, como quiera que afectaba su psiquis.

Que no se puede declararse una cosa juzgada con ocasión de un acuerdo de transacción cuando la enfermedad no era física sino psiquiátrica, de allí que sea claro que la terminación del contrato de trabajo por parte de la demandada fue precisamente con ocasión de la enfermedad padecida, lo cual agrava la situación al constituirse una evidente discriminación, más aún si ese acuerdo no se podía celebrar por faltar la calificación de pérdida de capacidad laboral, lo que denota la mala conducta de la empleadora.

Refirió que tampoco puede perderse de vista que con ocasión de las extensas jornadas laborales fue que sufrió el accidente base de sus padecimientos psiquiátricos, siendo el empleador quien lo presionara para suscribir el acuerdo de transacción, sin que el Juez tuviese en cuenta los principios de *indubio pro operario* ni *favorabilidad laboral*.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos, la Sala deberá auscultar si goza o no de prosperidad el medio exceptivo de cosa juzgada determinado por el operador, ello con ocasión del contrato de transacción que suscribieran las partes.

c. De la procedencia de la excepción de cosa juzgada:

Sea lo primero indicar, para desatar la controversia que concita la atención de la Sala que el Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social precisa en su artículo 32, modificado por el artículo 1 de la Ley 1149 de 2007, sobre el trámite de las excepciones, que:

> ***"****El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo.*
>
> *"Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia."*

Acorde con lo anterior, es necesario acudir a lo establecido en el artículo 303 del C.G.P, norma aplicable al presente caso por remisión normativa del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que consagra lo referente al fenómeno jurídico de cosa juzgada en los siguientes términos:

> *"La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.*
>
> *"Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con*

posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos".

Por su parte, la doctrina al abordar el análisis de la figura de la cosa juzgada ha señalado sobre su significado y los elementos sobre los cuales se estructura:

"La expresión cosa juzgada proviene del latín res iudicata. Significa, en su acepción corriente, lo que ha sido juzgado o resuelto. Procesalmente atañe las consecuencias o efectos, su esencia, los cuales se contraen a dotar a ciertos proveídos, generalmente las sentencias, de una especial calidad que tiende a evitar que entre las mismas partes (demandante y demandado), por igual causa (hechos) y sobre idénticos objeto (pretensión), se instaure un segundo proceso."

(…)

"En consecuencia, solo cuando esos elementos en su totalidad se presentan en un segundo proceso obra la cosa juzgada. Entonces, si las partes y los hechos son los mismos, pero varía la pretensión, no hay lugar a que se reconozca la cosa juzgada. (…) Tampoco si las partes y las pretensiones son iguales, pero cambian los hechos (…). Se excluye también si al menos una de las partes es diferente, aunque los hechos y las pretensiones conserven su identidad, (…).[1]".

Así las cosas, diáfano es, que esta institución garantiza la seguridad jurídica, pues impide la toma de decisiones contradictorias en un mismo asunto, cerrando la posibilidad de que sean sometidas a un nuevo debate judicial.

Igualmente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL814-2022 con Radicado No. 79462 de 16 de marzo de 2022, al realizar el análisis del precedente jurisprudencial que ha emanado de antaño sobre esta figura, consideró lo siguiente:

"Sobre este tópico, la Corporación en sentencia CSJ SL11414-2016, discurrió:

Sobre el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, para que sea procedente, es preciso recordar que, en ambos procesos judiciales <u>debe concurrir</u> los

[1] Azula, Camacho Jaime. Manual de Derecho Procesal: Tomo I, Teoría General del Proceso. 11ª edición, Bogotá: Editorial Temis, 2015. Páginas 368, 370.

tres requisitos comunes que son: 1) Identidad de persona (eaedem personae): debe tratarse del mismo demandante y demandado; 2) Identidad de la cosa pedida (eadem res): el objeto o beneficio jurídico que se solicita (no el objeto material) debe ser el mismo, es decir, lo que se reclama; y 3) ***Identidad de la causa de pedir (eadem causa petendi): el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado debe ser el mismo, esto es, el por qué se reclama.***

"Los anteriores requisitos o elementos, se encuentran presentes en la norma que consagra la cosa juzgada, valga decir, el art. 332 del CPC hoy art. 303 del Código General del Proceso, aplicable por analogía del art. 145 del CPT y SS., que exige para su declaratoria que «el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes»."

Teniendo en cuenta el caso puesto a consideración de la Sala, conviene memorar lo expuesto por esa misma Corporación en sentencia SL3436-2020, Radicación No. 79452 de 8 de septiembre de 2020, en la que abordó el estudio de la cosa juzgada al mediar transacción entre las partes en asunto de similares contornos al aquí analizado, expuso:

"Encuentra la Sala que el Tribunal, en lo que interesa a al cargo, argumentó que en el acuerdo transaccional suscrito entre el señor Edgar Robles Rojas y la sociedad Ingenierías Triturados y Concretos SA (Intricon SA), el 10 de diciembre del año 2009 (folios 379 a 382), «[…] no comprendió las pretensiones esbozadas en la demanda […]», por lo que no se configuró la cosa juzgada, pues para ello se requería la concurrencia de tres condiciones: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa; iii) entidad de parte.

"Por su parte, el casacionista insiste que la culpa patronal hizo parte del objeto de la transacción celebrada el día 10 de diciembre del año 2009, entre el actor y la empresa, por lo que acusó la apreciación errada de este medio (f.° 379 a 382).

"El problema jurídico que se le plantea a la Corte con este cargo, se contrae a determinar si se configuró el fenómeno de cosa juzgada frente a las pretensiones incoadas en la demanda."

"[…]

"Dicho lo anterior, y verificado el medio de convicción acusado, se lee de este lo siguiente:

[…] el trabajador ha recibido la suma correspondiente a la liquidación, reajuste salarial, y además de hechos laborales renunciando expresamente a cualquier otra acreencia que se haya causado o se cause en cualquier concepto que sea susceptible de transar incluida la mora, salarios caídos hasta la fecha desde el inicio de la relación hasta la firma de la transacción, prestaciones y demás derechos laborales como salarios, primas, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, cotizaciones, horas extras, compensatorios, recargos, nivelación, liquidaciones, y etc.

"Entonces, tal como lo señaló el Tribunal, la transacción no comprendió las pretensiones incoadas en la demanda, en consecuencia, no están dados los requisitos para que se declare la existencia de la cosa juzgada, en los términos del artículo 303 del CGP, aplicable a los juicios del trabajo por virtud de la remisión que hace el artículo 145 del CPTSS."

d. Del caso en concreto:

Previo a abordar el medio exceptivo, puntualiza la Sala en primer lugar que no fue objeto de reproche que entre el aquí demandante señor JUAN PABLO DÍAZ PINZÓN y la demandada TRADESERVICE GROUP INC SUCRUSAL COLOMBIA existió un contrato de trabajo a término indefinido por el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2015 y el 25 de septiembre de 2019, donde el actor desempeñó como último cargo el de Especialista Junior en Soluciones Logísticas, prueba de ello lo constituye la copia del contrato de trabajo, la certificación emanada por la encartada el 30 de septiembre de 2019 y copia de liquidación final de prestaciones sociales (Fl. 9 – PDFS 02 PRUEBA y fls. 17 a 23 – PDF 17 CONTESTACIÓN DEMANDA).

Tampoco el hecho que la finalización de la relación laboral fue con ocasión al contrato de transacción que suscribieran las partes 25 de septiembre de 2019, el cual consigna lo siguiente (Fls. 24 a 28):

"CONTRATO DE TRANSACCIÓN

*"Entre los suscritos, a saber, por una parte **NICOLAS ZAJEC**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá distrito capital, identificado con la C.E. No. 165.310; en su calidad de representante legal de la empresa TRADESERVICE GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA; Entidad legalmente*

constituida, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá y quien dentro del presente contrato se denominara nombre TRADESERVICE; y por la otra JUAN PABLO DIAZ PINZON; mayor de edad, residente en el Municipio de la Calera, identificado como aparece al pie de su correspondiente firma; Hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE TRANSACCIÓN, regido en lo general por las disposiciones del Código Civil y Código Sustantivo Laboral y de la Seguridad Social, cuyo objeto es transar cualquier diferencia y evitar litigios o acciones judiciales que se pudieren generar con ocasión a la terminación del contrato de trabajo y en especial por las cláusulas que se determinan a continuación:

A: Qué el señor JUAN PABLO DIAZ PINZON; suscribió CONTRATO INDIVIDUAL A TERMINO INDEFINIDO en fecha 16/09/2015,

B.- Qué al señor JUAN PABLO DIAZ PINZON; se le han atendido por parte de TRADESERVICE, la totalidad de las obligaciones derivadas de su contrato de trabajo.

C.- Las partes declaran que el contrato de trabajo que las vincula se da por terminado por mutuo acuerdo entre las partes quienes deciden dan por terminado el vínculo con fecha 25/09/2019, y de manera expresa mediante la suscripción de la presente y de manera irrevocable y libre de apremio aceptan de forma expresa esta causal de terminación establecida en el art. 61 del CST.

D.- ***EL TRABAJADOR ha presentado algunas novedades que han afectado su salud, sin embargo, las mismas han sido atendidas de forma oportuna por las entidades del sistema general de seguridad social a las cuales se encuentra afiliado al momento el ex trabajador en calidad de cotizante, así mismo, ha sido advertido de forma expresa sobre la cobertura de dichas entidades a la finalización del vínculo laboral con TRADESERVICE****.*

Sobre este particular, la Corte Constitucional en Sentencia T-344 de 2008 estableció:

"...LA CORTE HA CONSIDERADO QUE ARGUMENTOS COMO (...) LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, NO CONSTITUYEN RAZONES PLAUSIBLES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN, PARA JUSTIFICAR LA INTERRUPCIÓN DE UN TRATAMIENTO MÉDICO. POR ELLO, BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LA CORTE HA ESTIMADO QUE A FIN DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PACIENTE, ***LA EPS*** *QUE SE ENCONTRABA SUMINISTRADO EL TRATAMIENTO MÉDICO REQUERIDO POR EL AFILIADO, DEBÍA GARANTIZAR SU CULMINACIÓN..." (SUBRAYA FUERA DEL TEXTO ORIGINAL).*

F.- ***Sin embargo, es decisión de las partes suscribir un acuerdo de transacción por los derechos inciertos y discutibles, en los siguientes términos****:*

TRANSACCION:

PRIMERA: *El trabajador ha venido prestando sus servicios desde el día 16/09/2015, para la empresa TRADESERVICE, a través de un contrato de trabajo a término indefinido.*

SEGUNDA*: El trabajador prestó sus servicios entre el día 16/09/2015; y el día 25/09/2019, para la empresa TRADESERVICE; conforme a acuerdo generado entre ellas como se describió en el titulo anterior del presente escrito.*

TERCERA*: En consideración lo expuesto en los literales anteriores de la A la D; y como quiera que se pueden presentar reclamaciones sobre derechos inciertos y discutibles, las partes han decidido llegar a un acuerdo de transacción, cerrando así cualquier futura reclamación. PARAGRAFO.- Las partes manifiestan que el presente acuerdo se realiza libre de apremio entre ellas, guardando los principios de buena fe y transparencia contractual, el EX TRABAJADOR y el EX EMPLEADOR, han decidido TRANSIGIR de forma expresa discusiones sobre cualquier clase de acreencias laborales derivadas de derechos de origen incierto y discutible que pudiera surgir con ocasión del contrato de trabajo a término indefinido que vinculó a las partes, especialmente cualquier clase de diferencias relacionadas con las causas y/o motivos que dieron origen a la terminación del contrato.*

Así mismo, concilian eventuales reclamaciones relacionadas con indemnizaciones y/o bonificaciones por retiro, eventuales acciones de reintegro. Igualmente transigen la naturaleza salarial o no, de todo tipo de bonificaciones, auxilios, beneficios, primas extralegales especialmente la naturaleza no salarial de todo tipo de beneficios, auxilios extralegales, reconocidos Al EX TRABAJADOR por el EX EMPLEADOR y/o terceros, así como su incidencia salarial y prestacional, como eventuales diferencias en los salarios base de liquidación, todo tipo de diferencias sobre derechos de origen incierto y discutible derivados de la acusación, reconocimiento, pago, forma de pago de beneficios, auxilios de todo tipo, primas extralegales, pagos variables.

CUARTA.- *El trabajador manifiesta de forma voluntaria y libre de cualquier apremio, que durante el desarrollo de estas distintas vinculaciones laborales, le fueron cancelados conforme a la ley y a lo convenido entre las partes, la totalidad de las acreencias laborales a las que tenía derecho; todo lo cual fue recibido a entera satisfacción; el vínculo laboral del trabajador con TRADESERVICE; SE DA POR*

TERMINADO POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES, en fecha 25/09/2019, cesando al fin de la jornada laboral todos los efectos jurídicos que del vínculo laboral se desprenden.

QUINTA: *Por lo anterior TRADESERVICE; procede a efectuar la liquidación final de derechos laborales de El trabajador suma que será abonada, en su cuenta de nómina.*

SEXTA: *Por su parte la empresa TRADESERVICE; manifiesta no adeudarle suma alguna a EI TRABAJADOR;*

SEPTIMA*: Estas posiciones de las partes que pueden identificarse como controversias en relación con los derechos reclamados, los convierte en inciertos y discutibles haciendo posible la realización de una* ***TRANSACCION.***

OCTAVA*: Por lo anterior, las partes han decidido transar de forma expresa la posibilidad eventual de un litigio sobre un derecho incierto o discutible, tanto en su cuantía como en su exigibilidad, que tengan origen en el vínculo que los unió hasta el 25/09/2019, cualquier eventual reclamación sobre cualquier clase de acreencias laborales derivadas de derechos de origen incierto y discutibles que pudieran derivarse del contrato de trabajo que vinculó a TRADESERVICE; con el trabajador, especialmente todo tipo de eventuales diferencias relacionadas con las causas y motivos que dieron origen a la terminación del contrato y eventuales reclamaciones relacionadas con indemnizaciones y lo bonificaciones por retiro, eventuales acciones de reintegro, diferencias sobre naturaleza salarial y prestacional, toda clase de indemnizaciones, indexaciones, incrementos salariales, corrección monetaria; que hubieran existido hasta la fecha.*

NOVENA*: Por todo lo anterior, con el fin de transar las eventuales diferencias que pudieran surgir conforme a lo expuesto en el presente documento, TRADESERVICE; en calidad de empleador reconoce a El trabajador a título de suma transaccional y por mera liberalidad, una suma única y definitiva de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M.cte ($14.495.000), la que será cancelada mediante transferencia bancaria a su cuenta bancaria de nómina, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento; suma que no tiene incidencia salarial, ni prestacional para ningún efecto.*
PARÁGRAFO PRIMERO: *Teniendo en cuenta que, el Ingreso Base de Cotización (IBC), está conformado por todos los elementos constitutivos de factor de salario, es decir, que la cotización se efectúa sobre el salario devengado por EL EXTRABAJADOR durante el vínculo contractual, finalizado este por la renuncia libre y voluntaria, la suma transaccional establecida en el acuerdo de voluntades, se paga mediante transferencia electrónica y es imputable para transigir cualquier derecho incierto,*

discutible y aleatorio a favor del EXTRABAJADOR, que tenga relación con el contrato de trabajo que existió entre las partes, el valor enunciado en la cláusula SEGUNDA de este contrato de transacción, no hace parte integral del IBC. En todo caso el EXTRABAJADOR releva al EXEMPLEADOR de dicha obligación por haber recibido de éste la suma transaccional que incluye los eventuales reajustes mencionados. ***PARAGRAFO SEGUNDO****. Las partes en el citado contrato transaccional acuerdan expresamente que éste pago que hace el EMPLEADOR a su TRABAJADOR por concepto de cualquier derecho incierto, discutible y aleatorio a favor del EXTRABAJADOR, no constituye salario ni se tendrá como tal para efectos de prestaciones sociales y de aportes a la seguridad social. PARAGRAFO TERCERO. - Los impuestos que se lleguen a causar estarán a cargo del beneficiario de estos dineros.*

DÉCIMA*: Por todo lo anterior El trabajador manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, planteamientos, conceptos, cuantías, pazos y pagos aquí estipulados declarando a PAZ Y SALVO a TRADESERVICE; por todos los derechos inciertos y discutibles, pues es deseo evidente que por ser el arreglo total y definitivo, la suma objeto de conciliación sea imputable para satisfacer cualquiera de estos conceptos.*

DÉCIMO PRIMERA*: Quienes suscriben esta transacción dejan expresa constancia, mediante este documento, que todo lo aquí escrito fue pactado en forma libre, voluntaria, de buena fe y sin presión de ninguna naturaleza, ni vicio del consentimiento por error, fuerza o dolo.*

DÉCIMO SEGUNDA: *Imputabilidad: Se acuerda expresamente que la suma de dinero recibida en virtud de la presente transacción por el trabajador, es imputable y compensable con cualquier suma de dinero que tuviera o deba reconocerle la compañía TRADESERVICE.*

DECIMO TERCERA. - *Las partes acuerdan de manera expresa que los términos de este acuerdo son confidenciales y solo serán divulgados de ser necesario como prueba o mediante requerimiento Judicial, así las cosas el EXTRABAJADOR se abstendrá de divulgar a otros trabajadores o miembros del EXEMPLEADOR y de la empresa usuaria los términos y alcances económicos del presente acuerdo. PARÁGRAFO. - EL EXTRABAJADOR entiende plenamente que un incumplimiento de cualquiera de los acuerdos contenidos en el presente documento resultará en daño irreparable y continuo a la usuaria para el cual no habrá un recurso adecuado en la ley. En consecuencia, la usuaria podrá perseguir cualquiera de las alternativas descritas en este documento simultáneamente o consecutivamente en cualquier orden en cuanto a cualquier incumplimiento o violación, adelantando las acciones legales permitidas.*

DÉCIMO CUARTA: *El trabajador declara que antes de la firma de este documento, conoció que lo pactado en la presente transacción, hace tránsito a Cosa Juzgada de conformidad con lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; que significa, sin ser una definición limitante, a que si las partes llegaron a un acuerdo transaccional, no pueden acudir a ninguna otra instancia judicial para reclamar los concepto o derechos acá transados, por cuanto la controversia quedó resuelta con el presente contrato, y que además, en caso de incumplimiento de las cláusulas acá pactadas este documento presta mérito ejecutivo de conformidad con la ley.*

DÉCIMO QUINTA*: Esta transacción se rige por lo previsto en el título XXXIX del libro 40, del título 39 del Código Civil Colombiano y en el artículo 15 del Código Sustantivo de Trabajo. El presente acuerdo presta merito ejecutivo en los términos del art. 422 del Código General de proceso.*

Para constancia y en señal de aceptación de quienes aquí intervienen, se firma en Bogotá, el 25/09/2019, en dos originales del mismo tenor."

Pues bien, de entrada y como lo determinó el fallador de instancia, a juicio de la Sala se puede colegir que dentro del presente asunto goza de prosperidad la excepción previa de cosa juzgada formulada por la demandada, en tanto, se cumplen los requisitos para su prosperidad como pasa a exponerse.

En primer lugar, como se desprende del acuerdo transaccional, el mismo fue suscrito entre el Representante Legal de la encartada TRADESERVICE GROUP INC SUCRUSAL COLOMBIA y el aquí demandante señor JUAN PABLO DÍAZ PINZÓN, tópico por el que se cumple con uno de los requisitos de la configuración de la cosa juzgada, como lo es la identidad de partes o *eaedem personae*.

De otra parte, recalca la Sala que el *petitum* incoado por el demandante se circunscribe a que se ordene la nulidad del despido por no reunirse los requisitos legales y jurisprudenciales, para en seguida, se disponga la orden de reintegro a las actividades que venía desempeñando o, en su defecto, se continúe con las recomendaciones médicas que ordenó el médico tratante.

En mismo sentido, se ordene el pago de seguridad social desde el momento del despido a din de que se pueda continuar con el correspondiente tratamiento y la indemnización dispuesta en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pretensiones que se soportan en términos generales con ocasión de un accidente de tránsito sucedido el 5 de septiembre de 2018 al finalizar su jornada laboral, lo que le causó afectaciones tales como Trastorno Depresivo Recurrente, Episodio Moderado Presente (F331), con medición de Clonazepam y Trazodona, Trastorno de Ansiedad y Depresión, junto con Episodio Depresivo Grave, sin Síntomas Psicóticos.

Por tal razón, según se desprende del acuerdo transaccional quedó plenamente acordado que lo que allí se pactó para el finiquito laboral gravitó en torno a derechos de carácter inciertos e indiscutibles; tanto así, que se consignó en las cláusulas tercera y octava que se transaría la naturaleza salarial o no de todo tipo de bonificaciones, beneficios, auxilios extralegales, reclamaciones relacionadas con indemnizaciones y/o bonificaciones por retiro y eventuales acciones de reintegro, situaciones que por demás se acompasan con las pretensiones incoadas por el demandante, de allí que se pueda colegir la configuración del segundo requisito de la cosa juzgada, que es una *causa petendi*.

Bajo esta égida, también se encuentra constituido el tercer requisito de la cosa juzgada como lo es la *identidad de objeto*, pues como se hizo hincapié, lo pretendido por el demandante gira en torno a aspectos derivados del reintegro a razón de las deficiencias de salud argüidas, las cuales conocía plenamente la encartada y que fueron plasmadas dentro del acuerdo transaccional.

Al unísono, nótese que, en materia laboral los artículos 14 y 15 del C.S.T. otorgan validez a la transacción que celebran las partes del contrato de trabajo siempre y cuando no desconozcan derechos *ciertos e indiscutibles* del trabajador.

Un derecho es cierto e indiscutible cuando no hay duda alguna del sustento normativo que lo genera, ni de la ocurrencia de los hechos o supuestos fácticos que la norma contempla para que ese derecho se pueda causar, como lo ocurrido en el asunto de marras, en la medida que según se especificó dentro del acuerdo transaccional objeto de estudio, quedó plenamente consignado que las partes quedaban a paz y salvo por cualquier derecho mínimo e irrenunciable, incluso que con ocasión al finiquito de común acuerdo, el empleador otorgaría a favor del actor a parte de sus acreencias laborales y por mera liberalidad la suma de $14.495.000, sin que en lo sucesivo el trabajador pudiese hacer uso del aparato judicial para impetrar acciones tendientes al reclamo de pagos a razón de indemnizaciones o reintegro.

Ahora bien, de lo que se ausculta en la presentación de la demanda, lo que persigue el demandante es que con ocasión de su estado de salud ante los padecimientos aludidos en un accidente de tránsito el 5 de septiembre de 2018 al finalizar su jornada laboral, se configuraron patologías tales como Trastorno Depresivo Recurrente, Episodio Moderado Presente (F331), con medición de Clonazepam y Trazodona, Trastorno de Ansiedad y Depresión, junto con Episodio Depresivo Grave, sin Síntomas Psicóticos, de allí que deban prosperar sus súplicas. Al respecto, en tratándose de celebraciones de acuerdos transaccionales cuando de por medio existan aspectos derivados de las deficiencias de salud por parte del trabajador, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3144-2021, Radicación No. 83956 del 9 de junio de 2021, consagró que la figura de estabilidad laboral ante el fuero de salud puede entenderse válida cuando el trabajador consiente esa voluntad dentro del acuerdo tranzado, toda vez que tal figura no se entiende como un derecho absoluto para la permanencia en un puesto de trabajo, así lo asentó el Órgano de cierre:

> *"Respecto al primer punto, para la Corte no es de recibo el argumento que expone la censura en cuanto a que el Tribunal incurrió en un desatino respecto a la aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 porque no consideró que la protección que ella consagra también opera para los*

casos de terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, por las razones que se explican a continuación.

El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo prevé varias formas de terminación del contrato de trabajo, sin embargo, la garantía del artículo 26 de la Ley 361 en comento solo opera para los casos de despido por razones de discapacidad, es decir, que se trate de la finalización del vínculo laboral por razones discriminatorias. Precisamente, en la sentencia CSJ SL1360-2018 la Corporación indicó:

En esta dirección, la disposición que protege al trabajador con discapacidad en la fase de la extinción del vínculo laboral tiene la finalidad de salvaguardar su estabilidad frente a comportamientos discriminatorios, léase a aquellos que tienen como propósito o efecto su exclusión del empleo fundado en su deficiencia física, sensorial o mental. Esto, en oposición, significa que las decisiones motivadas en un principio de razón objetiva son legítimas en orden a dar por concluida la relación de trabajo.

Lo que atrás se afirma deriva del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues, claramente, en ese precepto no se prohíbe el despido del trabajador en situación de discapacidad, lo que se sanciona es que tal acto esté precedido de un criterio discriminatorio. Nótese que allí se dispone que «ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado ***por razón de su limitación****», lo que, contrario sensu, quiere decir que si el motivo no es su estado biológico, fisiológico o psíquico, el resguardo no opera.*

Lo anterior significa que la invocación de una justa causa legal excluye, de suyo, que la ruptura del vínculo laboral esté basada en el prejuicio de la discapacidad del trabajador. Aquí, a criterio de la Sala no es obligatorio acudir al inspector del trabajo, pues, se repite, quien alega una justa causa de despido enerva la presunción discriminatoria; es decir, se soporta en una razón objetiva."

Más adelante se dijo:

"Y en este caso en particular, como se explicó al analizar la acusación fáctica, no se acreditó en el proceso que hubo coacción por parte de la empresa al accionante para que firmara el acuerdo transaccional que finalizó el vínculo laboral. ***Además, este no desconoció derechos mínimos que afectaren su validez porque el trabajador puede válidamente consentir una terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo así goce de la prerrogativa de estabilidad laboral reforzada, pues esta no concede un derecho absoluto a permanecer***

en un puesto de trabajo ni implica que una relación laboral no se pueda terminar.*"* Subrayado por la Sala.

Es por lo que la Sala advierte claramente que la transacción que suscribieron las partes hizo tránsito cosa juzgada, ya que confrontado el caudal probatorio que reposa acreditado por la parte demandante, en consonancia con el recurso de apelación interpuesto cuando advierte la notoria afectación en su salud en lo que respecta a su padecimiento no es físico sino psiquiátrico, pregona este cuerpo colegiado no ser acertado su argumento, como quiera que, según se registra de la consulta emitida por la Clínica de Nuestra Señora de la Paz, el actor tuvo como fecha de ingreso el 16 de septiembre de 2019, esto es, 9 días anteriores a la celebración del acuerdo transaccional, donde se consignó que su padecimiento obedecía a un Trastorno de Ansiedad y Depresión – Episodio Depresivo **sin Síntomas Psicóticos** (Fls. 17 a 18 – PDF 02 PRUEBA), lo que significa que esa alteración de carácter psicológica deba ser atendida como un aspecto suficiente para alterar su capacidad de juicio cuando adoptó la decisión de acordar el finiquito laboral con el empleador a través de un acuerdo de transacción, así lo indicó la Corte en la referida sentencia SL3144-2021:

> *"Ahora, pese a la orientación fáctica del cargo, la Sala considera oportuno señalar que conforme a la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de esta Corporación, no cualquier alteración sicológica afecta la facultad negocial de la persona, sino que esta debe tener la entidad suficiente para alterar su capacidad de juicio y además estar debidamente probada con los medios idóneos. Precisamente, en la sentencia CSJ SC4751-2018 esa Sala precisó:*
>
> *El artículo 1061 del Código Civil, incluye como inhábiles para testar, entre otros, a quien se encontrare bajo interdicción por causa de demencia (ordinal 2º); y al que para entonces no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa (ordinal 3º). La nulidad igualmente se predica de los púberes y de los interdictos por disipación, porque no obstante, ser incapaces para celebrar los demás actos o negocios jurídicos en general (artículo 1504, ibídem), la ley no les restringe la posibilidad de disponer de sus bienes para después de sus días.*

La normatividad, como se observa, consagra dos presunciones, una de derecho y otra de naturaleza legal. La primera, respecto de la incapacidad absoluta del declarado interdicto, no admite prueba en contrario; y la segunda, asociada con la capacidad general de ejercicio, permite desvirtuarla, demostrando fehacientemente la perturbación.

Con relación a esto último, no se trata de acreditar cualquier discapacidad de juicio, sino establecer si la afección en causa alegada, dada su gravedad, tenía la virtud de suprimir la libre autodeterminación de quien la sufría. Tratándose de desórdenes psíquicos, al decir de la Corte, porque "(…) "no cualquier dolencia mental comporta necesariamente la incapacidad de quien la padece (…)"[2] (subrayas de la Sala)

Para el efecto, tiene sentado la Sala, "(…) [no] basta la duda, sino como en toda sentencia condenatoria, se requiere la plena prueba (…)"[3]. Siguiendo el mismo precedente, "(…) deberá acreditarse en forma plena que dicha persona a la sazón no estaba en su sano juicio porque padecía una enfermedad mental que no le permitía conocer y medir debida o razonablemente las consecuencias de su acto".

De consiguiente, para contrarrestar los efectos jurídicos de un acto o contrato, respecto de los cuales se presume la capacidad de ejercicio de las personas involucradas, la actividad probatoria del impugnante debe demostrar plenamente, tratándose para entonces de una discapacidad mental, la anomalía psíquica y su influencia en la determinación de la voluntad."

Es así como a la luz del artículo 1061 del Código Civil, el actor no probó una perturbación en su capacidad de ejercicio, máxime si se tiene en cuenta que retomando la consulta emitida por la Clínica de Nuestra Señora de la Paz, el señor JUAN PABLO DÍAZ PINZÓN allí consignó una mejoría y negó ideas de suicidio, alucinaciones y cambios de comportamientos, lo que sopesa más aún una falta trascendental en su psiquis que refutaran el acuerdo de transacción celebrado, lo que conlleva a que la declaratoria de la excepción previa de cosa juzgada decidida por el fallador de instancia sea confirmada en su integridad.

COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante como quiera que el recurso de apelación no fue despachado de manera favorable.

[2] CSJ. Civil. Sentencia de 16 de julio de 1985, CLXXX-116.
[3] CSJ. Civil. Sentencia 168 de 13 de julio de 2005, expediente 09882, con cita de doctrina anterior.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el auto proferido el 30 de septiembre de 2022 por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, dentro de la atapa de excepciones previas llevada a cabo en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., a través del cual se resolvió el medio exceptivo de cosa juzgada.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $500.000.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **37 2020 00397 01**
Demandante:	FABIO ALBERTO CASTILLO ÁVILA y CENEIDA ARIAS CARDONA, actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos ERIK SANATIAGO CASTILLO ARIAS y DIANA VAKENTINA CASTILLO ARIAS
Demandado:	GENERAL MOTORS – COLMOTORES S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

A U T O:

Sería del caso entrar a efectuar pronunciamiento con relación al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la decisión proferida el 24 de agosto de 2021 por el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá, dentro de la etapa de decisión de decreto de pruebas de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., mediante el cual se decretaron pruebas atinentes a un dictamen pericial y un testimonio, de no ser porque habrá de rechazarse el recurso como pasa a exponerse.

I.- ANTECEDENTES:

FABIO ALBERTO CASTILLO ÁVILA y CENEIDA ARIAS CARDONA, actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos ERIK SANATIAGO CASTILLO ARIAS y DIANA VAKENTINA CASTILLO ARIAS, promovieron

demanda ordinaria laboral en contra de GENERAL MOTORS – COLMOTORES S.A.

Lo anterior, a fin de declararse que entre FABIO ALBERTO CASTILLO ÁVILA y la encartada existe un contrato de trabajo con fecha el 26 de febrero de 2014 y que se encuentra vigente, así como se encuentra cobijado por la estabilidad laboral reforzada.

Que la demandada GENERAL MOTORS – COLMOTORES S.A. despidió sin justa causa al señor FABIO ALBERTO CASTILLO ÁVILA, conociendo que padecía enfermedades de origen laboral sin mediar autorización ante el Ministerio del Trabajo.

Por consiguiente, se le condene a la encartada GENERAL MOTORS – COLMOTORES S.A. reintegrar al señor FABIO ALBERTO CASTILLO ÁVILA a cargo que venía desempeñando u otro de similar o mejor categoría y remuneración, por haber sido objeto de la terminación de su contrato de trabajo sin justa causa encontrándose cobijado por la garantía de la estabilidad laboral reforzada.

Que se le condene al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos legales y extralegales dejados de percibir desde el día de su despido que lo fue que lo fue el 5 de septiembre de 2017 y hasta el día en que se efectivice el reintegro, indemnización de que trata la Ley 361 de 1997, indemnización integral de perjuicios percibidos por el señor FABIO ALBERTO CASTILLO ÁVILA y su núcleo familiar, sanción por la no consignación de las cesantías, pago de intereses, lo que resulte probado de manera *ultra y extra petita* y costas procesales.

A razón de lo anterior, el proceso correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá, quien en proveído calendado el 15 de diciembre de 2020 admitió la demanda.

Por ello, GENERAL MOTORS – COLMOTORES S.A. contestó la demanda manifestando que al demandante se le dio por terminado el contrato de trabajo el 5 de septiembre de 2017, de allí que le hubiese cancelado indemnización por despido sin justa causa por valor de $33.212.800.

Por otra parte, adujo que no existe prueba que acredite que el señor FABIO ALBERTO CASTILLA ÁVILA es beneficiario del fuero de estabilidad laboral reforzada; por el contrario, se observa que el actor durante la vigencia de la relación laboral siempre estuvo apto para desarrollar sus funciones, sin presentar restricción médica alguna.

Formuló como medios exceptivos los denominados inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido, falta de causa de título y causa en el demandante, pago, compensación, enriquecimiento sin causa, buena fe, prescripción, alcance de la Ley 361 de 1997, inexistencia del nexo causal entre la terminación del contrato de trabajo y el estado de salud del actor, improcedencia e imposibilidad del reintegro y la genérica.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

El Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá en decisión del 24 de agosto de 2021, dentro de la etapa de decreto de pruebas de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., refirió que se solicitó la prueba de dictamen pericial, documento que carece de los requisitos legales contemplados en el artículo 226 del C.G.P., al no haberse presentado los requisitos de idoneidad por parte del perito para la práctica de la experticia; sin embargo, en aras de preservar la justicia material conforme lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política, decretó la prueba por la pertinencia que tiene para la definición del derecho sustancial.

De otro lado, adujo que, por solicitud elevada por la parte demandante antes de la diligencia, aceptó la sustitución de la prueba testimonial del señor JHON RÍOS.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

La parte demandada apeló lo referente a que el operador de instancia hubiese incluido una nueva prueba testimonial en términos de una sustitución de testigos, más exactamente el testimonio de JHON RÍOS, en el sentido que la parte demandante trajo un testigo que no fue solicitado en su momento con el escrito del líbelo demandatorio, como tampoco en el escritorio mediante el cual se subsanó la demanda, razón por la cual es una prueba extemporánea sin que deba ser decretada, máxime si se tiene en cuenta que la norma procesal laboral no contempla una sustitución de testigos.

Por otra parte, solicita se replantee el auto de decreto de pruebas en lo que atañe el dictamen pericial al cual se accedió, como quiera que el artículo 226 del C.G.P. es claro en indicar cuáles son las etapas procesales en que las partes podrán poner a disposición del Despacho un dictamen pericial.

Por tal razón, si bien en principio la parte demandante allegó el dictamen con el escrito de demanda, el mismo debe contemplar unos requisitos claramente establecidos en la norma y que fueron omitidos, más aún que no puede olvidarse que los entes facultados para determinar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral son en primera oportunidad las EPS o en su defecto la ARL, siendo que lo que aquí se presenta es la expedición de un documento emitido por un tercero que no está facultado para tal fin, prueba que por demás resulta inconducente e impertinente.

IV.- CONSIDERACIONES:

Revisado el expediente la Sala encuentra que la providencia recurrida no es apelable, pues en materia laboral solamente son susceptibles de este recurso las decisiones que enlista el artículo 65 C.P.T. y de la S.S., modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001, entre las cuales no se encuentra el auto que decreta una prueba y dispone lo pertinente para su práctica, sino aquel que la *rechaza*.

Por tal razón, resulta improcedente analizar una situación de carácter procesal alegada por el extremo accionado en lo atinente al decreto de las pruebas determinadas por el operador de instancia respecto de la parte demandante, pues de una parte, al tenor literal normativo las pruebas objeto de decreto no fueron rechazadas en su contra y, por otra, se tratan de pruebas decretadas precisamente a favor de los sujetos actores, de allí que resulte improcedente el recurso de apelación.

Por último, al resultar improcedente el recurso de apelación formulado por la parte demandada, habrá de declararse sin valor ni efecto el auto adiado el 17 de febrero de 2013, a través del cual fue admitido el mismo.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, respecto de la decisión que se decretaron pruebas atinentes a un dictamen pericial y un testimonio, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: ORDENAR la devolución del proceso con destino al Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá.

TERCERO: DECLARAR sin valor ni efecto el auto calendado el 17 de febrero de 2023.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **37 2021 00325 01**
Demandante:	DORALBA CASTRO HERNÁNDEZ
Demandados:	COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

SENTENCIA:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada COLPENSIONES, en contra de la sentencia proferida el 20 de febrero de 2023 por el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá.

Igualmente, el presente proceso se estudiará en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del C.P.T. y de la S.S., ello por cuanto la decisión adoptada en primer grado fue adversa a sus intereses.

I-. ANTECEDENTES:

1.1 DE LA DEMANDA:

La señora DORALBA CASTRO HERNÁNDEZ promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES y PORVENIR S.A., con el fin que se declare la anulación por ineficacia de la afiliación y del traslado que realizó al régimen de ahorro individual con solidaridad ante la omisión de PORVENIR S.A. cumplir con su deber de información.

Como consecuencia de tal declaración, solicita se ordene su traslado y afiliación al régimen de prima media con prestación definida que administra COLPENSIONES, y se condene a PORVENIR S.A. a devolver a esa

administradora todos los dineros que recibió con motivo de su afiliación por concepto de cotizaciones y bonos pensionales con todos los rendimientos que se hubieren causado según el artículo 1746 del Código Civil, los gastos de administración y cualquier otro concepto con cargo a su propio patrimonio; asimismo, que en caso de haberse otorgado pensión por parte del fondo, siga pagando la prestación hasta tanto sean trasladados todos los recursos a COLPENSIONES y sea incluida en nómina de pensionados. Por último, pretende se condene en costas y agencias en derecho, más lo *ultra y extra petita*.

1.2 SUPUESTO FÁCTICO:

Como fundamento de sus pretensiones, señaló que se afilió al sistema de seguridad social en pensiones a partir del 19 de junio de 1996, conforme consta con la historia laboral emitida por COLPENSIONES y que se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de PORVENIR S.A. el 31 de enero de 2000.

Enfatizó que el fondo de pensiones al momento de la afiliación y traslado solo se limitó a llenar un formato preestablecido sin entregarle información completa, veraz, adecuada, suficiente y cierta respecto a las prestaciones económicas y beneficios que obtendría en el régimen de ahorro individual con solidaridad versus las consecuencias negativas de abandonar el régimen en el cual se encontraba afiliada y las implicaciones que ello le conllevaría sobre sus derechos pensionales, menos aún le hizo saber del derecho de retracto que le asistía.

Además no le entregó proyecciones sobre su escenario pensional en ambos regímenes, ni le informó las condiciones y características para alcanzar su pensión en ese régimen, por el contrario, le indicaron que en el RAIS se podía pensionar de manera anticipada, que la mesada sería superior, que tendría rendimientos y que el ISS iba a desaparecer, lo que ponía en riesgo sus aportes a pensión.

Así mismo, señaló que solicitó a las encartadas la anulación del traslado, petición que fue resuelta de menara negativa; de otra parte, adujo que de haber

continuado cotizando en el régimen de prima media, hubiese obtenido una mesada pensional superior a la que tendría en el régimen de ahorro individual, precisando que en la actualidad efectúa cotizaciones a PORVENIR S.A. (archivo 01).

1.3 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

PORVENIR S.A. contestó con oposición a las pretensiones formuladas en el escrito genitor. Al respecto, señaló que la demandante al momento de suscribir el formulario de afiliación, lo hizo de forma libre, voluntaria e informada, garantizó el derecho de retracto e informó en los diarios de amplia circulación la posibilidad de trasladarse de régimen de acuerdo a lo normado en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003. De otra parte, señaló que el vicio del consentimiento deriva en una nulidad relativa susceptible de saneamiento mediante ratificación, tal como dispone el artículo 1741 del Código Civil, sin embargo, tal vicio no logra probarse en el presente asunto.

Propuso las excepciones de prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y la genérica. (folios 2 a 36 archivo 09).

COLPENSIONES se opuso a la prosperidad de las pretensiones elevadas en su la demanda, arguyendo que no se allega al plenario prueba alguna, que permita invalidar el acto jurídico de afiliación, que libre y espontáneamente realizó la actora al fondo privado, aunado a ello la información que extraña no haber recibido, se encuentra contenida en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, normas que por ser de alcance nacional, impone su conocimiento y obligatorio cumplimiento.

Formuló los medios exceptivos de mérito formuló el de aplicación del precedente establecido en la sentencia SL 373 de 2021, error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, prescripción, presunción de legalidad de los actos administrativos, cobro de lo no debido, buena fe y la innominada o genérica. (folios 126 a 149 archivos 10).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Treinta y Siete del Circuito de Bogotá en sentencia proferida el 20 de febrero de 2023, resolvió:

> *"**PRIMERO: DECLARAR** la ineficacia del acto jurídico de traslado entre regímenes pensionales que efectuó la demandante señora DORALBA CASTRO HERNÁNDEZ del régimen de prima media con prestación definida administrado en su momento por el ISS al régimen del ahorro individual con solidaridad administrado por la AFP PORVENIR, que tuvo como fecha de suscripción el 31 de enero del 2000. En consecuencia, DECLARA válida la afiliación de la demandante al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la decisión.*
>
> ***SEGUNDO: CONDENAR** a la demandada AFP PORVENIR S.A., a transferir a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, todos los valores contenidos en su cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos, lo recaudado por gastos de administración y comisiones, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la decisión.*
>
> ***TERCERO: DECLARAR NO PROBADAS** las excepciones propuestas.*
>
> ***CUARTO: COSTAS** a cargo de PORVENIR S.A., por valor de 1 SMMLV cada una, por secretaría tásense en la etapa procesal pertinente. Sin costas a cargo de COLPENSIONES.*
>
> ***QUINTO:** Se ordena remitir el presente proceso a la Honorable Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, de conformidad con los expuesto en la parte motiva de la decisión."*

Para arribar a dicha conclusión, el operador de primer grado indicó que de acuerdo con lo adoctrinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, existen parámetros para resolver el caso en concreto, siendo el primero de ellos, el atinente al cumplimiento del deber de información desde su primera etapa de nacimiento, el segundo alude a que el formulario de afiliación no demuestra el cumplimiento del deber de información, por lo que se debe acreditar a la luz de otros medios probatorios, el tercero refiere a que está en cabeza de los fondos de pensiones tal deber, pues desde el nacimiento de la Ley 100 de 1993 existe, y el cuarto parámetro alude a que los anteriores se aplican sin restricción alguna, es decir, sin que se

deba tener en cuenta que sean beneficiarios del régimen de transición o hayan cumplidos los requisitos para acceder al derecho pensional.

De esa forma, señaló que yace en el plenario evidenciaba que da cuenta que la actora estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida a través del I.S.S., y que se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad el 31 de enero de 2000, a través de PORVENIR S.A. Añadió que del formulario de afiliación del traslado, si bien se puede extraer que se dio de manera voluntaria, más no puede entenderse que fue debidamente informada para tomar tal decisión, aunado a que de la declaración vertida por la promotora no se puede evidenciar el cumplimiento de tal obligación en cabeza del fondo.

En ese orden de ideas, al no encontrar probado el deber de información, expuso que procedía la ineficacia del traslado que realizo la actora al régimen de ahorro individual con solidaridad, por lo que se ordenaría a PORVENIR devolver a COLPENSIONES todos los dineros que reposen en la cuenta individual de la demandante, junto con los bonos, rendimientos, gastos de administración y comisiones, seguros previsionales y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima. Señaló que no procedía la indexación de tales emolumentos, en tanto, los rendimientos financieros compensan la depreciación de tales emolumentos y se ajusta a principio de la sostenibilidad financiera, declaró no probada la excepción de prescripción y condenó en costas a cargo de PORVENIR S.A.

III. RECURSO DE APELACIÓN Y GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA:

Inconforme con la decisión la parte demandada COLPENSIONES la apeló. Al respecto, sostuvo que el traslado de régimen de pensiones de la actora se llevó a cabo con plena voluntad de ésta, por lo que no procede la declaratoria de la ineficacia y la consecuencial condena de recibir en el régimen que administra, dado que fue una afiliación con plena voluntad plena de lo cual da cuenta el formulario vinculación de 31 de enero de 2000, además ratificó su voluntad de permanecer en el RAIS por más de veinte años.

Agregó que entre 1994 y 2016 no se exigían nada diferente al documento de afiliación donde constaba la plena intención de pertenecer al RAIS, por lo que no se pueden imponer cargas adicionales, además el precedente jurisprudencial que regula la materia surgió desde 2008. Por otra parte, las características, condiciones y modalidades pensionales de los regímenes pensionales se encuentran consagradas en la Ley 100 de 1993, norma de alcance nacional que impone su conocimiento a todos los ciudadanos, aunado a que la motivación de la gestora de trasladarse obedece a la informidad respecto del monto de su mesada pensional, sin que esta haya cumplido con los deberes que como consumidora financiera del sistema general de pensiones le incumben, mostrando al contrario desidia sobre su futuro pensional, pues solo se circunscribió a firmar el formulario como lo relató en el interrogatorio de parte.

Finalmente, señaló que con la declaratoria de la ineficacia del traslado se vulnera el principio de sostenibilidad financiera, por tanto solicita se revoque la sentencia de instancia. De forma subsidiaria, solicita que en caso de confirmarse la sentencia objeto de censura se le absuelva de costas ya que no tuvo injerencia en el acto jurídico que hoy se declara ineficaz y se ordene la indexación de los gastos de administración.

IV. CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Encontrándose reunidos los presupuestos procesales y sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, deberá determinarse si resulta ineficaz el traslado de régimen pensional que realizó la demandante.

c. Del caso en concreto:

Para desatar el problema jurídico planteado, debe memorarse que tanto el artículo 11 del Decreto 692 de 1994, como el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, establecen las características del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, consagrando que la selección de los regímenes allí previstos, es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado, lo que implica a su vez la aceptación de las condiciones propias de este.

Asimismo, se tiene que, para la protección de aquel derecho de libertad de elección de régimen, el legislador previó en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, que como consecuencia de su violación, por parte del empleador o cualquier persona natural o jurídica, además de la imposición de multas por las autoridades del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, según el caso, el que dicha afiliación es ineficaz, acto de manifestación de voluntad que denuncia la accionante le fuera vulnerado al momento del traslado bajo estudio, al ser persuadida de trasladarse del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, sin informarle las consecuencias negativas de ello, por lo cual, de establecerse que en efecto no se verificó una debida asesoría que le permitiera ejercer la libre escogencia del régimen pensional, el traslado quedará sin efecto, según el precitado artículo 271 de la Ley 100 de 1993, tal y como lo estableció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia SL19447-2017, Radicación No. 47125 del 27 de septiembre de 2017.

Es menester acotar que las administradoras se ubican en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la seguridad social, lo que le impone el cumplimiento de las obligaciones a su cargo entre las que se encuentra, valga reiterar, la de la debida información, que debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional, ofreciendo para ello una ilustración completa y comprensible para tomar la decisión de la elección del régimen pensional, pues de no obrar en tal sentido, puede llegar a afectar el derecho irrenunciable de la seguridad social a los afiliados, la que comprende no solo el derecho en sí mismo estimado como su legítima expectativa valorativa.

Por ello, valga recordar que las AFP, como entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera y conforme al numeral 1° del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen. Obligación que se mantuvo con la modificación introducida por el artículo 23 de Ley 795 de 2003 e igualmente, con la Ley 1328 de 2009, respecto del régimen de protección al consumidor financiero.

Ahora bien, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL1688-2019, Radicación No. 68838 del 8 de mayo de 2019, frente a la obligación de brindar información, concluyó que *"Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido".*

En la referida providencia, también se analiza el alcance de la jurisprudencia en torno a la ineficacia del traslado, señalando que *"ni la legislación ni la jurisprudencia tiene establecido que se debe contar con una suerte de expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información. De hecho, la regla jurisprudencial […] es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado. Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las*

particularidades de cada asunto", criterio último que recientemente se estableció como vinculante, entre otras, en la sentencia de tutela STL3199-2020, Radicación T 58288 del 18 de marzo de 2020, en la cual se concluyó que:

> *"[…] las reglas jurisprudenciales sobre ineficacia del traslado no estaban condicionadas a que el afiliado perteneciera al régimen de transición, tuviera un derecho consolidado o una expectativa legítima de pensionarse, pues la Corte ya había señalado que este hecho era irrelevante".*

De igual manera, en la referida providencia, se consignó frente a la carga de la prueba, que:

> *"Esta Corporación en ninguna sentencia ha insinuado o expresado que la carga de la prueba del deber de información, a cargo de los fondos privados de pensiones, pueda relativizarse en función de las particularidades de cada caso o dependiendo de si el demandante es o no beneficiario del régimen de transición. Por el contrario, ha insistido en que pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento".*

En ese orden de ideas, debe acotarse que cuando se alega la nulidad o ineficacia del traslado del régimen pensional, la carga de la prueba de acreditar el cumplimiento del deber de información corresponde al Fondo de Pensiones, independientemente si se tiene una expectativa pensional próxima a consolidarse o si se es o no beneficiario del régimen de transición, hechos estos últimos que resultarían irrelevantes para la aplicación del precedente antes referido, argumentos que dejan sin sustento los argumentos de COLPENSIONES en su impugnación.

Una vez determinado lo anterior, se tiene que en el presente proceso fue aportado el formulario de afiliación que efectuó la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de PORVENIR S.A. el 31 de enero de 2000, el cual se hizo efectivo a partir del 1º de marzo de esa anualidad, según el reporte SIAFP que obra en el plenario. (folios 84 y 86 archivo 09).

Formulario que si bien refiere que la decisión se adoptó de manera libre y voluntaria, no acredita que en efecto se haya suministrado una información oportuna, clara, suficiente y veraz, máxime que, tal como lo reiteró la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de tutela antes referida, *"Desde la sentencia CSJ SL, 09 sep. 2008, rad. 31989, la Sala ha sostenido que la suscripción del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas similares, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento libre de vicios, pero no informado".*

Por otra parte, la demandante DORALBA CASTRO HERNÁNDEZ en el interrogatorio de parte a ella practicado, manifestó que estando al servicio de SANITAS llegaron asesores de PORVENIR S.A., quienes le entregaron el formulario de afiliación el cual ya estaba pre diligenciado y ella solo lo suscribió sin recibir asesoría, lo cual hizo por orden de un jefe quien les dijo que debían ir a firmar el documento, por último adujo que su motivación para trasladarse es una pensión digna.

De lo expuesto, palmario es que no se advierte confesión alguna de parte de la actora sobre el pleno suministro de una debida información, luego, al ser el formulario de afiliación la única prueba relevante que advierta una información de PORVENIR S.A. al momento del traslado de la demandante, según lo ha adoctrinado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es evidente la carencia probatoria de esa encartada para soportar la inversión de la carga de la prueba que le asiste, lo cual por demás guarda plena consonancia con lo dispuesto en el artículo 167 del C.G.P.

Ahora bien, tal como lo consignó la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL3202-2021, Radicación No. 88485 del 14 de julio de 2021, se debe tener en cuenta *"la evolución que ha tenido el deber de información por parte de las Administradoras de pensiones, que resulta útil para comprender, se itera, que desde el comienzo de funcionamiento del Sistema éste existió y que se ha ido refinando, detallando y acrecentando, con el paso del tiempo, según la sucesión normativa que se muestra:*

Etapa acumulativa	**Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información**	**Contenido mínimo y alcance del deber de información**
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa No. 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En ese orden de ideas, no se vislumbra prueba de que se le haya suministrado a la actora para el año 2000, una *"Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales*".

Así las cosas, la Sala concluye que le asiste razón al fallador de instancia al declarar la ineficacia del traslado, dado que PORVENIR S.A., no probó el cumplimiento del deber de información en el momento del traslado de régimen de la promotora.

Ahora bien, frente a la devolución de los gastos de administración, debe memorarse que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL1421-2019, Radicación No. 56174 del 10 de abril de 2019, señaló al respecto:

> *"La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.*
>
> *"Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora esta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C."*

De igual manera, en sentencia SL638-2020, Radicación No. 70050 del 26 de febrero de 2020, refirió:

> *"Respecto a los efectos que produce la ineficacia del traslado de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, encuentra la Sala que estos consisten en que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban con antelación, esto es, como si el traslado no hubiera ocurrido, lo que apareja que COLFONDOS S.A. Deba devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales".*

Es así, que al declararse la ineficacia se tiene como nunca realizado el traslado, por lo que no existe razón para que las AFP no verifiquen la devolución de los gastos de administración que hayan cobrado frente a la administración de los valores, ni los rendimientos financieros, ni las primas de seguros, valores que deberán retornar de manera íntegra a COLPENSIONES pues pertenecen al Sistema de Seguridad Social con la cual se financiará la pensión.

En otro giro, respecto a una posible vulneración del principio de sostenibilidad financiera al declararse la ineficacia del traslado, al cual hace alusión COLPENSIONES en su alzada, debe indicarse que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL3464-2019 radicación 76.284 del 14 de agosto de 2019, señaló sobre el particular:

> *"Sin pasar por alto que los aportes del régimen de prima media con prestación definida van a un fondo público mientras que los del régimen ahorro individual con solidaridad a una cuenta individual, lo cierto es que en uno y otro caso los recursos tienen una destinación específica: el pago de la pensión de vejez. En tal dirección, el literal g) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 subraya que independientemente del régimen pensional al que se esté afiliado, «para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualesquiera de ellos».*
>
> *"Vale destacar que, en este caso, en virtud de la declaratoria de ineficacia del cambio de régimen pensional, el pago de la pensión corre a cargo del fondo común de naturaleza pública administrado por COLPENSIONES, a través del cual se «garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados» con sustento en «los aportes de los afiliados y sus rendimientos» (art. 32 L. 100 de 1993) Esto es, la pensión a cargo del régimen de prima media con prestación definida tiene que estar soportada en las cotizaciones de sus afiliados, las cuales nutren el fondo público y, por tanto, justifican el reconocimiento de la pensión. Sin estas es un despropósito exigir el pago de una pensión, con mayor razón si se tiene la intención de no devolver esos dineros.*
>
> *"Es que para la Sala el reconocimiento de una prestación pensional supone que se cuenta con el capital correspondiente a las cotizaciones con la cual se va a financiar. La pensión es una construcción fruto del trabajo de muchos años de la persona, de manera que su otorgamiento debe estar respaldado con los aportes o cotizaciones sufragadas durante la vida laboral. Al respecto, el literal l) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, dispone que no «podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados»".*

En igual sentir, en sentencia SL 1440 del 2021, se estipuló y dejó sentada la línea jurisprudencial de la siguiente manera:

> *"Ahora, frente al argumento de la demandada, según el cual no hay lugar al traslado de bonos pensionales, cabe advertir que en casos como el presente, en donde procede la ineficacia de la afiliación al RAIS, deben retrotraerse las cosas a su estado anterior, lo cual trae como consecuencia*

que PORVENIR S.A. devuelva los aportes por pensión, junto con sus rendimientos financieros y gastos de administración a COLPENSIONES, aspecto sobre el cual se ha pronunciado la Sala de tiempo atrás, verbigracia, en sentencia CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989.

"Con relación a los efectos de la ineficacia del traslado y a la inconformidad de Protección S.A., de trasladar a COLPENSIONES los gastos de administración, es claro que si las cosas vuelven a su estado anterior la administradora tiene que asumir los deterioros al bien administrado, como los gastos de administración, pues la ineficacia se declara como consecuencia de la conducta de la administradora por omitir brindar la información al afiliado, quien tenía derecho a recibirla, no de forma gratuita, sino con cargo a la comisión de administración de aportes obligatorios y comisiones por buen desempeño que se descuenta de su ahorro, deducción autorizada por el artículo 104 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 53 de la Ley 1328 de 2009 y que permite el literal q) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, al disponer: Los costos de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente Ley.

"En esa línea, esta Sala de casación ha insistido en el traslado de los gastos de administración como efecto de la ineficacia, así se señaló en la sentencia CSJ SL 2877-2020:

"[…] el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

"Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular.

"De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando

las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

"En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a COLPENSIONES de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."

Es así, por lo que no se estima amenazado el principio de sostenibilidad financiera, por cuanto la AFP tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, como cotizaciones, rendimientos, bonos pensionales, comisiones, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, los cuales asumen las cargas del accionante al no haber cotizado en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues dichos montos pertenecen al Sistema General de Seguridad Social con el cual se financiará la pensión, independientemente si se han efectuado en un fondo público o en una cuenta individual.

Con respecto a la prescripción, la sentencia SL1688-2019, Radicación No. 68838 del 8 de mayo de 2019, dispuso lo siguiente: *"la acción de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible […] pues, recuérdese, «la exigibilidad judicial de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, que se desprende de su carácter de derecho inalienable, implica no solo la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción".*

Por lo tanto, se puede colegir del párrafo anterior que la acción de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, lo cual también se predica de la pretensión consecuencial de la devolución de los gastos de administración y los seguros previsionales, en tanto los dineros que se reintegrarán a COLPENSIONES, serán destinados a financiar la pensión.

Finalmente, se tiene que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia SL1481-2022, Radicación No. 88768 del 3 de mayo de 2022, señaló frente a los efectos de la declaratoria de ineficacia:

> *"Por tal razón, se impondrá la devolución a COLPENSIONES de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, no solo de sus rendimientos y comisiones por administración, como lo dispuso la juez de primera instancia, sino también, el reintegro de los valores cobrados por la AFP PORVENIR S. A., a título de aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas y que le corresponderá a la demandada PORVENIR S. A. asumir con cargo a sus propios recursos pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos dineros han debido ingresar al RPM administrado por COLPENSIONES (CSJ SL2877-2020).*
>
> *"De conformidad con lo expuesto, en grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, se modificará y adicionará el numeral segundo de la decisión de primer grado, para imponer a cargo de PORVENIR S. A., que, además de los aportes que reposan en la cuenta de ahorro individual de la actora y sus rendimientos y comisiones por administración, traslade las sumas percibidas a título de aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y primas de los seguros previsionales, cobradas durante el tiempo en que la demandante permaneció en tal administradora.*

De ese modo, y contrario a lo aducido por el fallador de instancia, se revocara la decisión de primer grado en ese sentido y se adicionará el numeral segundo de la sentencia de primer grado en el sentido de ordenar la indexación de los gastos de administración, los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales.

En cuanto a la costas y agencias en derecho, frente a las cuales solicita la recurrente se le absuelva debe, decirse que el artículo 365 del C.G.P., aplicable por remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., establece la imposición de esta figura para la parte que le sea desfavorable la resolución del recurso de apelación. **COSTAS** en esta instancia a cargo de COLPENSIONES.

V. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.,** administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley;

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR el numeral segundo de la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de condenar a PORVENIR S.A. a indexar los gastos de administración, los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales al momento del pago, por las razones que se indican en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primer grado de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo de la recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de $500.000 a favor de la actora, las cuales deberán ser incluidas en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **28 2016 00444 01**
Demandante:	ELIZABETH PINILLA FORERO
Demandado:	AFP PROTECCIÓN S.A.
Tercera *Ad excludendum*:	GLADYS PEDRAZA GINZALEZ
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

AUTO:

Sería del caso procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la tercera *ad excludendum* PEDRAZA GONZÁLEZ, contra la sentencia proferida el 28 de octubre de 2022 por el Juzgado Veintiocho y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá, de no ser por cuanto se configura la nulidad de la sentencia.

I.- DE LA NULIDAD ADVERTIDA:

Verificadas las actuaciones surtidas dentro del presente proceso evidencia el Despacho que el presente proceso gira en torno a establecer si la demandante señora ELIZABETH PINILLA FORERO, es beneficiaria a la devolución de saldos del causante CAMILO ORDÓÑEZ, quien fuera afiliado al RAIS por conducto de PROTECCIÓN S.A.

Para tal efecto, dirigió la demanda en contra de la AFP PROTECCIÓN S.A., y de la señora GLADYS PEDRAZA GONZALES, ello en tanto el 50% de los saldos había sido reconocido a la menor SINDY DAYAN ORDÓÑEZ PEDRAZA, y el 50% fue dejado en suspenso.

Así las cosas, se tiene que respecto del 50% restante, además de quienes fungen como demandante y tercera *ad excludendum*, la menor SINDY DAYAN ORDÓÑEZ PEDRAZA también tiene un interés directo en las resultas del proceso, ello en tanto ya fue reconocida como beneficiaria, y además se trata de una menor de edad, por lo cual se configura litisconsorcio necesario.

Criterio que se acompasa con lo explicado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia entre otros en auto AL765 – 2014 Rad. 42840 del 5 de febrero de 2014, al precisar:

> *«Procede entonces recordar lo adoctrinado por esta Corte respecto de la* ***imposibilidad de resolverse una litis*** *en la que se dispute un* ***derecho de un menor de edad sin la debida integración de la litis con su comparecencia*** *y representación de este. Así, en la sentencia de 15 de febrero de 2011, radicación 34939 al aludir a la 36143 de 31 de agosto de 2010, se dijo:*
>
> *"Del mismo modo, es menester aclarar, que en sentencia reciente que data del 31 de agosto de 2010 radicado 36143, la Corporación sin desconocer el anterior criterio jurisprudencial, precisó que hay* ***eventualidades excepcionales en que no es posible resolver el pleito sin la necesaria comparecencia de un determinado beneficiario, como por ejemplo cuando se trata de un <menor de edad>****, dada su condición especial y la naturaleza del derecho, cuando a este se le afecta o despoja de su porción pensional sin que se le hubiere oído ni permitido ejercer su derecho de defensa por no habérsele vinculado debidamente al proceso, (…).*
>
> *"Lo anterior fue reiterado en la sentencia de 6 de septiembre de 2011, rad. 40942, cuando una madre les disputaba a sus propios hijos un 50% de una pensión, caso similar al actual, en la que se dijo:*
>
> *"Así pues, con base en la facultad otorgada por el artículo 145 del CPC, aplicable al rito del trabajo conforme al también 145 pero del CPTSS, y al reiterarse acá las motivaciones transcritas, ha de declararse la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir, inclusive del auto admisorio de la demanda, para que el a quo proceda a tomar las medidas tuitivas echadas de menos, anteriormente señaladas.*
>
> *"Así las cosas, la omisión expuesta precedentemente lleva a la violación del debido proceso (CN art. 29)»* (Resalta fuera de texto)

Por esta misma línea, la Corte en la sentencia Rad. 40942 de 06 de septiembre de 2011, puntualizó:

> *«En efecto, en esta coyuntura procesal observa la Corporación que el caso traído a los estrados judiciales por parte de la demandante, consiste en que, como a los menores hijos de esta con el causante, el ISS les otorgó el 100% de la pensión de sobrevivientes, generada por la muerte de su progenitor, bajo el argumento de no haber convivido ella con él para la época de la muerte, es por lo que, ella, la madre, a su turno, recurre a la justicia para acreditar que si existía esa vida en común y, con fundamento en esa acreditación, obtener que se le adjudicara el 50% de la prestación radicada totalmente en las cabezas de su prole.*
>
> *"Mas, para ello, debía, insoslayablemente,* ***convocar al proceso tanto al dispensador estatal de la prestación como a los beneficiarios de la misma,*** *sus hijos menores, pues, se trata, nada menos, que de afectarlos en su patrimonio al cercenárseles la mitad de la pensión de sobrevivientes de la que disfrutarán dentro de los parámetros de ley (****mientras sean menores, o tengan calidad de estudiantes o inválidos que dependieran económicamente de su padre),*** *lo que, de lograrse, ha de llevarse a cabo con el pleno respeto a sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa frente a la pretensión de su señora madre, calidad esta y de representante legal de los mismos que, per se, no excluye o impide que se les deba salvaguardar a tales menores aquéllas garantías, o eximirla de tal deber. (…)»* (Resalta fuera de texto)

En igual sentido, en proveído AL2997-2018, Radicación No. 55308 del 17 de julio de 2018, señaló:

> *"Debe destacar la Sala, que además del menor Yonnier Alexander Clavijo Zubieta, como quedó evidenciado,* ***existen otros sujetos con vocación de hijos del causante José Gabriel Clavijo, que si bien no se tiene conocimiento en el plenario de su edad, lo cierto es que podrían también ostentar legitimación de vocación pensional ante la eventualidad de acreditar los requisitos para ser beneficiarios de la prestación de sobrevivientes, por ello, al tomarse los correctivos del caso, se deberá considerar su comparecencia al proceso****.*

Así las cosas, deviene lógico colegir que la hija del causante SINDY DAYAN ORDÓÑEZ PEDRAZA, debió ser convocada al presente juicio, en la medida en que a través de esta figura podrá concurrir a la litis con el ánimo de acceder al derecho en litigio, como explicó la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral en Auto AL-1461 de 2013:

> «***<u>Entonces, la manera adecuada en que pudieron vincularse al proceso, respecto de la ARP Colseguros S.A. y en oposición a Freddy y Katherine Locarno Baloco, era a través de la intervención ad excludendum, pues, además de que es una forma de intervención principal, cada uno de los cuatro hijos, individualmente considerados, tiene el interés legítimo de pretender para sí el derecho pensional controvertido.(…)</u>***
>
> *"Aquí, sin lugar a dudas, en los términos de los artículos 51 y 83 del C.P.C., necesariamente debió integrarse el contradictorio con Greysy y Gustavo Locarno Larios y con Fredy y Katherine Locarno Baloco, porque dada su condición especial de menores, la trascendencia del tema y la naturaleza del derecho, no era posible resolver el pleito sin su comparecencia, respecto de la demandada AFP Porvenir S.A." (Negrillas y subrayado fuera de texto)*

De cara a lo indicado y conforme lo dispuesto en los artículos 16 y 138 del C.G.P, se declarará la nulidad de la sentencia proferida el 28 de octubre de 2022, conservando validez todo lo actuado hasta el momento, a efectos que se proceda a vincular a SINDY DAYAN ORDÓÑEZ PEDRAZA, como Interviniente *Ad Excludendum.* Para ello, se debe designar curador *ad litem*, en tanto sus intereses se excluyen con los de su progenitora, y por ello, no pueden ostentar la misma representación judicial.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD de la sentencia proferida el 28 de octubre de 2022, por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, acorde lo indicado en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: ORDENAR la devolución del expediente al Juzgado de origen, a efectos de que proceda a vincular como Interviniente *Ad Excludendum* a SINDY DAYAN ORDÓÑEZ PEDRAZA. Para ello, se debe designar curador *ad litem*, en

tanto sus intereses se excluyen con los de su progenitora, y por ello, no pueden ostentar la misma representación judicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZALEZ VELASQUEZ
Magistrado
Salvamento de voto

JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR LLANID MAURICIO SÁNCHEZ CHACÓN CONTRA AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTIÓN INTERNANCIONAL (RAD. 01 2019 00230 01).

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado para presentar los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente,

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTIÓN INTERNANCIONAL, contra el auto proferido por el Juzgado 41[1] Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el pasado 30 de noviembre de 2022, por medio del cual declaró NO probadas las excepciones previas de: Inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones y falta de jurisdicción y competencia, bajo las siguientes consideraciones (Archivo 27, récord: 10:13):

> *"Teniendo en cuenta lo anterior, el despacho se pronunciará en los siguientes términos, por cuestión metodológica el despacho en primera medida resolverá la excepción denominada indebida acumulación de pretensiones, inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, frente a ello el despacho considera que en el presente asunto no es viable acceder a dicha excepción, toda vez que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en indicar en decisiones como la 21517 de 2005 o SL 4457 de 2014, SL 5482 del mismo año, SL 911 de 2016 y SL 3246 de 2018 que corresponde al juez definir el objeto del litigio y para no faltar a su deber de administrar justicia está en la obligación de interpretar el libelo inaugural, teniendo en cuenta para ello todos los asuntos y hechos allí planteados, labor interpretativa que se acompasa con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 42 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 145 de la norma adjetiva laboral, en donde se ha dispuesto que son deberes del juez interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto,*

[1] Quien avoco el conocimiento del presente proceso en virtud de la remisión efectuada por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá en los términos del Acuerdo CSJBTA20-109 del 31 de diciembre del 2020 (Archivo 23 expediente digital)

está interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia, por lo que en caso de llegarse al extremo formalismo y tecnicismo jurídico, se puede sacrificar los derechos sustanciales en litigio y en especial el derecho fundamental al acceso a la administración de Justicia, conforme a ello y siguiendo el precedente jurisprudencial citado, considera el suscrito que en este asunto, si bien eventualmente se puede presentar un yerro en la forma como se plantearon la demanda, las pretensiones de la demanda, el suscrito al momento de resolver las mismas determinará cuáles son principales y subsidiarias, por ende, el suscrito declarara no probado el medio exceptivo invocado.

En cuanto al segundo falta de jurisdicción y competencia el despacho considera que la misma tampoco está llamada a prosperar, toda vez que la parte pasiva sustenta su inconformismo con el numeral quinto del artículo segundo de la norma adjetiva laboral, en el cual indica lo siguiente, consagra que la jurisdicción ordinaria laboral y de la Seguridad Social conoce de la ejecución de obligaciones cuando de la relación de trabajo y del sistema de Seguridad Social integral que no correspondan a otra autoridad, frente a ello considera el despacho que aquí no se presenta esta circunstancia, pues recordemos que en ningún proceso, perdón en este proceso no se está tratando la ejecución de alguna obligación a cargo de la DIAN, aquí lo que se discute inicialmente es la ineficacia o eventual ineficacia de un acuerdo transaccional efectuado por los sujetos procesales y como consecuencia de ello el reconocimiento y pago de unos conceptos, frente a ello el despacho debe indicar que este es un conflicto meramente jurídico que se origina o surge directamente de la existencia del contrato de trabajo que fue aceptado por los sujetos procesales, por ende considera el despacho en primera medida que al tratarse de un proceso ordinario laboral en donde se discute la validez de un acta de transacción efectuada por las partes y que en el evento de salir próspera sería viable retornar unos valores o unos dineros en los que se encuentran unos pagos efectuados a la DIAN, esta circunstancia en ningún momento le resta competencia al suscrito, en ningún momento le quita las facultades que tiene la dirección de impuestos y aduanas nacionales, pues lo que se está discutiendo es si ese valor se debió o no descontar eventualmente del acta de transacción, por ende el despacho considera que este asunto es de naturaleza laboral y en los términos del artículo segundo numeral primero del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social el suscrito es competente, así las cosas el despacho de igual manera declarara no probada la excepción invocada por la parte pasiva."

Frente a la anterior decisión el apoderado de la encartada interpuso recurso de apelación en los siguientes términos (Archivo 27, récord: 10:13):

"Solicito al Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá se sirva revocar la decisión proferida por el juzgado en la medida que declaró no probadas las excepciones propuestas por mi representada respecto a la inepta demanda y la falta de jurisdicción y competencia.

Frente a la excepción de inepta demanda, basta con indicar que más allá de la interpretación que le pueda dar el juez a una demanda, existe una técnica que debe ser establecida dentro de los lineamientos establecidos por el legislador, no es capricho del legislador establecer la situación de presentar pretensiones que no se excluyan entre sí como lo que acá se está presentando, más allá de la interpretación que le pueda dar el Juez y no se esté negando con ello el acceso a la justicia a la parte actora, pues basta con revisar las pretensiones de la misma demanda en las que solicita un reintegro y de manera concomitante una moratoria que es totalmente improcedente, en ese sentido consideró que en este primer aspecto debe declararse probada la excepción propuesta, en la medida que la ritualidad establecida en el Código Procesal del Trabajo debe estar por encima de las interpretaciones que se le puedan dar a una demanda, en este sentido más allá de establecer si se pueden revisar de manera principal o subsidiaria, debieron ser

propuestas por la parte actora en ese sentido, situación que no puede ser subsanado por el juez al momento de realizar la verificación de esta demanda en esta instancia en ese sentido solicitó entonces que se revoque este primer aspecto y en segundo lugar.

Respecto a la falta de jurisdicción y competencia se difiere o digamos se establece que no está de acuerdo la decisión tomada por el juzgador por el juez de primera instancia, en la manera de establecer de que la situación de un conflicto derivado de una relación laboral no tiene injerencia en los dineros que pudo haber cancelado el demandante frente a la DIAN, claro que lo tienen acá esta situación más allá de establecer si se le deben devolver esos dineros o no, es una situación que ya fue cancelado a la DIAN, Por tanto mi representada no puede entrar a establecer o responder por unos dineros que fueron cancelados en virtud de un impuesto que es obligación de todo ciudadano establecerlo y cancelarlo, acá la situación es concreta y establecida más allá de que si se establece o no la legalidad del acuerdo, es ya los dineros que se dieron por este concepto y en ese sentido cualquier suma de dinero que se le haya cancelado al aquí demandante tendrá que ser también revisado por la DIAN, en el sentido de que si no se establece que no pertenece a una situación de tipo salarial sino otro tipo del acuerdo allegado, se tiene que revisar también la misma procedencia de estos dineros para la DIAN, en la medida que son dineros que ya le pertenecen al estado y por ende mi representada no podría entrar a subsanar o a devolver unos dineros de los cuales en ningún momento tuvo apropiación al respecto, esos dineros pertenecen al estado y por ende cualquier pretensión dirigida o encaminada a esa situación debe ser dirigida directamente a la Dirección de Impuestos, como lo establece el mismo ordenamiento jurídico y que en ese sentido como quiera que esos dineros no fueron apropiados por American Pipe al momento de hacer el pago, ya son parte de la Dirección de Impuestos y esa situación deberá ser solicitada por el aquí demandante por medio de una situación de compensación frente a su declaración de renta o demás, pero no es de la órbita del Juez Laboral, porque ya escapa de ese escenario lo aquí planteado por la parte actora respecto de impuestos cancelados, entonces en ese sentido, solicitó entonces Honorable Tribunal se sirva revocar la decisión y se declaren probadas las excepciones propuestas o por lo menos se tenga parcialmente la decisión frente a cualquiera de las dos propuestas, en esos términos presentó el recurso de apelación, solicitando al señor juez se conceda el mismo, muchas gracias.

Para resolver se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De conformidad con el numeral tercero del artículo 65 del C. P. del T. y la S.S. el auto mediante el cual se *"…decida sobre excepciones previas"* es susceptible del recurso de apelación y en consecuencia procede la Sala a resolver el punto concreto de inconformidad, en los términos del artículo 66A del estatuto procesal laboral.

En esa dirección, como quedó reseñado en precedencia, el recurso de apelación se encuentra encaminado a la revocatoria de la decisión que declaró en primer lugar no probada la excepción previa de ***INEPTITUD DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES***, debiendo advertir desde ahora esta

Corporación, en el presente asunto no se presenta la indebida formulación de las pretensiones aducida por la enjuiciada, por las razones que se pasan a exponer.

El artículo 25 del C.P.L., de la forma y requisitos de la demanda señala en su numeral 6:

> *"…6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado"*

En este orden de ideas y atendiendo lo expresado en la apelación, se tiene que el actor en la demanda solicita en el acápite de pretensiones (Págs. 3 y 4 Archivo 3 expediente digital):

PRETENSIONES

1. Sírvase Señor Juez declarar que, entre mi mandante **LLANID MURICIO SANCHEZ CHACON** y la demandada **AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNACIONAL** se firmó un acuerdo transaccional con vicios de consentimiento de acuerdo a la resolución 005838 del 2018.

2. Como consecuencia de lo anterior declaración se condene a la demandada **AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNACIONAL** al reintegro del señor **LLANID MAURICIO SANCHEZ CHACON** conforme a los hechos y pruebas presentadas en sustentación de esta pretensión.

3. En virtud de lo anterior se condene a la demandada **AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNACIONAL** al pago de las obligaciones adquiridas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por una suma 45.626.000 (CUARENTA Y CINCO MILLONES SISCIENTOS VENTI SEIS MIL PESOS M/CTE) teniendo en cuenta que la suma transigida se declaró ante el ente regulador de forma errada, afectando la declaración de renta del trabajador correspondiente al año 2017, y por la cual adquirieron obligaciones con terceros; especificando los valores correspondientes de la siguiente forma.

3.1 Que se condene al pago de $20.000.000 correspondiente al préstamo personal realizado por la señora Blanca Cecilia Gordillo Urrego, soportada con cheque de gerencia y letra de cambio.

3.2 Que se condene al pago de $19.626.000 correspondiente al préstamo bancario con la entidad Banco Falabella.

3.3 Que se condene al pago de $6.000.000 correspondiente al préstamo bancario con la entidad Banco Davivienda.

4. Que se condene a la demandada al pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la terminación, pues a la luz de la resolución 005838 del 2018 del Ministerio de Trabajo fue una transacción ilegal; a la fecha se adeuda un total de

SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE $69.277.296.

5. Que se condene a la demandada al pago de las cotizaciones faltantes al fondo de pensión respectivo teniendo en cuanta el IBC real correspondiente a los años que le faltan para conseguir su pensión y de esta forma garantizar su mínimo vital y su estabilidad laboral reforzada.

6. Que se condene a la demandada a pagar a mi mandante, la indemnización moratoria como consecuencia del no pago de las prestaciones sociales debidas y enunciadas en las peticiones que anteceden, al tenor de lo normado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, desde el día en que se dio por terminado el contrato de trabajo hasta cuando se haga efectivamente el pago de los derechos laborales debidos, a razón de un día de trabajo por un día de retardo.

7. Que se condene a la demandada a pagar las costas del proceso, incluyendo agencias en derecho.

8. Que se condene a la demandada a todo lo que pueda resultar ultra y extrapetita de los hechos discutidos y probados en el presente juicio.

Conforme lo anterior, y como ya se anunció a juicio de ésta Sala de decisión no existe la configuración de la excepción alegada, pues si bien la redacción de los anhelos de la parte actora no es un modelo a seguir, se tiene que lo que realmente está solicitando el actor de manera principal es el REINTEGRO derivado de un acuerdo transaccional que según lo manifiesta el demandante tuvo vicios en el consentimiento, resultando por ende acertado lo expuesto por el Juez de primer grado al resolver la excepción previa, en cuanto a que respecto de las citadas pretensiones -REINTEGRO e INDEMNIZACIÓN MORATORIA- será él quien determine cual es principal y cual subsidiaria, lo cual para esta Sala de decisión no luce errado ya que, con miras a comprender los hechos y las pretensiones formuladas, el Juez debe procurar una interpretación armónica de la demanda, pues quedarse con la sola noción que ofrece la lectura fraccionada de sus diferentes apartes, conlleva un excesivo rigorismo formal que sacrifica el derecho sustancial, en claro desconocimiento de los mandatos constitucionales consagrados en el artículo 228 de la Constitución Política.

Así, si del contexto de la demanda puede inferirse con claridad lo que la parte pretende, no hay lugar a ignorar la inferencia, so pretexto de reclamar claridad y precisión. Al respecto ha señalado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

> *"Para no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal, al juez corresponde interpretar la demanda, labor que ha de realizar 'mirándola en su conjunto, en*

> *forma razonada y lógica, como quiera que la intención del actor muchas veces no está contenida en el capítulo de las súplicas, sino también en los presupuestos de hecho y de derecho por él referidos a lo largo de la pieza fundamental. Basta que la intención aparezca claramente del libelo, ya de manera expresa, ora por una interpretación lógica basada en todo el conjunto del mismo', pues 'la torpe expresión de las ideas per se no puede ser motivo de rechazo del derecho suplicado cuando éste alcanza a percibirse en su intención y en la exposición que de los presupuestos fácticos hace el demandante en su demanda'"*[2].

Adicionalmente, téngase en cuenta la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia SL 5352 del 2019 indicó que "*que al sentenciador le compete descender al caso, para indagar, cuál sería la pretensión que la parte actora desearía que de manera preferente se le resolviera, en este caso el reintegro antes que las demás peticiones y, en el evento de que no prosperara, abordar la siguiente, en procura de dilucidar la problemática jurídica propuesta*." precisando dicha Corporación que *"debido a que las dos pretensiones contenidas en la demanda inicial son excluyentes entre si -reintegro e indemnización por despido injusto-, reitera la Sala que el juez unipersonal debía realizar una interpretación razonable de dicho escrito, para de esta manera* ***entender que el reintegro constituía la pretensión principal y la indemnización por despido injusto, la subsidiaria****, labor que soslayó y que conlleva la revocatoria de la decisión."* (Negrillas propias de la Sala)

En consecuencia, las pretensiones incoadas por el accionante se sujetan a lo establecido en el artículo 25 A del C.P.L., confirmándose la decisión de primer grado en este aspecto.

Ahora en relación con la ***FALTA DE JURISDICCIÓN y COMPETENCIA***, como se ve de las pretensiones atrás anotadas las mismas se encuentran encaminadas a que se declare la nulidad del acuerdo de transacción suscrito entre el demandante y la accionada por vicios del consentimiento y en consecuencia se ordene el reintegro, junto con el pago de todas las acreencias laborales a las que cree tener derecho el actor desde la data de la firma de la transacción.

---

[2] Gaceta Judicial. Tomo CLXXVI, número 2415, pág. 182. Sin embargo, es conveniente precisar que dicha noción ha sido repetida en muy similares términos por la Jurisprudencia, tanto de la Sala Laboral como de la Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, entre otras en sentencias proferidas el día 15 de octubre de 2003, M.P. Carlos Isaac Nader, como también la radicada bajo el No. 22923 del 14 de febrero del 2005 M.P. Luis Javier Osorio López y la del 3 febrero de 2009 Exp. N° 11001310302003-00282-01, M.P. Dra. Ruth Marina Díaz Rueda.

En esta dirección, se duele el impugnante de la negativa a declarar probado el medio exceptivo, pues dando una interpretación a la alzada lo que refiere con sus argumentos es que las solicitudes relacionadas con los pagos efectuados por el actor a la DIAN en virtud de la declaración de renta que el promotor de la litis presentó, en su sentir no pueden ser atacados por la jurisdicción laboral.

Para resolver habrá de señalarse desde ya, que no se acogerá favorablemente el argumento del apelante en atención a que en el presente asunto de lo que se trata no es de discutir tal pago, sino de definir si hay lugar a declarar la nulidad de la transacción que dio origen a la finalización del vínculo contractual y que generaría como consecuencia el reintegro del actor, conflicto jurídico que deriva directamente del contrato de trabajo, por lo que se encuadra dentro de la competencia general asignada a la jurisdicción ordinaria laboral en el artículo 2º del C.P.L. y S.S.

Téngase en cuenta que el estudio de fondo de la procedencia o no de las pretensiones del accionante son competencia del Juez laboral y como son competencia de ésta Jurisdicción no se puede remitir a otra jurisdicción, además que lo que aquí se va a entrar a verificar en primer lugar es si en efecto hubo vicios en el consentimiento para la firma del acuerdo transaccional, que se itera es lo que podría conllevar al estudio del reintegro y demás peticiones elevadas en el libelo, punto que únicamente puede ser debatido ante el Juez Laboral, insistiendo dentro del *sub lite* el problema jurídico a resolver no son los pagos que se realizaron a la DIAN y en consecuencia las devoluciones de esos dineros, sino la nulidad del acuerdo transaccional, que de resultar avante generaría el reintegro y en consecuencia el estudio por parte del Juez Laboral de las demás peticiones elevadas, en cuanto a su procedencia ante esta jurisdicción.

Así las cosas, las razones expuestas, permiten concluir, que en aplicación del artículo 2 del C.P.L., es el juez laboral el competente para desatar la Litis tal y como lo señaló el *a quo*, y en esa medida se prohijara la decisión de primer grado.

COSTAS en esta instancia a cargo de la recurrente.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el JUZGADO 41 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., en la audiencia llevada a cabo el pasado 30 de noviembre de 2022, por medio del cual DECLARO NO PROBADAS las excepciones previas denominadas Inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones y falta de jurisdicción y competencia, de acuerdo a lo considerado.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $1.000.000, a cargo de AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTIÓN INTERNANCIONAL, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR YOLANDA VÁSQUEZ ACOSTA CONTRA vs COLFONDOS S.A. y MAPFRE COLOMBIA S.A. (RAD. 11 2020 00349 01).

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado para presentar los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el artículo 13 numeral 1º de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente,

PROVIDENCIA

Asume la Sala el conocimiento del presente asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandada MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. contra el auto proferido por el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Bogotá D.C, en audiencia llevada a cabo el pasado 13 de febrero de 2023 (Acta archivo 17 expediente digital), por medio del cual se negó la excepción previa propuesta por falta de integración de litis consorcio necesario con relación a las señoras CLAUDIA PATRICIA VARGAS y GLORIA YOLANDA ESPINOZA[1] (Audio archivo 6 expediente digital).

---

[1] ***Apoderada Mapfre Seguros de Vida (récord 21:23):*** *"Me permite presentar recurso de reposición y en subsidio apelación contra respecto a la excepción previa propuesta al no tenerla como probada señor juez, las argumentaciones gravitan con fundamento en lo siguiente, primero que todo pues, debe tenerse en cuenta que nos encontramos en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que implica o tiene pues varias consecuencias el desarrollo de esta audiencia entre está el saneamiento del proceso, la excepción propuesta va encaminada efectivamente a ese saneamiento cuál era vincular a las señoras Claudia Patricia Vargas y Gloria Yolanda Espinoza, a diferencia de lo estimado por el despacho considera esta apoderada que sí es procedente la intervención de las mismas porque el despacho sustenta la negativa de la excepción previa en que no existe dentro del plenario una acreditación que estas señoras tanto Claudia Patricia Vargas como Gloria Yolanda Espinosa hayan peticionado la pensión de sobrevivientes del pensionado fallecido, en esa medida la Sala Laboral de la Corte ha tenido por sentado que en los procesos en donde se solicita o se tiene algún indicio respecto que existen posibles beneficiarias la figura conducente y pertinente para esta es la intervención a excludendum con dispuesto en el artículo 63 del Código General del Proceso, cuya pretensión es la cosa del derecho controvertido en todo o en parte, el juzgado equivocadamente no puede dentro de la discusión de la excepción previa entrar a analizar si es*

Para llegar a la anterior decisión el juez de primer grado indicó no ser necesaria la vinculación de las citadas personas naturales por cuanto[2], la excepción que se

---

procedente o no que este derecho se ostente o no por las demás por las que se solicita se vinculen al proceso porque es que esto es objeto del debate procesal y es que el juez no puede ser inerte frente a lo que se advierte las documentales ya que, en las documentales está probado las situaciones por las cuales se solicita la vinculación de estas dos personas y es que existen documentales que una vez contestada la demanda no fueron sujeto de pronunciamiento por la parte actora porque la demanda no se reformó en cuanto a este sentido para tachar las declaraciones a los documentos que se encontraban adosados en la contestación de mi representada téngase en cuenta que 1 de los motivos por los cuales Mapfre Colombia Vida Seguros negó la pensión de sobrevivientes solicitada por la demandante fue precisamente estas documentales que en todo caso sí dan fe de que existe una controversia en el derecho pensional entonces si el señor juez considera que no es procedente la vinculación de las solicitadas para que conformen la litis como excluyentes o ad excludendum como vinculada al litisconsorcio lo cierto es que sí es necesario porque es aunado a lo anterior la póliza previsional dentro de su clausulado contiene un parágrafo o una cláusula mediante la cual se le concede a la aseguradora previsional la posibilidad de iniciar vez investigaciones tendientes a evidenciar que efectivamente las personas que aleguen la calidad lo ostentan, en esa medida mi representada amparada en la póliza previsional que efectivamente ahora el proceso pues se abocó esta facultad y realizó una prueba denominada cuestionario para solicitantes de pensión de sobrevivientes y en ella se arrojaron varias situaciones pues que son las que se van a discutir en el debate procesales que nosotros en este momento estamos en la iniciación del proceso en la primera audiencia que es la del artículo 77 que es decisión de excepciones previas saneamiento y fijación del litigio, lo que se está tratando de discutir es quién es el beneficiario de esa pensión de sobrevivientes y es necesario que estas personas se encuentren vinculadas al proceso".

[2] ***Juez (récord 09:42):*** *"Revisado el escrito de contestación presentada por la demandada Mapfre SA pues este despacho advierte que dicha sociedad presenta la excepción previa de falta de integración del contradictorio, pues hace referencia más bien a la excepción de no contener la demanda a todos los litisconsortes necesarios que se encuentra consagrada en el Código General del Proceso en el artículo 100 desde entonces que a través de dicha excepción previa pues la compañía Mapfre Colombia Vida Seguros pretende que se cite los intereses contradictorios más bien con las señoras Claudia Patricia Vargas y Gloria Yolanda Espinoza indicando como argumento de dicha excepción que el fallecido pensionado, señor Gustavo Pérez Holguín declaró notarialmente como compañera a la señora Claudia Patricia Vargas y por otra parte, señala la entidad que designó como beneficiaria a la señora Gloria Yolanda Espinosa, sin embargo verificada la documentación encuentra el despacho que fue al contrario, la señora Gloria Yolanda Espinoza tuvo como beneficiario en salud al causante y por estas razones entonces es que considera Mapfre Colombia Vida Seguros que debe vincularse entonces a las antes citadas Patricia Vargas y Gloria Yolanda Espinoza a este proceso como intervinientes ad excludendum.*

En primer lugar, lo que debe señalarse es que la excepción que se está proponiendo por no contener la demanda a todos los litisconsortes necesarios entonces en este punto vamos a diferenciar las dos figuras, un litisconsorcio necesario y la otra es la intervención excludendum. Es por ello entonces que en lo que tiene que ver con la ley litisconsorcio necesario pasa el despacho a evaluar si las citadas señoras resultan o no ser litisconsortes necesarios en este proceso, señala el artículo 61 del Código General del Proceso aplicable en materia laboral por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que cuando el proceso versa sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales por su naturaleza o por disposición legal haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas si no se hiciera así el juez en auto que admite la demanda ordenará notificar y a todos de esta a quienes falten para integrar el contradictorio en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado señalando, además, el artículo que en caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda el juez dispondrá la situación de las mencionadas personas de oficio o a petición de parte mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia y considera a los citados el mismo término para que comparezcan señalando que el proceso se suspenderá durante dicho término lo que tiene que ver con la calidad de litisconsortes necesarios pues en este caso no se reúnen los requisitos para predicar la existencia de litisconsorcio necesario con la señora Claudia Patricia Vargas y Gloria Yolanda Espinoza, pues es claro para el despacho que la decisión que se pretendió más bien las pretensiones de la demanda claramente pueden resolverse sin la comparecencia de la señora Claudia Patricia Vargas y Gloria Yolanda Espinoza Rueda pues ninguna de las dos o sea su situación en este caso de pensión de sobrevivientes como litisconsortes necesarios pues únicamente tendría lugar en caso de que alguna de ellas a la fecha la titular del derecho que reclama la demandante lo que no ocurre en el presente caso".

está proponiendo por no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios es procedente siempre y cuando se diferencien las figuras de un litisconsorcio necesario e intervención excludendum. Por ello, explicó, el artículo 61 del Código General del Proceso aplicable en materia laboral por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social señala, cuando el proceso versa sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales por su naturaleza o por disposición legal haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas, si no se hiciera así el juez en auto que admite la demanda ordenará notificar a todos de esta y, a quienes falten para integrar el contradictorio en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado, además, en caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda el juez dispondrá la situación de las mencionadas personas de oficio o a petición de parte mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia concediendo a los citados el mismo término para que comparezcan señalando que el proceso se suspenderá durante dicho plazo, concretamente, en lo que tiene que ver con la calidad de litisconsortes necesarios manifestó, en este caso no se reúnen los requisitos para predicar la pertinencia con las señoras Claudia Patricia Vargas y Gloria Yolanda

---

Pese a que como argumento de las excepciones exista el numeral noveno el artículo 100 que habla de los litisconsortes necesarios pues al final de la argumentación señala Mapfre que deben vincularse a éstas como intervinientes a excludendum en lo que tiene que ver con la figura de la intervención teniendo en cuenta el despacho que tampoco se cumplen los requisitos para que estas sean deban ser citadas como intervinientes excludendum por las siguientes razones en el artículo 63 del Código General del Proceso que nos habla de la intervención excluyente señala lo siguiente dice que quién en proceso declarativo pretenda en todo o en parte las cosas o el derecho controvertido podrá intervenir formulando demanda frente a la demandante y demandados hasta la audiencia inicial para que en el mismo proceso se le reconozca señaló también que la intervención se transmite a las conjuntamente con el proceso principal y con ella se formará cuaderno separado es así entonces que lo que ocurre con la intervención. .

Quien pretenda el derecho es quien debe acudir en caso de enterarse de que el mismo sigue su curso pues es este quien puede está facultado para intervenir sin embargo dado que el acceso a la administración de Justicia son acceso voluntario pues claramente el despacho no puede obligar a las compañías a las señoras Claudia Patricia Vargas y lo gloria Yolanda Espinoza a que se presenten pues a este proceso y presenten demanda de intervención porque es una facultad potestativa que estas tenían sobre este proceso en caso de considerarse pues con derecho a la pensión de sobrevivientes que aquí se reclama. Por otra parte en el despacho y aunque no es argumento de la de la excepción previa pues si eso no se menciona en la contestación de la demanda de Mapfre señala que ustedes son varios beneficiarios lo cual no resulta cierto porque analizado o al menos no se ha probado en este proceso que sea así, si bien es cierto lo que se señala en la excepción previa con respecto a que el señor causante declaró en notaría que la señora Claudia Patricia Vargas como compañera y que también estaba vinculado en salud por cuenta de la señora Gloria Yolanda Espinoza pro lo cierto es que no se encuentra probado en este proceso que alguna de estas hubiese comparecido a las instalaciones o que en Mapfre en este momento se encuentre reclamando la prestación de la demandante".

Espinoza, siendo claro que las pretensiones de la demanda puede resolverse sin la comparecencia de éstas.

Añadió, pese a que como argumento de las excepciones exista el numeral 9º del artículo 100 que habla de los litisconsortes necesarios pues al final de la argumentación señala Mapfre que deben vincularse a éstas como intervinientes ad excludendum, en lo que tiene que ver con esta figura, explicó, tampoco se cumplen los requisitos para que las referidas personas deban ser citadas en tal calidad, soportando la decisión en el artículo 63 del Código General del Proceso, el cual señala, quién en proceso declarativo pretenda en todo o en parte las cosas o el derecho controvertido podrá intervenir formulando demanda frente a la demandante y demandados hasta la audiencia inicial para que en el mismo proceso se le reconozca el derecho se ser el caso.

Manifestó, quien pretenda el derecho es quien debe acudir en caso de enterarse del proceso, estando facultado para intervenir, sin embargo, dado que el acceso a la Administración de Justicia es voluntario no se puede obligar a las señoras Claudia Patricia Vargas y Gloria Yolanda Espinoza que hagan parte de esta litis.

Por otra parte, relató, Mapfre señala que se trata de varios beneficiarios, lo cual no resulta cierto porque analizado el proceso no hay prueba de esta afirmación, si bien es cierto se señala en la excepción previa que el señor causante declaró ante Notaría que la señora Claudia Patricia Vargas era su compañera y que también estaba vinculado en salud por cuenta de la señora Gloria Yolanda Espinoza, lo cierto es que no se encuentra probado en este proceso que alguna de éstas hubiese comparecido a las instalaciones o que en Mapfre se encuentre alguna persona reclamando la prestación aquí perseguida, razón por la cual adujo, se puede decidir de fondo este asunto sin la comparecencia de las referidas señoras.

Inconforme con la decisión la apoderada de la demandada MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, insistiendo en la procedencia de la integración del litis consorcio necesario, señalando, en este proceso se debe definir la viabilidad del reconocimiento pensional incluyendo a las 2 señoras, considerando además, que existen medios

probatorios que permiten inferir que es pertinente integrar a las señoras Claudia Patricia Vargas y Gloria Yolanda Espinoza al ser posible beneficiarias.

Respecto al recurso de reposición presentado, el juez de primer grado mantuvo incólume su decisión, reiterando que no existe prueba dentro del proceso sobre la necesidad u obligación de citar a las señoras Claudia Patricia Vargas y Gloria Yolanda Espinoza, sea como litis consorte necesario o interviniente ad excludendum, por lo que ratificó que es factible definir la situación puesta en consideración, sin la comparecencia de éstas.

Para resolver se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Asume la Sala el conocimiento de este ordinario, en orden a desatar el recurso de apelación propuesto por la parte demandada MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., contra el auto que negó la integración del contradictorio o litis consorcio con las señoras Claudia Patricia Vargas y Gloria Yolanda Espinoza, debiendo señalar, en primer lugar, tal proveído, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

Inicialmente es de recordar, el litis consorcio necesario e integración del contradictorio se encuentra previsto para aquellos casos en que no sea posible dictar sentencia de mérito sin la comparecencia de determinadas personas bien por activa ora por pasiva, debido a su estrecha relación con el objeto del litigio que hace que se configure una relación jurídica material o jurídica inescindible, que impide al Juez esa tarea, conforme se puede colegir de la disposición contenida en el artículo 61 del C.G.P[3]., situación que, tal como lo estimó la Juez de conocimiento, no se presenta en el caso de autos.

[3] *ARTÍCULO 61. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.*

Frente al tema, ilustrativo resulta traer a colación lo dicho de antaño por la Corte Suprema de Justicia, en cuanto ha considerado que: *«… la característica esencial del litisconsorcio necesario es el supuesto de que la sentencia haya de ser única y de idéntico contenido para la pluralidad de partes en la relación jurídico-procesal por ser única la relación material que en ella se controvierte; unicidad ésta que impide hacerle modificaciones que no puedan operar conjuntamente frente a los varios sujetos. En el litisconsorcio facultativo, en cambio, como a la pluralidad de partes, corresponde también una pluralidad de relaciones sustanciales controvertidas, es posible entonces que en cierto momento las causas reunidas se separen y cada uno vuelva a ser objeto de proceso separado; y aunque el juicio continúa siendo único hasta el fin, nada impide que a las distintas causas se les dé decisión diferente[4]»*.

Ahora bien en tratándose de pensiones de sobrevivientes, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha precisado respecto de la vinculación de terceros, que: *«ante la diversidad de criterios de los distintos juzgadores de instancia por la dificultad que presenta el tema, ha sentado la pauta consistente en que en principio,* ***cuando exista disputa del derecho a la pensión de sobrevivientes entre cónyuge y compañera permanente****, o entre compañeras permanentes* ***no es necesario ni riguroso integrar un litisconsorcio, pues cada beneficiario puede ejercer su acción con prescindencia de los demás****, siendo la intervención ad excludendum la manera adecuada por regla general de trabar la relación procesal,* ***salvo cuando se ha previamente reconocido el derecho a uno de ellos o hay de por medio derechos de menores de edad*** *(Sentencia CSJ SL, 22 ago. 2012, rad. 38450)»* (ver sentencia CSJ SL18102-2016).

En esa medida, y conforme a lo referido por el juez de primer grado descarta la Sala de entrada la hipótesis del litis consorcio necesario propuesto por MAPFRE, pues en el caso de marras, las pretensiones se encuentran dirigidas única y exclusivamente a que se condene a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A y COLFONDOS S-A. a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes sin que nos encontremos en las hipótesis planteadas vía jurisprudencial en torno a un

---

[4] Corte Suprema de Justicia. Sentencia fechada 14 de junio de 1971,t. CXXXVIII, pág. 389, 1ª y 2ª. Héctor Roa Gómez, en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Bogotá, Edit. ABC, 1979, pág. 937.

reconocimiento previo del derecho reclamado o que haya de por medio derechos de menores de edad con vocación de ser beneficiarios de la prestación.

Por lo que, de entrada, no podría vincularse a un tercero en el presente asunto bajo la figura solicitada por la aseguradora recurrente, menos aún, cuando se trata de dos personas que no han intervenido en el presente proceso a mutuo propio, así como no han presentado reclamaciones ante MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., pues si bien, dicho extremo considera que se trata de posible beneficiarias, lo cierto es que, no existe prueba alguna que permita inferir dicha situación, pues únicamente se aportó la declaración extra juicio de fecha 10 de junio de 2008 (*página 85, archivo 11, expediente digital*), de la cual se extrae que el fallecido Gustavo Pérez Holguín (q.e.p.d) declaró que la señora CLAUDIA PATRICIA VARGAS fue su compañera permanente desde el 2001, aproximadamente (la declaración se rindió el 12 de junio de 2008), no obstante, con este documento no es posible tener por cierta una situación, atendiendo que la misma se constituyó 9 años anteriores a la muerte del causante.

Tal como lo advirtió el juzgador de primer grado la administración de justicia es voluntaria y si las señoras Claudia Patricia Vargas y Gloria Yolanda Espinoza, a bien tienen, intervenir en esta litis, lo podrán hacer bajo la figura prevista para ello. Dicho esto, mientras no se tenga certeza de la calidad de las señoras no es posible integrarlas.

Se aclara, las actividades de investigación o requerimientos en aras de verificar la identidad de las personas objeto de la integración, le compete precisamente es a la aseguradora interesada en que se declare probada la excepción previa, pues en modo alguno con una vaga manifestación de que el causante pudo haber estado vinculado en otras 2 relaciones, sin más datos de identificación, no es posible predicar la existencia de un conflicto entre cónyuge y compañera, pues revisadas las actuaciones administrativas, se colige, no existe reclamo de otra persona ya sea en calidad de cónyuge supérstite o de compañera permanente del causante, de ahí que no sea dable declarar probada dicha excepción previa, más aún, cuando en el presente proceso la no comparecencia no impide dictar sentencia de mérito, tal como se explicó en precedencia.

En todo caso, lo anterior no es óbice para que, si en el transcurso del proceso se logra identificar e individualizar a alguna persona y, si así lo estima la juez de primer grado proceder a su vinculación; insistiendo esta Corporación, su no comparecencia, no impide decidir de fondo la presente controversia.

De conformidad con lo anterior, agotada como está la competencia de esta Corporación, por el estudio de los motivos de apelación, conforme las motivaciones precedentes, se confirmará el auto apelado.

COSTAS en esta instancia a cargo de **MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.**

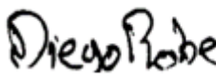
En mérito de lo expuesto **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C., SALA LABORAL**,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado de conformidad con las razones expuestas por esta Sala de decisión.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandante.

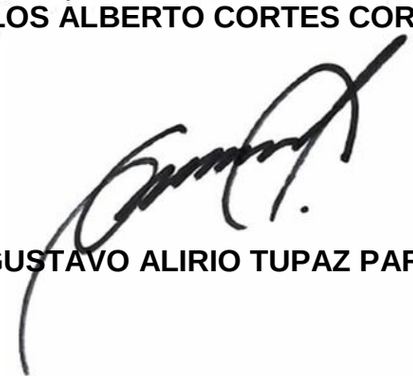
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $1.000.000 a favor de la demandante, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO EJECUTIVO PROMOVIDO POR PORVENIR S.A. CONTRA INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA. (RAD. 14 2016 00453 02).

Bogotá D.C., Treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado para presentar los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral 2 del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente,

PROVIDENCIA

Se asume por la Sala el conocimiento de este proceso especial, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la ejecutante **PORVENIR S.A.** contra el auto proferido por la Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. en fecha 7 de octubre del 2022, por medio de la cual, dispuso aprobar la liquidación del crédito en los siguientes términos (Exp. Digital: *Archivo 01 págs. 154 a 156*):

> Teniendo en cuenta lo anterior y dado que el monto de los aportes indicados por las partes coincide, la liquidación del crédito, queda en las siguientes condiciones:

Periodo	Nombres y apellidos	IBC	Días	A Aporte	B FSP	C Intereses de mora	A+B+C Total
201404	JOAN SEBASTIAN GARCIA LOZANO	61.600	3	9.856	-	23.000	32.856
201305	JOSE LUIS REINA ALAPE	730.000	30	116.800	-	304.000	420.800
201306	JOSE LUIS REINA ALAPE	730.000	30	116.800	-	301.000	417.800
201307	JOSE LUIS REINA ALAPE	730.000	30	116.800	-	297.900	414.700
201308	JOSE LUIS REINA ALAPE	730.000	30	116.800	-	294.900	411.700
201309	JOSE GREGORIO OSPINO	340.667	14	54.507	-	134.300	188.807
201408	ARMANDO CARDONA CARDENAS	744.000	30	119.040	-	266.300	385.340
201409	ARMANDO CARDONA CARDENAS	744.000	30	119.040	-	263.500	382.540
201308	WILLIAM QUINTERO BUITRAGO	117.900	6	18.865	-	47.700	66.565
201512	JOSE LUIS VILLARREAL ALBARRACIN	800.000	30	128.000	-	236.200	364.200
	SALDO DEUDA LIQUIDACION DEL CREDITO			**916.508**	-	**2.168.800**	**3.085.308**

> Puestas así las cosas, deviene imperativo para este Despacho, concluir que la objeción al crédito planteada por la sociedad INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA., tiene vocación de prosperidad y por lo tanto, se **APRUEBA**, con un capital total por novecientos dieciséis mil quinientos ocho pesos ($916.508) y dos millones ciento sesenta y ocho mil ochocientos pesos ($2.168.800) por intereses moratorios con corte al 31 de agosto de 2022.

Inconforme con la decisión la apoderada de la sociedad **PORVENIR S.A** interpuso recurso de apelación *(Archivo 7 expediente digital*), manifestando no se ajusta a derecho la modificación y aprobación de la liquidación del crédito en el auto atacado, allegando una liquidación actual con una deuda total de $5.927.699 tal y como se muestra a continuación:

Si bien se hace la modificación de la deuda teniendo en cuenta el fallo del Honorable Magistrado del Tribunal frente a la prescripción, también debe tenerse en cuenta que el empleador hace un reporte de terminación de relaciones laborales y que están quedando días pendientes de cotización como es el caso del señor Didier Giraldo quien según lo indicado en auto se retira el 03 de abril de 2014, quedando pendiente de aporte los respectivos días; también indica el despacho que el demandado arrimo unos comprobantes de pago de algunos afiliados, los cuales no han puesto a disposición de mi poderdante y que luego de revisar las respectivas cuentas individuales de los afiliados persiste la deuda.

Por lo que teniendo en cuenta las presiones arriba enunciadas y toda vez que no se ha puesto de presente documental allegada por la demandada, se elabora y allega la liquidación actual para que sean tenidas en cuenta y sea corregido en tanto el respectivo auto por parte del Honorable Tribunal superior de Bogotá, sala laboral.

LIQUIDACIÓN DE CREDITO

NOMBRE:
INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA
NIT: 800093106
No. De empleados: 15

PERIODOS INFORMADOS
Desde: 201305 Hasta: 201601
Fecha de corte: 17/06/2022
Periodos en deuda: 18

Num id	Periodo	Tipo	Numero de indel	Nombres y apellidos	IBC	Dias	A Aporte	B FSP	C Intereses de mor	A+B+C Total
1	201402	CC	1013619822	DARLEIN DURAN SANCHEZ	770000	30	123200	0	284400	407600
2	201509	CC	1014183404	DIEGO ALEXANDER PENAGOS CABREI	800000	30	128000	0	236900	364900
3	201601	CC	1023943422	JORGE ELIECER PEREZ TORRES	896000	30	143360	0	251300	394660
4	201601	CC	1023960267	FRANKLIN CAMILO MONTES SIERRA	765000	30	122400	0	214500	336900
5	201404	CC	1069176047	JOAN SEBASTIAN GARCIA LOZANO	98560	3	9856	0	22300	32156
6	201601	CC	1077453217	JUAN DIEGO RIVAS PALACIOS	896000	30	143360	0	251300	394660
7	201305	CC	1110489925	JOSE LUIS REINA ALAPE	730000	30	116800	0	295600	412400
7	201306	CC	1110489925	JOSE LUIS REINA ALAPE	730000	30	116800	0	292900	409700
7	201307	CC	1110489925	JOSE LUIS REINA ALAPE	730000	30	116800	0	289900	406700
7	201308	CC	1110489925	JOSE LUIS REINA ALAPE	730000	30	116800	0	286900	403700
8	201309	CC	18971144	JOSE GREGORIO OSPINO	341000	14	54506	0	132900	187406
9	201601	CC	4063890	OVIDIO VELASQUEZ SALINAS	798000	30	127680	0	223800	351480
10	201601	CC	79393893	ALEXANDER GARCIA ROMERO	798000	30	127680	0	223800	351480
11	201601	CC	80797969	WILLIAM ARTURO ROMERO FUENTES	689455	30	110312	0	193300	303612
12	201408	CC	93298393	ARMANDO CARDONA CARDENAS	744000	30	119040	0	257400	376440
13	201409	CC	93298393	ARMANDO CARDONA CARDENAS	744000	30	119040	0	254600	373640
14	201308	CC	94413933	WILLIAM QUINTERO BUITRAGO	117900	6	18865	0	46300	65165
15	201512	CC	96191051	JOSE LUIS VILLARREAL ALBARRACIN	800000	30	128000	0	227100	355100
				DEUDA TOTAL			$ 1.942.499	$ -	$ 3.985.200	$ 5.927.699

Así las cosas, se hará una breve sinopsis histórica del trámite procesal, advirtiendo
mediante proveído calendado del 12 de septiembre de 2016 (Archivo 01 expediente digital págs. 43 a 45) se libró mandamiento ejecutivo, en los siguientes términos:

> *"**PRIMERO: LIBRAR** orden de pago por la vía ejecutiva a favor de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIOES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y en contra de INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA, representada legalmente por LUZ VIRGINIA PAEZ MONROY, o por quien haga sus veces, por los valores que se señalan a continuación*

a) Por la suma de veintiocho millones novecientos dos mil cuatrocientos treinta pesos ($28.902.430), por concepto de cotizaciones pensionales obligatorias dejadas de pagar por la demandada desde enero de 1995 hasta junio de 2016

b) Por los intereses de mora, causados sobre las anteriores sumas, desde la fecha en que se debió efectuar el pago hasta q1ue se verifique completamente.

c) Por las costas del proceso.

***SEGUNDO: ABSTENERSE** de librar orden de pago respecto de las cotizaciones que se lleguen a causar con posterioridad a la presentación de esta demanda, toda vez que de ellos no se ha configurado el título ejecutivo; la misma suerte corre lo relacionado con los intereses de mora.*

(…)"

Dentro del término legal, la ejecutada propuso la excepción de mérito denominada prescripción (pág. 91 ibidem) la cual, fue resuelta por la Juez de primera instancia declarándola no probada (pág. 122 ibidem), decisión frente a la cual se interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por esta Sala de decisión en auto del 30 de abril del 2021 así:

"Ahora, según se observa a folios 9 a 13 el requerimiento fue enviado al empleador el 6 de julio de 2017 siendo incoada la demanda el 7 de septiembre de ese mismo año (folio 21).

En ese sentido, el requerimiento interrumpió la prescripción de los aportes adeudados por la ejecutada en los 5 años anteriores a la realización del mismo, en otros términos, operó el fenómeno prescriptivo respecto de los aportes pensionales objeto de cobro cuya obligación se causó entre los periodos enero de 1995 y junio de 2012.

Así, atendiendo los términos de la liquidación certificada de la deuda expedida por PORVENIR (folios 2 a 9), y que sirve de título ejecutivo, habrá de declararse probada la excepción de prescripción respecto de los aportes cobrados a la encartada por los afiliados JUAN CARLOS RIVERA CARDOZO, FRANCISCO VALBUENA, JOSE ANTONIO LANDINEZ, JOSE FERNANDO MUÑOZ CORDOBA, OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ, ARNULFO BUSTOS BARRERA, JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS, FANNY AZUCENA CAMARGO, JORGE ENRIQUE DIAZ RUIZ Y MARTIN EMILIO WILCHES DÍAS, por cuanto corresponden a cotizaciones adeudadas entre enero de 1995 y septiembre de 2008.

Del mismo modo, se advierte operó la prescripción respecto del periodo 201202 correspondiente al afiliado WILSON OSWALDO MORALES y los periodos 201205 y 201206 de los afiliados ALVARO ORTIZ y ARMANDO CARDONA CARDONA.

Conforme lo analizado, habrá de revocarse parcialmente la providencia de primer grado para en su lugar, declarar parcialmente probada la excepción de prescripción, precisando que la ejecución deberá continuarse respecto de los aportes pensionales adeudados por la encartada por los trabajadores OVIDIO VELASQUEZ SALINAS, DIDIER GIRALDO RAMIREZ, JOSE GREGORIO OSPINO, RAUL GARZON, ALEXANDER GARCIA ROMERO, JHONSON

HUMBERTO BARON, WILLIAM ARTURO ROMERO FUENTES, WILLIAM QUINTERO, JOSE LUIS VILLAREAL ALBARRACIN, BRYAN EDUARDO MENDOZA GARCIA, DARLEIN DURAN SANCHEZ, DIEGO ALEXANDER PENAGOS CABRERA, JORGE ELIECER PEREZ TORRES, FRANKLIN CAMINO MONTES SIERRA, JUAN SEBASTIAN GARCIA LOZANO, JUAN DIEGO RIVAS PALACIOS y JOSE LUIS REINA, en los términos del mandamiento de pago, además, por los periodos 201207 a 201409 adeudados por ARMANDO CARDONA CARDONA, 201207 a 201403 por ALVARO ORTIZ y el aporte de 201403 de WILSON OSWALDO MORALES, frente a los cuales no operó el fenómeno prescriptivo.

***SIN COSTAS** en esta instancia.*

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SALA LABORAL,

R E S U E L V E

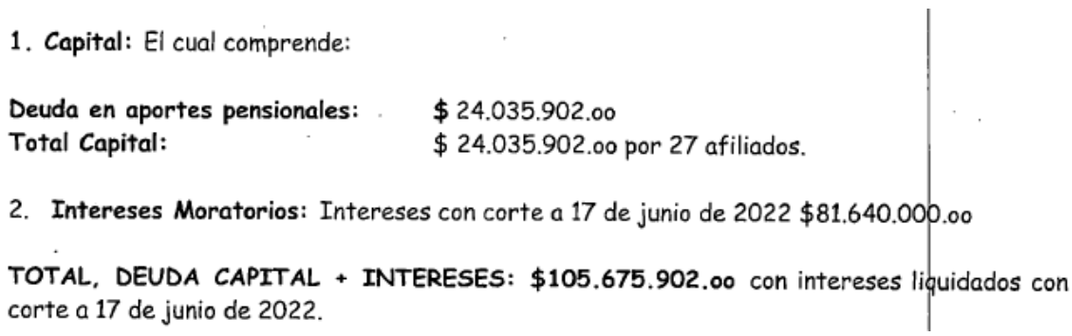
***PRIMERO: REVOCAR** el numeral PRIMERO del auto proferido por la Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá, en audiencia celebrada el 25 de febrero de 2021, para en su lugar **DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN**, conforme las consideraciones expuestas de manera precedente.*

***SEGUNDO: MODIFICAR** el numeral SEGUNDO del auto proferido por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de **SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN,** pero en los términos consignados en la parte motiva de esta providencia.*

***TERCERO: CONFIRMAR** en lo demás la providencia apelada.*

***CUARTO: SIN COSTAS** en esta instancia."*

En estos términos, la apoderada de la ejecutante PORVENIR S.A. presentó la liquidación del crédito con corte al 17 de junio del 2022 (*archivo 01, páginas 123 a 134 del expediente digital)*, señalando como valor adeudado:



1. **Capital:** El cual comprende:

Deuda en aportes pensionales: $ 24.035.902.oo
Total Capital: $ 24.035.902.oo por 27 afiliados.

2. **Intereses Moratorios:** Intereses con corte a 17 de junio de 2022 $81.640.000.oo

TOTAL, DEUDA CAPITAL + INTERESES: $105.675.902.oo con intereses liquidados con corte a 17 de junio de 2022.

Respecto de dicha liquidación se presentó objeción, por parte del Curador Ad litem de INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA. (págs. 138 a 153 Archivo 1 expediente digital y Archivo 11), manifestando que en la liquidación presentada por Porvenir se relacionan deudas que fueron declaradas prescritas respecto de los periodos de cotización de enero de 1995 a junio del 2012, presentando por ende una liquidación con el detalle que en su concepto se adeuda, poniendo de presente

respecto de algunos trabajadores que ya existe pago, hay novedad de retiro y también personas que no tenían vinculación para la fecha del cobro de la obligación, aduciendo como deuda total $3.085.308, discriminada en $916.508 por concepto de deuda de aportes y $2.168.800 por intereses liquidados al 31 de agosto del 2022 así:

Num id	Periodo	Tipo	Numero de identificación	Nombres y apellidos	IBC	Dias	A Aporte	B FSP	C Intereses de mora	A+B+C Total
7	201404	CC	1069176047	JOAN SEBASTIAN GARCIA LOZANO	61.600	3	9.856	-	23.000	32.856
9	201305	CC	1110489925	JOSE LUIS REINA ALAPE	730.000	30	116.800	-	304.000	420.800
9	201306	CC	1110489925	JOSE LUIS REINA ALAPE	730.000	30	116.800	-	301.000	417.800
9	201307	CC	1110489925	JOSE LUIS REINA ALAPE	730.000	30	116.800	-	297.900	414.700
9	201308	CC	1110489925	JOSE LUIS REINA ALAPE	730.000	30	116.800	-	294.900	411.700
13	201309	CC	18971144	JOSE GREGORIO OSPINO	340.667	14	54.507	-	134.300	188.807
25	201408	CC	93298393	ARMANDO CARDONA CARDENAS	744.000	30	119.040	-	266.300	385.340
25	201409	CC	93298393	ARMANDO CARDONA CARDENAS	744.000	30	119.040	-	263.500	382.540
26	201308	CC	94413933	WILLIAM QUINTERO BUITRAGO	117.900	6	18.865	-	47.700	66.565
27	201512	CC	96191051	JOSE LUIS VILLARREAL ALBARRACIN	800.000	30	128.000	-	236.200	364.200
				SALDO DEUDA LIQUIDACION DEL CREDITO			**916.508**	-	**2.168.800**	**3.085.308**

La juez de instancia verificó las situaciones expuestas por el ejecutado concluyendo que, en efecto dicho valor era por el cual debía continuarse con la ejecución (ver pág. 156 Archivo 1 expediente digital).

Así las cosas y en aras de resolver el recurso de apelación interpuesto por PORVENIR la Sala inicia por advertir conforme a la decisión tomada por este Tribunal en relación con la excepción de prescripción, los aportes respecto de los cuales en principio se continuaría la ejecución son los posteriores al **6 de julio del 2012**, pues los anteriores a tal data se encuentran prescritos, los cuales corresponderían a los siguientes:

	NO PRESCRITOS -APORTES A PARTIR DEL 6 DE JULIO DEL 2012		
	TRABAJADOR	***PERIODO***	***VALOR APORTE***
1	**OVIDIO VELASQUEZ SALINAS**	2016-01	$ 127.680,00
2	**DIDIER GIRALDO RAMIREZ**	jul-12	$ 90.673,00
		ago-12	$ 90.673,00
		sep-12	$ 90.673,00
		oct-12	$ 90.673,00
		nov-12	$ 90.673,00
		dic-12	$ 90.673,00
		ene-13	$ 94.321,00
		feb-13	$ 94.321,00
		mar-13	$ 94.321,00

		abr-13	$ 94.321,00
		may-13	$ 94.321,00
		jun-13	$ 94.321,00
		jul-13	$ 94.321,00
		ago-13	$ 94.321,00
		sep-13	$ 94.321,00
		oct-13	$ 94.321,00
		nov-13	$ 94.321,00
		dic-13	$ 94.321,00
		ene-14	$ 98.560,00
		feb-14	$ 98.560,00
		mar-14	$ 98.560,00
		abr-14	$ 98.560,00
		may-14	$ 98.560,00
		jun-14	$ 98.560,00
		jul-14	$ 98.560,00
		ago-14	$ 98.560,00
		sep-14	$ 98.560,00
		oct-14	$ 98.560,00
		nov-14	$ 98.560,00
		dic-14	$ 98.560,00
		ene-15	$ 103.096,00
		feb-15	$ 103.096,00
		mar-15	$ 103.096,00
		abr-15	$ 103.096,00
		may-15	$ 103.096,00
		jun-15	$ 103.096,00
		jul-15	$ 103.096,00
		ago-15	$ 103.096,00
		sep-15	$ 103.096,00
		oct-15	$ 103.096,00
		nov-15	$ 103.096,00
		dic-15	$ 103.096,00
		feb-16	$ 110.312,00
		mar-16	$ 110.312,00
		abr-16	$ 110.312,00
		may-16	$ 110.312,00
		jun-16	$ 110.312,00
3	**JOSE GREGORIO OSPINO**	sep-13	$ 116.800,00
		oct-13	$ 116.800,00
4	**RAUL GARZON**	ago-14	$ 123.200,00
5	**ALEXANDER GARCIA ROMERO**	ene-16	$ 127.680,00
6	**JHONSON HUMBERTO BARON**	oct-13	$ 116.800,00
7	**WILLIAM ARTURO ROMERO FUENTES**	ene-16	$ 110.312,00
8	**WILLIAM QUINTERO BUITRAGO**	ago-13	$ 18.865,00
9	**JOSE LUIS VILLAREAL ALBARRACIN**	dic-15	$ 128.000,00
10	**BRYAN EDUARDO MENDOZA GARCIA**	sep-14	$ 98.560,00
		oct-14	$ 98.560,00
		nov-14	$ 98.560,00
		dic-14	$ 98.560,00
		ene-15	$ 103.096,00
		feb-15	$ 103.096,00

		mar-15	$ 103.096,00
		abr-15	$ 103.096,00
		may-15	$ 103.096,00
		jun-15	$ 103.096,00
11	**DARLEIN DURAN SANCHEZ**	feb-14	$ 123.200,00
12	**DIEGO ALEXANDER PENAGOS CABRERA**	sep-15	$ 128.000,00
13	**JORGE ELIECER PEREZ TORRES**	ene-16	$ 143.360,00
14	**FRANKLIN CAMILO MONTES SIERRA**	ene-16	$ 122.400,00
15	**JOAN SEBASTIAN GARCIA LOZANO**	abr-14	$ 98.560,00
		may-14	$ 98.560,00
		jun-14	$ 98.560,00
		jul-14	$ 98.560,00
		ago-14	$ 98.560,00
		sep-14	$ 98.560,00
		oct-14	$ 98.560,00
		nov-14	$ 98.560,00
		dic-14	$ 98.560,00
		ene-15	$ 103.096,00
		feb-15	$ 103.096,00
		mar-15	$ 103.096,00
		abr-15	$ 103.096,00
		may-15	$ 103.096,00
		abr-16	$ 110.312,00
		may-16	$ 110.312,00
		jun-16	$ 110.312,00
16	**JUAN DIEGO RIVAS PALACIOS**	ene-16	$ 143.360,00
17	**JOSE LUIS REINA ALAPE**	may-13	$ 116.800,00
		jun-13	$ 116.800,00
		jul-13	$ 116.800,00
		ago-13	$ 116.800,00
18	**ARMANDO CARDONA CARDENAS**	jul-12	$ 90.720,00
		ago-12	$ 90.720,00
		sep-12	$ 90.720,00
		oct-12	$ 90.720,00
		nov-12	$ 90.720,00
		dic-12	$ 90.720,00
		ene-13	$ 94.321,00
		feb-13	$ 94.321,00
		mar-13	$ 94.321,00
		abr-13	$ 94.321,00
		may-13	$ 94.321,00
		jun-13	$ 94.321,00
		jul-13	$ 94.321,00
		ago-13	$ 94.321,00
		sep-13	$ 94.321,00
		oct-13	$ 94.321,00
		nov-13	$ 94.321,00
		dic-13	$ 94.321,00
		ene-14	$ 98.560,00
		feb-14	$ 98.560,00
		mar-14	$ 98.560,00
		abr-14	$ 98.560,00

		may-14	$ 98.560,00
		ago-14	$ 119.040,00
		sep-14	$ 119.040,00
19	**ALVARO ORTIZ**	jul-12	$ 90.673,00
		ago-12	$ 90.673,00
		sep-12	$ 90.673,00
		oct-12	$ 90.673,00
		nov-12	$ 90.673,00
		dic-12	$ 90.673,00
		ene-13	$ 94.321,00
		feb-13	$ 94.321,00
		mar-13	$ 94.321,00
		abr-13	$ 94.321,00
		may-13	$ 94.321,00
		jun-13	$ 94.321,00
		jul-13	$ 94.321,00
		ago-13	$ 94.321,00
		sep-13	$ 94.321,00
		oct-13	$ 94.321,00
		nov-13	$ 94.321,00
		dic-13	$ 94.321,00
		ene-14	$ 98.560,00
		feb-14	$ 98.560,00
		mar-14	$ 98.560,00
20	**WILSON OSWALDO MORALES**	mar-14	$ 123.200,00

No obstante, lo anterior, se debe respecto de dichos trabajadores verificar los argumentos expuestos en la liquidación del crédito presentada por INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA., así:

1) **OVIDIO VELASQUEZ SALINAS**
2) **ALEXANDER GARCÍA ROMERO**
3) **WILLIAM ARTURO ROMERO FUENTES**
4) **JUAN DIEGO RIVAS PALACIOS**
5) **JORGE ELIECER PEREZ TORRES**

Respecto de ellos se solicita el pago del mes de enero del 2016, indicando el ejecutado ya se encuentra pago, para ello aporta la planilla No. 8887020582 (Archivo 11 expediente digital, págs. 17, 20, 23, 24 y 25), respecto de la cual aduce "*corregir ciclo planilla*" como también el apellido y nombre de los mismos.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																				
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF
CC 4063890	SALINAS SALINAS OVIDIO	8851797062 / 8887020582	15/02/2016	201512	201601																		30	30	30	30
CC 4063890	VELASQUEZ SALINAS OVIDIO	8849019292 / 8882263162	22/01/2016	201512	201601																		29	29	29	29
CC 4063890	VELASQUEZ SALINAS OVIDIO	8849019292 / 8882263162	22/01/2016	201512	201601											X							1	1	1	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																				
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF
CC 79393893	GARCIA ROMERO ALEXANDER	8855489042 / 8895228262	14/04/2016	201603	201604																		30	30	30	30
CC 79393893	GARCIA ROMERO ALEXANDER	8853545872 / 8891041572	11/03/2016	201602	201603																		30	30	30	30
CC 79393893	GARCIA ROMERO ALEXANDER	8852614272 / 8888779292	02/03/2016	201601	201602																		0	30	0	0
CC 79393893	ROMERO ROMERO ALEXANDER	8851797062 / 8887020582	15/02/2016	201512	201601																		30	30	30	30
CC 79393893	GARCIA ROMERO ALEXANDER	8848766742 / 8881750592	15/01/2016	201512	201601																		29	29	29	29
CC 79393893	GARCIA ROMERO ALEXANDER	8848766742 / 8881750592	15/01/2016	201512	201601											X							1	1	1	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																				
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF
CC 80797969	ROMERO FUENTES WILLIAM ARTURO	8855489042 / 8895228262	14/04/2016	201603	201604																		30	30	30	30
CC 80797969	ROMERO FUENTES WILLIAM ARTURO	8853545872 / 8891041572	11/03/2016	201602	201603																		30	30	30	30
CC 80797969	ROMERO FUENTES WILLIAM ARTURO	8852614272 / 8888779292	02/03/2016	201601	201602	X																	0	6	0	0
CC 80797969	FUENTES FUENTES ARTURO ARTURO	8851797062 / 8887020582	15/02/2016	201512	201601	X																	6	6	6	6

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																				
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF
CC 1077453217	RIVAS PALACIOS JUAN DIEGO	8853647592 / 8891216572	14/03/2016	201602	201603																		30	30	30	30
CC 1077453217	RIVAS PALACIOS JUAN DIEGO	8852614272 / 8888779292	02/03/2016	201601	201602																		0	30	0	0
CC 1077453217	RIVAS PALACIOS NELSON DIEGO	8851797062 / 8887020582	15/02/2016	201512	201601																		30	30	30	30
CC 1077453217	RIVAS PALACIOS JUAN DIEGO	8848349052 / 8881183522	12/01/2016	201512	201601																		30	30	30	30

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																				
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF
CC 1023943422	PEREZ TORRES HENRY ELIECER	8851797062 / 8887020582	15/02/2016	201512	201601																		30	30	30	30
CC 1023943422	PEREZ TORRES JORGE ELIECER	8848349052 / 8881183522	12/01/2016	201512	201601																		30	30	30	30

Revisada dicha documental, evidencia la Sala que la fecha de pago fue el 15 de febrero del 2016, anotándose como periodo cotizado 2015-12 y como periodo servido 2016-01, esto es, que en efecto, canceló en ese mes -*febrero*- el aporte para pensión de enero del 2016, no obstante como bien lo refiere el ejecutado existe una inconsistencia en el periodo de cotización pues se indicó que correspondía a diciembre del 2015, cuando en realidad el pago se hizo en febrero, para el periodo servido de enero del 2016, situación esta que en manera alguna puede ser causal para desconocer ese pago, por cuanto como ya se indicó corresponde a una inconsistencia en la planilla que puede ser subsanada a través de la corrección de la misma, en la que también se debe enmendar el apellido y nombre de los trabajadores así:

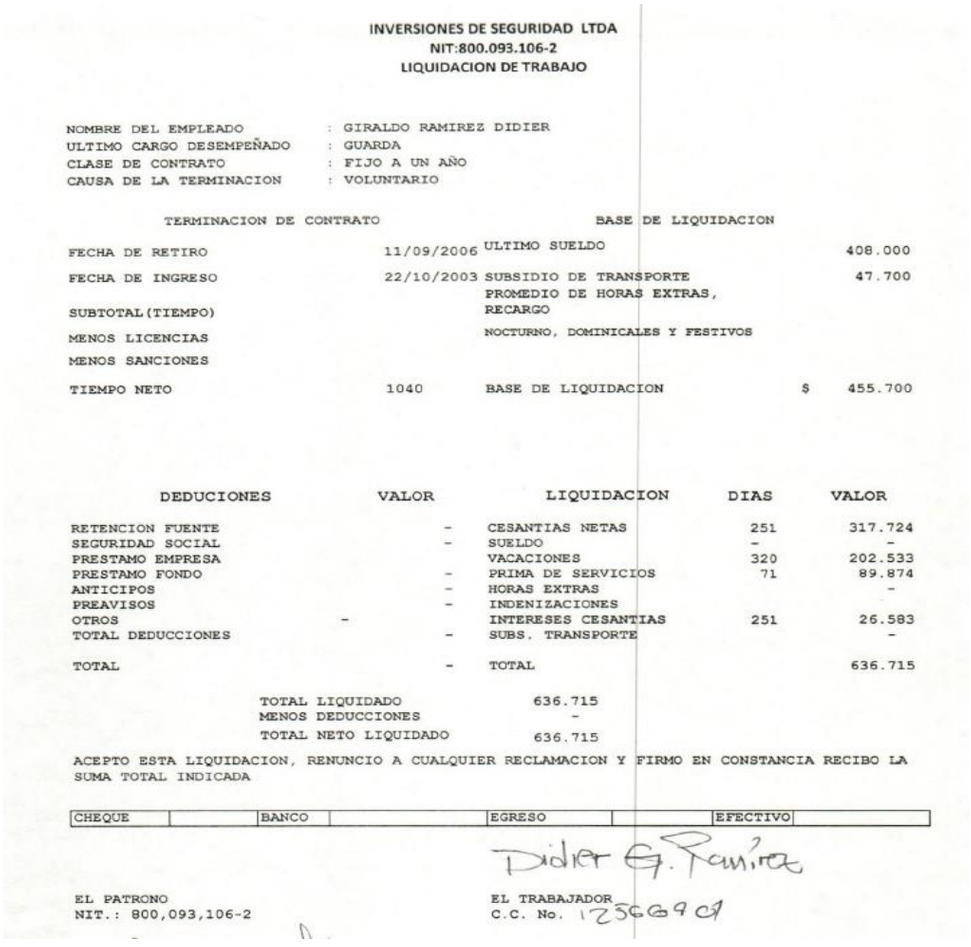
- Se señaló OVIDIO SALINAS SALINAS, cuando el correcto es OVIDIO VELASQUEZ SALINAS.

- Se registró ALEXANDER ROMERO ROMERO cuanto el correcto es ALEXANDER GARCÍA ROMERO.
- Se anota NELSON DIEGO RIVAS PALACIOS siendo el correcto JUAN DIEGO RIVAS PALACIOS.
- Se registró ARTURO ARTURO FUENTES FUENTES cuando el correcto es WILLIAM ARTURO ROMERO FUENTES.
- Se anotó HENRY ELIECER PEREZ TORRES y el que corresponde es JORGE ELIECER PEREZ TORRES.

Razón por la cual este periodo ENERO del 2016 frente a esos trabajadores se ha de excluir de la ejecución, pero se dispondrá que INVERSIONES DE SEGURIDAD LIMITADA proceda a efectuar la correspondiente corrección de la citada planilla.

6) **DIDIER GIRALDO RAMÍREZ:** Inicialmente frente a dicha persona Porvenir solicitó la ejecución de aportes desde junio del 2006 hasta junio del 2016, pero por los efectos de la prescripción continuarían vigentes solo los causados a partir de julio del 2012 hasta junio del 2016, frente a los cuales el ejecutado manifiesta que no es no posible su pago porque tal trabajador se retiró el 11 de septiembre del 2006.

De lo anterior da cuenta la liquidación de prestaciones sociales obrante en la página 21 (Archivo 11 expediente digital), la cual señala que en efecto dicha persona ingreso al servicio de la ejecutada el 22 de octubre del 2003 y su retiro se dio el 11 de septiembre del 2006, y contiene la firma de tal trabajador.



INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA
NIT:800.093.106-2
LIQUIDACION DE TRABAJO

NOMBRE DEL EMPLEADO : GIRALDO RAMIREZ DIDIER
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO : GUARDA
CLASE DE CONTRATO : FIJO A UN AÑO
CAUSA DE LA TERMINACION : VOLUNTARIO

TERMINACION DE CONTRATO		BASE DE LIQUIDACION	
FECHA DE RETIRO	11/09/2006	ULTIMO SUELDO	408.000
FECHA DE INGRESO	22/10/2003	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	47.700
SUBTOTAL(TIEMPO)		PROMEDIO DE HORAS EXTRAS, RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS	
MENOS LICENCIAS			
MENOS SANCIONES			
TIEMPO NETO	1040	BASE DE LIQUIDACION	$ 455.700

DEDUCIONES		VALOR	LIQUIDACION	DIAS	VALOR
RETENCION FUENTE		-	CESANTIAS NETAS	251	317.724
SEGURIDAD SOCIAL		-	SUELDO	-	-
PRESTAMO EMPRESA			VACACIONES	320	202.533
PRESTAMO FONDO		-	PRIMA DE SERVICIOS	71	89.874
ANTICIPOS		-	HORAS EXTRAS		-
PREAVISOS		-	INDENIZACIONES		
OTROS		-	INTERESES CESANTIAS	251	26.583
TOTAL DEDUCCIONES		-	SUBS. TRANSPORTE		-
TOTAL		-	TOTAL		636.715

TOTAL LIQUIDADO 636.715
MENOS DEDUCCIONES -
TOTAL NETO LIQUIDADO 636.715

ACEPTO ESTA LIQUIDACION, RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION Y FIRMO EN CONSTANCIA RECIBO LA SUMA TOTAL INDICADA

CHEQUE		BANCO		EGRESO		EFECTIVO	

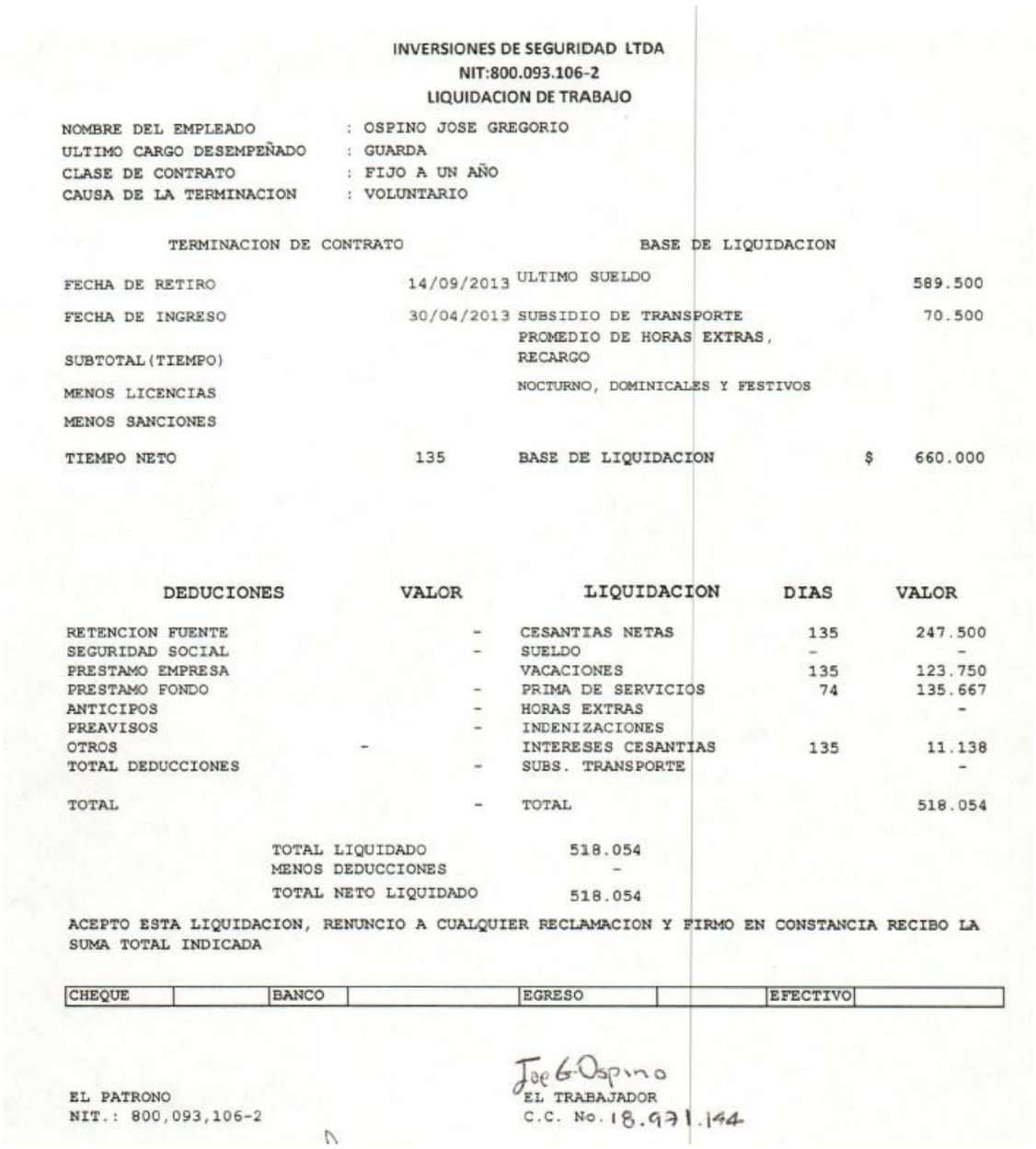
Didier G. Ramírez

EL PATRONO
NIT.: 800,093,106-2

EL TRABAJADOR
C.C. No. 1236694

Conforme a ello, es claro entonces que no procede el cobro de aportes frente a dicho afiliado, pues como se anotó su retiro se dio desde el año 2006 y por ende la sociedad ejecutada no se encontraba en la obligación de continuar con el pago de los mismos. Nótese además que PORVENIR no aportó con el título ejecutivo alguna prueba que indicara que dicho trabajador continuo con afiliación vigente después de septiembre del 2006, de modo que esta persona se excluye de la presente ejecución, como así lo hizo PORVENIR en la última liquidación presentada.

7) **JOSE GREGORIO OSPINO:** Se solicita el pago para los periodos de septiembre y octubre del año 2013, indica la ejecutada que su retiro de la empresa fue el 14 de septiembre de 2013, por lo que solo se adeudan esos días (14 días).



INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA
NIT:800.093.106-2
LIQUIDACION DE TRABAJO

NOMBRE DEL EMPLEADO : OSPINO JOSE GREGORIO
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO : GUARDA
CLASE DE CONTRATO : FIJO A UN AÑO
CAUSA DE LA TERMINACION : VOLUNTARIO

TERMINACION DE CONTRATO		BASE DE LIQUIDACION	
FECHA DE RETIRO	14/09/2013	ULTIMO SUELDO	589.500
FECHA DE INGRESO	30/04/2013	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	70.500
SUBTOTAL(TIEMPO)		PROMEDIO DE HORAS EXTRAS, RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS	
MENOS LICENCIAS			
MENOS SANCIONES			
TIEMPO NETO	135	BASE DE LIQUIDACION	$ 660.000

DEDUCIONES	VALOR	LIQUIDACION	DIAS	VALOR
RETENCION FUENTE	-	CESANTIAS NETAS	135	247.500
SEGURIDAD SOCIAL	-	SUELDO	-	-
PRESTAMO EMPRESA		VACACIONES	135	123.750
PRESTAMO FONDO	-	PRIMA DE SERVICIOS	74	135.667
ANTICIPOS	-	HORAS EXTRAS		-
PREAVISOS	-	INDENIZACIONES		
OTROS	-	INTERESES CESANTIAS	135	11.138
TOTAL DEDUCCIONES	-	SUBS. TRANSPORTE		-
TOTAL	-	TOTAL		518.054

TOTAL LIQUIDADO	518.054
MENOS DEDUCCIONES	-
TOTAL NETO LIQUIDADO	518.054

ACEPTO ESTA LIQUIDACION, RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION Y FIRMO EN CONSTANCIA RECIBO LA SUMA TOTAL INDICADA

CHEQUE		BANCO		EGRESO		EFECTIVO	

Jose G Ospino
EL PATRONO
NIT.: 800,093,106-2

EL TRABAJADOR
C.C. No. 18.971.144

Conforme a lo anterior, respecto de este trabajador tan solo se deben pagar **14 días del mes de septiembre del 2013**, como igualmente lo indicó Porvenir en su última liquidación del crédito.

8) **RAUL GARZON:** Periodo agosto del 2014
9) **JHONSON HUMBERTO BARON:** Periodo octubre del 2013
10) **ALVARO ORTIZ:** Periodos de julio del 2012 a Marzo del 2014
11) **WILSON OSWALDO MORALES:** Periodo de marzo del 2014
12) **ARMANDO CARDONA CARDENAS:** Periodos de julio del 2012 a septiembre del 2014.

Frente a estos si bien inicialmente PORVENIR S.A. solicitó su ejecución, lo cierto es que la misma en las dos liquidaciones del crédito, no los incluye para su cobro, por ende el ejecutado no hace pronunciamiento frente a ellos y en ese orden, quedan por fuera de esta liquidación del crédito los anteriores periodos relacionados, con excepción de **ARMANDO CARDONA CARDENAS** en los meses de **AGOSTO y SEPTIEMBRE del 2014**, frente a los cuales el ejecutado ACEPTA la deuda (ver págs. 11 y 12 Archivo 11 expediente digital).

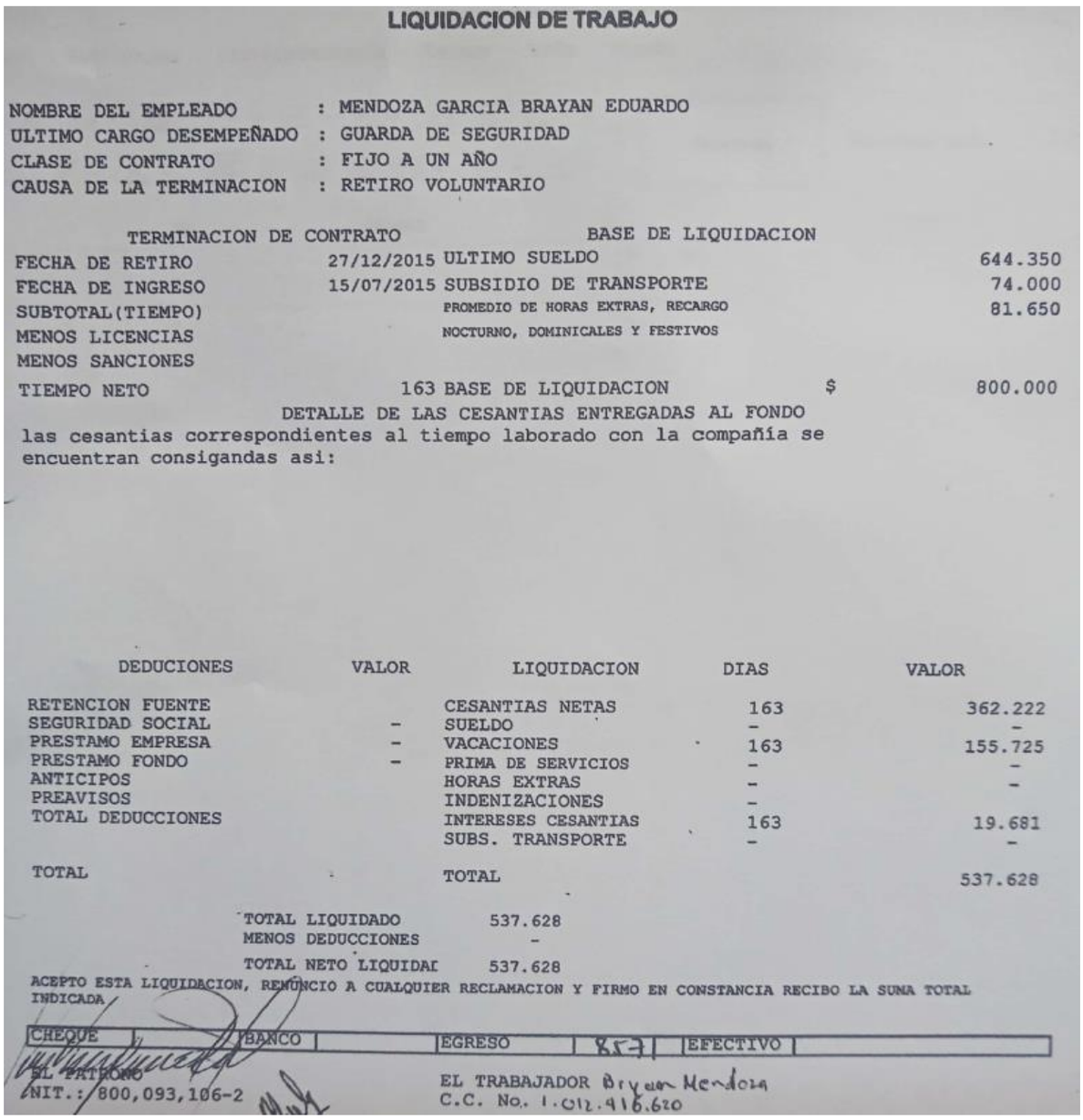
13) **WILLIAM QUINTERO BUITRAGO:** Frente a este se cobran 6 días del mes de agosto del 2013, aduciendo el ejecutado que dicho trabajador se encuentra retirado con registro de esa novedad aportando la respectiva planilla así:

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																	
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres del Cotizante	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de pago	Periodo de Cotización	Periodo de Servicio	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Corrección	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP
CC 94413933	WILLIAM QUINTERO BUITRAGO	18484295	5/12/2012	201211	201212		X															0	3
CC 94413933	WILLIAM QUINTERO BUITRAGO	18227078	7/11/2012	201210	201211																	0	#
CC 94413933	WILLIAM QUINTERO BUITRAGO	17958855	8/10/2012	201209	201210	X																0	#

De lo anterior se evidencia que dicha persona trabajó hasta diciembre del año 2012, registrándose en efecto la respectiva novedad de retiro, por ende, no resulta claro el cobro de agosto del 2013, sin que se allegara por PORVENIR el registro de una nueva afiliación con posterioridad a esa fecha de retiro, situación que conlleva a que tal periodo no pueda ser objeto de pago.

14) **JOSE LUIS VILLARREAL ALBARRACIN:** Se está cobrando **diciembre del 2015** a lo cual no se opone el ejecutado pues acepta su deuda, procede entonces su pago (pág. 12 Archivo 11 expediente digital).

15) BRYAN EDUARDO MENDOZA GARCIA: Se solicita el pago de los aportes de septiembre del 2014 a junio del 2015, sin embargo, el ejecutado manifiesta que este afiliado tuvo vinculo laboral del 15 de julio al 27 de diciembre del 2015, anexando la correspondiente liquidación de prestaciones sociales así:



LIQUIDACION DE TRABAJO

NOMBRE DEL EMPLEADO : MENDOZA GARCIA BRAYAN EDUARDO
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO : GUARDA DE SEGURIDAD
CLASE DE CONTRATO : FIJO A UN AÑO
CAUSA DE LA TERMINACION : RETIRO VOLUNTARIO

TERMINACION DE CONTRATO		BASE DE LIQUIDACION	
FECHA DE RETIRO	27/12/2015	ULTIMO SUELDO	644.350
FECHA DE INGRESO	15/07/2015	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	74.000
SUBTOTAL(TIEMPO)		PROMEDIO DE HORAS EXTRAS, RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS	81.650
MENOS LICENCIAS			
MENOS SANCIONES			
TIEMPO NETO	163	BASE DE LIQUIDACION	$ 800.000

DETALLE DE LAS CESANTIAS ENTREGADAS AL FONDO
las cesantias correspondientes al tiempo laborado con la compañía se encuentran consigandas asi:

DEDUCIONES	VALOR	LIQUIDACION	DIAS	VALOR
RETENCION FUENTE		CESANTIAS NETAS	163	362.222
SEGURIDAD SOCIAL	-	SUELDO	-	-
PRESTAMO EMPRESA	-	VACACIONES	163	155.725
PRESTAMO FONDO	-	PRIMA DE SERVICIOS	-	-
ANTICIPOS		HORAS EXTRAS	-	-
PREAVISOS		INDENIZACIONES	-	
TOTAL DEDUCCIONES		INTERESES CESANTIAS	163	19.681
		SUBS. TRANSPORTE	-	-
TOTAL		TOTAL		537.628

TOTAL LIQUIDADO 537.628
MENOS DEDUCCIONES -
TOTAL NETO LIQUIDAI 537.628

ACEPTO ESTA LIQUIDACION, RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION Y FIRMO EN CONSTANCIA RECIBO LA SUNA TOTAL INDICADA

CHEQUE		BANCO		EGRESO	857	EFECTIVO	

EL PATRONO
NIT.: 800,093,106-2

EL TRABAJADOR Bryan Mendoza
C.C. No. 1.012.916.620

Conforme a lo anterior es claro que PORVENIR esta solicitando el pago de unos periodos, en los cuales ni siquiera dicha persona se encontraba vinculada con la ejecutada, pues ingresó a laborar el 15 de julio de 2015 y se retiro el 27 de diciembre del mismo año, por lo que respecto de los aportes de septiembre del 2014 a junio del 2015 no es posible generar deuda alguna. Se excluyen de su cobro.

16) DARLEIN DURAN SÁNCHEZ: Se solicita el pago del mes de febrero del 2014, ante lo cual la parte ejecutada señala que ya existe pago con la planilla No. 8826148589, en la cual, si bien se anota un nombre diferente, tal pago si corresponde a ese trabajador.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																								Adr
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP		
CC 1013619822	CELY PEÑA JONATHAN ANDREY	8826148589 / 8826148589	19/03/2014	201402	201403																		30	30	30	30	230301		
CC 1013619822	DURAN SANCHEZ DARLEIN	8825897553 / 8825897553	03/03/2014	201401	201402	X																	8	8	8	8	230301		
CC 1013619822	DURAN SANCHEZ DARLEIN	8825759935 / 8825759935	21/02/2014	201401	201402																		30	30	30	30	230301		

Verificando ello, en efecto se evidencia que en los datos del afiliado se anotó en la casilla "*Apellidos y Nombres"* a CELY PEÑA JONATHAN ANDREY, pero la identificación del cotizante -C.C.1013619822- corresponde a DARLEIN DURAN SÁNCHEZ, respecto de quien se pagó el periodo de febrero del 2014, el 19 de marzo de ese año, no siendo procedente el cobro del mismo ante dicho error, el cual sin embargo debe ser subsanado por la ejecutada a través de la corrección de esa planilla y así se ordenará.

17)DIEGO ALEXANDER PENAGOS CABRERA: Se solicita el pago del periodo de septiembre del 2015, el cual aduce la pasiva que si se cancelo mediante la planilla 8875846262 (pág. 16 Archivo 11 expediente digital).

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																								Adr
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP		
CC 1014183404	PENAGOS CABRERA DIEGO ALEXANDER	8847769292 / 8880178982	18/12/2015	201511	201512																		30	30	30	30	230301		
CC 1014183404	PENAGOS CABRERA DIEGO ALEXANDER	8846216832 / 8875950022	17/11/2015	201510	201511																		30	30	30	30	230301		
CC 1014183404	PENAGOS CABRERA DIEGO ALEXANDER	8846174872 / 8875846262	11/11/2015	201509	201510																		0	30	0	0	NIN-AF		
CC 1014183404	PENAGOS CABRERA DIEGO ALEXANDER	8844428132 / 8869957482	25/09/2015	201508	201509																		30	30	30	30	230301		
CC 1014183404	PENAGOS CABRERA DIEGO ALEXANDER	8843804012 / 8867452022	31/08/2015	201507	201508																		29	29	29	29	230301		
CC 1014183404	PENAGOS CABRERA DIEGO ALEXANDER	8843804012 / 8867452022	31/08/2015	201507	201508											X							1	1	1	1	230301		
CC 1014183404	PENAGOS CABRERA DIEGO ALEXANDER	8841921442 / 8863767522	28/07/2015	201506	201507																		30	30	30	30	230301		
CC 1014183404	PENAGOS CABRERA DIEGO ALEXANDER	8840293282 / 8861555092	07/07/2015	201505	201506																		30	30	30	30	230301		
CC 1014183404	PENAGOS PENAGOS DIEGO ALEXANDER	8837845422 / 8854766392	14/05/2015	201504	201505																		30	30	30	30	230301		
CC 1014183404	PENAGOS CABRERA DIEGO ALEXANDER	8837842222 / 8854761562	13/05/2015	201503	201504																		30	30	30	30	230301		
CC 1014183404	PENAGOS PENAGOS DIEGO ALEXANDER	8834268402 / 8849012902	19/03/2015	201502	201503																		30	30	30	30	230301		
CC 1014183404	PENAGOS CABRERA DIEGO ALEXANDER	8833557872 / 8847551612	06/03/2015	201501	201502																		30	30	30	30	230301		
CC 1014183404	PENAGOS CABRERA DIEGO ALEXANDER	8832282822 / 8841394912	30/01/2015	201412	201501																		30	30	30	30	230301		

Verificando dicha planilla 8875846262 observa la sala que, si bien se canceló un aporte para el periodo de cotización SEPTIEMBRE de 2015, este correspondió solo a EPS, encontrándose en cero (0) AFP, ARP y CCF, por ende, si existe una deuda frente a ese periodo de **SEPTIEMBRE del 2015** que deberá ser incluido en la liquidación del crédito.

18) FRANKLIN CAMILO MONTES SIERRA: Se solicita el pago del periodo de enero del 2016, el cual señala la ejecutada que si lo pagó mediante la planilla 8888779292 (pág. 18 Archivo 11 expediente digital).

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																							
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF
CC 1023960267	MONTES SIERRA FRANKLIN CAMILO	8828294712 / 8800146212	06/12/2016	201611	201612																		30	30	30	30
CC 1023960267	MONTES SIERRA FRANKLIN CAMILO	8866856642 / 8800009822	08/11/2016	201610	201611																		30	30	30	30
CC 1023960267	MONTES SIERRA FRANKLIN CAMILO	8865063652 / 8816950022	06/10/2016	201609	201610																		30	30	30	30
CC 1023960267	MONTES SIERRA FRANKLIN CAMILO	8862898702 / 8812430682	06/09/2016	201608	201609																		30	30	30	30
CC 1023960267	MONTES SIERRA FRANKLIN CAMILO	8861028802 / 8808152952	01/08/2016	201607	201608																		30	30	30	30
CC 1023960267	MONTES SIERRA FRANKLIN CAMILO	8859330762 / 8804170462	01/07/2016	201606	201607												X						30	30	29	29
CC 1023960267	MONTES SIERRA FRANKLIN CAMILO	8858690822 / 8802576942	17/06/2016	201605	201606																		30	30	30	30
CC 1023960267	MONTES SIERRA FRANKLIN CAMILO	8856124742 / 8896731562	02/05/2016	201604	201605																		30	30	30	30
CC 1023960267	MONTES SIERRA FRANKLIN CAMILO	8855489042 / 8895228262	14/04/2016	201603	201604																		30	30	30	30
CC 1023960267	MONTES SIERRA FRANKLIN CAMILO	8853647592 / 8891216572	14/03/2016	201602	201603																		30	30	30	30
CC 1023960267	MONTES SIERRA FRANKLIN CAMILO	8852614272 / 8888779292	02/03/2016	201601	201602	X																	0	11	0	0
CC 1023960267	SIERRA CAMILO	8851797062 / 8887020582	15/02/2016	201512	201601	X																	10	10	10	10

No obstante, conforme a esa planilla, lo que se evidencia es que canceló tan solo 11 días de aportes al sistema de salud (EPS), encontrándose en cero (0) AFP, ARP y CCF, por ende, si existe una deuda frente a ese periodo de **ENERO del 2016** que deberá ser incluido en la liquidación del crédito, por los 30 días.

19) JOAN SEBASTIAN GARCIA LOZANO: Se están cobrando los periodos de abril del 2014 a junio del 2016, pero el ejecutado señala que su ingreso a la empresa fue el 19 de marzo del 2014 y su retiro el 3 de abril del 2014, por lo que tan solo acepta la deuda de 3 días de este último mes (pág. 19 Archivo 11 expediente digital)



INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA
NIT:800.093.106-2
LIQUIDACION DE TRABAJO

NOMBRE DEL EMPLEADO : GARCIA LOZANO JOAN SEBASTIAN
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO : GUARDA
CLASE DE CONTRATO : FIJO A UN AÑO
CAUSA DE LA TERMINACION : VOLUNTARIO

TERMINACION DE CONTRATO		BASE DE LIQUIDACION	
FECHA DE RETIRO	3/04/2014	ULTIMO SUELDO	616.000
FECHA DE INGRESO	19/03/2014	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	72.000
SUBTOTAL(TIEMPO)		PROMEDIO DE HORAS EXTRAS, RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS	
MENOS LICENCIAS			
MENOS SANCIONES			
TIEMPO NETO	15	BASE DE LIQUIDACION	$ 688.000

De acuerdo a ello, en efecto solo resulta procedente el pago de **3 días del mes de ABRIL del 2014**, pues fue hasta la fecha en que laboró para la ejecutada dicha persona, incluso así se encuentra incluido por PORVENIR en la última liquidación aportada a ese proceso.

20) JOSE LUIS REINA ALAPE: Se cobran periodos de mayo del 2013 al mes de agosto del mismo año, sobre los cuales el ejecutado acepta la deuda (pág. 10 Archivo 11 expediente digital).

Se deben cancelar por esta razón los aportes de **MAYO a AGOSTO del 2013**.

En consecuencia, los periodos realmente adeudados por la sociedad INVERSIONES DE SEGURIDAD LIMITADA, conforme a la anterior explicación corresponden a:

	NOMBRE DEL AFILIADO	PERIODO	DÍAS ADEUDADOS DE COTIZACIÓN
1	JOSE GREGORIO OSPINO	sep-13	14 DÍAS
2	DIEGO ALEXANDER PENAGOS CABRERA	sep-15	30 DIAS
3	JOSE LUIS VILLARREAL ALBARRACIN	dic-15	30 DÍAS
4	FRANKLIN CAMILO MONTES SIERRA	ene-16	30 DÍAS
5	JOAN SEBASTIAN GARCIA LOZANO	abr-14	3 DÍAS
6	JOSE LUIS REINA ALAPE	may-13	30 DÍAS
		jun-13	30 DÍAS
		jul-13	30 DÍAS
		ago-13	30 DÍAS
7	ARMANDO CARDONA CARDENAS	ago-14	30 DÍAS
		sep-14	30 DÍAS

Dilucidado lo anterior, procede entonces la Sala a concretar el valor adeudado por aportes e intereses para cada uno de los respectivos trabajadores, con corte al 31 de agosto del 2022, data tomada por la Juez de primer grado al momento de aprobar la liquidación del crédito y que corresponde al mes en que el ejecutado presentó su objeción a la liquidación efectuada por PORVENIR.

Para los intereses de mora se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, Articulo 28 del Decreto 692 de 1994 y el artículo 635 del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 141 de la Ley 1607 de 2012), los cuales señalan:

Ley 100 de 1993:

> **ARTÍCULO 23. SANCIÓN MORATORIA.** Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según sea el caso.
>
> Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.
>
> En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente.

Decreto 692 de 1994 "*Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993.*"

> Artículo 28. Intereses de mora. Sin perjuicio de las demás sanciones que puedan imponerse por la demora en el cumplimiento de la obligación de retención y pago, en aquellos casos en los cuales la entrega de las cotizaciones se efectúe con posterioridad al plazo señalado, el empleador deberá cancelar intereses de mora a la tasa que se encuentre vigente por mora en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios. Dichos intereses de mora, deberán ser autoliquidados por el empleador, sin perjuicio de las correcciones o cobros posteriores a que haya lugar.
>
> La liquidación de los intereses de mora se hará por mes o fracción de mes, en forma análoga a como se liquidan los intereses de mora para efectos de impuestos nacionales.
>
> Las sumas canceladas a título de mora serán abonadas en el fondo de reparto correspondiente o en la cuenta de capitalización individual del respectivo afiliado.
>
> Tratándose de afiliados independientes, no habrá lugar a la liquidación de intereses de mora, toda vez que las cotizaciones se abonarán por mes anticipado y no por mes vencido.

Estatuto Tributario Decreto 624 de 1989 "*Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales*"

> ARTICULO 635. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO. <Artículo modificado por el artículo 141 de la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:>
>
> <Inciso modificado por el artículo 279 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará la tasa correspondiente en su página web.
>
> Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley generarán intereses de mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital que no

> incorporen los intereses de mora generados antes de la entrada en vigencia de la presente ley.
>
> <Inciso adicionado por el artículo 49 del Decreto Ley 2106 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Para liquidar los intereses moratorios de que trata este artículo aplicará la fórmula establecida en el parágrafo del artículo 590 del Estatuto Tributario.
>
> PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales.

Ley 1066 de 2006 "*Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones*"

> ARTÍCULO 12. Modifíquese el artículo 635 del Estatuto Tributario, el cual queda así:
>
> "Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos tributarios y frente a obligaciones cuyo vencimiento legal sea a partir del 1o de enero de 2006, la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora.
>
> Las obligaciones con vencimiento anterior al 1o de enero de 2006 y que se encuentren pendientes de pago a 31 de diciembre de 2005, deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa vigente el 31 de diciembre de 2005 por el tiempo de mora trascurrido hasta este día, sin perjuicio de los intereses que se generen a partir de esa fecha a la tasa y condiciones establecidas en el inciso anterior.
>
> PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales".

Ley 1607 de 2012 "*Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"*

> ARTÍCULO 141. Modifíquese el artículo 635 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
>
> Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo.
>
> Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley generarán intereses de mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital que no incorporen los intereses de mora generados antes de la entrada en vigencia de la presente ley.
>
> PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales.

Así mismo se tiene en cuenta el Decreto Ley 538 del 12 de abril del 2020 que contiene una excepción al pago de los intereses de mora así:

> **ARTÍCULO 26. <Emergencia vigente hasta el 30 de junio de 2022. Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 385 de 2020>** Adiciónese un parágrafo al artículo 3o de la Ley 1066 de 2006, el cual quedará así:
>
> "Parágrafo. Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID- 19, y hasta el mes siguiente calendario a su terminación, no se causarán intereses moratorios por las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, que se paguen en forma extemporánea.
>
> Para efectos de lo aquí previsto el Ministerio de Salud y Protección Social efectuará las respectivas modificaciones en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA."

Conforme a ello a partir del periodo marzo de 2020 y hasta julio del 2022 no se liquidan los correspondientes intereses moratorios, en tanto de acuerdo a esta normativa no se causaron por la emergencia sanitaria.

Obteniendo esta Sala de Decisión como valor adeudado por INVERSIONES DE SEGURIDAD LIMITADA la suma de **$2.920.423,73**, de la cual corresponden $1.148.042,67 por aportes y $1.772.381,06 por intereses de mora con corte al 31 de agosto del 2022, y será por esta suma que deberá aprobarse la liquidación del crédito, modificándose parcialmente el proveído del 7 de octubre de 2022.

Tabla Liquidación Crédito		*Subtotal*
Aportes pension Jose Ospino	*$ 54.506,67*	*$ 151.159*
Interes de mora Jose Ospino	*$ 96.652,29*	
Aportes pension Diego Penagos	*$ 128.000,00*	*$ 285.194*
Interes de mora Diego penagos	*$ 157.194,17*	
Aportes pension Jose Villareal	*$ 128.000,00*	*$ 276.472*
Interes de mora Jose Villareal	*$ 148.471,93*	
Aportes pension Franklin Montes	*$ 122.400,00*	*$ 261.596*
Interes de mora Franklin Montes	*$ 139.196,07*	
Aportes pension Joan Garcia	*$ 9.856,00*	*$ 25.766*
Interes de mora Joan Garcia	*$ 15.909,76*	
Aportes pension Jose Reina	*$ 467.200,00*	*$ 1.322.178*
Interes de mora Jose Reina	*$ 854.978,32*	
Aportes pension Armando Cardona	*$ 238.080,00*	*$ 598.059*
Interes de mora Armando Cardona	*$ 359.978,53*	
Total Liquidación	***$ 2.920.423,73***	

Así las cosas, como quiera que existen diferencias en la liquidación efectuada en esta instancia, deberá el Juez *a quo* modificar el auto impugnado teniendo en cuenta lo expuesto.

SIN COSTAS en esta instancia.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.**, Sala Laboral,

R E S U E L V E

PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE el auto recurrido de fecha 7 de octubre del 2020, en cuanto a que la Juez *a quo* deberá aprobar la liquidación del crédito en la suma de **$2.920.423,73**, distribuida de la siguiente manera:

Tabla Liquidación Crédito		*Subtotal*
Aportes pension Jose Ospino	*$ 54.506,67*	*$ 151.159*
Interes de mora Jose Ospino	*$ 96.652,29*	
Aportes pension Diego Penagos	*$ 128.000,00*	*$ 285.194*
Interes de mora Diego penagos	*$ 157.194,17*	
Aportes pension Jose Villareal	*$ 128.000,00*	*$ 276.472*
Interes de mora Jose Villareal	*$ 148.471,93*	
Aportes pension Franklin Montes	*$ 122.400,00*	*$ 261.596*
Interes de mora Franklin Montes	*$ 139.196,07*	
Aportes pension Joan Garcia	*$ 9.856,00*	*$ 25.766*
Interes de mora Joan Garcia	*$ 15.909,76*	
Aportes pension Jose Reina	*$ 467.200,00*	*$ 1.322.178*
Interes de mora Jose Reina	*$ 854.978,32*	
Aportes pension Armando Cardona	*$ 238.080,00*	*$ 598.059*
Interes de mora Armando Cardona	*$ 359.978,53*	
Total Liquidación	***$ 2.920.423,73***	

SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad INVERSIONES DE SEGURIDAD LIMITADA, proceda a efectuar la corrección de las planillas Nos 8887020582 y 8826148589 en cuanto al nombre, apellidos y periodo de cotización de los siguientes trabajadores, conforme a lo explicado en la parte motiva de esta providencia:

- OVIDIO VELASQUEZ SALINAS.
- ALEXANDER GARCÍA ROMERO.
- JUAN DIEGO RIVAS PALACIOS.
- WILLIAM ARTURO ROMERO FUENTES.
- JORGE ELIECER PEREZ TORRES.
- DARLEIN DURAN SÁNCHEZ

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTA D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR WILMA ELIZABETH CANO BÁEZ CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y SKANDIA S.A. (21 2022 00122 01)

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado para presentar los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el artículo 13 numeral segundo de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente,

P R O V I D E N C I A

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. contra el proveído calendado 24 de enero del 2023 (*Archivo 17 expediente digital*), mediante el cual se negó el llamamiento en garantía respecto de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., en razón a que la juez de primera instancia consideró no satisfechos los presupuestos previstos en el artículo 64 del C.G.P. por cuanto la acción se dirige a obtener principalmente la ineficacia de la afiliación al régimen pensional de ahorro individual, con las consecuencias que ello acarrea y el objeto de las pólizas es amparar los riesgos por muerte e invalidez sin que el proceso se encamine a que la AFP responda por dichas contingencias.

Como se indicó, la decisión anterior fue objeto de apelación por parte de SKANDIA S.A., como se advierte en el escrito que milita en el *Archivo 18 del expediente digital*, con el cual pretende se revoque la decisión impugnada y, en su lugar, se admita el llamamiento en garantía propuesto, argumentando para el efecto que, en el evento de conceder la ineficacia y se condene a la devolución del porcentaje de Gastos de Administración la prima pagada como contraprestación legal por ese

seguro, la entidad llamada a realizar esa devolución es la aseguradora MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., que fue la que recibió la prima pagada por su representada, siendo esto, a su juicio, lo que justifica su llamamiento en garantía al tenor de lo previsto en el artículo 64 del C.G.P.

Bajo esa orientación entonces, supone, dada la existencia de un vínculo contractual, en caso de condena, es esa sociedad –MAPRE COLOMBIA VIDA SEEGUROS S.A.- quien debería reembolsar los valores pagados por concepto de seguro previsional obligatorio.

Para resolver se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Asume la Sala el conocimiento de este ordinario, en orden a desatar el recurso de apelación propuesto por SKANDIA, contra el auto que negó la intervención como llamada en garantía de MAPRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., debiendo señalar, en primer lugar, tal proveído, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

Al punto, memórese, con el llamamiento en garantía, y según lo estatuido en el artículo 64 del C.G.P. [1], se habilita al llamante a convocar a un tercero que le proteja y pague por él o le reembolse lo que erogó por razón de la condena, figura que a su vez posibilita que un demandado llame en garantía a otro demandado (demanda de coparte).

Así, dicha figura procesal se origina cuando la parte de un proceso hace intervenir en el mismo a un tercero que debe proteger o garantizar al llamante, cubriendo los riesgos que se derivan de las peticiones de otro sujeto distinto, siempre y cuando haya un riesgo en el que llama y que por ley o por contrato deba ser protegido o garantizado por el que se llama.

[1] "*Artículo 64. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*"

Sobre el tema el maestro DEVIS ECHANDÍA explicaba que

> "(…) *con alguna frecuencia ocurre que una de las partes -demandante o demandada-* ***tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar como resultado, por existir entre él y ese tercero una relación de garantía,*** *es decir, aquella en virtud de la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona. En otras ocasiones, el derecho a citar al tercero proviene de una relación jurídica distinta, existente entre los dos, respecto a la cosa materia del litigio, como cuando el tenedor demandado en reivindicación denuncia al verdadero poseedor en cuyo nombre tiene el inmueble. Esa citación puede prevenir (sic) también de la pretensión excluyente de un tercero sobre la misma cosa"*[2]).

Además la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, advirtió que para que proceda el llamamiento en garantía se requiere que exista –la garantía-, es decir, que este último, por ley o por contrato, esté obligado a indemnizar al llamante por la condena al pago de los perjuicios que llegare a sufrir, o que esté obligado, en la misma forma, al "*reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia*"[3]. Sobre el particular ha sostenido esa Corporación:

> *"El llamamiento en garantía es uno de los casos de comparecencia forzosa de terceros, que se presenta cuando entre la parte y el tercero, existe una relación legal o contractual de garantía que lo obliga a indemnizarle al citante el "perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia" que se dicte en el proceso que genera el llamamiento.*
>
> ***La justificación procesal del llamamiento en garantía, previsto en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil*** -hoy artículo 64 del C.G.P.-, ***no es otra que la de la economía, pues lo que se procura es hacer valer en un mismo proceso, las relaciones legales o contractuales que obligan al tercero a indemnizar, sin perjuicio,***

---

[2] " Devis Echandía, Hernando, nociones generales de derecho procesal civil, segunda edición, Temis, Bogotá 2009, página 519.

[3] *"(...) como el vocablo mismo así lo indica, para que proceda el llamamiento en garantía requiérese que la halla; es decir, que exista un afianzamiento que asegure y proteja al llamante contra algún riesgo, según la definición que de garantía da la Real Academia Española. O, en otras palabras, que el llamado en garantía, por ley o por contrato, esté obligado a indemnizar al llamante por la condena al pago de los perjuicios que llegare a sufrir, o que esté obligado, en la misma forma, al "reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia", según los términos del artículo 57 del C. de P. Civil".*

Agregó además que "el llamamiento en garantía se produce, al decir de Guasp, «cuando la parte de un proceso hace intervenir en el mismo a un tercero, que debe proteger o garantizar al llamante, cubriendo los riesgos que se derivan del ataque de otro sujeto distinto, lo cual debe hacer el tercero, bien por ser transmitente: llamado formal, o participante: llamado simple, de los derechos discutidos». En uno y otro caso precísase, como se dejó dicho antes, que haya un riesgo en el llamante, que por ley o por contrato deba ser protegido o garantizado por el llamado; o según palabras del Art. 57 ya citado, que el llamante tenga "derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia" Sentencia Sala de Casación Civil, CSJ. radicado 2393 del 14 oct. 1976, reiterada en sentencia SC1304 de 2018.

> ***claro está, de las garantías fundamentales del proceso, que en manera alguna se ven conculcadas. Por tal razón, la Corte ha sostenido que "El texto mismo del precepto transcrito indica que el llamamiento en garantía requiere como elemento esencial que por razón de la ley o del contrato, el llamado deba correr con las contingencias de la sentencia, como consecuencia de la cual el demandado se vea compelido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago" (Sent. de 11 de mayo de 1976).***
>
> *(…)*
>
> *Ahora, sea que el llamamiento en garantía lo proponga una u otra parte, lo significativo* ***es que éste comporta el planteamiento de la llamada pretensión revérsica, o la "proposición anticipada de la pretensión de regreso" …, o el denominado "derecho de regresión" o "de reversión"****, como lo ha indicado la Corte, que tiene como causa la relación sustancial de garantía que obliga al tercero frente a la parte llamante, "a indemnizarle el perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia" (artículo 57). De modo que, de acuerdo con la concepción que sobre el llamamiento en garantía establece el texto legal antes citado,* ***la pretensión que contra el tercero se formula es una pretensión de condena eventual (in eventum), es decir, que ella sólo cobra vigencia ante el hecho cierto del vencimiento de la parte original y que con ocasión de esa contingencia de la sentencia****, "se vea compelido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago", como lo ha dicho la Corte."*[4](Negrilla y Subrayas de la Sala)

De igual forma, en sentencia del 16 dic. 2006, rad. 2000-00276-01, concluyó:

> *"El llamamiento en garantía es un instrumento procesal por el cual se provoca la comparecencia forzosa de un tercero a un proceso en curso, intervención que tiene su germen en la citación que le formula una de las partes en dicha contienda, con fundamento en la relación de garantía de naturaleza personal entre ellos existente, que le confiere el derecho de exigirle que corra con las consecuencias perjudiciales que deba soportar en el evento de resultar vencida en el juicio, de ahí que lo llame a afrontar la pretensión de regreso que introduce para que sea considerada in eventum, es decir, en el caso de perder el pleito. En otras palabras, lo trae al proceso para que se resuelva sobre la obligación legal o contractual que tiene de reembolsarle o indemnizarle las pérdidas económicas que experimente en el caso de un sentenciamiento adverso.*
>
> *Con el llamamiento en garantía, tiene dicho la Corte, se suscita un 'evento de acoplamiento o reunión de una causa litigiosa principal con otra de garantía que le es colateral, dando lugar a una modalidad acumulativa cuyos alcances precisa el art. 57 del C. de P.C.' (…), que conjuga dos relaciones materiales distintas. Por un lado, la que une al demandante con el demandado, y por el otro, la que liga al demandado con el llamado: 'la del demandante contra el demandado, en procura de que este sea condenado de acuerdo con las pretensiones de la demanda contra él dirigida; y la del demandado contra el llamado en garantía a fin de que éste lo indemnice o le reembolse el monto de la condena que sufriere' (…)."*[5]

Adicionalmente, esa Corporación precisó que "*La relación material del llamamiento involucra únicamente al llamante y a la llamada. No se expande a ningún otro sujeto procesal ni siquiera a la parte actora, al punto que solo será*

[4] Corte Suprema de Justicia, sentencia SC1304 de 2018.
[5] CSJ SC 16 dic. 2006, rad. 2000-00276-01

objeto de estudio en el evento de prosperidad de las súplicas, de modo que si éstas se desestimaren el análisis resulta inocuo o innecesario, por regla general"[6]

En el mismo sentido, la Sala Laboral del órgano de cierre de esta jurisdicción, en sentencia SL 5031 de 2019, explicó

> *"Así, el aludido llamamiento se caracteriza porque una de las partes tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar en el juicio, por existir entre él y ese tercero una relación de garantía, es decir, aquella en virtud de la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona. Pero esa no es la única posibilidad, porque suele suceder, que el derecho a citar al tercero proviene de una relación diferente entre los dos, como cuando se discute en materia laboral, si el empleador se subrogó en la ARL en las prestaciones de ese sistema.*
>
> *"Aquí, lo importante es que exista un afianzamiento que asegure y proteja al llamante contra algún riesgo, pues eso es la esencial del término "garantía", esto es, protección o defensa contra el ataque de otro sujeto, que por Ley o por convención, el llamado debe salir a cubrir en nombre del llamante."*

Así las cosas, como se indicó desde el inicio de este proveído, la apoderada de SKANDIA S.A., insiste en el llamamiento en garantía de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., pues asegura que en virtud de los contratos de seguro previsional cuya vigencia estuvo comprendida entre 2007 y 2018, los cuales corresponden a las pólizas Nos. 9201407000002 y 9201411900149 (*páginas 112 a 126, archivo 16 "ContestacionDemandaLlamamientoGarantiaSkandia"*), es su obligación devolver los valores recibidos por concepto de prima, en caso de que la AFP resulte condenada a la restitución de los gastos de administración como consecuencia de la ineficacia del traslado.

No obstante, en sentir de esta Corporación, en virtud de las referidas pólizas de seguros, la aseguradora cuya integración se pretende no está obligada a cubrir ninguna de las eventuales condenas, atendiendo que lo pretendido en autos no es otra cosa que la declaratoria de la ineficacia del traslado de régimen, por falta de cumplir con el deber de información, en la afiliación realizada por la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad con el consecuente retorno al régimen de prima media con prestación definida y el traslado de las sumas de dinero que figuren en la cuenta de ahorro individual como bonos, aportes, rendimientos, comisiones etc. (*Archivo 1 expediente digital, páginas 6 y 7*).

[6] CSJ SC5885-2016, reiterada en auto AC2900-2017.

El anterior razonamiento encuentra sustento en lo previsto en el artículo 108[7] de la Ley 100 de 1993, que impone a las administradoras de fondos de pensiones el deber de contratar seguros colectivos previsionales que concurran a la financiación de las pensiones de invalidez y sobrevivientes que deban reconocerse a los afiliados del RAIS, lo cual implica que la garantía contratada solo se activa cuando ocurre el reconocimiento de dichas prestaciones –invalidez y sobrevivientes- y se requiere completar el capital respectivo para su pago al beneficiario, aspectos no comprendidos en la discusión de autos, lo que desde luego torna en improcedente el llamamiento e impide darle el trámite respectivo.

En ese orden, se itera, ninguna de las obligaciones que eventualmente deriven de una sentencia favorable a la actora incumben a la entidad aseguradora según el objeto de la póliza que se contrató por parte de la AFP recurrente, y en ese orden, tal como lo concluyó la juez de primer grado, no se cumplen los requisitos exigidos por en el estatuto adjetivo civil para integrar a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. como llamada en garantía.

Agotada la competencia en esta instancia por el estudio de los motivos de apelación, conforme las motivaciones precedentes, se confirmará el auto apelado en lo pertinente.

COSTAS en esta instancia a cargo de SKANDIA S.A.

En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA – SALA LABORAL,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por la Juez 21 Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

---

[7] **ARTÍCULO 108. SEGUROS DE PARTICIPACIÓN.** Los seguros que contraten las administradoras para efectuar los aportes adicionales necesarios para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes deberán ser colectivos y de participación.

<Inciso modificado por el artículo 54 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno Nacional determinará la forma y condiciones cómo las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

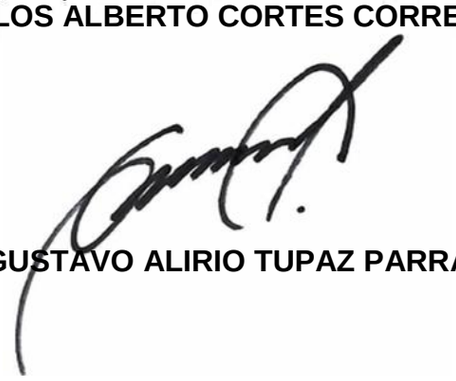
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $100.000, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán contratar los seguros previsionales para el pago de las pensiones de invalidez y sobrevivencia.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTA D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE FLOR ALBA ALARCÓN NIETO CONTRA GPP SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, CRUZ BLANCA EPS S.A. y SALUDCOOP EPS-ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP (RAD 22 2014 00245 01).

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

El presente proceso fue arribado a esta Corporación a propósito de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de SALUDCOOP EPS O.C hoy liquidada contra el auto proferido por el Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogotá el pasado 26 de febrero del 2023, mediante el cual dispuso la vinculación de Felipe Negret Mosquera, en calidad de Agente Especial Liquidador de SaludCoop EPS OC En Liquidación y a su vez señaló que aún cuando no se había solicitado su desvinculación del proceso, de una vez indicaría que no se desvincularía a tal entidad del trámite procesal, ello en los siguientes términos (Archivo 24 expediente digital):

> *"De otra parte, no se accederá a la solicitud de terminación del proceso o desvinculación de Cruz Blanca E.P.S., por cuanto, el artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 del 2010, aplicable en el proceso liquidatario de la mentada demandada, dispone que declarada la terminación de existencia legal de una entidad se celebrará contrato de mandato, que de lo enunciado, se suscribió con Ateb Soluciones Empresariales S.A.S., dentro del cual la otorga facultad al mandatario, para que, en ejercicio del mencionado pacto cancele en nombre de la entidad liquidada las obligaciones constituidas; en ese orden de ideas, para que el mandato se haga efectivo en ese sentido, debe existir obligaciones declaradas en contra de Cruz Blanca S.A., situación que no podría darse si se desvincula del proceso.*
>
> *Adicionalmente, no pasa desapercibido para esta juzgadora, que el artículo 9.1.3.6.4 del Decreto 2555 del 2010, contempla de manera específica que cuando subsistan procesos no definidos, el liquidador debe constituir una reserva, así las cosas, se vinculará igualmente al señor Felipe Negret Mosquera, y se procederá a correrle traslado de la demanda por el término de 10 días, para que, dentro de dicho lapso presente escrito de contestación, y específicamente aclare lo relacionado con la reserva propia para este proceso judicial.*

> *Por otra parte, el 13 de febrero del 2023 de la dirección electrónica notificacion@saludcoop.info se allegó memorial, por medio del cual, Felipe Negret Mosquera, en calidad de Agente Especial Liquidador de Saludcoop EPS OC En Liquidación comunica la terminación de existencia legal de la mentada entidad y allega unas resoluciones.*
>
> *Frente dicha situación, y si bien no se efectuó ninguna solicitud, al igual que la decisión tomada frente a Cruz Blanca E.P.S. Hoy Liquidada, de una vez dígase que no se desvinculará del proceso a la demandada Saludcoop EPS OC En Liquidación, y como no se mencionó la celebración de un contrato de mandato, se vinculará al liquidador, que no es otro que el señor Felipe Negret Mosquera."* (Subrayas fuera de texto).

Como argumentos de la alzada, el apoderado judicial de dicha pasiva sostiene (Archivo 26 expediente digital):

> *"…la capacidad para ser parte respecto de las personas jurídicas se acredita respecto de aquellas que existen en el mundo jurídico y no como lo es el caso de SALUDCOOP EPS OC hoy liquidada, entidad que salió de la vida jurídica el pasado 24 de enero de 2023, dado el cumplimiento de los requisitos propios de dicho trámite concursal y teniendo en cuenta que el vencimiento del término para culminar el proceso liquidatorio ocurrió en la fecha antes citada de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva No. 151 del 22 de Julio de 2022.*
>
> *(…)*
>
> *De las normas citadas, se deriva inexorablemente que una vez liquidada SALUDCOOP EPS OC LIQUIDADA esta desapareció, lo que se traduce en la falta de capacidad para contraer obligaciones, y a la postre, en la imposibilidad para ser parte en un proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo inciso 1° del artículo 633 del Código Civil.*
>
> *Así las cosas, SALUDCOOP EPS OC LIQUIDADA, carece de legitimación en la causa por pasiva, al carecer de personería jurídica, capacidad de goce y ejercicio. En virtud de lo anterior, a partir de la fecha que declara terminada la existencia legal de SALUDCOOP EPS OC LIQUIDADA, ningún tercero puede iniciar, promover o continuar demanda o actuación administrativa contra SALUDCOOP EPS OC LIQUIDADA al carecer de capacidad procesal.*
>
> *Adicionalmente a lo anterior el liquidador, doctor Felipe Negret Mosquera, se encontraba legitimado para actuar hasta el 24 de enero de enero de 2023, fecha en la cual se dio por terminada la liquidación de la entidad.*
>
> *(…)*
>
> *Así las cosas, se confirma con las providencias antes citadas, la imposibilidad de iniciar y/o continuar procesos en los cuales se encuentren inmersas entidades liquidadas, como lo es el caso de SALUDCOOP EPS OC hoy Liquidada, puesto que se extinguió la personalidad jurídica y por tal motivo dejó de ser sujeto de obligaciones, tal y como se expuso de manera precedente.*
>
> *(…)*
>
> ***De acuerdo con lo expresado anteriormente, solicitamos la terminación y/o desvinculación de SALUDCOOP EPS OC hoy Liquidada, dado que, desde el 24 de***

enero de 2023, fecha en que se extinguió su personería jurídica, motivo por el cual no puede ser parte procesal y mucho menos sujeto de obligaciones que se puedan declarar en el trámite del proceso de la referencia. (Negrillas fuera de texto)

(…)

Mediante resolución 2083 del 24 de enero de 2023, se declara terminada la existencia legal de SaludCoop EPS S.A O.C (…)

De acuerdo con lo anterior, es claro que el agente liquidador, culminó su labor el 24 de enero de 2023 y no está facultado de manera alguna para responder en juicio como sucesor procesal de la entidad liquidada y adicional a lo anterior, sus facultades como agente liquidador de la extinta quedaron totalmente relevadas.

Adicional a lo anterior, los acreedores tenían la obligación de presentar su acreencia al proceso liquidatorio para que fuera graduada y calificada de acuerdo a las normas que lo regulan, lo cual no ocurrió en el caso de Flor Alba Rincón y al no haberlo realizado estaría violando el principio de igualdad de los acreedores que gobiernan este tipo de procesos.

(…)

En la medida que no existe motivación, solicito respetuosamente revocar la decisión de vinculación del ex liquidador Felipe Negret Mosquera al proceso.

Adicional a lo anterior, se puede concluir que la capacidad para ser parte respecto de las personas jurídicas se acredita respecto de aquellas que existen en el mundo jurídico y no como lo es el caso de SALUDCOOP EPS OC hoy liquidada, entidad que salió de la vida jurídica el pasado 24 de enero de 2023, dado el cumplimiento de los requisitos propios de dicho trámite concursal y teniendo en cuenta que el vencimiento del término para culminar el proceso liquidatorio ocurrió en la fecha antes citada de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva No. 151 del 22 de Julio de 2022.Por lo anterior, solicitamos proceder a la desvinculación del presente proceso a Saludcoop EPS S.A O.C hoy liquidada."

A efectos de resolver lo pertinente, conviene precisar, antes de entrar en vigencia la reforma al Código de Procedimiento Laboral, Ley 712 de 2001, para la viabilidad del recurso de apelación era necesario analizar, de conformidad con el artículo 65 del C.P.L., si el auto atacado en primera instancia era interlocutorio, o de sustanciación.

Para dicho análisis el juez de primer grado debía tener en cuenta que el auto de sustanciación, es todo aquel que se limita a ordenar un trámite de los consagrados por la ley para la procedibilidad del proceso, en términos generales puede decirse que es aquel que le da impulso al proceso, mientras que el auto interlocutorio, es aquel que sin resolver el objeto del litigio, si decide cuestiones importantes, incluso de tanta trascendencia dentro del proceso que pueden ponerle fin o causarle agravio a una de las partes.

Con la reforma de la norma procesal laboral, se producen notables cambios en materia del recurso de apelación, variando con ello el análisis previo que debía hacer el juez de conocimiento para la concesión del recurso, de esta manera se taxaron en el artículo 29 de la ya referida Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 65 del C.P.T. y S.S.[1], los autos sobre los cuales era procedente conceder la apelación.

En el caso de marras y analizadas las diligencias, se advierte que el auto por el cual **ORDENA LA VINCULACIÓN** del liquidador de Saludcoop EPS OC **y a su vez señala que no procede su DESVINCULACIÓN DEL PROCESO** no se encuentra enlistando en el artículo mencionado de manera precedente, así como tampoco se prevé la procedencia de este medio de impugnación dentro de aquellos a que se refiere el artículo 321[2] del C.G.P., que enumera las providencias apelables.

---

[1] ***ARTICULO 65. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION.*** *<Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:*
1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada.
2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros.
3. El que decida sobre excepciones previas.
4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.
5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.
6. El que decida sobre nulidades procesales.
7. El que decida sobre medidas cautelares.
8. El que decida sobre el mandamiento de pago.
9. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.
10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo.
11. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho.
12. Los demás que señale la ley.
El recurso de apelación se interpondrá:
1. Oralmente, en la audiencia en que fue proferido el auto y allí mismo se concederá si es procedente.
2. Por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes cuando la providencia se notifique por estado. El juez resolverá dentro de los dos (2) días siguientes.
Este recurso se concederá en el efecto devolutivo enviando al superior copia de las piezas del proceso que fueren necesarias, salvo que la providencia recurrida impida la continuación del proceso o implique su terminación, caso en el cual se concederá en el efecto suspensivo.
El recurrente deberá proveer lo necesario para la obtención de las copias dentro de los cinco (5) días siguientes al auto que concedió el recurso. En caso contrario se declarará desierto.
Las copias se autenticarán gratuitamente por el secretario. Cumplido lo anterior deberán enviarse al superior dentro de los tres (3) días siguientes.
La sentencia definitiva no se pronunciará mientras esté pendiente la decisión del superior, cuando esta pueda influir en el resultado de aquella.

[2] *"**ARTÍCULO 321. PROCEDENCIA**. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.*
También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:
1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.
2. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros.
3. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.
5. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva.

Entonces, bajo la postura asumida se sigue de manera obligada la inadmisión del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D. C, SALA LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO: INADMITIR por las razones expuestas por la Sala el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 23 de febrero del 2023.

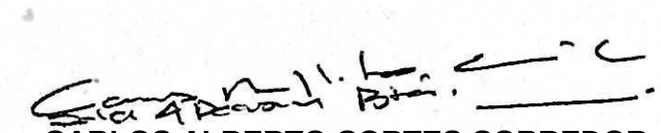
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

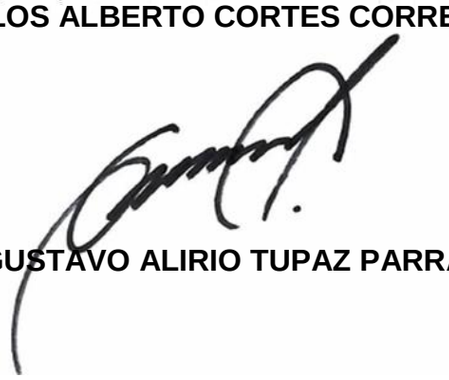
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

---

6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva.
7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.
9. El que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano.
10. Los demás expresamente señalados en este código."

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTA D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE RICARDO MARCIALES MILLÁN CONTRA LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, LA JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y vinculados como litisconsortes COLMENA SEGUROS y CAFESALUD EPS (RAD 24 2014 00646 01).

Bogotá D.C. Treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

El presente proceso fue arribado a esta Corporación a propósito de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., mandataria con representación de CAFESALUD EPS hoy LIQUIDADA, contra el auto proferido por el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá el pasado 16 de enero del 2023 (archivo 1 expediente digital págs. 848 a 850), mediante el cual se determinó:

> Atendiendo la jurisprudencia transcrita tenemos que, a través de auto de 23 de agosto de 2016, se dispuso la integración como litisconsorcio necesario a la demandada CAFESALUD EPS S.A., no obstante, con el escrito de contestación presentado por dicha entidad el 10 de marzo de 2021 visto folio 573 y ss, al no existir constancia de su notificación a través de auto de 12 de octubre de 2021 como da cuenta el documento obrante a folio 595 se dispuso tenerla por notificada por conducta concluyente, lo que quiere decir que la litis se trabó cuando la entidad todavía existía, esto es, en la fase liquidatoria, puesto que su extinción total acaeció el 23 de mayo de 2022, lo que conlleva a que deban soportar los efectos de este proceso que finaliza con la respectiva sentencia, adicionalmente, el artículo 222 del Código de Comercio, aplicable a los juicios laborales por remisión normativa del artículo 145 del estatuto procesal del trabajo, establece que cualquier operación o acto ajeno a la liquidación, salvo los autorizados expresamente por la ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto; es decir, que es viable continuar un proceso en contra de sociedades liquidadas y disueltas como en el presente caso.
>
> Lo anterior tiene su razón de ser, puesto que conforme al inciso 2° del artículo 68 del CGP cuando en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos, aunque no concurran, las anteriores razones, llevan a considerar que no se dan los presupuestos para desvincular del presente proceso a CAFESALUD EPS S.A. hoy LIQUIDADA, siendo del caso negar la petición elevada.

DISPONE

PRIMERO.- TENER por contestada la demanda por parte de la demandada **CAFESALUD EPS S.A. hoy LIQUIDADA**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO.- NEGAR la solicitud de desvinculación del proceso de la demandada **CAFESALUD EPS S.A., hoy LIQUIDADA**, conforme las consideraciones antes expuestas.

TERCERO.- ACEPTAR la renuncia presentada por los doctores JULIANA PATRICIA MORAD ACERO identificada con CC No. 1.018.417.398 y T.P. No. 249.746 del C. S. de la J., y FABIO ALEJANDRO GÓMEZ CASTAÑO identificado con CC No. 1.018.414.971 y T.P. No. 237.180 del C. S. de la J., como apoderados judiciales de MEDIMAS EPS.

CUARTO.- RECONOCER personería a la abogada **KATIUSKA LICETH DIAZ ROJANO** identificada con C.C. No. 1.065.623.203 y T.P. No. 259.872 del C. S. de la J., como apoderada judicial de la demandada **MEDIMAS EPS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN,** en los términos y para los fines a los que se contrae el memorial poder allegado.

QUINTO.- SEÑALAR el día **miércoles (24) de mayo de 2023** a partir de las **8:30 a.m.**, para surtir audiencia que trata el artículo 77 del CPTSS.

TERCERO.- ADVERTIR a las partes que una vez culminada la diligencia del artículo 77 del CPTSS, el Juzgado se constituirá en audiencia de que trata el artículo 80 del CPTSS.

CUARTO.- REQUERIR a las partes y sus apoderados en los términos expuestos en la parte motiva del presente proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NOHORA PATRICIA CALDERÓN ÁNGEL
JUEZ

Como argumentos de la alzada, el apoderado judicial de dicha pasiva sostiene (Archivo 1 expediente digital, págs. 852 a 858):

I. IMPOSIBILIDAD DE EFECTUAR PAGOS SOBRE EVENTUALES CONDENAS EN CONTRA DE CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN COMO CONSECUENCIA DE SU DESEQUILIBRIO FINANCIERO

Conforme lo precisado anteriormente con la expedición de la Resolución 003 del 15 de febrero de 2022, hoy se configura IMPOSIBILIDAD de constitución de la reserva en el inventario de activos y pasivos, motivo por el cual, existiendo a futuro un eventual fallo condenatorio por parte de autoridad judicial y en contra de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, sería jurídicamente imposible la satisfacción de dicha condena a favor del demandante, pues como se dijo los activos de CAFÉ SALUD EPS EN LIQUIDACIÓN que ascienden a la suma de UN BILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($1.153.415.433.990) tienen una destinación especifica (pago de los gastos de administración del proceso liquidatorio y una proporción de los créditos no masa presentados y reconocidos), y son insuficientes; en ese orden, dar continuidad al procesos judicial sólo conllevaría a un desgaste administrativo innecesario por cuanto no existen recursos para pago de condenas, haciéndose inocuo el presente trámite.

II. TERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA JURÍDICA DE CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

El día 23 de mayo de 2022, el Liquidador de CAFESALUD EPS S.A. profirió la **Resolución No. 331 DE 2022** "Por medio de la cual el liquidador declara terminada la existencia legal
" de CAFESALUD EPS S. A. EN LIQUIDACIÓN", en la que se resolvió:

Por lo expuesto, **CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN** desapareció de vida jurídica, lo que se traduce en la falta de capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y a la postre, en la imposibilidad para ser parte en un proceso, esto es, ser representada judicial y extrajudicialmente, de conformidad con loestablecido en el inciso 1° del artículo 633 del Código Civil.

En la Resolución que puso fin a la existencia de CAFESALUD EPS S.S. EN LIQUIDACIÓN de manera expresa se manifiesta que, como consecuencia de la terminación de la existencia legal de **CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN**, no existe subrogatorio legal, sustituto procesal o cualquier otra figura jurídico procesal que surta los mismos efectos.

III. PERDIDA DE LA CAPACIDAD PARA SER PARTE DE CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIACIÓN

Teniendo en cuenta que a la fecha **CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN perdió su personalidad jurídica y** concomitante a ello también **su capacidad para ser parte en procesos judiciales**, como consecuencia de la cancelación del registro mercantil se generó su extinción.

En el presente asunto deberá decretarse dicho hecho –pérdida de capacidad para ser parte de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN – que surgió con posterioridad al inicio del proceso judicial de la referencia, pues fue sobreviniente la Resolución 331 del 2022 que declaró terminada la existencia legal de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 800.140.949-6 y la inscripción de su cancelación en el registro mercantil. Situación que genera que hoy CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN no pueda comparecer en el proceso dirigido contra ella.

Frente al tema el Consejo de Estado tiene fijado un criterio de decisión según el cual **las personas jurídicas pierden la capacidad para ser parte en procesos judiciales, en el momento en que son efectivamente liquidadas, situación que ocurrió con CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN.**

(…)

V. DE LOS PROCESOS JUDICIALES AL CIERRE DEL PROCESO LIQUIDATORIO

La Resolución RES003088 de 15 de febrero de2022, declaró la imposibilidad material y financiera del **CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN para constituir la reserva técnica y económica que dispone el artículo 9.1.3.5.10 del Decreto 2555 de 2010 y** como consecuencia, en caso de producirse cualquier tipo de condena por concepto de procesos judiciales ordinarios, declarativos, ejecutivos, de responsabilidad fiscal y/o sancionatorios en contra de la entidad **CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN**, no será posible efectuar el pago de la eventual condena como tampoco atender la eventual solicitud del demandante de revocar el presente actoadministrativo para proceder a su inclusión entre las acreencias aceptadas, por el agotamiento total de los activos disponibles de **CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN.**

En este mismo sentido, es importante precisar al despacho que si bien el Liquidador, al suscribir el contrato de Mandato **No. 015 DE 2022** con la empresa **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S**, previó la atención de la defensa judicial, debe dejarse claro que talcomo su nombre lo indica dicho contrato es un MANDATO, donde el mandatario, deberá ceñirse rigurosamente a los términos del mandato, tal como lo establece del artículo 2157 del Código Civil, dentro de lo que claramente no se encuentra el reconocimiento de derechos o pagos diferentes a los previamente establecidos por el mandatario en los anexos que acompañan dicho contrato.

Se debe aclarar que para decretar sucesión procesal no basta con la manifestación de una persona o sujeto de derechos a la hora de reclamar su participación dentro del proceso en calidad de sucesor, si la misma no es acredita con suficiencia, esa específica condición, es decir, de ser el nuevo titular del interés legítimo odel derecho debatido que se encontraba en cabeza de la persona jurídica, demandante o demandada, que estaba

(…)

VI. DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL AGENTE ESPECIAL LIQUIDADOR.

El agente especial liquidador ejerce funciones públicas administrativas transitorias derivadas de su designación realizada por la Superintendencia Nacional de Salud. En ejercicio de dichafacultad el liquidador emite resoluciones, mediante las que expresa su voluntad, las cuales sonactos administrativos conforme al artículo 295 del Decreto 663 de 1993 y el articulo 2.4.2.4.5.del Decreto 2555 de 2010.

Los actos administrativos expedidos por el agente especial liquidador gozan de presunción de legalidad conforme al artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Es decir, el ordenamiento jurídico colombiano ha instituido la prerrogativa de validez en forma presuntiva a los actos mientras no sean anulados o revocados directamente.

Por todo lo expuesto, señor Juez, respetuosamente solicito se sirva revocar el auto descrito que negó la desvinculación y se sirva **declarar la desvinculación del proceso de la referencia del proceso a CAFESALUD EPS SA hoy LIQUIDADA**, según corresponda, como consecuencia de la terminación de la existencia legal de la entidad, el desequilibrio financiero y la ausencia absoluta de sucesor procesal o persona que haga sus veces, así mismo, se sirva ordenar el levantamiento de las medidas cautelares que se hayan decretado dentro del proceso de la referencia en contra de **CAFESALUD EPS SA hoy LIQUIDADA si es procedente,** se sirva ordenar la entrega a la sociedad Mandataria con Representación **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S**, los títulos judiciales constituidos con ocasión a las medidas cautelares decretadas y/o consignaciones realizadas o cualquier situación jurídica análoga en caso de ser pertinente.

A efectos de resolver lo pertinente, conviene precisar, antes de entrar en vigencia la reforma al Código de Procedimiento Laboral, Ley 712 de 2001, para la viabilidad del recurso de apelación era necesario analizar, de conformidad con el artículo 65 del C.P.L., si el auto atacado en primera instancia era interlocutorio, o de sustanciación.

Para dicho análisis el juez de primer grado debía tener en cuenta que el auto de sustanciación, es todo aquel que se limita a ordenar un trámite de los consagrados por la ley para la procedibilidad del proceso, en términos generales puede decirse que es aquel que le da impulso al proceso, mientras que el auto interlocutorio, es aquel que sin resolver el objeto del litigio, si decide cuestiones importantes, incluso de tanta trascendencia dentro del proceso que pueden ponerle fin o causarle agravio a una de las partes.

Con la reforma de la norma procesal laboral, se producen notables cambios en materia del recurso de apelación, variando con ello el análisis previo que debía hacer el juez de conocimiento para la concesión del recurso, de esta manera se taxaron en el artículo 29 de la ya referida Ley 712 de 2001, que modificó el artículo

65 del C.P.T. y S.S.[1], los autos sobre los cuales era procedente conceder la apelación.

En el caso de marras y analizadas las diligencias, se advierte que el auto por el cual **se niega la solicitud de DESVINCULACIÓN DEL PROCESO** no se encuentra enlistando en el artículo mencionado de manera precedente, así como tampoco se prevé la procedencia de este medio de impugnación dentro de aquellos a que se refiere el artículo 321[2] del C.G.P., que enumera las providencias apelables.

Entonces, bajo la postura asumida se sigue de manera obligada la inadmisión del recurso de apelación.

---

[1] ***ARTICULO 65. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION.*** *<Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:*
1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada.
2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros.
3. El que decida sobre excepciones previas.
4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.
5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.
6. El que decida sobre nulidades procesales.
7. El que decida sobre medidas cautelares.
8. El que decida sobre el mandamiento de pago.
9. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.
10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo.
11. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho.
12. Los demás que señale la ley.
El recurso de apelación se interpondrá:
1. Oralmente, en la audiencia en que fue proferido el auto y allí mismo se concederá si es procedente.
2. Por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes cuando la providencia se notifique por estado. El juez resolverá dentro de los dos (2) días siguientes.
Este recurso se concederá en el efecto devolutivo enviando al superior copia de las piezas del proceso que fueren necesarias, salvo que la providencia recurrida impida la continuación del proceso o implique su terminación, caso en el cual se concederá en el efecto suspensivo.
El recurrente deberá proveer lo necesario para la obtención de las copias dentro de los cinco (5) días siguientes al auto que concedió el recurso. En caso contrario se declarará desierto.
Las copias se autenticarán gratuitamente por el secretario. Cumplido lo anterior deberán enviarse al superior dentro de los tres (3) días siguientes.
La sentencia definitiva no se pronunciará mientras esté pendiente la decisión del superior, cuando esta pueda influir en el resultado de aquella.

[2] *"**ARTÍCULO 321. PROCEDENCIA**. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.*
También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:
1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.
2. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros.
3. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.
5. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva.
6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva.
7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.
9. El que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano.
10. Los demás expresamente señalados en este código."

En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D. C, SALA LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO: INADMITIR por las razones expuestas por la Sala el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 16 de enero del 2023.

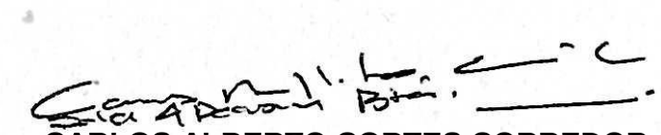
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

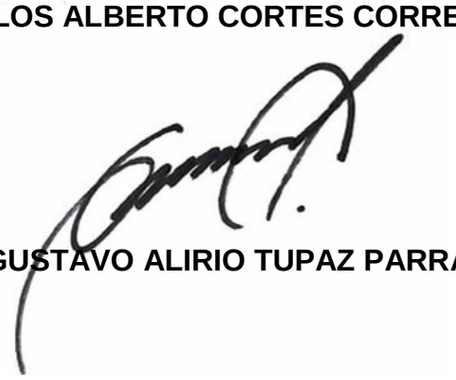
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO SEGUIDO POR FANNY DENNISE GONGORA MOLINA CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-, AFP PORVENIR S.A. y OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS (RAD. 30 2017 00729 02).

Bogotá D.C. treinta (30) de Marzo de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado para presentar los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente,

P R O V I D E N C I A

Se decide por la Sala la apelación de la demandada SKANDIA S.A. antes OLD MUTUAL en contra del auto de fecha 21 de febrero del 2023 (Archivo 2 expediente digital) proferido por el Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas en suma total de $9.000.000 a cargo de PORVENIR y SKANDIA correspondientes a $4.500.000 para cada una tanto en primera instancia como en segunda instancia.

Aduce la apoderada recurrente que en el presente asunto se revoque el auto de primer grado y en su lugar se fijen de manera equitativa y razonable por observación de la naturaleza y calidad del proceso y la gestión efectuada, disminuyendo su valor a 1 SMLMV precisando "*La tasación de las agencias en derecho que establece no menciona las circunstancias especiales que se tuvieron en cuenta para la fijación de este concepto, no resulta razonable una fijación en agencias en derecho tan elevada para un proceso que, en atención a su naturaleza y al trámite del proceso no requirió una actuación prolongada, por el contrario, se resolvió en un trámite corto, así mismo no corresponde una condena*

tan elevada en contra del demandante, aunado al hecho de que el fallador no hace referencia a los criterios particulares del proceso que tuvo en cuenta para realizar dicha liquidación" (Archivo 03 expediente digital).

Igualmente dicha sociedad solicita se revoque el citado auto en lo que respecta al valor establecido en sede de casación el cual corresponde a $1.000.000 y no $1.500.000, señalando: "*Con ocasión de la fijación de las agencias en derecho la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 29 de noviembre de 2022, emitió auto por medio del cual se fijó en sede de casación la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) MCTE a cargo de las demandadas OLD MUTUAL S.A hoy SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., Y PORVENIR en un 50% para cada una de ellas, a favor de la accionante.*" (Archivo 4 expediente digital).

El Juez de primer grado mediante auto del 6 de marzo del 2022 *(Archivo 5 expediente digital)* señaló:

> "*…se indica que el despacho repone la decisión para indicar que efectivamente las costas decretadas en sede de casación, pero liquidadas en segunda instancia efectivamente equivale a la suma de $2.000.000 repartidas en un 50% para SKANDIA S.A y el otro 50% para AFP PORVENIR S.A., las cuales quedaran de la siguiente manera:*

Otros	$0
Agencias en derecho decretadas en primera instancia a cargo de la parte demandada AFP PORVENIR S.A y a favor del demandante	$3.000.000
Agencias en derecho decretadas en primera instancia a cargo de la parte demandada AFP SKANDIA S.A y a favor del demandante	$3.000.000
Agencias en derecho decretadas en sede de casación liquidadas por el superior a cargo de la parte demandada AFP PORVENIR S.A y a favor del demandante	$1.000.000
Agencias en derecho decretadas en sede de casación liquidadas por el superior a cargo de la parte demandada AFP SKANDIA S.A y a favor del demandante	$1.000.000
Total	$8.000.000

> *Con respecto al recurso de reposición en el cual considera que las costas deben ser tasadas en una cuantía inferior ya que se trata de un proceso de mínima complejidad y que ese motivo solicita sean liquidadas y ajustadas de manera equitativa y razonable se debe decir lo siguiente.*
>
> *Al respeto se indica que el acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, en sus artículos segundo y quinto establecen como criterios para la fijación de las agencias en derecho la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión, sin embargo, la parte demandada solicita que teniendo en cuenta que es un asunto ampliamente decantado por la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia de baja complejidad, por tal razón el valor de las agencias impuestas en primera instancia resulta elevado.*

> *El artículo 365 del C.G.P., establece que serán condenadas en costas a "la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, se le condenara en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas (…)".*
>
> *Frente a la primera parte de la solicitud de reposición la misma ya fue resuelta con la corrección de esta providencia, pero frente a la cantidad asignada se debe decir que dadas las resultas del litigio, el criterio para condenar a la parte vencida básicamente fue la duración que hasta la fecha ha tenido el proceso toda vez que no se ha acreditado el cumplimiento a lo ordenado por el despacho, lo cual constituye suficientes motivos para mantener la decisión y no reponer la cuantía fijada como agencias en derecho.*
>
> *Así las cosas, no hay lugar a acceder a la petición de reponer el auto pues las sumas asignadas como agencias en derecho, razonablemente equivalen a algo más de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia lo cual corresponde a una suma razonable y ajustada a la naturaleza, duración y complejidad del caso."*

Para resolver se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver, advierte la Sala que la liquidación de las costas a cargo de la demandada SKANDIA S.A. se fijó en cuantía de $4.000.000, $3.000.000 en primera instancia y $1.000.000 por esta Corporación *(Archivo 1 expediente virtual, págs. 366 y 409)*, suma que correspondió a las agencias en derecho impuestas por el Juez *a quo*.

En este orden de ideas, conviene recordar, las costas son una erogación económica a **cargo de la parte vencida**, a quien corresponderá pagar la suma que establezca el juez de instancia, respecto de las cuales el artículo 365 del C.G.P. contiene el principio general, según el cual *"se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…)"*, sin consideración a su propósito, razonabilidad de su discusión en el conflicto jurídico en litigio o su conducta en el trámite procesal, sino el hecho de haber sido vencido en juicio y para ese efecto, el artículo 366 en su numeral 4º prevé que *"para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura".* De esta manera como quiera que en el presente asunto la sentencia de primer grado fue totalmente desfavorable a la parte demandada SKANDIA S.A. antes OLD MUTUAL, lo atinente a derecho es que sea condenada en costas, como se definió en cada una de las instancias que tuvo este proceso.

De igual forma, es menester precisar, el juez para el señalamiento de agencias en derecho puede moverse dentro de los porcentajes mínimos y máximos establecidos por la tarifa de honorarios profesionales expedida en las condiciones allí señaladas, estimación que variará de acuerdo a la valoración subjetiva que se haga sobre la gestión del apoderado o de la parte a cuyo favor se liquidan, la cuantía, duración y circunstancias especiales que rodearon al proceso.

Así las cosas, para resolver la controversia, advierte la Sala, en la actualidad rige el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura para los procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia, y en esa medida, dado que el presente proceso se inició con posterioridad a la vigencia referida -10 de noviembre del 2017- (*ver acta reparto pág. 107 Archivo 1 expediente digital*), esta es la norma que resulta aplicable.

En esta dirección, la Sala se remite al tenor de la citada disposición, que en su artículo 5° numeral 1° dispone el monto de las agencias en derecho, en tratándose de procesos declarativos en general:

> *1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.*
>
> *En primera instancia.*
>
> *a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.*
>
> ***b.** Por la naturaleza del asunto. **En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.***
>
> *En segunda instancia. Entre **1 y 6 S.M.M.L.V**.*

Ahora, en autos y para lo que interesa, de acuerdo al acta visible en el Archivo 1 expediente digital págs. 365 y 366, las decisiones adoptadas en la sentencia de primera instancia, fueron:

> ***"PRIMERO**: **DECLÁRESE NULO E INEFICAZ** el traslado de régimen pensional que hizo la demandante señora FANNY DENNISE GONGORA MOLINA del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado en su momento por el extinto Instituto De Los Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana De Pensiones -COLPENSIONES- a la Administradora De Fondos Obligatorios Pensionar, hoy OLD MUTUAL SOCIEDAD ANÓNIMA Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías, elaborado el día 10 de mayo del año 1995, conforme a lo expuesto.*
>
> ***SEGUNDO**: **DECLÁRESE** válidamente vinculada a la demandante señora FANNYDENNISE GONGORA MOLINA, al Régimen De Prima Media con*

> *prestación definida administrado hoy por la Administradora Colombiana De Pensiones - COLPENSIONES, conforme a lo expuesto.*
>
> ***TERCERO**: **CONDÉNESE** a la Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías PORVENIR S.A a devolver a COLPENSIONES, todos los valores de la cuenta de ahorro individual de la señora FANNY DENNISE GONGORA MOLINA, junto con sus rendimientos y los costos cobrados por concepto de administración durante todo el tiempo que permaneció en dicho régimen, en el 1 de junio de 2000 y hasta el día en que se realice el traslado de fondo, conforme a lo expuesto.*
>
> ***CUARTO**: **CONDÉNESE** a OLD MUTUAL Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías S.A, a devolver a la Administradora Colombiana De Pensiones - COLPENSIONES, todos los rendimientos y los Costos cobrados por concepto de administración durante el tiempo que permaneció en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad la señora FANNY DENNISE GONGORA MOLINA, es decir del 1° de junio de 1995 al 31 de mayo de 2000, conforme a lo expuesto.*
>
> ***QUINTO**: **ORDÉNESE** a la Administradora Colombiana De Pensiones - COLPENSIONES a que una vez ingresen los valores de la cuenta de ahorro individual de la demandante señora FANNY DENNISE GONGORA MOLINA actualice la información en su historia laboral, bajo las normas que regulan el Régimen de Prima Media con Prestación definida.*
>
> ***SEXTO**: **DECLÁRENSE** no probadas las excepciones planteadas por las accionadas conforme a lo expuesto.*
>
> ***SEPTIMO**: **CONDENESE EN COSTAS** de esta instancia a La Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías PORVENIR S.A. y a OLD MUTUAL Pensiones y Cesantías S.A a favor de la demandante. Por secretaria practíquese la liquidación de costas, incluyendo por concepto de Agencias en Derecho la suma de Tres Millones De Pesos ($3.000.000), que debe cubrir cada una de las sociedades administradoras demandadas.*
>
> ***OCTAVO**: **SIN COSTAS** ni a favor ni en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.*
>
> ***NOVENO**: **CONCÉDASE** el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de la Administradora Colombiana De Pensiones -COLPENSIONES-"*

La citada sentencia fue revocada por esta Corporación en decisión calendada 15 de octubre del 2019 (*Archivo 01 expediente digital, págs. 383 y 384*), así:

> ***PRIMERO: REVOCAR** la sentencia objeto de estudio, de conformidad con las consideraciones expuestas en precedencia y en su lugar absolver a las demandadas de las pretensiones invocadas en su contra.*
>
> ***SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia. Las de primera instancia corren a cargo de la parte demandante.*

Decisión frente a la cual se formuló el recurso de casación y mediante sentencia SL1853-2022 Rad. 89426 del 1° de junio del 2022 la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral CASA la sentencia del Tribunal y resuelve:

> ***PRIMERO: MODIFICAR*** *el numeral primero del fallo que el Juez Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, profirió el 21 de marzo de 2019, en el sentido de* ***DECLARAR*** *la* ***INEFICACIA*** *de la afiliación de* ***FANNY DENNISE GÓNGORA MOLINA*** *al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de la* ***AFP PENSIONAR****, hoy* ***OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S. A.*** *realizada el 10 de mayo de 1995.*
>
> ***SEGUNDO: MODIFICAR*** *el numeral cuarto el cual quedará así:*
>
> > ***CUARTO: CONDENAR*** *a la* ***AFP OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.*** *a trasladar a* ***COLPENSIONES****, todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual de la actora. Del mismo modo, se* ***CONDENA*** *a la citada AFP y a la accionada* ***SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.,*** *a reintegrar a Colpensiones los valores que cobraron a título de gastos de administración y comisiones debidamente indexados durante todo el tiempo que permaneció afiliada a ellas, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima, valores que devolverán las referidas AFP con cargo a sus propios recursos.*
> >
> > *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*
>
> ***TERCERO: REVOCAR*** *el numeral quinto de la sentencia proferida por el a quo.*
>
> ***CUARTO: CONFIRMAR*** *la decisión de primer grado en lo demás.*

Y respecto de las COSTAS señaló: *"Las costas de la primera instancia como las estableció el juzgado. En la alzada, están a cargo de Old Mutual Pensiones y Cesantías S. A. y de Porvenir S. A. en un 50% a cada una de ellas y en favor de la accionante"*

De tal manera, como quiera que en el presente asunto no se trató de pretensiones pecuniarias sino de una obligación de hacer, esto es, ordenar el traslado de régimen de la demandante, la suma fijada por el Juez de primer grado de $3.000.000, ascendió a 3.62268088 smmlv del año 2019 ($828.116) -data de la sentencia de primer grado pág. 366 Archivo 1 expediente digital-, y en segunda instancia $1.000.000, es decir, de 1 salario mínimo para el 2022 (data del auto de obedézcase y cúmplase pág. 409 Archivo 1 expediente digital) advirtiéndose entonces, el valor estimado se encuentra dentro del margen señalado en la norma antes mencionada, es decir, entre ***1 y 10 S.M.M.L.V.*** para primera instancia y en segunda instancia entre ***1 y 6 S.M.M.L.V.,*** sin sobrepasar el tope máximo establecido por el Acuerdo citado.

Por tales razones, se estima por la Sala procedente confirmar el monto señalado por concepto de agencias en derecho por el Juez de primer grado, toda vez que el

valor de las mismas se acompasa con las aristas mínimas y máximas fijadas por el Acuerdo 1887 de 2003 citado, valor que se considera, es apenas equitativo y razonable de acuerdo a las resultas del juicio, reiterando para su imposición no se analiza la intención de las partes, razonabilidad de su discusión en el conflicto jurídico en litigio o su conducta en el trámite procesal, sino el hecho de haber sido vencido en juicio.

En estas circunstancias se confirmará el proveído atacado.

SIN COSTAS en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - SALA LABORAL**,

R E S U E L V E

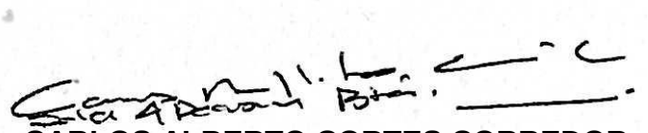
PRIMERO: CONFIRMAR el proveído apelado, de conformidad a las motivaciones que anteceden.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

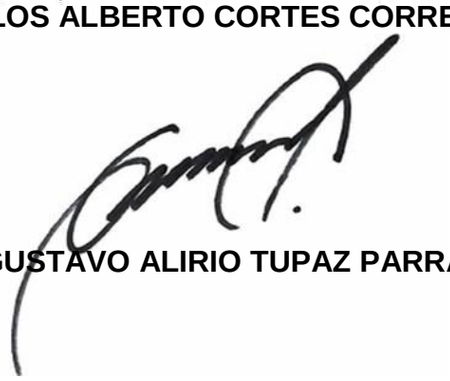
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTA D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR CARLOS ALBERTO CORTES LOZANO CONTRA COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR S.A.S. (RAD. 30 2019 00819 01).

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado para presentar los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente,

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la sociedad demandada COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR S.A.S. contra el auto proferido por el Juez Treinta (30) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el pasado 16 de marzo del 2022 *(Archivo 5 expediente digital*) por medio del cual se dio por no contestada la demanda por haberse presentado por fuera del término legalmente establecido para ello.

Como motivos de inconformidad, la convocada a juicio señaló (*Archivo 6 expediente digital)*:

> *1. El trámite de notificación efectuado por la parte actora no cumple con las directrices del Decreto 806 de 2020.*
>
> *El Juzgado indica en el auto citado que "los anexos de la demanda y la inadmisión, conforme la norma no son necesarios enviar para el trámite de notificación", sin embargo, el mismo Decreto 806 de 2020 en su artículo 8, consagra que:*
>
> *"Artículo 8. Notificaciones personales.*
>
> *(…). Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*
> *(…)"*

> *Por la tanto, el Juzgado de primera instancia incurre en un dislate jurídico, pues afirma que los anexos de la demanda no son necesarios para que surta efecto la notificación.*
>
> *Aunado a lo anterior, coartar la posibilidad de conocer los anexos de una demanda impide el ejercicio pleno del derecho de defensa y contradicción, por cuanto restringe las actuaciones propias del debido proceso como, por ejemplo, presentar desconocimiento del documento (art 272 del CGP) o tachar de falsedad un documento (art 269 del CGP), o inclusive advertir la existencia de excepciones previas como la de inepta demanda, entre otros.*
>
> ***2.** Por ende, el trámite de notificación personal debe efectuarse manera completa, adjuntándose la totalidad de los documentos exigidos por la norma para que se entienda surtida la notificación, como por ejemplo, el auto que admite la demanda, como todos sus autos previos, como lo es en este caso el de inadmisión, pues es la única forma de poder ejercer en debida forma el derecho de defensa y contradicción, con el fin de dilucidar si en efecto los errores cometidos en la demanda fueron subsanados con el escrito de subsanación o no, de modo que, NO hacerlo, no solo viola el derecho de defensa, sino que permite que se presenten nulidades procesales.*
>
> *De igual forma, no conocer los anteriores documentos evitaría a la parte demandada revisar alguna irregularidad o vicio en el proceso, que no se podrían advertir en la etapa de saneamiento, actuando el Despacho como Juez y parte.*
>
> ***3.** Adicionalmente el Juzgado de primer grado indica en el auto aludido que:*
>
> *"(…) la parte debió acudir al despacho para solicitar los documentos que necesitaba para ejercer su derecho de defensa."*
>
> *Referente a este punto, la notificación del auto admisorio de la demanda está únicamente a cargo de la parte demandante, y de ninguna manera las omisiones en que esta haya incurrido en la notificación, se le pueden imputar o trasladar a la parte demandada, pues como se dijo no es su carga.*
>
> *(…)*
>
> *Desconocer lo anterior implica una vulneración al derecho fundamental al debido proceso y al derecho de defensa de **COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS.***

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Inicialmente, señala la Sala, el auto que dé por no contestada la demanda, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del presente recurso.

Pues bien, y para adentrarnos a la solución del presente asunto bueno resulta traer a colación el artículo 74 del C.P.T. el cual prevé que "*admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de diez (10) días, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados".* La contestación que para el efecto presente la encartada debe ser radicada dentro de la oportunidad procesal antes aludida y sujetarse a los parámetros previstos en el artículo 31 de la norma ejusdem, so pena de tener por no contestado el libelo introductorio.

En esa dirección, lo primero que debe aclarar esta Corporación es que si bien la demanda fue radicada el 3 de diciembre del 2019 (*Acta reparto pág. 90 Archivo 1 expediente digital),* su admisión solo se dio hasta el 5 de febrero del 2021 (*págs. 101 y 102 ibidem),* es decir, en vigencia del Decreto 806 de 2020 el cual modificó transitoriamente en su momento el Código General del Proceso, razón por la cual bajo el imperio de esa normativa debieron surtirse las notificaciones dentro del presente asunto, precisándose tal precepto es orden público y su regulación debe ser aplicada estrictamente, por ende es de obligatorio acatamiento.

Definido lo anterior y revisado minuciosamente el periplo procesal, se tiene que la parte demandante mediante memorial del 9 de diciembre del 2021 allega al Juzgado de primer grado notificación personal a la demandada en los siguientes términos (Archivos 2 y 3 del expediente digital):



10/2/2021 Correo: Hasbleidy Santamaria - Outlook

NOTIFICACIÓN DEMANDA-CARLOS ALBERTO CORTES LOZANO

Hasbleidy Santamaria <hasbleidy.santamaria@tgconsultores.net>
Mié 10/02/2021 8:53
Para: info@alciautos.com.co <info@alciautos.com.co>

3 archivos adjuntos (4 MB)
AUTO QUE ADMITE DEMANDA-CARLOS ALBERTO CORTES LOZANO.pdf; DEMANDA-CARLOS ALBERTO CORTES LOZANO.pdf; .NOTIFICACIÓN-CARLOS ALBERTO CORTES.pdf;

Señores:
COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR S.A.S
Calle 134 A No. 45 – 95
Bogotá D.C.

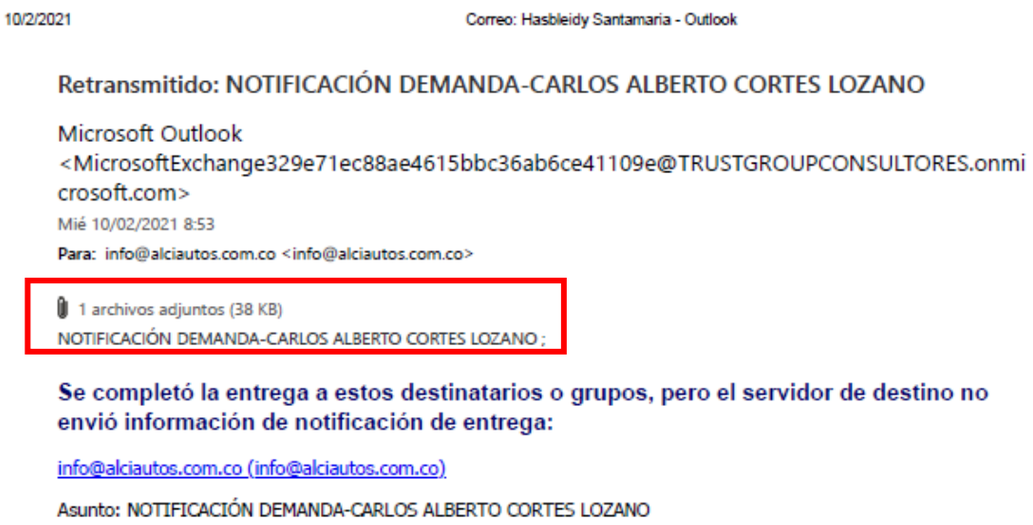
Referencia: NOTIFICACIÓN DEMANDA

DATOS DEL PROCESO:	
Número del Radicado de Proceso:	11001310503020190081900
Naturaleza del Proceso:	Ordinario Laboral de primera instancia
Demandante:	CARLOS ALBERTO CORTES LOZANO
Demandados:	COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR S.A.S
Fecha del auto admisorio de la demanda:	5 de febrero de 2021

Reciba un cordial saludo, en esta oportunidad me dirijo a usted para notificarle que se está adelantando una demanda en su contra y que en virtud de los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso y del artículo 8° del Decreto 806 de 2020[1], en concordancia con lo dispuesto en la Sentencia C-420 de 2020 de la H. Corte Constitucional[2], **este mensaje constituye una notificación personal de la demanda**.

Por tal razón, junto a este mensaje se encuentra adjunta la copia del auto admisorio de la demanda y del libelo demandatorio junto con anexos, para que, si a bien lo tiene, ejerza su derecho de contradicción y defensa y **conteste la demanda**. Le recuerdo que el horario de atención del juzgado es de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 12:00 M. y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M.

Ahora bien, en caso de no comparecer el despacho procederá conforme al inciso 3° del artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y le designará un curador para la litis, con quien se continuará el proceso y se ordenará su emplazamiento en el Registro Nacional de Personas Emplazadas RNPE.



10/2/2021 Correo: Hasbleidy Santamaria - Outlook

Retransmitido: NOTIFICACIÓN DEMANDA-CARLOS ALBERTO CORTES LOZANO

Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@TRUSTGROUPCONSULTORES.onmicrosoft.com>
Mié 10/02/2021 8:53
Para: info@alciautos.com.co <info@alciautos.com.co>

1 archivos adjuntos (38 KB)
NOTIFICACIÓN DEMANDA-CARLOS ALBERTO CORTES LOZANO ;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

info@alciautos.com.co (info@alciautos.com.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN DEMANDA-CARLOS ALBERTO CORTES LOZANO

Ahora y conforme lo dicho se tiene que el citado Decreto 806 de 2020 artículo 6° estableció lo siguiente:

> *En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado,* ***el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados****.* ***Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación.*** *El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.*

Igualmente, el artículo 8 de la misma normativa en relación con la notificación de las providencias señaló:

> *"**ARTÍCULO 8. Notificaciones personales.** Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual.* ***Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.***
>
> *El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.*
>
> ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.***

> *Para los fines de esta norma* ***se podrán Implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos****.*
>
> *Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.*
>
> ***PARÁGRAFO** 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.*
>
> ***PARÁGRAFO 2.** La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales."* (Negrilla y subrayas de la Sala).

Esta disposición fue objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, quien mediante sentencia C-420 de 2020, declaró exequible el inciso tercero de manera condicionada bajo el entendido que: "*el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje."*

Atendiendo lo anterior, y al tenor de las consideraciones vertidas por el Alto Tribunal Constitucional, cuando la notificación se realice a través de mensaje de datos, la misma se entenderá surtida contados dos días a partir de i) la fecha en que se acuse recibo o ii) la fecha en que el mensaje **haya sido efectivamente recibido**, si la misma puede verificarse a través de cualquier medio.

De esta manera se tiene que, en efecto junto con la demanda se deben remitir los anexos de la misma y el escrito de subsanación, al momento de surtirse la notificación a la parte demandada.

Evidenciando esta Sala de decisión que si bien la parte accionada recibió el correo donde le notifican de la admisión de la demanda en su contra, como atrás se ve con el pantallazo de la entrega de ese e-mail el 10 de febrero del 2021 a las 8:53 am, remitido a la dirección info@alciautos.com.co misma que obra como EMAIL DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL de la COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR S.A.S. en el Certificado de existencia y representación legal expedido el 17 de octubre de 2019 (ver página 69 Archivo 1 expediente digital).

Revisado dicho pantallazo de entrega del 10 de febrero del 2021 no se puede extraer ni constatar cuales fueron los anexos enviados en el correo electrónico pues no es posible abrir tales datos adjuntos, aun cuando en el cuerpo del e-mail se anota: "*Por tal razón, junto a este mensaje se encuentra adjunta la copia del auto admisorio de la demanda y del libelo demandatorio* ***junto con anexos****, para que, si a bien lo tiene, ejerza su derecho de contradicción y defensa y conteste la demanda*."

Sumado a ello nótese que en la segunda de las imágenes, nombrada "*Retransmitido: NOTIFICACIÓN DEMANDA-CARLOS ALBERTO CORTES LOZANO*" se evidencia que tan solo se entregó **1 archivo adjunto**, esto es, el denominado "*NOTIFICACIÓN DEMANDA-CARLOS ALBERTO CORTES LOZANO*", y no aparece la prueba del envió efectivo del archivo "*DEMANDA-CARLOS ALBERTO CORTES LOZANO.pdf"*;

Reiterando esta Corporación no es posible verificar el contenido de los citados archivos adjuntos, pues simplemente se aportan los pantallazos de tales certificados de entrega.

No obstante, lo anterior la accionada mediante correo electrónico del **2 de junio del 2021** pone en conocimiento la anterior situación, esto es, que no fueron remitidos los anexos de la demanda ni los autos de admisión e inadmisión en los siguientes términos (págs. 1 y 2 Archivo 4 expediente digital):

> Previo a comenzar a contestar las pretensiones y hechos de la demanda, me permito indicar que la apoderada de la parte demandante no cumplió con la carga establecida en los artículos 6 y 8 del Decreto 806 de 2020, esto por cuanto en el correo electrónico enviado a mi representada, no adjuntó la totalidad de los documentos exigidos por la norma para que se entienda surtida la notificación, pues no adjuntó la totalidad de los anexos de la demanda ni tampoco los autos de inadmisión y admisión respectivamente.

Sin embargo, radicó ante el Juzgado de primera instancia el escrito de contestación de la demanda, en el mismo documento. En vista de lo anterior, se tiene que la recepción del mensaje de notificación de la demanda, como atrás se anotó fue el miércoles 10 de febrero del 2021, fecha en la cual efectivamente se recibió por parte de la accionada, por lo que, aplicando la normatividad anteriormente relacionada, el término para contestar fenecía el **viernes 26 de febrero del 2021**[1]

[1] *"Los (02) días allí dispuestos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje",* siendo para este caso el 11 y 12 de

En ese orden, los 10 días de traslado de que trata el artículo 74 del C.P.T y la S.S. iniciaban a contarse el 15 de febrero de 2021 -dos siguientes a la notificación- y vencieron el 26 de febrero de la misma anualidad, por lo que, al haberse radicado la contestación de la demanda el **2 de junio del 2021**, diáfana resulta su extemporaneidad.

En consonancia con lo expresado, para esta Sala de Decisión si bien se presentó una falencia por parte del extremo demandante en cuanto a la debida notificación del libelo a la pasiva, lo cierto es que como ya se explicó este extremo procesal se entero de la existencia del proceso desde el 10 de febrero del 2021 y casi 4 meses después de recibido dicho correo electrónico procedió a pronunciarse, siendo lo correcto y ortodoxo haber expresado sus inconformidades dentro del término señalado por la ley para presentar la contestación, una vez fue recepcionado el correo electrónico de la notificación de la demanda -*del 15 al 26 de febrero del 2021*-, lo cual se itera no hizo y solo vino advertir las falencias alegadas ante esta instancia solo hasta el 2 de junio del 2021, circunstancia que en manera alguna se puede subsanar en este momento procesal.

Distinta consideración cabria si lo aquí alegado se hubiera puesto en consideración dentro del término para presentar la contestación, es decir, del 15 al 26 de febrero del 2021, caso en el cual se habría podido ordenar por este Colegiado rehacer las actuaciones a partir de la diligencia de notificación del auto admisorio de la demanda; no obstante, ello no ocurrió y tampoco se alegó ni se acreditó que la notificación no hubiera sido efectivamente entregada desde el 10 de febrero del 2021.

Razón por la cual y agotada esta instancia, conforme las consideraciones expuestas, se confirmará el proveído apelado en tanto como ya se explicó la contestación de la demanda fue presentada de manera extemporánea.

COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - SALA LABORAL**,

---

febrero de 2021, comenzando a correr el término para contestar entre el 15 y el 26 de febrero de ese mismo año.

RESUELVE

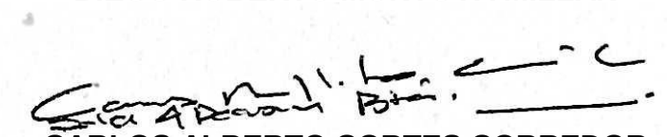
PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la sociedad demandada.

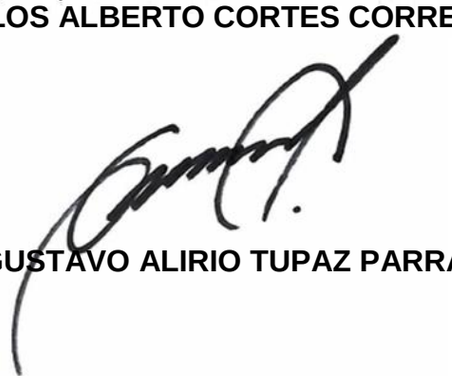
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $1.000.000,oo, a cargo de la parte demandada, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR RAFAEL ANIBAL GUERRERO CAMAÑO CONTRA ISMOCOL S.A., OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. y OLEODUCTO CENTRAL S.A. (RAD. 38 2021 00183 01).

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

El Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, profieren de plano la siguiente,

P R O V I D E N C I A

Decide la Sala el recurso de apelación oportunamente interpuesto y sustentado por el apoderado de la llamada en garantía **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A**., contra el auto proferido por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en audiencia llevada a cabo el día 03 de febrero de 2022 (*27ActaAudienciaArticulo7720230203, récord 21:32)*, por medio del cual resolvió con relación al interrogatorio de parte solicitado por este sujeto procesal y con destino al representante legal de la demandada **ISMOCOL S.A**., lo siguiente:

> "*… teniendo en cuenta lo anterior pues no hay lugar a decretar interrogatorio de parte del representante legal de ISMOCOL pues no fue la entidad que efectuó el llamamiento en garantía y para el efecto pues no se admiten prácticas de interrogatorio de parte entre codemandados llamémoslo así. No se decreta entonces este interrogatorio".*

Contra la anterior decisión, el apoderado de la llamada en garantía, manifestó al interponer el recurso de reposición y en subsidio apelación[1], es importante que

[1]***Seguros Generales Suramericana S.A.:*** *"Gracias señor juez, teniendo en cuenta de que fue negado el interrogatorio de parte de solicitar el llamamiento en garantía y aun así, pues quisiera interponer recurso de reposición y en subsidio apelación contra dicha decisión o solicitar al juez pues reconsiderar la decisión debido a que es importante que se le permita a mi representada interrogar al representante legal de ISMOCOL, debido a que la primera excepción de ambos, contestación a ambos llamamientos en garantía, se refiere al comportamiento o a las actitudes o actividades ejercidas por dicha compañía, respecto del demandado y es importante aclarar dichas situaciones, interrogando al representante legal de*

se le permita a la sociedad interrogar al representante legal de **ISMOCOL**, debido a que la primera excepción de ambos, **se refiere al comportamiento, actitudes o actividades ejercidas por dicha compañía, respecto del demandado y es importante aclarar dichas situaciones interrogando al representante legal de ISMOCOL para así desarrollar dicha excepción planteada**. Dicho esto, el a quo se sostuvo en su decisión y no accedió a lo solicitado, insistiendo[2] en la improcedencia de la práctica de esta prueba, debido a que si no comparece el representante de **ISMOCOL** a absolver interrogatorio de parte no habrían hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en una demanda o en la contestación que pudieran ser efectivos dentro de ese escenario. Además, agregó el juzgador, debió solicitarse la declaración del representante legal como prueba testimonial.

Para resolver se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Asume la Sala el conocimiento de este proceso especial, en orden a desatar el recurso de apelación propuesto por la llamada en garantía **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, como atrás se anunció, debiendo señalar, en primer lugar, tal proveído se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 4[3] del artículo

---

ISMOCOL para así eh (sic), pues desarrollar, dicha excepción planteada en los llamamientos en garantía, muchas gracias.".

[2]***Juez (récord 26:37):*** *"Téngase en cuenta lo manifestado y en el marco del recurso de reposición pues considera el despacho que pues la improcedencia de la práctica de esta prueba radica básicamente en que si no comparece el representante de ISMOCOL absolver ese interrogatorio de parte pues no habría hecho susceptibles de prueba de confesión contenidos en una demanda o en una contestación, que pudieran serle efectivos dentro de ese escenario y es precisamente por eso que pues no procede una práctica de esa naturaleza, cuestión diferente hubiera sido que hubiera solicitado el testimonio de la persona ¿correcto? en ese escenario pues se le indaga normalmente, porque lo normal, es que en el interrogatorio de parte lo que se busca es una confesión y pues si no concurren, pues se presume como ciertos los hechos susceptibles de pruebas de confesión, contenidos en la demanda o en los hechos de la contestación y aquellos sustento de las excepciones pero pues respecto de ISMOCOL, la llamada en garantía SURAMERICANA, pues no tiene una demanda, ni tiene una contestación; entonces, por eso es que no procede en ese escenario la práctica del interrogatorio.*

[3]*"**ARTICULO 65. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.** <Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:*

(...)

4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.".

29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

Inicialmente y para resolver la apelación de la aseguradora en cuestión, es de recordar que esta figura procesal, consagrada en el artículo 64 del C.G.P[4]., se origina cuando la parte de un proceso hace intervenir en el mismo a un tercero que debe proteger o garantizar al llamante, cubriendo los riesgos que se derivan de las peticiones de otro sujeto distinto, siempre y cuando haya un riesgo en el que llama y que por ley o por contrato deba ser protegido o garantizado por la aseguradora garante.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que:

> *"El llamamiento en garantía es un instrumento procesal por el cual se provoca la comparecencia forzosa de un tercero a un proceso en curso, intervención que tiene su germen en la citación que le formula una de las partes en dicha contienda, con fundamento en la relación de garantía de naturaleza personal entre ellos existente, que le confiere el derecho de exigirle que corra con las consecuencias perjudiciales que deba soportar en el evento de resultar vencida en el juicio, de ahí que lo llame a afrontar la pretensión de regreso que introduce para que sea considerada in eventum, es decir, en el caso de perder el pleito. En otras palabras, lo trae al proceso para que se resuelva sobre la obligación legal o contractual que tiene de reembolsarle o indemnizarle las pérdidas económicas que experimente en el caso de un sentenciamiento adverso.*
>
> *Con el llamamiento en garantía, tiene dicho la Corte, se suscita un 'evento de acoplamiento o reunión de una causa litigiosa principal con otra de garantía que le es colateral, dando lugar a una modalidad acumulativa cuyos alcances precisa el art. 57 del C. de P.C.' (...), que conjuga dos relaciones materiales distintas. Por un lado, la que une al demandante con el demandado, y por el otro, la que liga al demandado con el llamado: 'la del demandante contra el demandado, en procura de que este sea condenado de acuerdo con las pretensiones de la demanda contra él dirigida; y la del demandado contra el llamado en garantía a fin de que éste lo indemnice o le reembolse el monto de la condena que sufriere' (...)."*[5]

En igual sentido, el articulo 66 del C.G.P., indica que el llamado en garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento y, solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. Del mismo modo, en la sentencia se

---

[4] "*Artículo 64**. Llamamiento en garantía**. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación."*

[5] CSJ SC 16 dic. 2006, rad. 2000-00276-01

resolverá cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía[6].

Pues bien, puntualmente, la aseguradora recurrente **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A**. fue llamada en garantía por la codemandada **OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A**. (páginas 23 a 25 - archivo 10), por lo que, una vez admitida esta figura mediante auto de fecha 17 de junio de 2022 (páginas 1 y 2, archivo 12) y notificada en debida forma**,** aportó contestación[7], solicitando como medios probatorios, entre otros:

> **2. Interrogatorio de parte**
>
> Solicito que se decrete el interrogatorio de parte del señor Rafael Aníbal Guerrero Camaño y del representante legal de ISMOCOL. Para el efecto, solicito al Despacho que señale la fecha y hora para que ellos rindan su declaración espontánea sobre los hechos objeto de debate en este proceso.

A su vez, al formular las excepciones de fondo o mérito, dirigió la primera de ellas en el siguiente sentido: "***INEXISTENCIA DE COBERTURA DE LA PÒLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO FRENTE AL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES***" (páginas 7 a 9, ibidem). Como soporte de este medio exceptivo, afirmó la póliza de cumplimiento no tiene cobertura respecto del pago de las acreencias laborales que eventualmente **ISMOCOL** le adeuda al demandante, toda vez que Oleoducto de Colombia en su calidad de asegurada no es responsable de dicho pago en los términos del artículo 34 del C.S.T.

Enfatizó, la póliza de cumplimiento únicamente tiene cobertura frente al pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cuando Oleoducto

---

[6] *"**Artículo 66. Trámite.** Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la notificación no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. La misma regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso segundo del artículo anterior.*

El llamado en garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento, y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía.

PARÁGRAFO. No será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes.".

[7] *Se tuvo por contestada la demandante mediante auto de fecha 02 de diciembre de 2022 (archivo 18AutoFijaAudiencia20221202).*

de Colombia es solidariamente responsable de las acreencias laborales adeudadas por el contratista garantizado, citando para el efecto, el contenido de la cláusula 5 de la sección “I” del acápite de Condiciones Generales de la Póliza de Cumplimiento F-01-12-082. En síntesis, indicó, Oleoducto de Colombia no es solidariamente responsable con **ISMOCOL** al ejecutar actividades ajenas y extrañas al giro ordinario.

Narrado lo anterior, observa esta Corporación, la aseguradora recurrente pretende se cite al representante legal de **ISMOCOL S.A**., con el fin de desvirtuar el giro ordinario del negocio de dicha sociedad para controvertir a futuro; de darse, una solidaridad con la empresa garantizada (OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.), en aplicación a lo previsto en el artículo 34 del C.S.T., ejerciendo con ello el derecho de defensa que le asiste como llamada en garantía, pues persigue a todas luces, exonerarse de las responsabilidades derivadas de la póliza de cumplimiento, siendo un actuar frecuente y coherente.

Si bien, el a quo negó la práctica de esta prueba aduciendo que no se puede ejercer la misma con destino a otra codemandada, lo cierto es que el articulo 198 del C.G.P. indica que se puede decretar esta prueba sobre los hechos relacionados en el proceso, siendo la solidaridad un tema de controversia ante una eventual condena (*pretensión segunda condenatoria, página 3, archivo SubsanaciónDemanda.pdf),* estimándose entonces, procedente esta prueba. Aunado, a que la llamada en garantía reviste la calidad de tercero garante y no, de codemandado.

Sumado a ello, el artículo 66, ya citado, es claro en señalar que la llamada en garantía puede solicitar las pruebas que pretenda hacer valer sin limitarlas o condicionarlas a algún sujeto procesal, y así lo hizo en su debida oportunidad, siendo oportuno el decreto, al tenor, de que el llamado es libre en ejercer la defensa técnica que a bien tenga. Adviértase, si bien, habitualmente esta prueba persigue una confesión provocada de las partes (demandante y/o demandado), en este caso, también es factible decretar y recaudar el interrogatorio de parte del representante legal de **ISMOCOL S.A.** como codemandado, ya que la finalidad consiste en salvaguardar derechos de la garantizada **OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.,** siendo el roll de la llamada en garantía, precisamente, en esta litis.

Al punto, conviene citar casación laboral SL 1130 de 2022 del 22 de marzo de la Corte Suprema de Justicia, donde se analizó la legitimación de la llamada en garantía para intervenir en el proceso, instruyendo:

> *"Ahora bien, para resolver conjuntamente la parte final del cargo segundo y lo propuesto en el cargo tercero, en lo relacionado al tema de la legitimación del llamado en garantía para excepcionar la prescripción, basta con citar la sentencia de la Sala de Casación Civil de esta Corporación, que explicó en su sentencia CSJ SC5885-2016 que, así como este puede coadyuvar a la defensa* ***de la parte que lo llama, también puede «en el ámbito de su derecho de defensa, debatir la existencia, eficacia, extinción o vigencia de la relación sustancial que justifica su llamamiento», y, por tanto, se encuentra habilitado para proponer excepciones y presentar pruebas.***
>
> *Con dicha orientación, analizó:*
>
> *2.7.-* ***Llamamiento en garantía:*** *El llamamiento en garantía puede surgir, según el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, en el evento de que "[q]uien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, [pidiendo] la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación (...)".*
>
> *Permite convocar en principio a una persona diferente a las partes inicialmente trabadas en la relación procesal (demandante y demandado), con fundamento en una relación sustancial (por ministerio de la ley) o por virtud de una relación contractual, existente entre el llamante y el llamado para que éste, responda de acuerdo a ese vínculo jurídico, de modo que el demandado llamante se libre de los eventuales efectos adversos que pueda acarrearle el litigio. Por tanto, es la relación material la que justifica trasladar los efectos adversos de la sentencia de una parte participante en la disputa al ahora citado, razón por la cual se acerca procesalmente a la denuncia del pleito. Por supuesto, se le llama, por múltiples razones, entre ellas, por economía procesal y ante todo, para darle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, en la pretensión de reembolso o "revérsica" que le formula la parte convocante. Pero también puede surtirse, llamando a la coparte, como en este caso.*
>
> *Estando definido que Liberty Seguros S.A., se vinculó inicialmente al juicio con ocasión del llamamiento en garantía que le hizo el accionado José Trinidad Torres Galvis y, luego con ocasión de la reforma del libelo en calidad de demandada a consecuencia de la acción directa promovida por la víctima y los demás accionantes, oportuno es diferenciar estas convocatorias por los efectos disímiles que puede engendrar.*
>
> ***La relación material del llamamiento involucra únicamente al llamante y a la llamada. No se expande a ningún otro sujeto procesal ni siquiera a la parte actora, al punto que solo será objeto de estudio en el evento de prosperidad de las súplicas, de modo que si éstas se desestimaren el análisis resulta inocuo o innecesario, por regla general.***
>
> ***Resulta necesario señalar en cuanto tiene que ver con el presente asunto, que aun cuando puede coadyuvar en la defensa a la parte que lo llama porque en el evento de que prosperen las pretensiones del actor por causa de la relación de garantía sustancial puede ser condenado, pues se encuentra en relación de dependencia frente a las pretensiones principales; también puede, en el ámbito de su derecho de defensa, debatir la existencia, eficacia, extinción o***

> ***vigencia de la relación sustancial que justifica su llamamiento para la pretensión del reembolso que le formula el llamante, por derecho o interés propio, y por tanto, ostenta las facultades que el ordenamiento le ofrece para oponerse a la pretensión de garantía que se la ha formulado, so pena, de responder de acuerdo a su condición sustancial de garante.***
>
> ***Para ser más claros, participa en un doble frente, pero en relación con el vínculo sustancial o contractual de afianzamiento entre el llamante y llamado, ostenta derechos, cargas y obligaciones, de tal forma que puede proponer excepciones y solicitar pruebas, por causa de la pretensión formulada en su contra". (Negrilla y subrayado fuera del texto).***

Expuesto lo que antecede, ha de seguirse la revocatoria del auto materia de apelación, para que se acceda al decreto de la prueba solicitada.

Así entonces, la ley ha otorgado instrumentos para el cumplimiento del cometido de la justicia ordinaria laboral apoyado en los principios que la regentan, debiendo el operador judicial velar por la adecuada administración de justicia, y a efecto de preservar los derechos de defensa y contradicción que asisten a las partes, atender las circunstancias especiales de cada caso, no pudiendo medirse con el mismo rasero un litigio de puro derecho, y uno en el que se requiera de un amplio despliegue y actividad probatoria, como lo es en este caso.

En lo términos precedentes, se revocará la providencia apelada, para en su lugar disponer que el Juez *a quo*, disponga el decreto de la prueba de interrogatorio de parte solicitado por la llamada en garantía **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A**.

SIN COSTAS en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SALA LABORAL**-,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juez *a quo*, mediante el cual negó el decreto de la prueba "*interrogatorio de parte dirigido al representante legal de **ISMOCOL S.A***.", solicitada por la llamada en garantía **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,** para en su lugar **disponer el decreto de la misma**, de conformidad con las motivaciones precedentemente expuestas.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR EMIRO ANTONIO VARGAS CONTRA LA FIDUPREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS (RAD. 38 2022 00099 01).

Bogotá D.C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado a las partes para alegar de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral 2º del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente sustentado por el apoderado de la parte demandante contra el auto proferido en audiencia celebrada el 03 de febrero del 2023 por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C., por medio del cual negó el decreto de la prueba solicitada por el demandante, concretamente la que denominó **"*INTERROGATORIO DE PARTE***".

Lo anterior tras considerar el *a quo* que, dentro del presente litigio[1], dada la naturaleza jurídica de la entidad pública **FIDUPREVISORA S.A**., en los términos del artículo 195 del Código General del Proceso no procede el interrogatorio de parte, en la medida que los representantes legales de las entidades públicas carecen de capacidad para confesar, en consecuencia, no se practicará el interrogatorio de parte.

[1]*(Acta audiencia archivo 13, https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/4e475c64-cff2-484a-9073-114182a79a77?vcpubtoken=8c589e30-1ee6-4987-87b3-7c7b2176d866" récord:08:48).*

Contra la decisión anterior, el apoderado del demandante oportunamente interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación[2], fundamentando, si bien es cierto se comparte la decisión sobre el contenido del artículo 195 del C.G.P., en especial porque no se admite la prueba de confesión como lo dicta la norma, cuando se solicita este medio de prueba deberá entonces exhortarse al representante legal para que rinda un informe escrito bajo juramento frente a unas cuestiones o preguntas que pueda hacer la parte demandante.

Insistió en la viabilidad de reponerse la decisión en el sentido de no decretar el interrogatorio de parte y en su lugar admitir la declaración juramentada en los términos del artículo 195 del Código General del Proceso, medio de prueba pertinente en atención a la naturaleza jurídica de la entidad demandada.

Respecto al recurso de reposición presentado, el Juez de primer grado mantuvo incólume su decisión señalando[3] que, de la lectura efectuada al acápite de

---

[2]***Apoderado Demandante (Récord 10:35):*** *"Frente a la petición del interrogatorio de parte, pues si bien es cierto se comparte la decisión en efecto sobre el artículo 195, en especial porque no se admite la prueba de confesión como lo dicta el artículo, cuando se solicita este medio de prueba deberá entonces solicitarse al representante legal que rinda un informe escrito bajo juramento frente a unas cuestiones o preguntas que pueda hacer la parte demandante, esto pues atendiendo a que deberá de una u otra manera pues rendir o pronunciarse frente a lo que eventualmente se le pueda preguntar.*
En ese orden de ideas, antes de imponer algún recurso, salvo que el señor Juez me diga que esta es la oportunidad, pues le solicito reconsidere y si esta es la oportunidad del recurso, pues sería el recurso de reposición y en subsidio de apelación, porque se trata de negar la práctica de una prueba y como digo pues en el 195 el Código General del Proceso pues es claro que no procede la prueba de confesión pero si el informe escrito y pues deberá entenderse que esto es lo que se está solicitando.

Si claro que sí, lo que pasa es que pues por eso le pregunte si este era el momento de los recursos porque pues claro no simplemente como por ponerlo de presente y pues por eso le pregunte señor Juez si en efecto usted me dice que este es el momento de los recursos, pues interpongo el recurso de reposición y en subsidio el recurso de apelación para que se reponga la decisión que usted acaba de adoptar en el sentido de no decretar el interrogatorio de parte y en su lugar se admita según voces del artículo 195 del Código General del Proceso el medio de prueba que se pide y por la naturaleza de la demandada pues que se haga a través de un informe escrito, de no aceptarse esta petición en el marco de un recurso de reposición, se haga entonces en subsidio un recurso de apelación para que el superior revoque la decisión adoptada por este despacho y en su lugar ordene a la demandada a rendir informe escrito según voces del artículo 195.".

[3]***JUEZ (13:00):*** *"Entonces téngase en cuenta lo manifestado y en relación con el recurso de reposición que se interpone, revisada la demanda y particularmente la solicitud de interrogatorio de parte, se indica con claridad meridiana que "Sírvase señor Juez citar y hacer comparecer al representante de PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., para que, en audiencia cuya fecha y hora usted señalara, absuelva interrogatorio de parte que formularé oportunamente a su despacho con el fin del reconocimiento de los documentos aportados en el escrito de demanda en especial, los referidos a la existencia del contrato de trabajo, su vigencia, las funciones y demás hechos susceptibles de confesión."*

Es claro que se está pidiendo un interrogatorio de parte, no se solicitó dentro de este escenario una declaración juramentada en los términos del artículo 195, pues si se hubiera hecho de esa manera, pues se debió haber solicitado en los términos del inciso segundo que señala lo siguiente "Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud…" eso quiere decir que al hacerse la

pruebas de la demanda, se extrae con claridad que la parte actora solicitó de manera textual el -Interrogatorio de Parte-, no siendo procedente en este caso, por la naturaleza de la entidad demandada el decreto de dicha prueba, pues aclaró, debió haberse solicitado declaración juramentada en los términos del inciso 2º del artículo 195 del C.G.P.

Agregó, tampoco puede presumirse que la solicitud planteada expresamente implica que se deba rendir informe sobre la totalidad de los hechos porque es en la demanda donde se debe surtir la oportunidad para este tipo de peticiones, aclaró, hacer una petición adicional en ese sentido comporta una reforma de la demanda que no es admisible en este momento procesal. Por último, expuso no se indica cuáles son los hechos debatidos que conciernen a la entidad demandada al no existir la solicitud referida en el artículo ibidem.

Para resolver se hacen las siguientes:

CONSIDERACIONES

Asume la Sala el conocimiento de este ordinario, en orden a desatar el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto que negó el decreto y la práctica de la prueba que se denominó: "*INTERROGATORIO DE PARTE" (página 23 pdf, archivo 1 expediente digital)*, debiendo señalar, en primer lugar, tal proveído, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

---

solicitud deben determinarse específicamente cuales son los hechos debatidos que a ella conciernan respecto de los cuales se solicitó el informe, en ese escenario ni siquiera tratando de interpretar la solicitud, podría el despacho llegar a la conclusión de un informe juramentado en la medida que adicionalmente no precisa la solicitud respecto de que hechos que se debaten en el proceso se determina el respectivo informe y en ese contexto tampoco puede presumir el despacho que la solicitud así planteada expresamente implique que se deba rendir informe sobre la totalidad de los hechos porque así tampoco se manifestó y es en la demanda que se debe surtir la oportunidad para este tipo de peticiones, pues hacer una petición adicional en ese sentido en esta oportunidad procesal comporta una reforma de la demanda que no es admisible en este momento procesal, pues ese momento procesal de reformar la demanda ya expiro, en consecuencia no se repondrá la determinación adoptada en punto a que no se decreta interrogatorio de parte que fue lo que se solicitó y tampoco se ordenara un informe juramentado en la medida en que no media solicitud al respecto y menos aún se indica cuáles son los hechos debatidos que conciernen a la demandante determinados en la solicitud a la que se refiere el artículo 195, en consecuencia no hay lugar a ordenar una declaración juramentada.".

En este orden de ideas, el problema jurídico que debe dilucidar esta Sala de decisión se circunscribe en determinar si es procedente decretar la prueba solicitada por la parte actora concretamente en el literal B) del acápite respectivo, que corresponde a la siguiente:

> **B. INTERROGATORIO DE PARTE**
>
> Sírvase señor Juez citar y hacer comparecer al representante legal de PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., para que, en audiencia cuya fecha y hora usted señalara, absuelva interrogatorio de parte que formularé oportunamente a su despacho con el fin del reconocimiento de los documentos aportados en el presente escrito de demanda en especial, los referidos a la existencia del contrato de trabajo, su vigencia, las funciones desempeñadas y demás hechos susceptibles de confesión.

En lo que atañe frente a esta solicitud, esta colegiatura se remite a lo dispuesto en el artículo 51 de nuestra Obra Procesal que señala: *"Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley…".*

Teniendo en cuenta lo anterior, pretende ahora el demandante, una vez denegada la prueba inicialmente solicitada, modificarla al interponer recurso, anhelando se ordene a la demandada **FIDUPREVISORA S.A.** rendir informe en los términos del inciso 2º del artículo 195 del C.G.P., que prevé:

> *"No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.*
>
> *Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con la advertencia de que, si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv).".*

De la norma se desprende, que podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad, para este caso **FIDUPREVISORA S.A.,** rinda informe escrito bajo juramento sobre los hechos debatidos en la solicitud y que conciernen a la entidad en la respectiva solicitud, es decir, en la demanda debe involucrarse este medio de prueba de manera textual y no como un "*interrogatorio de parte",* tal como lo plasmó el demandante en el libelo.

En igual sentido, con la solicitud de tal medio probatorio se está contrariando lo establecido en las normas procesales, específicamente aquel momento para solicitar pruebas, como lo es con la presentación de la demanda, conforme lo establece el numeral 9º del artículo 25 del C.P.T. y S.S.[4].

En este orden de ideas, al solicitar la parte actora, que sea el Juez quien decrete la prueba que no fue solicitada a fin de obtener la declaración del representante de la persona jurídica demandada, lo que está pretendiendo es que sea el *a quo* quien despliegue los actos propios que a dicho sujeto procesal le correspondía. Recuérdese que es a las partes a quienes les corresponde realizar los actos tendientes en procura de acreditar y/o probar los fundamentos facticos en que funda sus pretensiones, y no al juez, tal como lo establece el artículo 167 del C.G.P., el cual señala: "*Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen*".

Por ello, en el presente asunto la parte actora debió desempeñar un papel activo en el momento de enlistar los medios de prueba que consideraba eran conducentes e imprescindibles para las resultas del proceso, verificando la calidad de la entidad demandada y, por ende, solicitando las pruebas que proceden sin lugar a interpretación alguna.

Por las anteriores razones no se avizora errada la decisión de primera instancia ya que atendiendo sus facultades como director del proceso de conformidad con el artículo 48 del C.P.T. y de la S.S., resulta acertado al Juzgador negarlas, lo cual no obsta para que en caso de considerarlo viable el *a quo,* en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 54 del C.P.L, decrete el medio probatorio como informe juramentado en los términos previstos en el artículo 195 del C.G.P. o los que estime necesarios para resolver el debate planteado por las partes, tal como lo señaló en su proveído.

De conformidad con las consideraciones que anteceden procede la confirmación del auto apelado.

COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del C.G.P.

---

[4] *9. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de los medios de prueba.*

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del decreto de pruebas dictado por el Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá en audiencia celebrada el 03 de febrero de 2023, de conformidad con las motivaciones precedentemente expuestas.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $100.000, a cargo de la parte demandante, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN.

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR MARIA ANTONIA GAMBOA GUERRERO CONTRA NESTOR GERARDO RINCÓN GARZÓN (RAD. 18 2019 00028 01).

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

AUTO

En el presente asunto, el Magistrado Dr. GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA, integrante de la Sala de decisión, se declaró impedido para conocer del mismo, por estar incurso en la causal prevista en el numeral 2° del artículo 141 del Código General del Proceso, que establece:

> *Artículo 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:*
> *(...)*
> *2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente".*

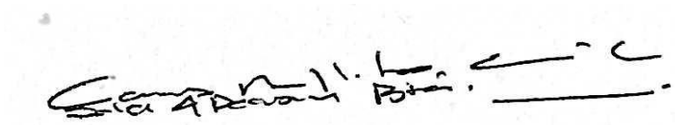
Conforme lo anterior, teniendo en cuenta, que el Magistrado Dr. GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA, como Juez Dieciocho (18) Laboral del Circuito de Bogotá, admitió la demanda dentro del presente proceso y presidio la audiencia del 27 de enero del 2020 (Art. 77 del C.P.L.) como la del 9 de marzo del 2020 donde se dio continuación a la práctica de pruebas (Art. 80 del C.P.L.), resulta evidente que se encuentra configurada la causal invocada por el Magistrado (numeral 2 del artículo 141 del C.G.P..), razón suficiente para aceptar el impedimento referido, procediendo en consecuencia los demás integrantes de la Sala de decisión, en atención al contenido del inciso 4º del artículo 140 del C.G.P., **ADMITIR** el impedimento.

En virtud de lo anterior se **ORDENA** que, por la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la oficina de reparto, se abone el presente proceso a este Despacho y se realice la respectiva compensación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN
Magistrado



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN.

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR MAGDA GLADYS ARIAS OSPINA CONTRA COLPENSIONES, PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A. (RAD. 18 2019 00128 02).

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

AUTO

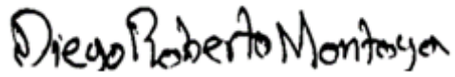
En el presente asunto, el Magistrado Dr. GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA, integrante de la Sala de decisión, se declaró impedido para conocer del mismo, por estar incurso en la causal prevista en el numeral 2° del artículo 141 del Código General del Proceso, que establece:

> *Artículo 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:*
> *(...)*
> *2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente".*

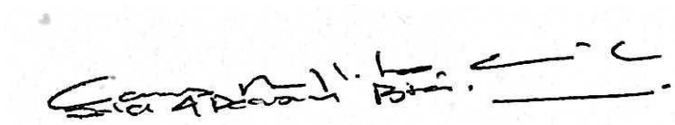
Conforme lo anterior, teniendo en cuenta, que el Magistrado Dr. GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA, como Juez Dieciocho (18) Laboral del Circuito de Bogotá, admitió la demanda dentro del presente proceso y llevo a cabo la audiencia del 14 de agosto del 2020 (Art. 77 y 80 del C.P.L.), resulta evidente que se encuentra configurada la causal invocada por el Magistrado (numeral 2 del artículo 141 del C.G.P..), razón suficiente para aceptar el impedimento referido, procediendo en consecuencia los demás integrantes de la Sala de decisión, en atención al contenido del inciso 4º del artículo 140 del C.G.P., **ADMITIR** el impedimento.

En virtud de lo anterior se **ORDENA** que, por la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la oficina de reparto, se abone el presente proceso a este Despacho y se realice la respectiva compensación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN
Magistrado



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN.

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR EULISES MALDONADO AREVALO CONTRA COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. (RAD. 18 2019 00640 01).

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

AUTO

En el presente asunto, el Magistrado Dr. GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA, integrante de la Sala de decisión, se declaró impedido para conocer del mismo, por estar incurso en la causal prevista en el numeral 2° del artículo 141 del Código General del Proceso, que establece:

> *Artículo 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:*
> *(...)*
> *2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente".*

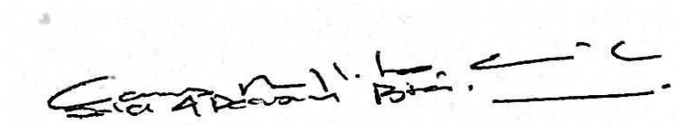
Conforme lo anterior, teniendo en cuenta, que el Magistrado Dr. GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA, como Juez Dieciocho (18) Laboral del Circuito de Bogotá, admitió la demanda dentro del presente proceso, resulta evidente que se encuentra configurada la causal invocada por el Magistrado (numeral 2 del artículo 141 del C.G.P..), razón suficiente para aceptar el impedimento referido, procediendo en consecuencia los demás integrantes de la Sala de decisión, en atención al contenido del inciso 4º del artículo 140 del C.G.P., **ADMITIR** el impedimento.

En virtud de lo anterior se **ORDENA** que, por la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la oficina de reparto, se abone el presente proceso a este Despacho y se realice la respectiva compensación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN
Magistrado



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR ANA VERONICA CASTELLANOS ROJAS contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 034 2021 00064 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR ELIZABETH LUGO DIAZ contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 021 2022 00063 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR YAMILE RAQUEL IGUARAN PINEDO contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 036 2019 00854 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR LUIS GONZALO CAMARGO contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 034 2021 00122 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR GLORIA STELLA MENDEZ USCATEGUI contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 032 2019 00798 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR EDGAR RAMIREZ RINCON contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 038 2020 00332 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR BARBARA INES ALBARRACIN GOMEZ contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 024 2020 00448 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR CARMEN CECILIA NOGUERA CALDERON contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 026 2021 00150 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR MARIA TERESA AYCARDI FONSECA contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 007 2019 00436 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR MARIA YAUDY MUÑOZ TORRES contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 039 2018 00537 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR MARIO MOISES JUVINAO DAZA contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 033 2021 00384 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR MARTHA ROCIO BRICEÑO CHARRY contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 033 2019 00703 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO EJECUTIVO PROMOVIDO POR GLORIA ESTELA MAHECHA GOMEZ contra **CAJANAL EICE EN LIQUIDACION.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 028 2020 00044 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO NEIL ARNSTRONG RAMIREZ DELGADO contra **EMPRESA COL DE PETROLEOS ECOPETROL S.A Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 006 2005 00594 02

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR VICTOR MANUEL MATOMA ROCGA contra **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A INDEGA SA.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 002 2019 00752 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR CESAR NAPOLEON ARAUJO AÑATE contra **COLPENSIONES.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 035 2020 00219 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR DIANA MANRIQUE VALENCIA contra **COLPENSIONES Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 004 2020 00417 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR CARLOS EDUARDO GIL LOPEZ contra **COLPENSIONES.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 032 2020 00397 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR INES VEGA contra **UGPP.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 013 2017 00061 02

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR INES ELVIRA SIERRA GALLEGO contra **COLFONDOS S.A.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 032 2017 00602 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR MARIO ENRIQUE VELANDIA contra **ASOCIACION DE URBANIZADORAS COLOMBIANOS LTDA ASUCOL Y OTROS.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 003 2019 00037 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR MARTHA LUCIA BEJARANO DE ACOSTA contra **COLPENSIONES.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 025 2019 00270 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO PONENTE

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR MARTHA LUCIA DIAZ SILVA contra **COLPENSIONES.**

EXPEDIENTE N° 11001 3105 038 2019 00796 01

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, SEÑÁLESE el día **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)** para proferir por escrito la decisión de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

INFORME SECRETARIAL

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

MAGISTRADO DR. LUIS AGUSTIN VEGA CARVAJAL

Me permito pasar a su Despacho, el expediente 11001310500620170070001, informando que regresó del H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, la que ACEPTA EL DESISTIMIENTO del recurso extraordinario de casación, formulado por la parte demandante, contra la Sentencia proferida por la Sala Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 30 de octubre de 2020, sírvase proveer.

IVAN DARIO LEGUIZAMON ARIAS
ESCRIBIENTE NOMINADO

República de Colombia
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.
Sala Laboral

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase.

LUIS AGUSTIN VEGA CARVAJAL
MAGISTRADO PONENTE

INFORME SECRETARIAL

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

MAGISTRADO DR. **LUIS AGUSTIN VEGA CARVAJAL**

Me permito pasar a su despacho, el expediente No.11001310501020170066801, informando que regresó de la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral, sala de descongestión, decidiendo NO CASAR la sentencia proferida por esta Sala de fecha 05 de diciembre de 2019.

IVAN DARIO LEGUIZAMON ARIAS
ESCRIBIENTE

Rama Judicial
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencia al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUIS AGUSTIN VEGA CARVAJAL
MAGISTRADO

INFORME SECRETARIAL

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

MAGISTRADO DR. LUIS AGUSTIN VEGA CARVAJAL

Me permito pasar a su despacho, el expediente No.11001310502120160040801, informando que regresó de la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral, decidiendo CASAR la sentencia proferida por esta Sala de fecha 28 de noviembre de 2019.

IVAN DARIO LEGUIZAMON ARIAS
ESCRIBIENTE

Rama Judicial
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Inclúyanse, en la liquidación de costas, como agencias en derecho, la suma de Tres Millones Quinientos Mil Pesos $3'500.000 a cargo de la parte DEMANDADA LA NACIÓN – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

Efectuado lo anterior, y de no existir actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencia al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase.

LUIS AGUSTIN VEGA CARVAJAL
MAGISTRADO

INFORME SECRETARIAL

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

MAGISTRADO DR. LUIS AGUSTIN VEGA CARVAJAL

Me permito pasar a su Despacho, el expediente 11001310502420190053901, informando que regresó del H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, la que DECLARA DESIERTO el recurso extraordinario de casación, formulado por la parte demandante, contra la Sentencia proferida por la Sala Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 31 de agosto de 2021, sírvase proveer.

IVAN DARIO LEGUIZAMON ARIAS
ESCRIBIENTE NOMINADO

República de Colombia
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.
Sala Laboral

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase.

LUIS AGUSTIN VEGA CARVAJAL
MAGISTRADO PONENTE

INFORME SECRETARIAL

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

MAGISTRADO DR. **LUIS AGUSTIN VEGA CARVAJAL**

Me permito pasar a su despacho, el expediente No.11001310500320180032201, informando que regresó de la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral, sala de descongestión, decidiendo NO CASAR la sentencia proferida por esta Sala de fecha 30 de septiembre de 2020.

IVAN DARIO LEGUIZAMON ARIAS
ESCRIBIENTE

Rama Judicial
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencia al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUIS AGUSTIN VEGA CARVAJAL
MAGISTRADO

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad: Fuero Sindical 10 2022 00480 01
RI: **A-737-23**
De: ABEL CRUZ HERNÁNDEZ.
Contra: CONSORCIO EXPRESS S.A.S.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, de conformidad con el artículo 65 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2011, **ADMÍTASE** el recurso de apelación, interpuesto por la demandada CONSORCIO EXPRESS S.A.S, contra el Auto de fecha **17 de marzo de 2023**, proferido por la Juez 10 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Ejecutoriada la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el **numeral 2º del artículo 13 de la ley 2213, del 13 de junio de 2022, por Secretaría, CÓRRASELE** traslado a las partes, por el término común de 5 días, para que presenten sus alegaciones por escrito, a través del correo electrónico de la secretaría de la sala laboral, secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Efectuado lo anterior, regresen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad: Ordinario 14 2019 00805 01
RI: **S-3617-23**
De: RUBÉN DARÍO OCAMPO HENAO.
Contra: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, teniendo en cuenta que, el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, dio cumplimiento al auto proferido el 02 de marzo de 2023, visto a folio 02 del cuaderno del Tribunal, se dispone:

De conformidad con artículo 66 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, **ADMÍTASE,** el recurso de apelación, interpuesto por las demandadas SKANDIA S.A. y COLPENSIONES, contra la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022, por el Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Ejecutoriada la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el **numeral 1° del artículo 13 de la ley 2213, del 13 de junio de 2022, por Secretaría, CÓRRASELE,** traslado a las partes, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte demandada, para que presenten sus alegaciones por escrito, a través del correo electrónico de la secretaría de la sala laboral, secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Efectuado lo anterior, regresen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 15 2021 00294 01
RI:	**S-3655-23**
De:	CLARA PATRICIA MUÑOZ JIMÉNEZ.
Contra:	EMPRESA DE TELECOMINUCACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P – ETB S.A E.S.P.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, de conformidad con artículo 69 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, **ADMÍTASE,** en Grado de Jurisdicción de Consulta, en favor de la demandante CLARA PATRICIA MUÑOZ JIMÉNEZ, la revisión de la sentencia proferida el 01 de marzo de 2023, por el Juez 15 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Ejecutoriada la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el **numeral 1° del artículo 13 de la ley 2213, del 13 de junio de 2022, por Secretaría, CÓRRASELE** traslado a las partes, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte demandante, para que presenten sus alegaciones por escrito, a través del correo electrónico de la secretaría de la sala laboral, secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Efectuado lo anterior, regresen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad	Ordinario 15 2021 00568 01
RI:	**S-3657-23**
De:	JAVIER OSWALDO RODRÍGUEZ PÉREZ.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, de conformidad con el artículo 66 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, **ADMÍTASE,** el recurso de apelación, interpuesto por las demandadas SKANDIA S.A. y COLPENSIONES, contra la sentencia proferida el 23 de febrero de 2023, por el Juez 15 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Ejecutoriada la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el **numeral 1º del artículo 13 de la ley 2213, del 13 de junio de 2022, por Secretaría, CÓRRASELE** traslado a las partes, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte demandada, para que presenten sus alegaciones por escrito, a través del correo electrónico de la secretaría de la sala laboral, secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Efectuado lo anterior, regresen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 16 2020 00415 01
RI:	**S-3653-23**
De:	LUIS JAVIER GONZÁLEZ CARVAJAL.
Contra:	TITO EDGAR TRUJILLO BELLO.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, de conformidad con artículo 69 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, **ADMÍTASE,** en Grado de Jurisdicción de Consulta, en favor del demandante LUIS JAVIER GONZÁLEZ CARVAJAL, la revisión de la sentencia proferida el 07 de febrero de 2023, por el Juez 16 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Ejecutoriada la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el **numeral 1° del artículo 13 de la ley 2213, del 13 de junio de 2022, por Secretaría, CÓRRASELE** traslado a las partes, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte demandante, para que presenten sus alegaciones por escrito, a través del correo electrónico de la secretaría de la sala laboral, secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Efectuado lo anterior, regresen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad	Ordinario 20 2021 00605 01
RI:	**S-3658-23**
De:	RAFAEL ARTURO TRIANA PINZON.
Contra:	SERVIENTREGA S.A. Y OTROS.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, de conformidad con el artículo 66 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, **ADMÍTASE,** el recurso de apelación, interpuesto por el demandante RAFAEL ARTURO TRIANA PINZON y la demandada TALENTUM S.A.S, contra la sentencia proferida el 27 de febrero de 2023, por el Juez 20 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Ejecutoriada la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el **numeral 1º del artículo 13 de la ley 2213, del 13 de junio de 2022, por Secretaría, CÓRRASELE** traslado a las partes, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte demandante, para que presenten sus alegaciones por escrito, a través del correo electrónico de la secretaría de la sala laboral, secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Efectuado lo anterior, regresen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad: Ordinario 26 2020 00109 01
RI: **S-3631-23**
De: ARMANDO RAFAEL DIAZGRANADOS DIAZ.
Contra: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTRO.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, teniendo en cuenta que, el Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá, dio cumplimiento al auto proferido el 09 de marzo de 2023, visto a folio 02 del cuaderno del Tribunal, se dispone:

De conformidad con artículo 66 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, **ADMÍTASE,** el recurso de apelación, interpuesto por la demandada AFP PORVENIR S.A., contra la sentencia proferida el 22 de febrero de 2023, por la Juez 26 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Ejecutoriada la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el **numeral 1° del artículo 13 de la ley 2213, del 13 de junio de 2022, por Secretaría, CÓRRASELE,** traslado a las partes, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte demandada, para que presenten sus alegaciones por escrito, a través del correo electrónico de la secretaría de la sala laboral, secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Efectuado lo anterior, regresen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad: Ordinario 28 2014 00350 01
RI: **S-3650-23**
De: JAILER CHAGUALA RAYO.
Contra: ENERGY CONSULTING ENGINEERING S.A.S Y OTROS.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, previo a avocar conocimiento, comoquiera que, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, fue concedido en efecto suspensivo, tal como lo dispone el artículo 66 del C.P.T.S.S., el Juzgado de Origen, de forma discriminada y foliada, deberá enviar al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, **el expediente original adelantado en físico**, antes de la pandemia, junto con las diligencias surtidas digitalmente, debidamente indexadas y foliadas, de acuerdo con el **Protocolo para la Gestión de Documentos Electrónicos, Digitalización y Conformación del Expediente, según circular PCSJC20-27, de fecha 21 de julio de 2020, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura; y, de la circular No. 0004 del 23 de febrero de 2022, proveniente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,** con el fin de confrontar las diligencias digitales con el expediente físico; en consecuencia:

Por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de Origen, para que remita el expediente en los anteriores términos.

Cumplido lo anterior, por Secretaría, regresen las diligencias al despacho para decidir lo pertinente, **SIN QUE SE SOMETA A NUEVO REPARTO O ACTUACIÓN.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad	Ordinario 28 2020 00509 01
RI:	**S-3651-23**
De:	MARINA GOMEZ ANGARITA.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, de conformidad con el artículo 66 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, **ADMÍTASE,** el recurso de apelación, interpuesto por la demandada COLPENSIONES, contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2023, por la Juez 28 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Ejecutoriada la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el **numeral 1° del artículo 13 de la ley 2213, del 13 de junio de 2022, por Secretaría, CÓRRASELE** traslado a las partes, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte demandada, para que presenten sus alegaciones por escrito, a través del correo electrónico de la secretaría de la sala laboral, secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Efectuado lo anterior, regresen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad	Ordinario 28 2020 00515 01
RI:	**S-3652-23**
De:	OSWALDO CORDOBA AVENDAÑO.
Contra:	DRUMMOND LTDA COLOMBIA.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, de conformidad con el artículo 66 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, **ADMÍTASE,** el recurso de apelación, interpuesto por el demandante OSWALDO CORDOBA AVENDAÑO y la demandada DRUMMOND LTDA COLOMBIA, contra la sentencia proferida el 14 de marzo de 2023, por la Juez 28 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Ejecutoriada la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el **numeral 1º del artículo 13 de la ley 2213, del 13 de junio de 2022, por Secretaría, CÓRRASELE** traslado a las partes, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte demandante, para que presenten sus alegaciones por escrito, a través del correo electrónico de la secretaría de la sala laboral, secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Efectuado lo anterior, regresen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 31 2022 00197 01
RI:	**S-3659-23**
De:	JAIME QUINTO MARTINEZ.
Contra:	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES PROCIC S.A.S Y OTROS.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, previo a avocar conocimiento, advierte el Despacho que, no se puede acceder al link del expediente digital, que fue remitido, por lo tanto, el Juzgado de Origen, deberá allegar al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el link del expediente digital, debidamente indexado y foliado, de acuerdo con el **Protocolo para la Gestión de Documentos Electrónicos, Digitalización y Conformación del Expediente, según circular PCSJC20-27, de fecha 21 de julio de 2020, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura; y, de la circular No. 0004 del 23 de febrero de 2022, proveniente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia**,en consecuencia:

Por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de Origen, para que remita el expediente en los anteriores términos.

Cumplido lo anterior, por Secretaría, regresen las diligencias al despacho para decidir lo pertinente, **SIN QUE SE SOMETA A NUEVO REPARTO O ACTUACIÓN.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad: Ordinario 33 2020 00054 01
RI: **S-3654-23**
De: GLADYS BEJARANO MEJIA.
Contra: BANCO POPULAR S.A.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, previo a avocar conocimiento, comoquiera que, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, fue concedido en efecto suspensivo, tal como lo dispone el artículo 66 del C.P.T.S.S., el Juzgado de Origen, de forma discriminada y foliada, deberá enviar al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, **el expediente original adelantado en físico**, antes de la pandemia, junto con las diligencias surtidas digitalmente, debidamente indexadas y foliadas, de acuerdo con el **Protocolo para la Gestión de Documentos Electrónicos, Digitalización y Conformación del Expediente, según circular PCSJC20-27, de fecha 21 de julio de 2020, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura; y, de la circular No. 0004 del 23 de febrero de 2022, proveniente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,** con el fin de confrontar las diligencias digitales con el expediente físico; en consecuencia:

Por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de Origen, para que remita el expediente en los anteriores términos.

Cumplido lo anterior, por Secretaría, regresen las diligencias al despacho para decidir lo pertinente, **SIN QUE SE SOMETA A NUEVO REPARTO O ACTUACIÓN.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad: Ordinario 36 2020 00222 01
RI: **S-3135-23**
De: GRACIANO SAMACA ROSALES.
Contra: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTRO.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, teniendo en cuenta que, el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, dio cumplimiento al auto proferido el 09 de marzo de 2023, visto a folio 07 del cuaderno del Tribunal, se dispone:

De conformidad con artículo 66 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, **ADMÍTASE,** el recurso de apelación, interpuesto por las demandadas AFP PORVENIR S.A y COLPENSIONES, contra la sentencia proferida el 05 de octubre de 2021, por la Juez 36 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Ejecutoriada la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el **Decreto 806 del 4 de junio de 2020, en concordancia con el numeral 5º, del art. 625 del C.G.P., por Secretaría, CÓRRASELE,** traslado a las partes, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte demandada, para que presenten sus alegaciones por escrito, a través del correo electrónico de la secretaría de la sala laboral, secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Efectuado lo anterior, regresen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad	Ordinario 36 2021 00485 01
RI:	**S-3656-23**
De:	CAROLINA HERNÁNDEZ RIVERA.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTRO.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de marzo de 2023, de conformidad con el artículo 66 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, **ADMÍTASE,** el recurso de apelación, interpuesto por la demandada COLPENSIONES, contra la sentencia proferida el 13 de marzo de 2023, por la Juez 36 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Ejecutoriada la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el **numeral 1° del artículo 13 de la ley 2213, del 13 de junio de 2022, por Secretaría, CÓRRASELE** traslado a las partes, por el término de 5 días a cada una, comenzando por la parte demandada, para que presenten sus alegaciones por escrito, a través del correo electrónico de la secretaría de la sala laboral, secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Efectuado lo anterior, regresen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

REF.	: Sumario No. 00 2022 00845 02.
R.I.	: S-3660-23
DE	: ISABEL MORA DE CANAL.
CONTRA	: MEDIMAS EPS EN LIQUIDACIÓN.

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 28 de marzo de 2023, agréguense las diligencias provenientes de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, contentivas del trámite de queja, que corresponden al cuaderno No. 01 del expediente.

Sería del caso, admitir el recurso de apelación, interpuesto por la accionada **MEDIMAS EPS EN LIQUIDACIÓN,** contra la providencia proferida el 30 de abril de 2021, por la **SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN** de la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**; si no advirtiera este Despacho, que dicho recurso no procede contra la mencionada providencia, en la medida en que, el asunto decidido, se rige por las disposiciones del proceso de única instancia, dada la cuantía de la pretensión solicitada, la cual asciende a la suma de **NUEVE MILLÓNES**

DOSICENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($9.259.906=), la que no supera el monto de los 20 S.M.L.M.V., tal como lo dispone el artículo 12 del C.P.T.S.S., en concordancia con lo consagrado en el numeral 1 del artículo 26 del C.G.P., en el numeral 47 del artículo 6º del Decreto 2462 de 2013, y en el numeral 2 del artículo 34º del Decreto 1080 de 2021, según el cual son funciones de la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación : *"Conocer a petición de parte y fallar en derecho, con carácter definitivo en primera o en única instancia y con las facultades propias de un juez, los asuntos contemplados en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 modificado por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019, y en las demás normas que la reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan"* razón por la cual:

R E S U E L V E

PRIMERO: RECHAZAR de plano por improcedente, el recurso de apelación interpuesto por la accionada **MEDIMAS EPS EN LIQUIDACIÓN,** contra la providencia proferida el 30 de abril de 2021, por la **SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN** de la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD,** de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, devuélvanse las diligencias a la entidad de origen, previas las desanotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado Ponente

Proceso: 11001310504020210021 5 01

PROCESO DE PAOLA JOHANNA FAYAD ARCINIEGAS CONTRA CODENSA S.A. E.S.P.

En Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023), el Magistrado Ponente, en compañía de los demás miembros de la Sala Tercera de Decisión Laboral, profieren la siguiente decisión

TEMA: Auto rechaza demanda.

OBJETO: Procede la sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra el auto de fecha 9 de junio de 2022, mediante el cual el Juzgado Cuarenta (40) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. resolvió rechazar la demanda, por cuanto la parte actora no subsanó la totalidad de las falencias advertidas conforme a lo solicitado.

ANTECEDENTES

Paola Johanna Fayad Arciniegas llamó a juicio a Codensa S.A. E.S.P., para que previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo, se le condene a restablecer y restituirle todas las condiciones laborales que tenía hasta el 1 de octubre de 2015, fecha en que fue despedida; a pagar 500 SMMLV a título de reparación de daños y perjuicios materiales, morales y a la vida de relación; a pagarle el IPC certificado por el DANE, mes a mes, hasta cuando se materialice su pago; a cancelar los intereses moratorios sobre las acreencias laborales adeudadas, a lo ultra y extra petita, costas y agencias en derecho.

Como fundamento de sus pretensiones relató en síntesis, que la vinculación laboral ha estado vigente desde el 1 de mayo de 2001, habiendo sido vinculada directamente por la demandada, mediante un

contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año, vigente desde el 1 de febrero de 2012, el cual se prorrogó en diversas ocasiones.

Refiere que a partir del 1 de octubre de 2015 el contrato debía prorrogarse a un año, sin embargo, que la demandada decidió terminarlo unilateralmente.

DECISIÓN DEL JUZGADO

El juzgado de conocimiento mediante providencia del 9 de junio de 2022, dispuso rechazar la demanda de la referencia, por cuanto la demandante no corrigió una de las falencias advertidas en el auto inadmisorio de la demanda, correspondiente a aportar la totalidad de las pruebas enunciadas en el respectivo acápite.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior determinación, la apoderada de la parte actora interpuso recurso de apelación, solicitando se revoque la decisión de primera instancia, excusándose por cualquier error atribuible a fallas técnicas que se escapan de su control y que han impedido que se acceda a los citados documentos, y que, se haberse efectuado requerimiento alguno, el mismo hubiese sido atendido con la diligencia necesaria, antes de disponer el rechazo de la demanda.

Refiere que los anexos de la demanda si fueron aportados en debida manera y dentro de las posibilidades que permite el sistema de recepción de la Rama Judicial, que no es infalible.

Refiere que en razón a que el Juzgado 1 Municipal de Pequeñas Causas asumió el conocimiento del presente proceso de manera inicial, previo a declarar su falta de competencia, mediante correo electrónico se radicó la totalidad de los anexos, sin haberse informado anomalía alguna.

Indica que una vez asignado el proceso al Juzgado Cuarenta (40) Laboral del Circuito de Bogotá D.C., e inadmitida la demanda, se subsanaron todos y cada uno de los puntos señalados y exigidos, incluyendo lo relacionado con los anexos de la demanda, indicándose que los anexos habían sido remitidos en su primer momento al Juzgado 1 Municipal de Pequeñas Causas, y que si bien por error involuntario se envió el escrito debidamente subsanado, así como los documentos requeridos por el juzgado en otras causales de inadmisión, no se aportó la totalidad de los anexos, obedeciendo a una falla interna de la oficina de reparto, y a un posible error involuntario del primer juzgado que conoció la demanda.

Aduce que la poderdante no puede sufrir las consecuencias negativas de una omisión interna de la administración de justicia, bien sea porque el despacho inicial no remitió los anexos de la demanda, o porque la oficina de reparto remitió el escrito sin los mismos.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término, la apoderada de la parte actora solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia, en tanto se cuenta con los elementos de hecho y de derecho para emitir una decisión justa y proporcional.

No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la alzada, previas las siguientes…

CONSIDERACIONES:

En el caso *sub lite*, la decisión del *a quo* consistió en rechazar la demanda, providencia que resulta susceptible del recurso de apelación conforme al ordinal 1º del artículo 65 del C.P.T y de la S.S, y así fue interpuesto, por tanto, la Sala procede a tomar la decisión que en derecho corresponda.

Punto álgido del recurso se centra en establecer si es acertada la decisión del a quo al rechazar la demanda por considerar que la misma no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 25 del C.P.T. y de la S.S.

Acerca de los requisitos de la demanda, el C.P.T. y de la S.S. establece:

> *"(…) ARTICULO 25. FORMA Y REQUISITOS DE LA DEMANDA. La demanda deberá contener:*
> *1. La designación del juez a quien se dirige.*
> *2. El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas.*
> *3. El domicilio y la dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuere el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda.*
> *4. El nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.*
> *5. La indicación de la clase de proceso.*
> *6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado.*
> *7. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados.*

8. Los fundamentos y razones de derecho.
9. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba, y
10. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia.
Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito previsto en el numeral octavo (…)".

En concordancia con la norma antes referida, cuando el juez observe que no se da cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley, devolverá el escrito al demandante a fin de que corrija los yerros señalados y en caso que los mismos persistan la demanda será rechazada.

En suma y precisado lo anterior, el artículo 26 ibídem, modificado por el artículo 14 de la Ley 712 de 2001, dispone que la demanda deberá estar acompañada de:

"(…) 1. El poder.

2. Las copias de la demanda para efecto del traslado, tantas cuantos sean los demandados.

3. Las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentren en poder del demandante.

4. La prueba de la existencia y representación legal, si es una persona jurídica de derecho privado que actúa como demandante o demandado.

5. La prueba del agotamiento de la reclamación administrativa si fuere el caso.

6. La prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad de que trata la Ley 640 de 2001, cuando ella lo exija (…)". Negrilla fuera del texto.

Revisado el expediente de la referencia, pudo verificarse que el despacho de conocimiento inadmitió la demanda mediante providencia del 17 de enero de 2022, alno cumplirse con el requisito establecido en el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, por evidenciarse hechos con varias situaciones fácticas, por no aportar ninguna de las pruebas enunciadas, por no allegarse certificado de existencia y representación de la demandada, por no acreditarse el envió simultáneo de la demanda, y por no realizarse la declaración juramenta respecto de la dirección electrónica suministrada.

Dentro del término estipulado, la apoderada remitió escrito de subsanación, sin embargo, el juzgado de conocimiento en proveído del 9 de junio de 2022 indicó que pese a que se habían subsanado la mayoría de las falencias advertidas, lo mismo no ocurrió con el numeral 3, el cual correspondía a que se allegara la totalidad de los medios probatorios solicitados y los anexos enunciados, advirtiendo además, que si bien se allegó un link de drive, al intentar abrirlo arroja un texto correspondiente a "*lo sentimos, el archivo que has solicitado no existe*", disponiendo así, el rechazo de la demanda.

Considera la Sala que las circunstancias alegadas por el juez de conocimiento no deberían ser causal de rechazo, pues debería ceñirse a los criterios consagrados en el artículo 25 del C.P.T. y de la S.S., modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001, y al artículo 28 ibídem, modificado por el artículo 15 de la misma Ley, del cual puede inferirse que la demanda podrá ser rechazada cuando no se cumplan los requisitos señalados en el artículo anteriormente transcrito.

Y es que, considera este colegiado que de conformidad con la normatividad aquí expuesta, el que no se aporte la totalidad de las documentales enunciadas en el escrito de demanda, no es causal de rechazo, máxime, cuando el juez de conocimiento puede abstenerse de decretar las pruebas que no fueron allegadas o incorporadas en la oportunidad procesal pertinente, debiendo analizar los argumentos expuestos en el memorial de subsanación, y el recurso pertinente.

En virtud de lo anterior, considera la Sala, que rechazar la demanda por dichas circunstancias comportan un excesivo rigor que pone en riesgo la primacía del derecho sustancial, que si bien destaca la importancia del control que el juez de conocimiento debe ejercer sobre el escrito de la demanda, también lo es que, el mismo no debe resultar inflexible, pues asumir tal postura, puede llegar a obstaculizar el ejercicio del derecho de acción y el del acceso a la administración de justicia.

Así las cosas, con miras a evitar una negación de justicia, se revocará la decisión de primera instancia, para en su lugar ordenar al juez de primer grado admitir la demanda ordinaria de la referencia. Sin costas en esta instancia, por no haberse causado.

En razón y mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto impugnado de fecha 9 de junio de 2022, para en su lugar **ORDENAR** al juez de primera instancia, admitir la demanda de la referencia, conforme a lo ya expuesto.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia ante su no causación.

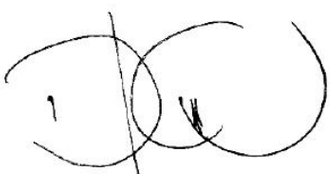
TERCERO: Envíese al juzgado de origen, para que se continúe con el trámite pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

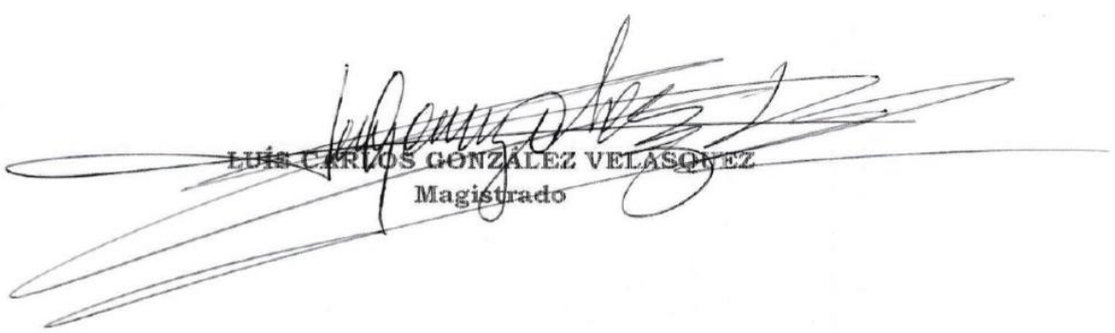
Los Magistrados,



JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado ponente

Proceso: 11001310500520200029 4 01

PROCESO DE BORIS HUMBERTO CÉSPEDES POLO CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

En Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023), el Magistrado Ponente, en compañía de los demás miembros de la Sala Tercera de Decisión Laboral, profieren la siguiente decisión,

TEMA: Auto tiene por no contestada la demanda.

OBJETO: Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en contra del auto proferido el 23 de agosto de 2021 por el Juzgado Quinto (5) Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en el cual se tuvo por no contestada la demanda por la parte recurrente, no sin antes reconocer personería adjetiva al Dr. Jhon Ferney Patiño Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.653.246 y tarjeta profesional 319.844 del C.S.J., como apoderado sustituto de Colpensiones, en los términos y para los fines indicados en el poder conferido

ANTECEDENTES

Boris Humberto Céspedes llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., pretendiendo que se declare la nulidad del traslado del RPMPD al RAIS, ordenándose la devolución de los aportes efectuados, y se ordene a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, del retroactivo pensional, y de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; asimismo, al pago de costas.

Como fundamento de sus pretensiones relató en síntesis, que nació el día 22 de febrero de 1957; que efectuó cotizaciones al Instituto de Seguros

Sociales desde el 1 de septiembre de 1996 hasta el mes de marzo del año 2000.

Refiere que el promotor de Protección S.A. en el momento de la afiliación, no le brindó el deber de información a cargo.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Como quiera que la parte demandada Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones dentro del término legal no allegó escrito de contestación de demanda, y que este fue aportado una vez fenecido el mismo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, mediante providencia del 23 de agosto de 2021, se dispuso tener por no contestada la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior determinación, la apoderada de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, manifestando que el día 30 de octubre de 2020, vía correo electrónico, se remitió el auto admisorio, la demanda y los anexos, por lo que, la providencia se entendería notificada solo hasta el 4 de noviembre de dicha anualidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 291 y ss del Código General del Proceso, en el artículo 41 del C.P.T. y de la S.S. y su parágrafo, y los artículos 6 y 8 del Decreto 806 de 2020.

Así las cosas, refiere que la contestación de la demanda fue remitida el día 20 de noviembre de 2020, encontrándose en término para su presentación, sin que el despacho se haya referido al término de notificación de entidades públicas, en donde se debe tener en cuenta 5 días hábiles siguientes a la notificación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término, la demandada Colpensiones reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, aduciendo que consideran que la interpretación y alcance que se le ha dado al Decreto 806 de 2020 no resulta ser el más acertado, desconociendo lo preceptuado en el artículo 41 del C.P.T. y de la S.S.

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado se procede a resolver la alzada previa las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Como quiera que el auto que da por no contestada la demanda es susceptible del recurso de apelación de conformidad con el numeral 1º del artículo 65 del C.P.T y de la S.S, ésta Sala procede a tomar la decisión que en derecho corresponda.

El punto esencial que compete definir por parte de esta corporación consiste, en determinar si debe darse por no contestada la demanda por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, o si le asiste razón a la recurrente, en cuando el escrito se allegó dentro del término legal, debiendo ser tenido en cuenta.

Frente al tema de las notificaciones personales, dispuso el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 (vigente al momento de dicha diligencia), que:

> *"(…) Las notificaciones que deban hacerse personalmente* ***también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica*** *o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*
>
> *El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.*
>
> *<Inciso CONDICIONALMENTE exequible>* ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación****.*
>
> *Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.*
>
> *Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.*
>
> ***PARÁGRAFO 1o.*** *Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas*

extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquier otro.

PARÁGRAFO 2o. *La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales (…)". Negrilla fuera del texto.*

Precisado lo anterior, deberá hacerse claridad que contrario a lo manifestado por la apoderada de Colpensiones, teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad, la notificación podrá efectuarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del C.P.T. y de la S.S. o el Decreto 806 de 2020 (norma vigente para dicha data), sin que, bajo ninguna circunstancia, entre dichas normas se sumen los diferentes términos dispuestos.

Así las cosas, se evidencia al interior del plenario que el Juzgado Quinto (5) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. notificó mediante correo electrónico a la demandada Colpensiones el día 30 de octubre de 2020, por lo que la notificación se entenderá surtida una vez transcurridos dos días siguientes al envío del mensaje, teniendo que en el presente caso, es necesario contabilizar los días 3 y 4 de noviembre para tener por realizada efectivamente la acción, comenzando a correr términos el día siguiente, es decir, el 5 de noviembre de 2020.

En conclusión, y teniendo en cuenta que la contestación de la demanda remitida por Colpensiones fue allegada el 20 de noviembre de 2020, no hay duda alguna de que la misma resulta extemporánea, pues el término vencía el día 19 del mismo mes y año.

Por último, y frente a la afirmación de la recurrente de contar con 5 días hábiles después de surtida la correspondiente diligencia, lo cierto es que conforme lo dispuesto en la normativa, los mismos resultan aplicables cuando la persona a quien deba hacerse le notificación, o su delegado no se encuentren en el lugar o no puedan por cualquier motivo recibir la notificación, la cual se practicará mediante entrega que se haga al secretario general de la entidad o en la oficina receptora de correspondencia; asimismo, cuando los asuntos se tramiten en lugar diferente al de la sede de la entidad demandada; situaciones que no resultan aplicables al caso concreto, inclusive, se encuentra desconociendo la apoderada que el artículo sobre el cual fundamenta el recurso, establece taxativamente: "*cuando la notificación se efectúe de conformidad con lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá surtida después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia",* sin que haya sido un término adicional para todo tipo de notificaciones efectuadas a entidades públicas, resultando claro, que al haberse efectuado la

actuación en virtud del Decreto 806 de 2020, lo anterior no resulta aplicable.

En conclusión, deberá confirmarse la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta que la contestación allegada por Colpensiones fue extemporánea.

Por lo anterior, la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha 23 de agosto de 2021 proferido por el Juzgado Quinto (5) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia, conforme lo expuesto en el presente proveído.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia ante su no causación.

TERCERO: Envíese al juzgado de origen para que se continúe con el trámite pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los magistrados,

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado Ponente

Proceso: 11001310501220150069602

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE FRANCISCO JAVIER NIETO PÁRAMO CONTRA CONTACT CENTER AMÉRICAS S.A.

Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días de marzo de dos mil veintitrés (2023), previa convocatoria a la Sala, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, profieren la siguiente decisión:

TEMA: Aprobación liquidación de costas.

OBJETO: Resuelve la sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Contact Center Américas S.A., en contra de la providencia proferida por el Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el 1 de abril de 2022, mediante la cual se aprobó la liquidación de costas efectuada por secretaría, por el valor de $100.000 por concepto de agencias en derecho en primera instancia.

ANTECEDENTES

Francisco Javier Nieto Páramo llamó a juicio a Contact Center Américas S.A., con el fin de que se le condenara al pago de la diferencia entre el salario devengado y el que se llegare a probar que percibió la señora Jenny Tatiana Garzón Tocancipá de todos los valores por concepto de prestaciones sociales; al pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sobre la diferencia que resulte de las cesantías; al pago de la indemnización por despido sin justa causa, al pago de la indemnización de que trata el artículo 65 del C.S.T., y al pago de costas procesales.

La demanda fue repartida al Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá D.C., quien mediante sentencia del 15 de noviembre de 2018, dispuso declarar la existencia de un contrato de trabajo entre ambas partes; condenar a Contact Center Américas S.A., a pagar los conceptos determinados por concepto de nivelación salarial, cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, indemnización por despido sin justa causa, absolviéndola de las demás pretensiones incoadas en su contra, y condenándola al pago de costas, señalando como agencias en derecho la suma de $1.400.000, en favor de la parte actora.

Una vez resuelto el recurso de apelación incoado por la parte demandada, esta corporación dispuso modificar el ordinal primero de la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2018, para en su lugar, declarar que entre el demandante y la demandada existieron 3 contratos de trabajo, el primero desde el 1 de mayo de 2005 al 30 de junio de 2006; el segundo del 23 de julio de 2007 al 17 de diciembre de 2008, y el tercero, del 9 de enero de 2009 al 4 de septiembre de 2013; asimismo, revocó el ordinal segundo de la sentencia proferida por el juzgado de conocimiento, resolviendo absolver a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra, revocando las costas de primera instancia, las cuales quedarán a cargo del demandante.

Mediante providencia del 1 de abril de 2022, la a quo aprobó la liquidación de costas por el valor de $100.000, decisión contra la cual se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

Una vez resuelto el recurso de reposición, la a quo aprobó la liquidación de costas por el valor de $908.526 a cargo del demandante, concediendo el recurso de apelación, en tanto no se accedió en su totalidad a lo pretendido.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior determinación, el apoderado judicial de la demandada Contact Center Américas S.A. presentó recurso de apelación, aduciendo que no comparte la decisión del despacho de disminuir el valor de las agencias en derecho, más cuando su representada asumió la defensa en un proceso que no inició por su capricho.

Así las cosas, solicita mantener las agencias en derecho que se fijaron por valor en primera instancia, y que, por decisión de la segunda instancia, quedaron a cargo de la parte demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Una vez vencido el término, las partes guardaron silencio.

No observándose causal de nulidad que invalide la actuación, se proceden a resolver las suplicas de la demanda previas las siguientes…

CONSIDERACIONES

Es competente la Sala para resolver el recurso de apelación planteado, conforme lo establecido en el numeral 11 del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 65 del CPT y de SS.

De acuerdo con lo anterior, procede esta corporación a resolver lo pertinente al recurso de apelación, teniendo en cuenta para ello que el artículo 366 del C.G.P., numeral 4, establece:

> "*Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas".*

Así las cosas, como quiera que el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho, solo regula los procesos iniciados a partir de dicha fecha, en tanto los comenzados antes se siguen ciñendo por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, claro es para la Sala que el aplicable al presente asunto es el 1887 de 2003, atendiendo que la fecha de radicación del proceso data del año 2015, acuerdo que en lo pertinente prevé:

> *"ART. 2º -* ***Concepto.*** *Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto, y en los casos especiales previstos en los códigos de procedimiento.*
>
> *ART. 3º-* ***Criterios.*** *El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.* ***PAR.****—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia.*
>
> *ART. 6º-* ***Tarifas.*** *Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:*
>
> *LABORAL*
>
> *2.1. Proceso ordinario laboral.*
> *2.1.2. A favor del empleador.*
> *(…)*

Primera instancia. ***Hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes****.*

PARÁGRAFO. En los eventos en que las partes sean entidades administradoras, o éstas y el empleador, se aplicarán las tarifas del numeral 2.1.2 (…)".

Ordenamiento jurídico del que es dable concluir que el fallador de la correspondiente instancia no se encuentra sujeto a una cuantía determinada en la fijación de las agencias en derecho, sino que está guiado por un quantum cuyos extremos van hasta el 25% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia, y que deben establecerse teniendo en cuenta factores tales como la naturaleza del juicio, así como la duración y calidad de la gestión se constituyen en el factor determinante.

Ahora, una vez revisadas las actuaciones desplegadas al interior del proceso, se logra establecer que la inconformidad del recurrente se centra en que, pese a que la a quo en la decisión de primera instancia dispuso condenar en costas a la demandada, señalando como agencias en derecho la suma de $1.400.000 a favor de la parte actora, y pese a que esta corporación al resolver el recurso de apelación dispuso "se REVOCAN las de primera instancia, que serán a cargo del demandante", se hubiese aprobado la liquidación de costas por el valor de $100.000.

Y es que si bien se tiene que dicha condena se efectúa teniendo en cuenta la naturaleza del juicio, su duración, y la calidad de la gestión, considera este colegiado que no habría lugar a su modificación, en tanto en primera instancia ya se efectuó el monto de tal condena, el cual, no debería variar, en razón a la absolución dispuesta en la segunda instancia.

Lo anterior, considerando desacertada la decisión de la a quo, máxime, cuando el monto dispuesto ni siquiera había sido recurrido por la parte demandante, siendo modificado, sin argumentación o justificación alguna.

En conclusión, accederá esta corporación a lo pretendido, disponiendo por tal concepto el valor fijado en primera instancia, previo a su modificación, conforme a lo considerado.

Sin costas en esta instancia, por no haberse causado.

Por lo expuesto, la Sala Tercera del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C.,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el auto de fecha 1 de abril de 2022 proferido por el Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá dentro del proceso de la

referencia, en el sentido de indicar que las agencias en derecho en primera instancia a cargo del demandante, corresponden a la suma de un millón cuatrocientos mil pesos ($1.400.000), conforme a lo considerado.

SEGUNDO. SIN COSTAS en esta instancia por no haberse causado.

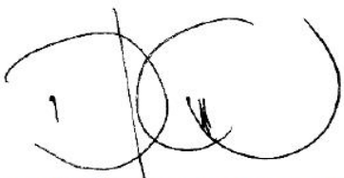
TERCERO. Envíese al juzgado de origen para los fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los magistrados,



JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS
SALA LABORAL

Magistrado:	**JAVIER ANTONIO FERNÁNDEZ SIERRA**
Proceso:	Ordinario
Radicación No.	11001-31-05-030-**2017-00736-01**
Demandante:	**MARIA DOLORES SARMIENTO SANCHEZ**
Demandados:	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

En Bogotá D.C. a los **21 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022,** la Sala de decisión Laboral integrada por los Magistrados **MARTHA RUTH OSPINA GAITÀN, EDUIN DE LA ROSA QUESSEP**, y quien actúa como ponente **JAVIER ANTONIO FERNÁNDEZ SIERRA**, procedemos a proferir la presente providencia escrita de conformidad con lo establecido en el Decreto 806 de 2020, erigido en legislación permanente por la Ley 2213 de 2022, y en acatamiento de la medida de descongestión adoptada mediante Acuerdo PCSJA22-11987 de 29 de julio de 2022, emanado del Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual se observa que no hay lugar a tomar la decisión de fondo, toda vez que esta Sala no cuenta con competencia jurisdiccional para ello como pasa a verse.

PROVIDENCIA

I. ANTECEDENTES

MARIA DOLORES SARMIENTO SANCHEZ demando a **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral se declare la existencia de un único contrato de trabajo a término indefinido desde el 2 de enero de 2006 al 14 de octubre de 2014, se declare y eleve a la categoría de trabajador oficial, de conformidad con el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y artículo 2 del Decreto 1919 de 2002 y Ley 6 de 1945, que laboro de domingo a domingo en horario de 7 a.m. a 7 p.m. día intermedio, se declare responsable del pago de las prestaciones sociales, indemnización de carácter legal, convencional extralegal y todo lo requerido, como diferencias salariales,

cesantías, intereses cesantías, prima de antigüedad, prima de vacaciones, prima de navidad, prima semestral compensación en dinero de las vacaciones, a realizar la afiliación al sistema de seguridad social integral, la devolución indexada del importe de la totalidad de los descuentos realizado por el HOSPITAL MEISSEN hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE, y ordene el recobro del Hospital a la Dian de dichos valores, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, indemnización del articulo 1 Decreto 797 de 1949, indemnización articulo 99 Ley 50 de 1990, sanción moratoria por falta pago intereses cesantía, que se declare que la demandante ha laborado bajo la modalidad de contratos sucesivos denominados de *"prestación de servicios"* con el HOSPITAL MEISSEN Hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE, ultra y extra petita, y costas.

Como fundamento de sus peticiones expuso entre otras cosas, que la demandante laboro de manera constante e ininterrumpida, para la entidad HOSPITAL MEISSEN ESE hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE, desde el 2 de enero de 2006 al 14 de octubre de 2014, en el cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, a través de contratos de arrendamiento de servicios y de prestación de servicios sucesivos, habituales y sin ninguna interrupción, que la demandante conforme a la Resolución 012 de enero 20 de 2012 sería una trabajadora oficial, devengó como último salario $886.000.oo, que debía cumplir en el cargo de auxiliar de servicios generales, en horario de 6 a.m. a 4 p.m. con disponibilidad de tiempo extra los fines de semana; que el empleador le exigía afiliarse como trabajador independiente al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, previa la suscripción de los contratos, y le exigía adquirir póliza de cumplimiento de responsabilidad civil, descontaba de cada pago el impuesto de retención en la fuente y el impuesto I.C.A.; que le fue expedido carne de trabajo que la identificaba como empleado del HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE (PDF 16 Expediente Digital folios 38-74).

La demandada al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones, y bajo el titulo normas y razones de derecho que sustentan el caso, sostuvo que se está frente a un contrato civil de prestaciones de servicios personales, propuso

las excepción de fondo o mérito de prescripción de la acción laboral, inexistencia de la aplicación de la primacía de la realidad, inexistencia de la obligación y del derecho, excepción de pago total, inexistencia del vínculo laboral, cobro de lo no debido, relación contractual con el actor no era de naturaleza laboral, buena fe, presunción de legalidad de los actos administrativos y contratos celebrados entre las partes, incumpliendo del requisito de procedibilidad exigido por la ley, y la innominada. (PDF 16 Expediente Digital folios 97-120).

II. DECISION DEL JUZGADO

El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, profirió sentencia el 27 de octubre de 2021, en la cual dispuso:

PRIMERO: DECLARAR que entre la demandada como empleadora HOSPITAL MEISEN NIVEL II E.S.E hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E y la señora MARIA DOLORES SARMIENTO SANCHEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.972.431, como trabajadora, existieron dos verdaderos contratos de trabajo, sin solución de continuidad, los cuales se extendieron el primero del 02 de enero de 2006 hasta el 30 de abril de 2013 y el segundo del 07 de abril de 2014 hasta el 15 de octubre de 2014, teniendo el carácter de TRABAJADORA OFICIAL, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCION propuesta por la parte demandada, de las obligaciones generadas en el contrato de trabajo terminado abril 30 de 2013 y parcialmente de las obligaciones generadas en el segundo contrato generadas con anterioridad 22 de agosto de 2014 y de la compensación de vacaciones en dinero con anterioridad 22 de agosto de 2013 y no probadas las demás conforme a la parte motiva. TERCERO: CONDENAR al HOSPITAL MEISEN NIVEL II E.S.E hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, a pagarle a la señora MARIA DOLORES SARMIENTO SANCHEZ, las siguientes cantidades de dinero y conceptos: a. $ 726.899.71 por cesantías. b. $ 60.090 por intereses a las cesantías. c. $ 60.090 indemnización del art. 3º de la ley 52 de 1975 d. $363.449.85 por compensación en dinero de las vacaciones e. $81.738 prima de vacaciones f. $158.275 por prima de navidad. g. $ 726.899.71 por prima legal de servicios. h. $ 451.200 por auxilio de transporte. i. Al pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 1° de Decreto 797 de 1949 a partir del 16 de ENERO de 2015, consistente en un día de salario diario vigente para el año 2014, a razón de $35.172.56 diarios y hasta cuando el pago se efectúe. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la motiva. CUARTO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: CONDENAR en COSTAS a la demandada. Liquídense por secretaría e inclúyanse como agencias en derecho la suma de $4.000.000 M/CTE. SEXTO: CONCEDER el grado Jurisdiccional de Consulta, ante el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, por haber salido adversa a la parte demandada. SEPTIMO: Ordenar AL HOSPITAL MEISEN NIVEL II E.S.E hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, expedir a la señora MARIA DOLORES SARMIENTO SANCHEZ, certificación laboral en calidad de trabajadora oficial por el tiempo reconocido en la presente sentencia, esto es, 02 de enero de 2006 hasta el 30 de abril de 2013 y del 07 de abril de 2014 hasta el 15 de octubre de 2014. La anterior decisión queda notificada en ESTRADOS El apoderado de la parte actora solicita se emita sentencia complementaria, respecto elevar a la demandante de trabajadora oficial; a la expedición de certificación, y reconocimiento de subsidio de alimentación. SENTENCIA COMPLEMENTARIA: Respecto del estatus de trabajadora oficial de la demandante, para

lo cual se adiciona el numeral primero y en cuanto a la expedición de certificación, se adiciona el numeral séptimo. Frente al reconocimiento de subsidio de alimentación, se mantiene la decisión de absolver a la demandada. Se ordena incorporar liquidación efectuada por el grupo liquidador, de manera ilustrativa la cual se elaboró con los salarios que se encontraban pactados en los contratos, pero como a última hora se allego la certificación de salarios y prestaciones para un cargo de planta de auxiliar de servicios generales, con esta última el despacho elaboró la liquidación, por esa razón no coinciden los valores.

III. RECURSO DE APELACION

Inconforme las partes interponen recurso de apelación el demandante de manera parcial para que el Tribunal revise el tema de la prescripción, y revisar los extremos de la relación laboral, porque la demandante laboro de manera continua, y al revocar la prescripción se reliquiden las condenas. También señala que, de las pruebas documentales aportadas, aporto una prueba que la parte demandada no objeto, la certificación donde se da cuenta de lo que devenga un trabajador oficial de planta, para liquidar los derechos de la demandante, y se revise la sanción por no consignación cesantía, los aportes, y el tema del contrato realidad frente a los contratos de prestación de servicios, que el contratista se ve obligado a firmar y debe aportar el pago de los aportes a la seguridad social, y el tema del pago a la caja de compensación familiar.

El apoderado demandada, sostiene en la apelación que la presenta frente a la totalidad del fallo, y como motivos de inconformidad manifiesta que el objeto contrato de prestación de servicios celebrado con la demandante se encuentra encaminado a la limpieza y desinfección de las zonas del hospital y es del caso aclarar que de acuerdo con la necesidad dispuesta previa la celebración de los contratos, que esa actividad no podía ser desarrollada exclusivamente por el personal de planta del hospital pues este personal era insuficiente para lograr el cometido buscado; que frente a los argumentos expuestos por el juzgado y que accedió a las pretensión de la demanda, y que según el recurrente se ocupó únicamente de argumentos de la postura de la parte demandante equiparando la situación personal de la demandante y sus actividades y obligaciones contractuales con los empleados de planta del entonces hospital de Meissen hoy la Subred para llegar a conclusiones erradas, como aquellas que las actividades

desempeñadas solo podían ser desempeñadas por el personal de planta del hospital dado su carácter permanente desconociendo el carácter especial de las demandada de ESE, manifiesta que el despacho al analizar el tema relacionado con las prestaciones del servicio y luego de relacionar los contratos, que se encuentra debidamente probado una relación laboral entre la demandante y demandada y así lo hace saber en su parte resolutiva, que sobre dichas afirmaciones es válido mencionar que la suscripción de los contratos de prestación de servicios sucesivos con un mismo contratante por sí sola no genera las transmutación de la relación contractual en una relación laboral, ya que los contratos de prestación de servicios lo fueron por periodos determinados teniendo en cuenta la necesidad requerida para la limpieza y desinfección de la plana física del hospital, la cual reitera desbordaba la capacidad del personal de planta por lo que era necesaria la contratación de personal mediante contratos civiles o de prestación de servicios que apoyaran dicha actividad pues es la ley la que autoriza su contratación previa la verificación de los estudios realizados, el estudio de necesidad anterior a la celebración de los contratos de acuerdo con el principio de planeación por lo que resultaba imposible al hospital no contar con el personal adicional del que hace parte la demandante, que de los testimonios se puede inferir que no existían jefes, que por el nombre son supervisores, y expone otras razones relacionados con la no subordinación y las obligaciones del contratista, la prescripción y la buena fe (PDF 17Audiencia27Octubre).

En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA22-11978 de 29 de julio de 2002, y de la medida de descongestión allí adoptada, fue remitido el expediente a esta Corporación; y asignado por reparto al despacho del Magistrado Ponente el 6 de octubre del año en curso (PDF 10ActaReparto).

IV. CONSIDERACIONES

Como se dijo inicialmente seria del caso entrar a proferir la decisión de segunda instancia, sin embargo, advierte la Sala, de acuerdo con la señalado por la Corte Constitucional en auto 492 de 2021, carece de jurisdicción, pues no es la

competente a la justicia ordinaria analizar y resolver sobre la legalidad de los contratos de prestación de servicios que suscribió la demandante.

En efecto, en el presente caso la demandada pregona su legalidad y el cumplimiento de los pasos previas para la formalización de la vinculación por contratos de prestación de servicios, como los estudios de necesidad y el no poder desarrollar la labor con el personal de planta por ser insuficiente, por lo que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente como se dijo para analizar tal aspecto.

Sobre el tema ya la Sala se ha pronunciado en varias oportunidades por lo que se transcribe a continuación como fundamento de la presente lo dicho anteriormente así:

> *"…Delanteramente ha de decirse que sea esta la oportunidad para recoger cualquier criterio que anteceda a esta decisión, por las razones que se pasan a explicar:*
>
> *Este Tribunal venía sosteniendo el criterio, según el cual, para determinar la competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, cuando se solicitaba un contrato realidad ocultado a través de contratos de prestación de servicios estatales, era necesario revisar las funciones desarrolladas por los demandantes, para con ello establecer, como en el caso que nos ocupa, si pertenecían a un trabajador oficial, especialmente en aquellas causas donde se involucraba la construcción y mantenimiento de una obra pública era de conocimiento de laboral, dado que lo relacionado a los empleados públicos la competencia está asignada a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, acorde con las múltiples decisiones tomadas en conflictos de jurisdicción por la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.*
>
> *Sin embargo, como materialmente, desde el año 2021 la Corte Constitucional empezó a conocer de los conflictos de competencia que se suscitan entre las diversas jurisdicciones, entre ellas la de lo contencioso administrativo y la ordinaria en su especialidad laboral, este Tribunal no puede desconocer, que esa Corporación como máximo organismo de cierre que dirime esta clase de controversias para fijar la competencia a la jurisdicción respectiva, de cara a las nuevas reglas establecidas en Sala Plena para definir este tipo de asuntos, esta colegiatura, con el ánimo de preservar la seguridad jurídica que se concreta, a su vez, en salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso de los usuarios de la justicia y en acatamiento de tales directrices, como se dijo, recogerá cualquier criterio anterior, para de ahora en adelante acatar lo resuelto por la Corporación Constitucional.*
>
> *Colofón de lo dicho, y tal como se expuso en los antecedentes de la presente providencia, como quiera que la demandante reclama la existencia de un vínculo contractual laboral con el estado, presuntamente camuflada en sucesivos contratos de prestación de servicios estatales, se tendría que discutir por un lado la validez del acto administrativo de respuesta a la reclamación administrativa del contratista, y por otro lado la legalidad de la modalidad contractual utilizada con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los mismos derechos y acreencias laborales de los servidores públicos de planta.*

Por consiguiente, siendo que el único juez autorizado para establecer si la labor contratada no podía realizarse con personal de planta o se requería de un conocimiento especializado en los términos del art. 32 de la Ley 80 de 1993, corresponde el conocimiento del asunto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su sección laboral, es decir, el fin último se sintetiza en establecer si se configuró una relación laboral a través de contratos de prestación de servicios lo que necesariamente conlleva a efectuar un juicio sobre la actuación de la ANI, labor que no se encuentra en cabeza del juez ordinario laboral.

Al respecto la Corte Constitucional en Auto 492 de 2021, señaló: "En los casos en los que se discute el reconocimiento de un vínculo laboral con el Estado no es posible aplicar la misma regla que se utiliza para definir la autoridad judicial que conoce de las controversias suscitadas entre los trabajadores oficiales o empleados públicos y el Estado. Lo anterior conlleva la necesidad de que la Sala Plena se aparte del precedente que, en su oportunidad, desarrolló la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Es claro que corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los procesos laborales en los que son parte trabajadores oficiales y a la jurisdicción contencioso administrativa aquellos relacionados con la vinculación legal y reglamentaria de los empleados públicos. En efecto, cuando existe certeza de la existencia de un vínculo laboral y no se discute que había una relación de subordinación entre la entidad pública y el trabajador o empleado, resulta válido definir la jurisdicción competente para conocer de estos asuntos con base en las funciones que dice haber ejercido el empleado o trabajador (criterio funcional) y la entidad a la cual se encontraba vinculado (criterio orgánico), para establecer si se trata de un trabajador oficial, que puede ejercitar la acción laboral ante la jurisdicción ordinaria del trabajo, o de un empleado público, caso en el cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que debe definir el asunto. Sin embargo, esta regla no puede ser aplicada cuando el objeto de la controversia es, precisamente, el reconocimiento del vínculo laboral y el pago de las acreencias derivadas de la aparente celebración indebida de contratos de prestación de servicios con el Estado pues, en estos casos, se trata de evaluar i) la actuación desplegada por entidades públicas en la suscripción de ii) contratos de naturaleza distinta a una vinculación laboral. Adicionalmente, la única autoridad judicial competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que "no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados" es el juez contencioso. Examinar, aun preliminarmente, las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado para definir la competencia, constituye un examen de fondo de la controversia. Adicionalmente, la Sala considera que determinar si las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado a través de vínculos contractuales simulados correspondían a las de un trabajador oficial o a las de un empleado público implica realizar un examen de fondo del asunto. Esta labor no le corresponde al juez encargado de definir la jurisdicción competente, pues esto conduce a pronunciarse sobre la existencia de una relación laboral que es, justamente, lo que se pretende con la demanda y lo que debe demostrarse en el curso del proceso. En todo caso, este tipo de asuntos solo pueden ser decididos por el juez contencioso administrativo que es el facultado para evaluar las actuaciones de la Administración. En este sentido, la evaluación preliminar de la calidad del demandante como trabajador oficial o empleado público supone que la jurisdicción competente para resolver el litigio se encuentra en debate durante toda la controversia. En efecto, si el factor que define la jurisdicción es el tipo de vinculación que materialmente desempeñaba el servidor, es claro que dicha condición solo puede determinarse con certeza en la sentencia [68]. En contraste, la solución adoptada por la Corte Constitucional implica que la jurisdicción no se cuestionará permanentemente dentro del trámite, pues ella se define por la existencia de un contrato de prestación de servicios estatal inicial, respecto del cual se denuncia su posible desnaturalización, lo que ubica este asunto dentro de la competencia de la jurisdicción contenciosa. Ahora bien, en el caso concreto, si en gracia de discusión se "revisara preliminarmente" la posible asimilación de las labores desempeñadas por el demandante para intentar ubicarlas en las que corresponden a un empleado público o a un trabajador oficial, se correría el riesgo de exponer al actor equivocadamente ante una jurisdicción que no tiene competencia para conocer de este tipo de asuntos, con la consecuente pérdida de oportunidad para adelantar el trámite judicial de su reclamación…" Así las cosas, cuando se presentan situaciones, como las que hoy nos

ocupan, ante la falta de jurisdicción, debe abstenerse de conocer del asunto y enviarlo a la autoridad judicial que corresponda, obligación que persiste a lo largo del proceso y puede ser declarada en cualquier momento." (Magistrada Ponente: Martha Ruth Ospina Gaitán. Expediente No. 11001 31 05 004 2020 00010 01 Yolanda Traslaviña Prada vs. Agencia Nacional de Infraestructura - ANI).

En consecuencia, teniendo en cuenta lo reglado artículo 16 del CGP, en concordancia con el artículo 138 del mismo estatuto procesal, le corresponde a la Sala declarar la nulidad de la sentencia de primer grado, quedando incólume toda la actuación surtida y se ordenará remitir el proceso digitalizado ante los juzgados administrativos de Bogotá, reparto, conforme lo estatuido en el art. 104 del CPACA, quienes deben conocer del presente asunto, igualmente se dispondrá comunicar la presente decisión al juez a quo para lo de su competencia.

V. COSTAS

Sin costas en la instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar la falta de jurisdicción de los jueces ordinarios del trabajo para conocer del presente asunto, acorde con lo expuesto.

SEGUNDO: Declarar la nulidad de la sentencia proferida el 27 de octubre de 2021 por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, D.C, en el proceso ordinario laboral promovido por **MARIA DOLORES SARMIENTO SANCHEZ** contra **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**, conforme con lo motivado.

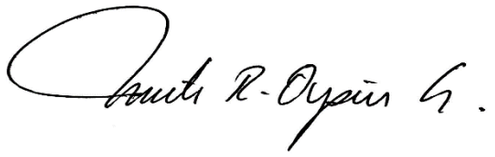
TERCERO: Enviar el presente proceso a los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá, D.C., sección segunda (Reparto) para que asuman el conocimiento del presente asunto.

CUARTO. DEVOLVER el expediente digital, *"al despacho de origen para su notificación y demás actuaciones subsiguientes"*, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 2° del PCSJA22-11978 del 29 de julio de 2022 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,



JAVIER ANTONIO FERNANDEZ SIERRA
Magistrado



MARTHA RUTH OSPINA GAITÁN
Magistrada



EDUIN DE LA ROSA QUESSEP
Magistrado
Con salvamento de voto



LEIDY MARCELA SIERRA MORA
Secretaria

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Segunda de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL - **AUTO**
RADICACIÓN. 11001 31 05 **004 2019 00716 01**
DEMANDANTE: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA
DEMANDADO: RIESGOS LABORALES COLMENA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA

Bogotá DC, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, integrada por los Magistrados MILLER ESQUIVEL GAITÁN, MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra el auto proferido dentro de audiencia pública celebrada el 26 de agosto de 2022, por el Juzgado 4° Laboral del Circuito de Bogotá DC, por medio del cual se negó el decreto de un nuevo dictamen.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES

Pretende la sociedad demandante que se declare: ***i)*** que durante la afiliación a la ARL demandada, los 22 trabajadores relacionados en la tabla visible en la página 10 del archivo 1 C01, dentro de los cuales, para lo que interesa a la alzada, se encuentran Armando Gracia Reyes y Orlando Navarro Tarazona, estuvieron expuestos 100% a los riesgos ocupacionales que motivaron el pago de las prestaciones asistenciales y económicas recobradas, o en subsidio, que se declare el porcentaje de exposición que se establezca durante el presente proceso; ***ii)*** que conforme el inc. 2° del par. 2° del art. 1° de la Ley 776 de 2002 y los arts. 5° y 6° del Decreto 1771 de 1994 y 2.2.4.4.5. del Decreto 1072 de 2015, la demandada está obligada a reembolsar con cargo a la reserva legal de enfermedad laboral, los gastos que Positiva asumió por concepto de prestaciones asistenciales y/o

económicas, a prorrata y por el tiempo que los mencionados afiliados, estuvieron expuestos a los riesgos laborales que dieron lugar a sus enfermedades laborales, mientras se encontraban afiliados a la ARL demandada. Dicha prorrata se debe establecer en el 100% del total del tiempo de exposición a los riesgos laborales con dicha entidad o en subsidio con el porcentaje que se establezca durante el trámite del proceso.

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la demandada a pagar: ***i)*** el 100% de los valores que se relacionan en la tabla visible en las páginas 12 y 13 del archivo 1 C01, y los que en lo sucesivo se continúen causando por concepto de prestaciones asistenciales o el porcentaje que se establezca durante el trámite del proceso respecto de 22 trabajadores afiliados, dentro de los cuales, para lo que interesa a la alzada, se encuentran Armando Gracia Reyes y Orlando Navarro Tarazona; ***ii)*** la indemnización por incapacidad permanente parcial o el porcentaje que se establezca durante el proceso, de los 2 afiliados mencionados; ***iii)*** el 100% o el porcentaje respectivo de las incapacidades temporales de 4 trabajadores incluidos en el citado listado; ***iv)*** los intereses moratorios desde el día en que Positiva efectuó cada uno de los pagos por concepto de prestaciones asistenciales y/o económicas, hasta cuando se efectúe el reembolso por parte de la demandada, o en subsidio la indexación de las sumas mencionadas (págs. 10-13 arch. 1 C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

Previa subsanación, se admitió la demanda mediante auto del 13 de febrero de 2020 ordenándose notificar y correr el respectivo traslado a la demandada (págs. 460, 461 arch. 1.4 *ídem*), quien contestó con oposición a lo pretendido y subsanó la contestación dentro del término legal oportuno como dan cuenta los archivos n° 3, 5, 8 y 9.

Dentro de sus argumentos para oponerse a las indemnizaciones por incapacidad permanente parcial supuestamente pagadas a favor de Armando Gracia Reyes y Orlando Navarro, expuso que la ARL demandante no acreditó que las prestaciones cuyo recobro se pretende, se encuentren causalmente ligadas a una enfermedad profesional, ni que la enfermedad se desarrolló durante la afiliación de los trabajadores a la ARL Colmena, por

ende, no se evidencia que dichos afiliados hayan estado expuestos al riesgo que dio lugar a su patología de estirpe laboral; agregó que los dictámenes en los que aparentemente se determinó un porcentaje de PCL constitutivo de una incapacidad permanente parcial, le son inoponibles, dado que solo fueron conocidos a través de este proceso, por ende, no ha tenido la oportunidad de controvertirlos.

Propuso como excepciones de mérito las que denominó inexistencia de prueba de presupuestos legalmente exigidos para que sea procedente la acción de recobro, inexistencia de exposición al riesgo durante la afiliación a Colmena Seguros SA, inexistencia de prueba del tiempo de exposición del afiliado al riesgo que desencadenó la patología de origen laboral, inexistencia de prueba de pago, falta de legitimación en la causa por pasiva, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de Colmena Seguros SA, extinción de la obligación por compensación, prescripción, improcedencia de la condena por intereses moratorios, la eventual responsabilidad de Colmena se encuentra limitada en proporción al tiempo de exposición al riesgo, ausencia de ocurrencia del siniestro durante la afiliación a Colmena, improcedencia del derecho a los recobros solicitados, inoponibilidad del dictamen que determinó el porcentaje de PCL y materialización del riesgo por fuera de la cobertura otorgada por Colmena. (págs. 3-116 arch. 3).

Como prueba de las excepciones propuestas, solicitó entre otras, que se ordene la práctica de un nuevo dictamen por parte de una Junta de Calificación Regional, según lo previsto en el art. 2.2.5.1.0 del Decreto 1072 de 2015, que corresponda a la realidad física y se valore tanto a Armando Gracia Reyes como a Orlando Navarro Tarazona, con el fin de calificar el origen, grado de incapacidad laboral que padecen y su fecha de estructuración respecto de cada uno de ellos, con base en el Manual Único de Calificación de Invalidez. En forma subsidiaria, solicitó que se designe a la Junta Regional o Nacional, conforme el art. 2.2.5.1.52 del mencionado decreto, para que emita concepto técnico en relación con los dictámenes que sirven de fundamento a las pretensiones, a fin de establecer si dichas experticias se ajustan a derecho y al MUCI aplicable al presente caso, contrastados con la realidad física de los mencionados afiliados (págs. 112-

115 arch. 3-118, págs. 114-117 arch. 5). *S*olicitud que ratificó en la subsanación de la contestación a la demanda (pág. 14 arch. 8).

III. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 4° Laboral del Circuito de Bogotá DC, en uno de los autos dictados en audiencia pública celebrada el 26 de agosto de 2022, dentro la etapa de decreto de pruebas, decidió denegar entre otras, el dictamen pericial solicitado por la demandada, tras considerar para lo que interesa a la alzada que se aportaron los dictámenes emitidos por las Juntas Regional de Bogotá y Nacional de Calificación de Invalidez respecto de Armando Gracia, así como el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander frente a Orlando Navarro, por tanto resultan ser situaciones consolidadas, dado que dichas pericias determinaron el origen de la enfermedad, fecha de estructuración y porcentaje de la PCL y se encuentran debidamente ejecutoriadas, por tanto, no es viable decretar un nuevo dictamen (archs. 15, 16 *ídem*).

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La demandada interpuso recursos de reposición y subsidiario el de apelación contra el auto que denegó las pruebas, y específicamente frente a lo relacionado con los dictámenes que no decretó el *a quo,* argumentó que los afiliados Armando Gracia Reyes y Orlando Navarro Tarazona deben ser remitidos a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, para efectos de calificar en una nueva valoración tanto el origen como el grado de incapacidad laboral que padecen, junto con la fecha de estructuración respectiva, para así controvertir el dictamen sobre el cual la ARL Positiva les reconoció las prestaciones que ahora pretende recobrar a la demandada, máxime cuando ese dictamen que se profirió en su momento en vigencia de la vinculación de tales trabajadores a la ARL Positiva, le es inoponible por cuanto Colmena no participó en él y solo se vino a enterar de tal calificación con esta demanda.

Agregó que de no calificarse debidamente a tales afiliados, se iría en contra de los derechos de defensa, contradicción y debido proceso de la demandada y no podría oponerse a los argumentos presentados por la demandante para dichos recobros; aclaró que la intención de Colmena no es

modificar los derechos y las prestaciones ya reconocidas por la ARL Positiva a los citados trabajadores, sino controvertir los dictámenes que sirven de sustento a las pretensiones de la demanda, y que solo surtan efectos inter partes entre las entidades integrantes de la litis, para así evidenciar si el recobro solicitado es procedente o no.

Luego de correr el traslado del recurso de reposición, el *a quo* reformó parcialmente la decisión, pero no en lo relativo a los dictámenes solicitados y como consecuencia de ello, concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante auto del 16 de enero de 2023, se admitió el recurso de apelación interpuesto y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de la 2022, se dispuso correr el respectivo traslado para alegar, pero las partes guardaron silencio (archs. 4, 5 C02).

VI. CONSIDERACIONES

El num. 4° del art. 65 del CPTSS, modificado por el art. 29 de la Ley 712 de 2001, dispone la procedencia del recurso de apelación respecto del auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba, de manera que, tiene esta Sala competencia para resolver el recurso interpuesto por la parte demandada, teniendo en cuenta para ello lo previsto en el art. 66A *ídem*, correspondiéndole verificar si es viable decretar como prueba en su favor, un nuevo dictamen que emita la Junta Regional de Calificación de Invalidez respecto de los afiliados Armando Gracia Reyes y Orlando Navarro Tarazona, en los términos solicitados en la contestación a la demanda

En lo que tiene que ver con el decreto de pruebas que en primera instancia, conforme al art. 53 del CPTSS el juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito; preceptiva que se acompasa con lo normado en el art. 168 del CGP, aplicable en materia laboral por expresa remisión del art. 145 del CPTSS, en tanto dispone que "*el juez rechazará de plano, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las*

inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles"; así mismo, el art. 61 del CPTSS prevé que *"el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio;* y, el art. 51 *ídem* dispone que *"Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial sólo tendrá lugar cuando el Juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales".*

En el presente asunto, la demandante ARL Positiva aportó con la demanda el dictamen proferido por esa misma entidad respecto de Armando Gracia Reyes (págs. 295-304 arch. 1 C01), mientras que la demandada ARL Colmena, por solicitud elevada en el libelo introductor y al tenor de lo dispuesto en el num. 2° del par. 1° del art. 31 del CPTSS, anexó con su contestación los dictámenes proferidos frente a dicho afiliado por las Juntas Regional de Bogotá y Nacional de Calificación de Invalidez (págs. 221-235, 539-553 arch. 3, págs. 120-134 arch. 8); y en relación con el afiliado Orlando Tarazona Navarro, únicamente la ARL demandante allegó con el libelo introductor 2 dictámenes proferidos por Positiva, más uno expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander (págs. 194-206, 233-238 arch. 1.4), documentales todas estas de las que se desprende el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración y el origen de las patologías que padecen los mencionados afiliados y que, sin reparo alguno, fueron incorporadas y tenidas como prueba documental en favor de las partes dentro de la audiencia del art. 77 del CPTSS surtida el 26 de agosto de 2022 (archs. 15, 16 C01).

Sin embargo, en la contestación a la demanda, adicionalmente se solicita de manera principal, que por parte de una de las Juntas Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, se realice una nueva valoración de los afiliados Armando Gracia Reyes y Orlando Navarro Tarazona, para establecer el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral así como del origen de las patologías y la fecha de estructuración, o que en forma subsidiaria, tales juntas emitan un concepto técnico para verificar si los dictámenes aportados por la ARL demandante, en relación con los mencionados afiliados se

encuentran ajustados a derecho, todo de conformidad con los arts. 2.2.5.1.0 y 2.2.5.1.52 del Decreto 1072 de 2015 (págs. 112-115 arch. 3-118, págs. 114-117 arch. 5, pág. 14 arch. 8).

Advierte la Sala que no hay lugar a acceder a la solicitud de la recurrente, como quiera que por una parte, no resulta pertinente ni conducente para demostrar los supuestos de hecho para la prosperidad de las excepciones y no están íntimamente relacionadas con el objeto del litigio, dado que aquí se discute la eventual responsabilidad total o parcial de la ARL Colmena en el pago de las prestaciones asistenciales y/o económicas que cubrió en su momento la ARL Positiva, en caso de que Colmena hubiera otorgado la protección por riesgos laborales durante determinado período y dependiendo del tiempo de exposición al riesgo, sin que de manera alguna se pueda volver a verificar lo atinente al origen, porcentaje y fecha de estructuración de las patologías sobre las cuales, la entidad demandante aparentemente reconoció a sus afiliados Armando Gracia Reyes y Orlando Navarro Tarazona, los pagos de los que hoy reclama su reembolso.

Por otra parte, la demandada omitió atender lo previsto en el art. 227 del CGP, aplicable en materia laboral por disposición expresa del art. 145 del CPTSS y que en lo pertinente reza:

> **ART. 227. Dictamen aportado por una de las partes**. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días.[…]

Significa lo anterior que, si la parte demandada pretendía valerse de una pericia para poder controvertir los dictámenes relacionados con los afiliados Armando Gracia y Orlando Navarro Tarazona, que fueron expedidos por las Juntas Regional de Bogotá y Santander y Nacional de Calificación de invalidez, por remisión de la ARL Positiva, en gracia de la discusión, debió aportarla en la debida oportunidad procesal para el caso y atendiendo a lo expresado como argumento de la oposición de las pretensiones en la contestación a la demanda, puesto que la disposición adjetiva en cita es enfática en señalar la oportunidad para aportar un dictamen pericial cuando la parte pretenda valerse del mismo, e indica para ello cuándo “deberá” aportarlo, expresión imperativa no facultativa, que lo obliga indefectiblemente a allegar la respectiva experticia en la oportunidad para pedir pruebas, se itera, con la

contestación a la demanda, cuando de demandado se trate; y, aun cuando acto seguido la disposición prevé una excepción a ese imperativo, ella consiste en que, ese medio de prueba se podrá anunciar en el escrito de contestación a la demanda y que deberá ser aportado en el término que el juez disponga "*Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen*", situación que la parte demandada no acreditó, ni siquiera manifestó oportunamente (al solicitar la prueba), encontrarse inmersa en alguna circunstancia particular que le impidiera aportar el dictamen, tampoco efectuó la respectiva solicitud en los términos dispuestos en la norma de orden público a la que se hace referencia, y tal como lo prevé el art. 13 del CGP "*Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley*".

Para la Sala, debía resolverse sobre la prueba pedida bajo la rigurosidad que exige la norma, y es deber de las partes acatar y cumplir con las disposiciones legales adjetivas, que son las que precisamente garantizan el debido proceso. En consecuencia, se **confirmará** la decisión apelada.

Sin costas en la alzada ante su no causación.

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ DC,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado proferido dentro de la audiencia pública celebrada el 26 de agosto de 2022, por el Juzgado 4° Laboral del Circuito de Bogotá DC, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Sin costas en la instancia ante su no causación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada ponente



MILLER ESQUIVEL GAITAN
Magistrado



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

Enlace expediente digital:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des15sltsbta_cendoj_ramajudicial_gov_co/EvvSRgiP64VKhc9-6TlJJIYBlmXtN122lvG0C8N8WHXwOw?e=GKMVe6

Firmado Por:
Luz Patricia Quintero Calle
Magistrada
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b1e3066d609cfdd2ce2a1b91f1265822fe4de8a3cd7fe79d3cf03628b54ba6b5**
Documento generado en 30/03/2023 10:27:37 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Segunda de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL - **AUTO**
RADICACIÓN. 11001 31 05 **028 2019 00533 02**
DEMANDANTE: MARÍA CONSUELO BLANCO GRASS
DEMANDADO: INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO LTDA - INDULAS LTDA

Bogotá DC, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, integrada por los Magistrados MILLER ESQUIVEL GAITÁN, MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra el auto proferido dentro de audiencia pública celebrada el 16 de junio de 2022, por el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá DC, por medio del cual se declaró precluida la oportunidad para la práctica de una prueba testimonial.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES

Pretende la demandante que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 1° de junio de 2010 y el 11 de mayo de 2016, tiempo en el que causó comisiones y viáticos constitutivos de salario; en consecuencia, solicita que se condene a la demandada a reliquidar las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio y vacaciones, teniendo en cuenta esa incidencia salarial para tomar como base el salario realmente devengado, más la sanción de que trata el art. 65 del CST y la indexación (págs. 7, 8 arch. 3 C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

Previa subsanación, la demanda se admitió mediante auto del 16 de septiembre de 2019, ordenándose notificar y correr el respectivo traslado a la demandada (arch. 9 *ídem*), quien contestó con oposición dentro del término legal oportuno y solicitó entre otras pruebas, las declaraciones de 3 personas: Brenda Isabel Silva Acosta, Alfonso González y Sandra Liliana González Cuellar (archs. 15, 16 *ídem)*, las cuales fueron decretadas en su favor dentro de la audiencia del art. 77 del CPTSS llevada a cabo el 16 de junio de 2022 (archs. 19, 20).

III. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La Jueza 28 Laboral del Circuito de Bogotá DC, en auto dictado en audiencia del art. 80 del CPTSS celebrada el 16 de junio de 2022, luego de escuchar 2 testimonios solicitados y decretados en favor de la parte actora, declaró precluida la oportunidad para practicar la prueba testimonial de la parte demandada, tras considerar que las personas que debían rendir su declaración, no estaban atentas a la llamada para ingresar a la audiencia, como sí lo estuvieron 2 de los testigos de la parte actora que fueron recepcionados; advirtió que es la parte a quien se le decreta una prueba, la interesada en que sus testigos ingresen y puedan cumplir con la obligación legal de rendir su testimonio, situación que no observó a lo largo de la audiencia, aunado a que debía dar aplicación al principio de la concentración de la prueba. Posteriormente, declaró clausurado el debate probatorio (archs. 19.6, 19.7, 20 *ídem*).

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La demandada interpuso recursos de reposición y subsidiario el de apelación, argumentando que durante la celebración de la diligencia se presentaron fallas técnicas que impidieron la comparecencia virtual de los testigos, habiéndose negado la *a quo,* a señalar nueva fecha y hora para surtir las declaraciones de manera presencial y facilitar tales declaraciones, conforme la solicitud que elevó en precedencia, máxime cuando fueron decretadas en su favor, por ende, no se puede declarar clausurado el debate probatorio (archs. 19.6, 20 *ídem*).

La *a quo* mantuvo la decisión, negó el recurso de apelación al ser evidente la falta de logística de la parte demandada para garantizar la comparecencia de sus testigos. Luego, ante el recurso de queja interpuesto por la demandada y concedido, la jueza le dio el uso de la palabra a las partes para presentar sus alegaciones de conclusión y fijó fecha y hora para proferir sentencia (archs. 19.6, 19.7, 20 *ídem*).

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante auto del 31 de agosto de 2022 corregido el 20 de octubre siguiente, bajo la entrada n° 01, se declaró mal denegado el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra el auto mediante el cual se negó la práctica de las pruebas testimoniales decretadas en su favor, por tanto, se admitió dicho medio de impugnación y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de la 2022, se dispuso correr el respectivo traslado para alegar, pero las partes guardaron silencio (archs. 4-6 subcarpeta 2 C02).

VI. CONSIDERACIONES

El num. 4° del art. 65 del CPTSS, modificado por el art. 29 de la Ley 712 de 2001, dispone la procedencia del recurso de apelación respecto del auto que niegue la práctica de una prueba, de manera que, tiene esta Sala competencia para resolver el recurso interpuesto por la parte demandada, teniendo en cuenta para ello lo previsto en el art. 66A *ídem*, correspondiéndole verificar si es viable recepcionar las declaraciones de Brenda Isabel Silva Acosta, Alfonso González y Sandra Liliana González Cuellar, decretadas en su momento como prueba testimonial en favor de la demandada, y así reabrir el debate probatorio específicamente para tal efecto.

Para iniciar se debe señalar, que al tenor de lo dispuesto en los arts. 40, 48 y 53 del CPTSS, el juez conserva la libertad para disponer que los actos procesales respecto de los cuales las leyes no haya prescrito una forma determinada de realizarla, se puedan llevar a cabo de manera adecuada al logro de su finalidad, así como la dirección y control con el fin de hacer efectivos los principios que rigen el derecho laboral tanto en lo sustancial como en lo procesal, por lo tanto tiene la posibilidad de limitar la prueba testimonial

desde el decreto de pruebas, teniendo en cuenta que adoptar las medidas necesarias para garantizar el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en el trámite, constituye un deber legal en cabeza del juez; de ahí que la facultad de rechazar o declarar superada o precluida la etapa para la práctica de pruebas, a través de una decisión debidamente motivada, proporcionada y dentro de los límites de la racionalidad, no excluye ninguno de los medios de prueba legalmente establecidos.

Aunado a ello, si bien el art. 95 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el art. 107 del CGP, dispone que el Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de la tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia, con fines entre otros, el de mejorar la práctica de las pruebas, y que los juzgados puedan usar cualquier medio técnico, electrónico, informático y telemático para el cabal cumplimiento de sus funciones, adoptando por supuesto, todas las medidas para garantizar los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de las partes, en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones; ello de ninguna manera exime la carga procesal que tienen frente a ello, los apoderados y las partes conforme los num. 3, 7, 8 y 11 del art. 78 del CGP.

De manera que, no solo resulta una obligación legal de los sujetos procesales, entre otras cosas, el asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos, sino que es deber de las partes y sobre todo de los apoderados, comparecer y garantizar la concurrencia por su propio conducto y medios de todas aquellas personas que deban participar dentro de las diligencias virtuales que se programan en los distintos despachos judiciales, tales como testigos y demás copartícipes, absteniéndose de obstaculizar el inicio y cabal desarrollo de las audiencias virtuales. Así las cosas, es necesario que las partes, apoderados(as) y demás participantes de las diligencias procesales virtuales, cuenten con los medios tecnológicos correspondientes tales como, teléfono o internet estable de buena conectividad y dispositivos electrónicos con audio y video, para poder acceder a las audiencias virtuales mediante videoconferencia o teleconferencia y si no disponen de tales elementos, deberán manifestarlo de acuerdo a lo establecido en los arts. 1° a 3°, 7° de la Ley 2213 de 2022, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias para la práctica

de pruebas, como cuando las circunstancias de seguridad, inmediatez y fidelidad excepcionalmente lo requieran.

Sin embargo, revisadas en forma minuciosa las 7 partes que componen el audio completo de la diligencia surtida el 16 de junio de 2022 (archs. 19, 20 C01), así como las actuaciones obrantes en el expediente electrónico allegado a esta Colegiatura, no se verifica la configuración de ninguno de los supuestos fácticos acabados de reseñar, por lo siguiente:

Desde el auto del 11 de diciembre de 2019, mediante el cual se tuvo por contestada la demanda, el juzgado señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, para el 20 de agosto de 2020; no obstante, advirtió que *«en igual fecha y hora indicada en el numeral anterior se dará inicio a la audiencia de que trata el art. 80 del CPT»* (arch. 16 C01). Y aún cuando la audiencia no se pudo llevar a cabo, fue reprogramada mediante autos del 12 de febrero y 4 de noviembre de 2021 y el 15 de marzo de 2022; en el primer proveído se requirió también a las partes y a los apoderados para remitir vía correo electrónico sus datos de contacto, así como *«la información de los testigos en caso de que se hayan solicitado como medio probatorio»,* y en el último auto de los mencionados se reiteró a las partes que se llevarían a cabo las diligencias de los arts. 77 y 80 del CPTSS (archs. 18 C01, 11 subcarpeta 2 C02).

De manera que, la parte demandada tenía pleno conocimiento con un poco más de 2 años y medio de anticipación, de que debía comparecer con sus testigos a la audiencia programada por la *a quo,* que fue finalmente reprogramada para el 16 de junio de 2022, máxime cuando en el archivo 10 de la subcarpeta 2 C02 obran las constancias de los envíos realizados por parte del juzgado a las partes y apoderados no solo en forma anticipada de los hipervínculos de conexión a las audiencias a través de la plataforma Lifesize.com sino del link de consulta del expediente electrónico, en respuesta incluso, de solicitudes elevadas por las partes, sin que la recurrente hubiera acreditado haber dado cumplimiento al requerimiento efectuado por el despacho cognoscente, con el fin de proporcionar los datos de contacto de las personas que pretendía citar como testigos.

Ahora, en ninguna actuación arbitraria incurrió la *a quo* en dicha diligencia pues en la etapa de práctica de pruebas se observa en el video del archivo 19.5 C01 que la juez dejó constancia de que 2 testigos de la parte actora sí tuvieron inconvenientes para la conexión de la audiencia, por lo que autorizó que sus declaraciones se recibieran por videollamada en la aplicación WhatsApp, y en el video del archivo 19.6 C01 manifestó que si la demandada tenía fallas técnicas, tanto la representante legal como su apoderado debían efectuar, a través de sus propios medios y aparatos telefónicos, las videoconferencias por WhatsApp con los 3 testigos que decretó en su favor, tal y como lo hizo en su momento con la parte actora.

Empero, verifica la Sala que el apoderado de la demandada a pesar de que la *a quo* lo requirió inicialmente para que tuviera en cuenta la aparente mala conexión de la representante legal y procediera a llamar en forma directa a los testigos, el abogado le dijo vía telefónica a la demandada que le pidiera a los declarantes que lo llamaran a él a su celular para poderlos conectar, a pesar de que la pasiva le facilitó a él los números telefónicos de contacto de 2 testigos en ese momento. Aunado a ello, se observa que el profesional del derecho nunca llamó a los testigos y en algunas ocasiones se puede ver que como el abogado se comunicó con alguien por el celular, con el micrófono apagado de la audiencia, la jueza le hizo dos requerimientos más cada 5 minutos aproximadamente para preguntarle qué pasó con los testigos; sin embargo, siempre se ve su actitud pasiva, frente a las exigencias hechas por el despacho sin intentar si quiera hacer las llamadas pertinentes, hasta que en minuto 11:23 el abogado apagó la cámara, transcurrió un tiempo y a minuto 16:30 manifestó que a pesar de que suministraron los testigos unos teléfonos, no los contestan (arch. 19.6).

Posteriormente ante esta desidia en la consecución de las pruebas testimoniales, la *a quo* declaró precluida la oportunidad para la recepción de los testigos de la demandada, tras advertirle que los envíos de los links para las conexiones a la diligencia debían ser efectuados por los interesados **antes** de la correspondiente audiencia y que cuando se inició la diligencia de los testimonios la jueza le indicó a ambas partes que los testigos debían estar atentos a su indicación para poder ingresar, más no verificar las partes si consiguen o no al testigo en el preciso momento en el que la *a quo* llama al declarante (min. 16:39 arch. 19.6 C01).

El abogado de la demandada escuetamente respondió que no habían medios tecnológicos así que los deberes constitucionales se escapaban a su control, dado que los testigos se encuentran en diferentes ciudades. Empero, a minuto 20:57 la jueza dejó constancia de que no se evidenció a lo largo de la audiencia las mismas fallas técnicas que se presentaron con los testigos de la parte demandante, porque ellos no pudieron acceder directamente a la plataforma, pero sí observó que constante y activamente la parte actora sostuvo una comunicación telefónica con ellos quienes manifestaron por qué motivo no pudieron ingresar, y por esa razón autorizó que se efectuara la video llamada por WhatsApp para que se recepcionaran sus declaraciones, ya que fue evidente la falla técnica; mientras que no observó la misma diligencia frente a la parte demandada y su apoderado a pesar de habérseles dado la misma oportunidad que a la demandante.

Más adelante a minuto 23:09 la *a quo* también dejó constancia de que el mismo apoderado de la demandada, manifestó en el momento de la audiencia en el que los testigos de la parte demandante no pudieron ingresar por presentar las fallas técnicas, que si no podían hacerlo debía declararse precluida la oportunidad para recibir sus declaraciones; y a minuto 28:42 señaló que fue tan evidente la falta de logística adelantada por el extremo pasivo para garantizar la comparecencia de los testigos, que de ser así se hubiera buscado una solución a las presuntas fallas tecnológicas para recepcionar tales declaraciones, las que solo manifestó el apoderado en el momento de impetrar el recurso de reposición.

Así las cosas, se verifica que la *a quo* otorgó en igualdad de oportunidades el espacio de tiempo necesario para que las partes lograran conectar a sus testigos, pero a diferencia de la parte actora, se notó inactividad plena de la parte demandada para movilizar la logística necesaria con el fin de conectar a sus testigos habiendo tenido acceso al link de la audiencia, un día antes (arch. 10 subcarp. 2 C02), carga que se repite le compete conforme la normativa citada inicialmente, pues son las partes las verdaderas interesadas en que las personas que solicitaron como pruebas declarativas comparezcan a las diligencias, poniendo a su disposición los medios técnicos necesarios para que puedan conectarse virtualmente y logren cumplir con el deber legal de rendir su testimonio, sin que se observe que dentro de la oportunidad correspondiente

hubiere manifestado la imposibilidad de contar con los medios tecnológicos y mucho menos, la presencia de fallas técnicas en los mismos, tampoco haber cumplido con los requerimientos efectuados por el juzgado antes y durante la audiencia, con miras a brindar una solución para que se celebre la audiencia sin problema.

En este punto ha de advertirse que incluso desde el momento en que se practicó el interrogatorio de parte de la representante legal de la demandada, se pretendieron ejecutar maniobras para hacer creer que tenía fallas de conexión e intentar suspender la audiencia para llevarla a cabo en otra ocasión por aparentemente no escuchar ciertos apartes de la diligencia; sin embargo, de ninguna manera la Sala percibe esa fallas técnicas pues todas las intervenciones que la representante legal hizo incluso para interrumpir en muchas ocasiones a la jueza, se escucharon a la perfección y su video nunca se interrumpió, como tampoco se dificultó la comunicación constante que sostuvo telefónicamente con su apoderado desde la etapa de conciliación, situación que no fue pasada por alto por la *a quo,* quien la sorteó en forma diligente y apropiada sin vulnerar los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de las partes durante casi 3 horas y media que duró toda la audiencia.

Finalmente, no puede pasarse por alto, que la jueza como directora del proceso, es garante de derechos fundamentales y de ejercer control de legalidad en la actuación, con miras a que primen los principios de oralidad, inmediación, concentración, economía procesal y celeridad, que reinan en el proceso laboral, de tal suerte que si considera que las pruebas recepcionadas son suficientes para tomar la decisión de fondo y además observa incuria de las partes frente a la evacuación de las restantes, bien puede no practicarlas, que fue lo que ocurrió en este caso, al declarar superada la etapa para recepcionar no solo el último testigo de la parte actora, sino los 3 decretados en favor de la demandada, teniendo en cuenta además, el lapso de 2 años y 6 meses que transcurrieron desde el primer momento en que se señaló fecha y hora para llevar a cabo la diligencia; en consecuencia, se **confirma** la decisión apelada por encontrarse ajustada, razonable y debidamente motivada**.**

Sin costas en la alzada ante su no causación.

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ DC,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado proferido dentro de la audiencia pública celebrada el 16 de junio de 2022, por el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá DC, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Sin costas en la instancia ante su no causación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada ponente

MILLER ESQUIVEL GAITÁN
Magistrado

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

Enlace expediente digital:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des15sltsbta_cendoj_ramajudicial_gov_co/Ev1zsbhq21BAikiNfclPShwBuTUG24BkJq8-Mm-Ez2SEZA?e=7lC2Ig

Firmado Por:
Luz Patricia Quintero Calle
Magistrada
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2226164b68afa25b9d2a9fcc48c74dafee9aa3586735dee39c68d73cf863f9af**

Documento generado en 30/03/2023 10:27:56 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO LABORAL No. 02-2019-00398-01

Demandante: DIANA SALAZAR CASTRO

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Revisado el presente asunto, y como quiera que ya se encuentra ejecutoriado el auto que admitió **el recurso de apelación** formulado por la parte recurrente en el presente proceso, se le corre traslado a esta, por el término de 5 días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que presente sus alegatos de conclusión.

Una vez concluido el término concedido en precedencia, la parte contraria, cuenta con los mismos 5 días a efectos de que presente sus alegatos, de conformidad con lo previsto el numeral 1° del art. 13 de la ley 2213 de 2022.

Los alegatos en mención, se recibirán **únicamente** en la dirección de correo electrónico **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Igualmente, **se programa** fecha para proferir la decisión de segunda instancia **por escrito** para el próximo **28 de abril de 2023**; decisión que será notificada mediante edicto y podrá ser consultada en el aplicativo dispuesto por la rama judicial.

Por Secretaría Laboral, notifíquese la presente decisión en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, para conocimiento y consulta de las partes.

Notifíquese y cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE

MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO LABORAL No 10-2019-00683-01

Demandante: BLANCA CECILIA ALBA TAPIEROS

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Revisado el presente asunto, y como quiera que ya se encuentra ejecutoriado el auto que admitió **el recurso de apelación** formulado por la parte recurrente en el presente proceso, se le corre traslado a esta, por el término de 5 días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que presente sus alegatos de conclusión.

Una vez concluido el término concedido en precedencia, la parte contraria, cuenta con los mismos 5 días a efectos de que presente sus alegatos, de conformidad con lo previsto el numeral 1° del art. 13 de la ley 2213 de 2022.

Los alegatos en mención, se recibirán **únicamente** en la dirección de correo electrónico **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Igualmente, **se programa** fecha para proferir la decisión de segunda instancia **por escrito** para el próximo **28 de abril de 2023**; decisión que será notificada mediante edicto y podrá ser consultada en el aplicativo dispuesto por la rama judicial.

Por Secretaría Laboral, notifíquese la presente decisión en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, para conocimiento y consulta de las partes.

Notifíquese y cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE

MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO LABORAL No20-2021-00049-01

Demandante: OLGA LUCÍA JIMÉNEZ BELTRÁN

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Revisado el presente asunto, y como quiera que ya se encuentra ejecutoriado el auto que admitió **el recurso de apelación** formulado por la parte recurrente en el presente proceso, se le corre traslado a esta, por el término de 5 días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que presente sus alegatos de conclusión.

Una vez concluido el término concedido en precedencia, la parte contraria, cuenta con los mismos 5 días a efectos de que presente sus alegatos, de conformidad con lo previsto el numeral 1° del art. 13 de la ley 2213 de 2022.

Los alegatos en mención, se recibirán **únicamente** en la dirección de correo electrónico **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Igualmente, **se programa** fecha para proferir la decisión de segunda instancia **por escrito** para el próximo **28 de abril de 2023**; decisión que será notificada mediante edicto y podrá ser consultada en el aplicativo dispuesto por la rama judicial.

Por Secretaría Laboral, notifíquese la presente decisión en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, para conocimiento y consulta de las partes.

Notifíquese y cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE

MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO LABORAL No 20-2021-00521-01

Demandante: JUAN DE LA CRUZ AGUILAR TINJACA

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Revisado el presente asunto, y como quiera que ya se encuentra ejecutoriado el auto que admitió **el recurso de apelación** formulado por la parte recurrente en el presente proceso, se le corre traslado a esta, por el término de 5 días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que presente sus alegatos de conclusión.

Una vez concluido el término concedido en precedencia, la parte contraria, cuenta con los mismos 5 días a efectos de que presente sus alegatos, de conformidad con lo previsto el numeral 1° del art. 13 de la ley 2213 de 2022.

Los alegatos en mención, se recibirán **únicamente** en la dirección de correo electrónico **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Igualmente, **se programa** fecha para proferir la decisión de segunda instancia **por escrito** para el próximo **28 de abril de 2023**; decisión que será notificada mediante edicto y podrá ser consultada en el aplicativo dispuesto por la rama judicial.

Por Secretaría Laboral, notifíquese la presente decisión en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, para conocimiento y consulta de las partes.

Notifíquese y cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE

MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO LABORAL No. 20-2021-00521-02
Demandante: JUAN DE LA CRUZ AGUILAR TINJACA
Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Revisado el presente asunto, y como quiera que ya se encuentra ejecutoriado el auto que admitió **el recurso de apelación** formulado por la parte recurrente en el presente proceso, se le corre traslado a ambas partes, por el término común de 5 días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que presenten sus alegatos de conclusión, en los términos del numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

Los alegatos en mención, se recibirán únicamente en la dirección de correo electrónico **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Igualmente, **se programa** fecha para proferir la decisión de segunda instancia **por escrito** para el próximo **28 de abril del 2023**; decisión que podrá ser consultada en el aplicativo dispuesto por la rama judicial.

Por Secretaría Laboral, notifíquese la presente decisión en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, para conocimiento y consulta de las partes.

Notifíquese y cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE
MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO LABORAL No 23-2021-00254-01

Demandante: SARA CONSTANZA LARA FALLA

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Revisado el presente asunto, y como quiera que ya se encuentra ejecutoriado el auto que admitió **el recurso de apelación** formulado por la parte recurrente en el presente proceso, se le corre traslado a esta, por el término de 5 días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que presente sus alegatos de conclusión.

Una vez concluido el término concedido en precedencia, la parte contraria, cuenta con los mismos 5 días a efectos de que presente sus alegatos, de conformidad con lo previsto el numeral 1° del art. 13 de la ley 2213 de 2022.

Los alegatos en mención, se recibirán **únicamente** en la dirección de correo electrónico **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Igualmente, **se programa** fecha para proferir la decisión de segunda instancia **por escrito** para el próximo **28 de abril de 2023**; decisión que será notificada mediante edicto y podrá ser consultada en el aplicativo dispuesto por la rama judicial.

Por Secretaría Laboral, notifíquese la presente decisión en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, para conocimiento y consulta de las partes.

Notifíquese y cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE

MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO LABORAL No 23-2021-00263-01

Demandante: GUILLERMO HERNÁNDEZ OCHOA

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Revisado el presente asunto, y como quiera que ya se encuentra ejecutoriado el auto que admitió **el recurso de apelación** formulado por la parte recurrente en el presente proceso, se le corre traslado a esta, por el término de 5 días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que presente sus alegatos de conclusión.

Una vez concluido el término concedido en precedencia, la parte contraria, cuenta con los mismos 5 días a efectos de que presente sus alegatos, de conformidad con lo previsto el numeral 1° del art. 13 de la ley 2213 de 2022.

Los alegatos en mención, se recibirán **únicamente** en la dirección de correo electrónico **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Igualmente, **se programa** fecha para proferir la decisión de segunda instancia **por escrito** para el próximo **28 de abril de 2023**; decisión que será notificada mediante edicto y podrá ser consultada en el aplicativo dispuesto por la rama judicial.

Por Secretaría Laboral, notifíquese la presente decisión en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, para conocimiento y consulta de las partes.

Notifíquese y cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE

MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO LABORAL No 27-2017-00689-01

Demandante: MARTHA PIEDAD PALACIOS BAZZANI

Demandada: TERCIPELOS Y PELUCHES LTDA Y OTRO

Bogotá, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Revisado el presente asunto, y como quiera que ya se encuentra ejecutoriado el auto que admitió **el recurso de apelación** formulado por la parte recurrente en el presente proceso, se le corre traslado a esta, por el término de 5 días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que presente sus alegatos de conclusión.

Una vez concluido el término concedido en precedencia, la parte contraria, cuenta con los mismos 5 días a efectos de que presente sus alegatos, de conformidad con lo previsto el numeral 1° del art. 13 de la ley 2213 de 2022.

Los alegatos en mención, se recibirán **únicamente** en la dirección de correo electrónico **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Igualmente, **se programa** fecha para proferir la decisión de segunda instancia **por escrito** para el próximo **28 de abril de 2023**; decisión que será notificada mediante edicto y podrá ser consultada en el aplicativo dispuesto por la rama judicial.

Por Secretaría Laboral, notifíquese la presente decisión en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, para conocimiento y consulta de las partes.

Notifíquese y cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE

MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO LABORAL No 29-2021-00085-01

Demandante: ISLENA MONTAÑA COPETE

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Revisado el presente asunto, y como quiera que ya se encuentra ejecutoriado el auto que admitió **el recurso de apelación** formulado por la parte recurrente en el presente proceso, se le corre traslado a esta, por el término de 5 días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que presente sus alegatos de conclusión.

Una vez concluido el término concedido en precedencia, la parte contraria, cuenta con los mismos 5 días a efectos de que presente sus alegatos, de conformidad con lo previsto el numeral 1° del art. 13 de la ley 2213 de 2022.

Los alegatos en mención, se recibirán **únicamente** en la dirección de correo electrónico **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Igualmente, **se programa** fecha para proferir la decisión de segunda instancia **por escrito** para el próximo **28 de abril de 2023**; decisión que será notificada mediante edicto y podrá ser consultada en el aplicativo dispuesto por la rama judicial.

Por Secretaría Laboral, notifíquese la presente decisión en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, para conocimiento y consulta de las partes.

Notifíquese y cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE

MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO LABORAL No 37-2020-00203-01

Demandante: BERTA ISABEL BETANQUET PEREZ

Demandada: COLFONDOS S.A.

Bogotá, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Revisado el presente asunto, y como quiera que ya se encuentra ejecutoriado el auto que admitió **el recurso de apelación** formulado por la parte recurrente en el presente proceso, se le corre traslado a esta, por el término de 5 días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que presente sus alegatos de conclusión.

Una vez concluido el término concedido en precedencia, la parte contraria, cuenta con los mismos 5 días a efectos de que presente sus alegatos, de conformidad con lo previsto el numeral 1° del art. 13 de la ley 2213 de 2022.

Los alegatos en mención, se recibirán **únicamente** en la dirección de correo electrónico **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Igualmente, **se programa** fecha para proferir la decisión de segunda instancia **por escrito** para el próximo **28 de abril de 2023**; decisión que será notificada mediante edicto y podrá ser consultada en el aplicativo dispuesto por la rama judicial.

Por Secretaría Laboral, notifíquese la presente decisión en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, para conocimiento y consulta de las partes.

Notifíquese y cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE

MAGISTRADA

H. MAGISTRADO (A) LILLY YOLANDA VEGA BLANCO

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 038 2017 00419 01,** regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral, donde NO CASA, la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de 10 de junio de 2020.

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

NELSON ENRIQUE LABRADOR PEÑA
ESCRBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LILLY YOLANDA VEGA BLANCO

Magistrado(a) Ponente

H. MAGISTRADO (A) LILLY YOLANDA VEGA BLANCO

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 008 2018 00686 01 C,** regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral, donde NO CASA, la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de 29 de enero de 2021.

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

NELSON ENRIQUE LABRADOR PEÑA
ESCRBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LILLY YOLANDA VEGA BLANCO
Magistrado(a) Ponente

H. MAGISTRADO (A) LILLY YOLANDA VEGA BLANCO

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 022 2013 00498 01,** regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral, donde NO CASA, la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de 11 de diciembre de 2019.

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

NELSON ENRIQUE LABRADOR PEÑA
ESCRBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LILLY YOLANDA VEGA BLANCO

Magistrado(a) Ponente

H. MAGISTRADO (A) LILLY YOLANDA VEGA BLANCO

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 029 2018 00541 01,** regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral, donde NO CASA, la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de 31de mayo de 2021.

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

NELSON ENRIQUE LABRADOR PEÑA
ESCRBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LILLY YOLANDA VEGA BLANCO

Magistrado(a) Ponente

H. MAGISTRADO (A) LILLY YOLANDA VEGA BLANCO

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 011 2016 00314 01,** regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral, donde NO CASA, la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de 15 de abril de 2021.

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

NELSON ENRIQUE LABRADOR PEÑA
ESCRBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LILLY YOLANDA VEGA BLANCO
Magistrado(a) Ponente